

Nuevas prácticas políticas insumisas en Argentina: aprendizaje para Latinoamérica



Coordinadores: Guido Galafassi y Paula Lenguita

Insumisos Latinoamericanos

libros
red

Dirección General: Marcelo Perazolo
Dirección de Contenidos: Ivana Basset
Diseño de Tapa: Patricio Olivera
Armado de Interiores: Vanesa L. Rivera

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de cualquier forma o de cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro u otros métodos, sin el permiso previo escrito de los titulares del Copyright.

Primera edición en español en versión digital
© LibrosEnRed, 2004
Una marca registrada de Amertown International S.A.

Para encargar más copias de este libro o conocer otros libros de esta colección visite www.librosenred.com

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN <i>Robinson Salazar Pérez</i>	8
LAS NUEVAS PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA <i>Robinson Salazar Pérez</i>	12
DEMOCRACIA EN CRISIS, IDEOLOGÍAS, PRÁCTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES. ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS <i>Guido Galafassi</i>	33
MOVIMIENTOS DE DESOCUPADOS EN LA ARGENTINA: LA ENCRUCIJADA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LOS SECTORES SUBALTERNOS <i>Ariel Wilkis y Juan Montes Cató</i>	50
SUBTERFUGIOS IDEOLÓGICOS DEL TRABAJO. UNA MIRADA POLÍTICA SOBRE LA LUCHA DE LOS DESOCUPADOS <i>Paula Lenguita</i>	75
REFLEXIONES SOBRE EL ORDEN VISUAL NEOLIBERAL Y EL ACONTECIMIENTO PIQUETERO <i>Paula Abal Medina</i>	99
PIQUETEROS: LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LA POLÍTICA ESTATAL <i>Clara Bressano, Mariana Galvani y Sebastián Guevara</i>	120
OTRA VEZ EN LA VÍA: CARTONEROS Y PIQUETEROS EN LAS CALLES ARGENTINAS <i>Cecilia Cross y Débora Gorbán</i>	149
ESQUEL: EL PODER ESTÁ EN LA CALLE <i>Carlos Gustavo Espinoza</i>	181
LA LEY DEL VACÍO: REGULACIÓN Y CONTROL DEL "PODER DEL DESEMPLEO" <i>Alejandro Soltonovich</i>	192
¿QUÉ ES LA POLÍTICA? ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DE LOS PROCESOS DE OCUPACIÓN DE FÁBRICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES <i>María Inés Fernández Álvarez</i>	205

LAS EMPRESAS RECUPERADAS: UNA EXPERIENCIA DE LA CLASE TRABAJADORA ARGENTINA <i>Julieta Galera, Carlos Martínez, Adrián Nordvind, Alejandro Pizzi, Andrés Ruggeri, Hugo Trincherro y Sebastián Valverde</i>	222
MOVIMIENTO AGRARIO Y LUCHA SOCIAL. EL CASO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN SANTIAGO DEL ESTERO <i>Rubén Eduardo de Dios</i>	243
LOS PROGRAMAS DE EMPLEO A DESOCUPADOS COMO RESPUESTA A LA CRISIS POR LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES. EL CASO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA PETROLERA YPF EN CUTRAL-CÓ Y PLAZA HUINCUL <i>Karina Crivelli</i>	270
EL CONFLICTO SOCIAL EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS CULTIVOS INDUSTRIALES EN LOS '90: EL CASO DE LA YERBA MATE EN MISIONES <i>Gabriela Gresores</i>	300
LA ARTICULACIÓN ENTRE AGRUPACIONES INDÍGENAS DEL PUEBLO MAPUCHE Y MOVIMIENTOS CAMPESINOS <i>Sebastián Valverde</i>	321
LOS AUTORES	340
OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN INSUMISOS LATINOAMERICANOS	345
EDITORIAL LIBROS EN RED	346

LAS NUEVAS PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA

Robinson Salazar Pérez

Investigador de la
Universidad Autónoma de Sinaloa / México

El mapa social que muestra América Latina después de haber cerrado el Siglo XX es complejo, abigarrado por las diversas formas de lucha que se vienen llevando a cabo, atravesado por un proceso de neocolonización criminal que intenta despojar a los pueblos del mosaico latinoamericano de sus recursos naturales y necesarios para su desarrollo, administrado por gobiernos de poca talla y temerosos de cuestionar las políticas de facto que les imponen los organismos internacionales pero decididos a evitar las protestas nacionales mediante decretos antiterroristas.

A simple vista, nos aparece un mapa conflictuado, las múltiples expresiones confrontativas, los desarreglos institucionales, la pérdida de credibilidad orgánica de los sujetos estructurados y el desencuentro actoral para construir pactos y acuerdos nacionales no dejan un intersticio para alentar el optimismo; no obstante dentro de cada conflictividad hay una esperanza que envuelve la demanda, incentiva la participación y motiva a que el arsenal de prácticas políticas crezca cada día.

Intentando hallar una teoría que nos aproxime al esclarecimiento de lo que acontece, no hay mucho de donde escoger ni cortar, los recursos son escasos y la necesidad apremia para que innovemos, reposicionemos argumentos y expliquemos lo que acontece en la contemporaneidad.

Indudablemente que un análisis desde la perspectiva de la teoría crítica nos dice que muchas de las apreciaciones y predicciones del marxismo están más cerca al mundo de hoy que lo descrito por los teóricos neoliberales, basta releer el Manifiesto Comunista y hallamos congruencia del pensar con la realidad; pasajes que tienen que ver con la lucha de clases, la apropiación de las riquezas a través de la explotación y la inevitable confrontación entre desposeídos y expropiadores, son parte del presente latinoamericano.

No obstante, no debemos caer en absolutismos ortodoxos, así como hay aciertos, otras aseveraciones no encajan con la realidad, puesto que las alteraciones y cambios que se han desencadenado en los últimos 25 años, han modificado a los actores, las conductas, el tiempo social y las formas en que se articula la economía y las redes de instituciones.

Una de las premisas afirmaba que el futuro de la etapa imperialista habría de desatar una guerra inter-imperialista, cosa que no ha sucedido, lo que vemos hoy día es una guerra de países imperialistas contra países periféricos; incluso, ampliación de las fronteras imperialistas, ya no ocurre en el ámbito de la producción, sino que invade el área de los servicios, la educación, la salud, remesas y hasta las jubilaciones, mercantilizando estos ámbitos que eran conquistas laborales y resituandolas como mercancías que deben ser adquiridas, sin que medie el subsidio estatal y sujetas a sanciones que han inventado los organismos internacionales como OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional entre otras.

Esta nueva invasión en esferas antes no tocadas, ha recrudecido la lucha a la vez que acota los espacios para el ejercicio de la política tradicional, dado que difícilmente los partidos políticos y los sindicatos pueden llevar a cabo acciones reivindicativas para los jubilados, los sin techos o sin tierra, dado que son actores desocupados, no ligados a un centro de producción, que no aportan recursos a las arcas del fisco ni el dinero que demanda el estado; a su vez no son pieza fácil de vincular a las actividades proselitistas.

También se suman nuevos actores que se desprenden de los ámbitos de servicios, estudiantes, jubilados, buhoneros, médicos y maestros quienes agregados a los desocupados, arman un arco de convergencia de varios actores heterogéneos que en la práctica han dado un nuevo significado a las luchas, puesto que son la suma de lo que la sociedad demanda; asimismo, su participación amplia, horizontal, sin exclusión en los espacios públicos donde convergen, les permite modificarlos, consciente o inconsciente, y transfórmalos de un monumento emblemático a una pizarra colectiva donde todos y cada uno puede dejar un registro de su demanda, sin que medie entre ellos un acuerdo o una decisión consensuada para convertir el espacio público escogido en una vitrina de exhibición donde cada movimiento y actor pinta su petición.

Basta exponerse a sitios de la ciudad de Bs. Aires, para observar esta modificación y cualquier persona que se asome a ese lugar entenderá que hay una sociedad viva, que demanda trabajo, exige el cese de hostilidades, más educación y seguridad pública, que paren los secuestros, que liberen

a los presos políticos, que los desaparecidos los reconozca el gobierno y los militares, en fin, La Plaza frente al Congreso es un buen objetivo para ver la resignificación del espacio público.

Por lo anterior, podemos derivar que la nueva fase del imperio no solo provoca desempleo, pobreza y hambruna, sino que sus acciones son armas provocadoras para que la sociedad responda a las agresiones y a la desatención de los agentes que dañan el futuro de los pueblos. Las reacciones son un comportamiento que cualquier sujeto asume cuando es despojado de sus recursos y se le niega la posibilidad de sobrevivencia al negarle sus derechos, de ahí que haya nuevas expresiones políticas para contrarrestar el empuje de los poderes de extranacionales.

Pero existen otros ingredientes que aderezan el mapa social y político de América Latina, la militarización de las zonas estratégicas, biodiversidad, petróleo, agua y gas, cuatro elementos irremplazables para la supervivencia del capitalismo.

Indudablemente que la militarización, ya sea de tipo formal o paramilitar, se ejerce en zonas escogidas e involucradas en los planes que los EE.UU. han diseñado, entre ellos, El Plan Puebla Panamá; Plan Colombia; Plan Dignidad; Acuífero del Guaraní y región de los lagos en Argentina, conectando los intereses del sur de la frontera del Río Bravo hasta la Patagonia.



Mapa 1. Bases y ejercicios militares en América latina

La militarización es un síntoma de guerra y la guerra en América Latina es un presente porque va a suceder en el futuro de manera irremediable. La escasez de agua potable en el mundo, el agotamiento de las reservas petro-

leras, el gas que se disputan las potencias, y la biodiversidad que apetece a las transnacionales farmacéuticas, nos sitúan en un espacio en donde existen esos recursos pero también se da, de manera expedita, la presencia de agentes empresariales, ejercitadores de los poderes fáctico que pretenden, con la ayuda de los gobiernos locales con su conducta privatizadora, apoderarse de los recursos estratégicos no renovables; a su vez, se asoma una escalada militar que día tras días ocupa sitios estratégicos para privatizar y despojar de esa manera a las naciones de sus recursos.

Algo interesante y digno de resaltar, es que estos recursos casi siempre se encuentran en territorios de asentamientos indígenas y campesinas, comunidades arraigadas y ligadas sus actividades productivas a los recursos disputados. Un intento de despojo, desatará conflictos irreconciliables que rayaran en la violencia, la confrontación y las movilizaciones que engrosarán las experiencias políticas y prácticas de los actores políticos y sociales, incrementando el acervo de conocimiento y de lucha de nuestros pueblos.

En estas circunstancias y no en otras, han aparecido, las nuevas prácticas políticas, algunas con un antecedente pero re-elaboradas en su aplicación; otras novedosas, en tanto que el sujeto que la comporta no es el tradicional y el objetivo es distinto al de ayer; no dejan de aparecer las híbridas que mezclan dos o tres prácticas en un solo acto, también las inéditas y súbitas que son violentas y fusurantes de la realidad social.

En el segundo trimestre del año 2004 hemos apreciado como en Chile vuelan oleoductos y estallan diversos artefactos explosivos y por otro lado, los Mapuches realizan acciones coordinadas en contra de inversiones forestales y de latifundistas, que históricamente han usufructuado su territorio ancestral; para Argentina, el arsenal crece y pobladores desocupados atacaron a los trabajadores de la contratista de Edenor y les cortaron las falanges, porque, declararon los habitantes enardecidos, que fue por "cortar la luz" a enganchados y morosos; en Guatemala surge el Bloque Antiimperialista; comunidades autónomas ocupan edificio público en Perú; Brasil se organiza y saca adelante el Partido Socialismo y Libertad-PSOL, como la expresión del sentimiento general y la voluntad de crear algo nuevo, no un autoproclamado "guía infalible", sino un camino de superación de la explotación y la opresión a la que están sometidos muchos millones de brasileños; en Bolivia los maestros toman prisionero al Viceministro de Educación; en Ecuador: 1.500 comunidades de la Sierra están preparadas para el Levantamiento y cada organización que aparece en el nuevo mapa social y político es libre de escoger su estrategia; asimismo el Grupo de Combatientes Populares GCP arrecia su ofensiva.

México instala un Foro Indígena y Campesino que pide cambiar el modelo mediante la fuerza social apoyando los procesos de resistencia y propuestas que surgen de luchas locales. Guatemala dice presente y cien organizaciones sociales y campesinas convocan a Gran Paro Nacional, todo ello entra a formar parte del arsenal de nuevas prácticas políticas que realizan los segmentos sociales que el modelo neoliberal ha dejado en la inopia e indefensión.

Estas nuevas formas comportamentales inusuales, fuera de las organizaciones tradicionales, algunas de ellas con orientación reivindicativa de techo, empleo, tierra, seguridad social y autonomía étnica, otras llevan el tinte adscriptivo, no dejan de asistir al escenario de hoy los grupos armados que renuncian a seguir el juego de la negociación tardía y sin resultados, sin embargo, todas sin excepción, son manifestaciones de nuevas prácticas políticas, en la medida que proponen un nuevo formato de dialogo, la interlocución se da fuera de las mediaciones tradicionales, las exigencias modifican la realidad política a través de las marchas, cortes de ruta, bloqueos, movilizaciones multitudinarias y la acción directa que es parte del accionar que presiona y obliga a negociar al gobierno, aunque no sea él directamente el implicado, pero está abriendo la posibilidad de una inédita forma de actuar cuando los partidos políticos están inhabilitados y se encierran en la labor legislativa, dando la espalda a la sociedad civil reclamante.



Mapa 2. Movimientos de resistencias en América Latina

Todo no es a favor de los movimientos sociales, en el transcurso del andar se han dado y se siguen desplegando agentes y acciones para doblegar la

resistencia popular y destruir las prácticas de lucha de los pueblos latinoamericanos, pero no han dado los resultados que ellos, (los representantes y salvaguardas del neoliberalismo esperaban); los eventos que hemos observado, el derrocamiento en las calles de varios presidentes es la prueba más evidente de este fracaso. Estas sublevaciones -que conmovieron a Ecuador (1997), Perú (2000), Argentina (2001) y Bolivia (2003 y 2004)- constituyen sucesos mucho más significativos que los repliegues electorales que también sufrió la derecha (Venezuela y Brasil). Por ello los analistas del *establishment* están inquietos frente al ascenso de asonadas populares que hacen crepitar los gobiernos, a través de acciones colectivas que impugnan a los regímenes constitucionales apuntalados por un andamiaje institucional debilitado.

Estos levantamientos han incluido una diversa gama de revoluciones, rebeliones, movilizaciones, bloqueos de vías, tomas de fábricas y tierras, en función de la intensidad de la lucha, las reivindicaciones en juego y su impacto político. La insurrección de Bolivia es el mayor ejemplo reciente de una movilización con orientación de cambio. Al cabo de una confrontación que dejó 140 muertos, la acción directa de los manifestantes forzó la renuncia y huida de Sánchez de Lozada. La tradición de alzamientos armados mineros y campesinos volvió a emerger en un movimiento que combinó reclamos sociales (aumento salarial), campesinos (defensa de los cultivos cocaleros) y antiimperialistas (industrialización del gas).

La rebelión que sacudió a la Argentina (2001) no alcanzó esa dimensión insurreccional, pero constituyó una excepcional irrupción que unificó a los trabajadores, la clase media y los desocupados en un reclamo común contra el régimen político ('Que se vayan todos'). Las 17.000 manifestaciones y 47 cortes de calle por día que se registraron durante el 2002 ilustran la envergadura de ese levantamiento.

Las huelgas y ocupaciones de tierras en Brasil configuran a su vez un proceso de movilización que no desembocó en rebelión. Esta diferencia con la Argentina obedece a divergentes tradiciones de lucha y al carácter más acotado de la crisis económica (que no incluyó empobrecimientos virulentos, ni expropiaciones de pequeños ahorristas). Por eso Lula sucedió a F.H. Cardoso cumpliendo el calendario electoral, mientras que Kirchner emergió de un trágico proceso de reconstitución del control político capitalistas que desafiaron los piquetes y las asambleas populares.

En todas las protestas latinoamericanas los trabajadores estatales y ocupados cumplieron un papel muy activo. Este sector -agredido por los invariables recortes presupuestarios que impone el FMI- encabeza la resistencia en Perú y Uruguay, y juega un rol significativo en la revuelta de Santo

Domingo. También la huelga general se mantiene como la forma de acción clásica de la movilización popular y en ciertos casos -como Chile- se insinúa cierta reaparición del protagonismo obrero. En otros países, la resistencia ha estado signada por rebeliones campesinas generalizadas (Ecuador), localizadas (Colombia) o regionales de gran impacto nacional (Chiapas). La lucha social adquiere, además, connotaciones explosivas cuándo está imbricada al desarrollo de un conflicto antiimperialista (Venezuela).

Esta variedad de movimientos (gravitación indígena en zonas andinas, sustento urbano en el sur) incluye también un novedoso intercambio de experiencias de lucha entre distintos sectores sociales oprimidos. Un evento ilustrativo son las organizaciones campesinas y los trabajadores informales de las ciudades bolivianas han asimilado las modalidades de resistencia de los mineros. En la Argentina, los piqueteros argentinos constituyeron un combativo movimiento de desempleados a partir del aprendizaje acumulado por ex dirigentes del movimiento sindical.

Algo digno de analizar es cuando se torna explosivo un comportamiento multiactoral, dado que los tres escenarios más visibles, Bolivia, Argentina y Brasil no han dirigido sus baterías en el mismo sentido y el éxito tampoco ha sido igual.

Argentina estuvo cerca cuando el contingente de sujetos desocupados tuvo la alianza de los ocupados; esto es, que los desocupados son la fuerza que mueve y agiliza el cuerpo del movimiento, los ocupados son los actores que ligan la política con la vida cotidiana, si se da una liga entre estos dos sectores, el gobierno y sus instituciones sienten la crisis, pero si el divorcio se posesiona sobre ellos, la posibilidad de politizar la crisis es cercana y se diluye la explosión social.

Expliquemos mejor este caso.

Las explosiones sociales se han iniciado en lugares donde la miseria y la pobreza reinan; el trabajo, el salario y los servicios públicos no existen; en territorios marginados y que no son atendidos ni tomados en cuenta en los programas de gobierno, lo que constituye un fenómeno que por su olvido y lejanía de las atenciones gubernamentales, son núcleo potencial explosivo sin horario político ni control social, que puede estallar al menor roce posible.

Desde la de sociología no existe una escala de medición para detectar cual estallido está más cercano y en que fecha puede darse; los cálculos políticos no alcanzan a medir cuando puede darse una crisis social con agentes comportamentales súbitos, cortocircuitantes y violentos. El recurso que nos queda es ir sumando el déficit de satisfactores en una comunidad, seg-

mento social o región; por otro lado, indagar la tradición de lucha de ese segmento, que en la mayoría de las veces es un agregado de nuevos actores que se desgajaron de núcleos distintos y cada uno trae su historicidad, la cual, al ser socializada a través de las relaciones intersubjetivas, se da el trasvasamiento de saberes, experiencias, tradiciones de lucha, memoria social e histórica que van fraguando un sujeto potencialmente capaz de responder al cuadro de necesidades y de reclamar a los responsables de su marginalidad.

Así han surgido los sujetos portadores y ejercitadores de las nuevas prácticas políticas. Indudablemente que su organicidad es endeble, la razón de peso es que no son segmentos que han vivido por mucho tiempo juntos, tampoco han tenido una experiencia de lucha en conjunto, son agregados que se van formando en la periferia o en los sitios donde la marginalidad pulula; la tradición de lucha no está depositada en el conjunto social, sino en la individualidad y en casos específicos (lucha obrera, militante, callejera, barrial, etc) y sólo es conocida y consumida en la comunidad cuando un hecho de singularidad para todos ellos los obliga a reunirse, a romper el marco de la individualidad, los orilla a dialogar y a exponer sus puntos de vista sobre lo que acontece y los afecta.

Justo aquí, aflora la historicidad de cada uno y se dan cuenta que no son individuos fragmentados, sino cuerpo asociativo que existe y vive; que eran sujetos en desencuentro pero la circunstancia los unió y los sitúa en un campo de actuación irremediable. Ahora bien, esas actuaciones casi siempre son súbitas, violentas contra el estado de cosas, sacuden el ostracismo en que viven y arremeten con voluntad política contra los que ellos escogieron como opositores. Así se han configurado los cuerpos vivientes que protestan, luchan e innovan nuevas prácticas políticas.

Hay que dejar claro que el abanico de prácticas políticas que estamos observando no necesariamente las porta un sujeto emancipador. Esto aun está lejano, o lo vemos a mediano plazo.

Estos segmentos sociales actuantes, por si solo no puede llevar a una situación explosiva al conjunto de la sociedad, requieren necesariamente construir puentes, diálogos y redes con otros grupos de la sociedad latinoamericana, ahí, en este llamado caben intelectuales, empleados medios, cuenta propia, campesinos y otros mas que den cuerpo a un sujeto más contundente, heterogéneo, convergente y de amplio peso en el conjunto de la sociedad.

Indudablemente que el canal más apropiado para poner en la misma frecuencia a la diversidad de actores para arribar al sujeto emancipador es la

política. No la vieja e inservible política que se anidó en los partidos políticos y sindicatos; la que negociaba las demandas por prebendas a los líderes y la que pervirtió el noble ejercicio de dialogar para construir acuerdos y renovar a la sociedad para evitar los conflictos violentos.

La política que requerimos es la que podamos bajar a la vida cotidiana, que sea dúctil y manejable para politizar los espacios privados y públicos. Si no insistimos en apropiarnos de asuntos que tienen que ver con la privatización del agua, la energía, la biodiversidad, las patentes, la militarización, el desempleo y la necesidad de cambiar lo que no sirve y los situamos el seno de la casa, la política seguirá siendo vista como algo nocivo y corruptible; pero si ejercitamos la reflexión, el intercambio de opiniones, la búsqueda de opciones sobre lo que acontece afuera del hogar, la política se acuerpa y renace.

También los Espacios públicos deben ser llenados de diálogos que le den sentido a la inseguridad pública, a los secuestros, a la escasez de trabajo, los bajos salarios, los servicios públicos insuficientes y caros, al papel de las escuelas y las universidades, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos. Sólo así entenderíamos que hay muchas percepciones que concuerdan en una contundente conclusión, el modelo no sirve, por eso hay que actuar.

Lo que trato de decir, es que la política cargada de contenido en los espacios privados y públicos es convocante para la actuación, cuándo nos damos cuenta que todo puede cambiar si nos decidimos a intercambiar ideas y a dejar de ser espectadores de la vida cotidiana.

La vida cotidiana se puede convertir en el laboratorio y factoría de las nuevas ideas, de los escenarios propicios para el cambio y cómo insertarse en ella para dejar de ser un espectador y transitar al papel de actor de la historia que se vive a diario.

Entonces, en momentos en que la política llega y se sitúa, junto con nosotros en la vida cotidiana, irrumpen los movimientos sociales de impacto y duración, pero si la dejamos de alimentar, se aleja y nos resitúan en la fragmentación y la lucha segmentada.

Argentina tuvo ese efímero momento que avivó las esperanza de la izquierda y de muchos analistas, pero no se equivocaron al aceptar que había un nuevo escenario y una lucha propicia para el cambio. Aunque ahora existan muchos que señalan las equivocaciones del ayer, lo cierto fue que la vida cotidiana en todo Argentina se politizó, en las casas, las calles, en las esquinas, en los autobuses, por teléfono, en las plazas públicas, la crisis, el engaño de los partidos políticos, los sindicatos caducos, los líderes añejados, los dirigentes corruptos, etc, eran materia de reflexión, mediana

o profunda, pero se daba entre todos las personas y entre ellos no mediaba quién eras, ni qué habías perdido, si eras clame mediero o desocupado, desplazado o pequeño comerciante, todos se vieron desnudos, sin horizonte y la unidad en un espacio público les daba esencia y se sentían con derecho a reclamar. Mientras la política vivió en la cotidianeidad, la movilización permaneció y puso en jaque a los propietarios del dinero y las finanzas.

Lo mismo aconteció en Bolivia, las semanas que antecedieron el viernes 17 de octubre de 2003, fueron los momentos en que la política tuvo conexión con el espacio de la vida cotidiana; de igual manera había sucedido en Venezuela el 13 de abril del 2002 cuando Pedro Carmona por decreto desapareció los poderes y se dio el golpe militar técnico que desplazo momentáneamente a Hugo Chávez de la presidencia, como rayo de luz, los hogares, las calles, los rincones se politizaron y la revuelta se dio.

Claro está, en el caso de Argentina y Bolivia, los agentes del poder no se quedaron inmóviles, actuaron con rapidez, construyeron acuerdos, rompieron las redes asociativas y buscaron por todos los medios desalojar a la política de la vida cotidiana, cuando ello sucedió, otra vez se notó el abismo entre clase media, deteriorada pero ahí está, y desocupado pobres. La vida cotidiana se cargo de vicisitudes por la sobrevivencia, la singularidad negó lo colectivo y cada quien es un segmento que busca luchar por lo que necesita en el presente.

QUÉ SON LAS NUEVAS PRÁCTICAS

La práctica o acción política se inscribe en un modelo acción colectiva que se realiza en un espacio público y que es síntesis de un acto político.

El sujeto que lleva a cabo la acción de protesta no es único y homogéneo, sino que es diverso y heterogéneo, todo está en función del tipo de acción política que se lleva a cabo, por tal razón es una construcción analítica, no un objeto empírico, cuyo eje central es el conflicto.

El conflicto gana centralidad es la construcción analítica de las nuevas prácticas políticas, en la medida que es el centro generador de la protesta, de la movilización y hasta de la violencia, por tanto la actuación actoral la definimos como una acción colectiva que reúne rasgos identitarios para aglutinar y movilizar al un(os) grupo(s) humanos que son afectas por la ola conflictiva. Con la salvedad de que la acción política no se agota en una manifestación, sino que produce y se reproduce, guardando momentos de latencia cuando no aparece en el escenario público.

Existen argumentaciones teóricas que explican el recurso de la protesta como la herramienta política más eficaz de los sujetos que carentes de poder (powerless) o que no están representados por las estructuras orgánicas tradicionales. Por esa condición, la protesta es un núcleo activo y reactivo que desencadena otras formas de acción políticas como los cortes de ruta, toma de edificios, cierre de oficinas, movilizaciones y concentraciones en espacios públicos emblemáticos.

Esto nos dice que la protesta es la expresión observable de un conflicto, que se manifiesta en un espacio público a fin de dotarlo de sentido y desde ahí, manda un mensaje a los demás actores que no se han movilizad para que se sumen y abandonen la inactividad.

La protesta es parte del arsenal de experiencias políticas renovadas, pero cuando se hacen visibles en los medios de comunicación, logran una entidad tal que, a todos y cada uno de los espectadores, se nos presenta como una tarea pendiente a realizar (Lenguita. P.2001), por esa razón tiene dos connotaciones, una es como ejercicio de un modo de acción política, la otra, la necesidad de que impacte en los medios porque a través de ellos vincula a otros sectores, convoca a los movimientos aislados a que se unan a la protesta y a la vez da pie para ir fraguando un domo convergente construido con cemento social insumiso.

Una definición que aporta a nuestra intención es la construida por Farinelli, quien define la protesta pública como una manifestación colectiva de carácter público, directo y discontinuo, que expresa desacuerdos y reclama soluciones frente a cierto orden de cosas (Farinetti, 2000)

En todo esto de las protestas, cierre de calles y bloqueos de vías, hay algo interesante que resalta como novedoso, el papel que juega el espacio público como ámbito abierto donde todos podemos acceder y debemos llevar a cabo la protesta; porque muchas veces protestamos en lo privado, dentro de la empresa, en los recintos universitarios y al interior de las oficinas.

Visto así, el espacio público estaba perdiendo significancia, sin embargo, la acción política de los sujetos insumisos lleva el acto de denuncia y de reclamo a lo público y justo ahí está germinando una semilla de identidad colectiva con diversos grupos que se suman a la protesta. Entonces el espacio público se convierte es foro convocante, dialógico estructurante donde se resuelve la identidad colectiva de los nuevos movimientos, se descubren afinidades, se jerarquizan las prioridades de lucha y se resuelve en función del saldo de las diferencias.

Situados desde este ángulo, la protesta asume las modalidades ya mencionadas, donde la mayoría de ellas se cristalizan en espacios públicos, como una expresión y necesidad de recuperar lo público para todos y a la vez mostrar el grado de osadía y decisión que se tienen para realizar actos de este tipo.

Hay dos ingredientes importantes en las protestas: La osadía y la decisión es una actuación colectiva, donde las dos invitan y contagian a otros sectores sociales (barriales, sindicales, estudiantiles, de género, gay, indígenas, desocupados, buhoneros, pensionados y populares) para que se sumen y salgan de su inactivismo o sumisión, provocando cierto grado de asociatividad entre las organizaciones que adoptan la revuelta como acción política. Aquí se denota un movimiento con dos dimensiones, por una parte el amplio abanico de generalidad que incorpora todo el espectro social excluido o expoliado, por otra, el grado de agregación que está provocando alrededor del instrumento de la protesta pública. Naturalmente, se han integrado por la eficacia que han tenido los movimientos hasta ahora para protestar y para construir alternativas tales como autoempleo, recuperación del trabajo, comedores populares, ollas vecinales, trueque, escuelas comunitarias, vigilancia popular, entre otros. Estos logros no son alternativas que resuelven todos los problemas, pero son escaños para mantener en vida la lucha y seguir en pie y movilizados.

Muchas veces la protesta, en las modalidades que reseñamos en párrafos anteriores, se viene dando fuera o al margen de los partidos políticos y de toda estructura orgánica tradicional, lo que convierte al sujeto practicante en un interlocutor nuevo que se sitúa frente al gobierno de manera distinta, en la medida que exige y busca el diálogo abierto, público y de cara a la sociedad que representan. Esta actuación le ha abonado a los actores que se vehiculizan a través de la protesta (Piquetero, Sin Tierra, Sin Techo, desempleados, indígenas, minorías sociales, desplazados de guerra, etc.) dos ingredientes nuevos: La legitimidad que adquiere la protesta como acción política y de representación simbólica, dando a entender que es la forma de lucha de los nuevos actores insumisos y que cada día que pasa integra a más sectores en ese tipo de acción.

Por eso, la protesta, es símbolo porque crea discurso público y acción porque materializa su contenido político dentro de un escenario abierto de representaciones sociales (Naishtat F, 1999), es pensamiento rebelde donde se inscribe un sujeto colectivo (el nosotros del mensaje) y es reclamo en la medida que se presenta como una estrategia de acción común (Lenguita. P, op, cit) que demanda soluciones.

La protesta tiene varios rostros, hay veces que transita por la vía pacífica pero otras veces le ha tocado hacerlo por las veredas de la violencia, en San Salvador Atenco, México, en el Chapare, Bolivia, en los campos de Brasil, en las calles de Caracas y en las localidades de General San Martín, Tartagal y Cruz del Eje en Argentina, en los municipios de Antioquia, Colombia, con los campesinos en Nicaragua y Guatemala, todos ellos han encontrado en el gobierno el referente o ente político a quien reclamarle y enfrentar, porque él representa a la Constitución y a su vez es el garante de sus derechos ciudadanos y si son violentados, pues hay que reclamarle a quien los garantiza.

El gobierno y sus asesores, temerosos de que la protesta fertilice las tierras del descontento y amplíe su radio de acción en manos de los millones de excluidos, ha decidido criminalizar los actos y acciones de los insumisos a fin de negarles sus derechos porque actúan al margen de la ley; además, un criminal no puede tener vigente sus derechos, por ello al encajonarlo como delincuente le sigue negando lo que reivindica el actor movilizado y le imputa otros cargos adicionales.

Pero las protestas no son la síntesis del conjunto de la caja de herramientas políticas que trae el nuevo sujeto en estructuración, hay otros estilos de acción política, la que quiero destacar es la lucha armada, cuya composición es distinta a las practicadas por las guerrillas, si bien tienen como antecedente inmediato las experiencias de la guerra de guerrilla, la organicidad es distinta, la lógica del cuadro de operaciones también y el objetivo trae un color nacionalista, popular, recuperador de los recursos expropiados y coadyuvante de un proceso de socialismo democrático.

Hoy día la lucha armada no es un recurso retardatario, sino la forma política de mayor vigencia en un mundo donde la guerra es presente por lo inevitable de que suceda, y la defensa de los recursos estratégicos no va ser por la vía diplomática, sino con los pueblos armados poniendo un alto a las usurpaciones criminales.

Abundan los registros en donde la lucha armada apareció y está vigente, no como una moda "retro" , sino como la beligerancia que da respuesta a la nueva guerra, observemos qué países se convierten en zonas vulnerables para la nueva guerra, por poseer recursos naturales no renovables, pero apetecidos por las empresas transnacionales.



Mapa 3. Zonas petroleras latinoamericanas

Ecuador se coloca en una zona vulnerable, amén de la incapacidad política de Lucio Gutiérrez, por la urgencia con que está tramitando la Ley de Hidrocarburo mediante la cual la empresa privada explotará los campos estatales de Shushufindi, Sacha, Lago Agrio y Yulebra-Culebra, desnacionalizando uno de los recursos del país pero dañando la sobrevivencia de los habitantes, de ahí que grupos armados resurjan para contener esta expropiación criminal.

Otros países que no han tenido en su pasado una tradición larga de lucha armada, pero tampoco están exentos de ello, son México, Costa Rica y Panamá, no obstante para el caso de la tierra Zapatista, el ajedrez político se alteró y aparece un mapa elocuente: **ver anexo uno.**

Si bien son varios los grupos armados, lo cierto es que no están en plena concordancia en su actuación militar, operan de manera fragmentada pero su presencia está distribuida como lo indica el anexo.

Los más fortalecidos se hallan en la región del Plan Puebla Panamá y regiones colindantes, precisamente donde hay una abundancia de recursos de petróleo, hídricos y biodiversidad.



Mapa 4. Recursos hídricos y biodiversidad

Esas agrupaciones son una respuesta a las intenciones y objetivos de los Planes regionales (Plan Puebla Panamá, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Dignidad) y a los operativos militares en la zona del Iguazú, los lagos y la Patagonia, cuya estrategia está orientada a la apropiación indiscriminada de todos los recursos de Latinoamérica.

Los intereses son de tipo económico, en el ramo petrolero, privatizar las reservas potenciales del Golfo de México, aunque ya han iniciado su extracción, pretenden arropar la zona que le pertenece a México y Cuba, de ahí que hayan incrementado su explotación en un 535% en petróleo y 620 % en gas. Además, la zona denominada 5 fronteras (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela) tiene un potencial de oro negro enorme. (Delgado Gian, 2004)

Con el agua y la biodiversidad, tienen en la mira la región Andino-Amazónica (petróleo, gas, madera, biodiversidad y piedras preciosas) e interconectar la región con cableado y producción de energía a través de los siguientes objetivos: canal alterno a Panamá en el Chocó colombiano por el río Atrato /Truandó; impulsar la red Fluvial Sudamericana (SARS-IFSA) que unirá el río Orinoco con los ríos Negro, Madeira, Mamoré, Guaporé, Paraguay, Tiete, Paraná y de La Plata, lo que conectaría a Venezuela con Argentina. Asimismo, la región en donde nacen los ríos más importantes de Sudamérica compite con el Iguazú en tener las reservas inmensas de agua, cuando este vital líquido escasea y se comercializa a través de las privatizaciones, el Gran Amazonas compuesto por los ríos Caquetá, Putumayo, Apaporis y Vaupés en Colombia; Napo en Ecuador, Marañón y Uca-

yalli en Perú, son parte de la mesa que se quieren servir los empresarios depredadores.

En esas zonas están apareciendo las nuevas prácticas políticas en campesinos, indígenas, obreros y desocupados; también se relanzan los grupos armados de Sendero Luminoso (Perú), Alfaro Vive (Ecuador), la Coordinadora de Guerrillas Andino Amazónico entre Perú, Ecuador y Colombia; Bolivia cuenta con brazo armado que trabaja con el Movimiento Al Socialismo /MAS/ de Bolivia; Chile regresa con grupos armados que atentan contra oleoductos y centros comerciales emblemáticos; en Ecuador y Perú crecen los movimientos antiimperialistas; Guatemala se reorganiza, en fin, la lucha armada resurge como la fuerza organizada y militar que le da respaldo a las nuevas acciones que los sectores populares, campesinos y desocupados esgrimen en la época de la nueva guerra del imperio contra Latinoamérica.

En síntesis, quiero destacar que desde el último tercio de los 90, América Latina se ha convertido en un laboratorio de fenómenos sociales y políticos, al calor de la tendencia ascendente de la lucha de clases. En la base están las profundas transformaciones económicas y sociales que impuso la penetración del sistema económico neoliberal durante la década pasada. En las alturas, la crisis política y la creciente inestabilidad invade a la región, socavando a los regímenes políticos y llevándolos a la ingobernabilidad que agobia a la burguesía y el capital financiero internacional. Este es el suelo en que sectores avanzados de las masas latinoamericanas están realizando una importante acumulación de experiencias política y de lucha.

Los nuevos sujetos sociales imaginan, elaboran y difunden nuevas herramientas cognitivas, de subversión, de comunicación, específicas de las nuevas condiciones históricas. Trabajan diversos tipos de desobediencias que sirven también a la emergencia de nuevos sujetos políticos que hoy día se encuentran diseminados por todo lo ancho de América Latina, negando la existencia del sujeto único, pero enarbolando las distintas voces que convocan a la imbricación de diversas prácticas bajo un domo convergente.

Se observa, en los nuevos sujetos en estructuración, una nueva organización, que van tejiendo, -al lado de formas de acción y agrupación "clásicas"- las nuevas identidades, inéditas formas de lucha y nuevos imaginarios en el ámbito de la acción colectiva. Sin embargo, las actividades de los nuevos sujetos sociales han sido poco analizadas, en parte por la propia diversidad y también por ser un fenómeno relativamente reciente a partir del cual aún no pueden hacerse generalizaciones certeras.

Por último, la acción directa como un método de actuación directo que busca suplir las necesidades negadas por la circunstancia o por los gobiernos, está siendo asumida por los actores sin derechos y masas autoconvocadas, -los explotados, oprimidos, excluidos- en un acto de auténtica recuperación de la política, de redención del poder propio y de esa autonomía que durante décadas le fue expropiada por los partidos y las instituciones del sistema.

La Acción directa ha llegado a desplazar gobiernos, derogar leyes, imponer subsidios, de emplazar a los empresarios para que no cierren sus fábricas y de construir un nuevo ejercicio de la política reapropiadora de realidad social.

Estamos ante un mapa social inédito, en lo que corresponde a la gran variedad de opciones para ejercitar los derechos negados, también hay reposicionamiento actoral y se asoman algunos puentes interactorales, que pueden desembocar en alianzas y frentes convergentes; a su vez hay revisiones autocríticas de las prácticas políticas piqueteras y de toma de locales, ello puede traer cosas nuevas, puesto que no están negando la metodología de acción, sino que tanto son eficientes y sin han obtenido los logros que se propusieron.

En fin, se abre un flanco que revitaliza a la política y pone un alto, perentorio, a la política mediática y usurpadora de las subjetividades colectivas, esperemos que sea para bien de América Latina.

robinsson@mzt.megared.net.mx

ANEXO UNO

En los últimos años se ha acentuado la proliferación de grupos armados en México, así lo hace constar un reporte confidencial de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, en el que se revela la existencia de grupos guerrilleros en 22 estados (Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Morelos, Veracruz y el Distrito Federal).

El reporte tiene clasificados de la siguiente manera a los grupos guerrilleros:

Grupos con presencia nacional:

–Brigada Generalísimo Morelos, –Formación Organizada de Resistencia Civil Especial, –Ejército Popular Agonista, –Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular, –Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, –Movimiento Estudiantil Revolucionario Armado Patriótico, –Ejército Zapatista Revolucionario del Norte, –Movimiento Popular Revolucionario– Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo,

Grupos con presencia regional:

Sonora –Comité de Defensa del Pueblo, Baja California Sur–Grupo Armado en Mulegé, Sinaloa, –Almareños, Baja California –Comando Antirracista Mexicano, Nayarit –Ejército Carrancista de Liberación Nacional de las Cuatro Etnias, –Ejército de Liberación del Pueblo Nayarita, Aguascalientes –Guerrilla Villista por la Liberación de México, Michoacán –Comando Clandestino de Occidente, Frente Nacional Revolucionario y Popular, –Grupo Armado de la Sierra de Ocumicho –Consejo Auténtico de Pueblos Indígenas y Pueblos Purépechas, –Movimiento Armado Revolucionario, –Ejército de Redención y Liberación del Pueblo, –Movimiento Revolucionario Resplandor de la Libertad, –Frente de Lucha Popular de la Meseta Tarasca. Colima –Sin denominación, Guerrero –Fuerzas Armadas Clandestinas, –Ejército Insurgente de Chilpancingo, –Ejército de Liberación de la Sierra del Sur, –Comando Armado Revolucionario del Sur, –Fuerza Armada por la Revolución Mexicana, –Grupo Armado de Justicia de Guerrero, –Los Comuneros, –Brigada Campesina de la Sierra de Atoyac, –Brigada Campesina de Ajusticiamiento –Ejército de Ajusticiamiento de las Causas Justas, –Organización Revolucionaria del Pueblo, –Ejército Justiciero del Pueblo Indefenso, –Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Marginados de Guerrero, –Ejército Revolucionario de Liberación del Sur, –Comando de Ajusticiamiento Insurgente, –Ejército Revolucionario Indígena Campesino de Liberación Nacional, –Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres, –Comando Justiciero 28 de Junio, –Grupo Revolucionario Armado del Sur, –Comando Negro del Sur, –Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez, –Ejército Popular de Liberación José María Morelos –Comando Campesino Insurgente, Oaxaca –Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional, –Grupo Armado en Zaniza, –Ejército de la Montaña, –Grupo Armado en Santos Reyes Nopala, –Grupo Armado en San Sebastián Nopalera –Grupo Armado en San José Chiltepec, –Organización

Indígena de la Sierra Sur –Ejército Indígena Revolucionario de Liberación Nacional, –Organización de Indios Antonio Mendoza. Chiapas, –Ejército Insurgente Revolucionario del Sureste, –Frente Revolucionario Campesino Obrero Mexicano del Sureste, –Ejército Revolucionario del Soconusco, –Ejército Liberal de Chiapas, –Ejército Popular Zelot, –Movimiento Popular de Liberación Nacional, –Grupo Armado en el Triunfo, –Ejército Insurgente Libertador del Sur de Chiapas, –Ejército Carrancista, –Fuerzas Armadas Guerrilleras de la Sierra, –Ejército Popular Nacional, –Sendero Chiapaneco, –Alianza Popular Revolucionaria Zapatista, Chihuahua, –Comando Coralífero, –Ejército Villista de Liberación Nacional, –Ejército Popular Villista Revolucionarios de la División del Norte, Tamaulipas –Grupo Armado en el municipio El Mainero, –Grupos de Liberación Revolucionaria, San Luis Potosí –Grupo Armado en Tamazunchale –Grupo Armado en Catorce –Ejército Rebelde Potosino, Guanajuato –Ejército Guanajuatense Revolucionario, Querétaro –Milicia Zapatista de la Sierra Gorda, Puebla –Grupo Armado en la Sierra Norte, –Grupo Armado en la Mixteca Baja, –Fuerzas Armadas Revolucionarias, Tlaxcala, –Justicieros de la Malintzi, Distrito Federal –Comando Popular Clandestino, Campeche, –Movimiento Terrorista Campechano –Grupo Armado en Ejido Estrella del Sur, –Ejército Revolucionario Indígena, –Ejército Maderista de Liberación Nacional, Morelos, –La División del Sur –Comando Zapatista Justicieros de Liberación Nacional, Veracruz –Fuerzas Revolucionarias Unidas Civiles, –Refuerzo Armado para el Movimiento Bélico Indígena. –Movimiento Armado de Liberación Nacional Campesina.

Fracciones escindidas

Por lo que se refiere al PDPR-EPR y sus fracciones escindidas, el reporte del Grupo Antiguerrilla revela que el origen inmediato del PDPR-EPR se ubica en el PROCUP-PdIp, el cual a su vez se integró a partir de células provenientes de la Unión del Pueblo, fundada en 1964 por los hermanos Tiburcio y Gabriel Cruz Sánchez en el estado de Oaxaca; frente Estudiantil Revolucionario (FER) y Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), ambas fundadas en la década de los 70 en el estado de Jalisco, además del Partido de los Pobres (PdIp), fundado en el estado de Guerrero en 1967 y en menor número procedentes de la Liga Comunista 23 de septiembre (LC 23 SEP), como se indica a continuación.

- Grupo 23 de Septiembre
- Liga Comunista Espartaquista
- Liga Comunista Espartaco
- Movimiento Espartaquista
- Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR)

- Frente Estudiantil Universitario (FER)
 - Comandos Armados
 - Comando Urbano Lacandones
 - Comando Arturo Gámiz
 - Fuerzas Armadas Nueva Revolución
- Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil
 - Núcleo Guerrillero de Chihuahua
 - Frente Urbano Zapatista

El informe confidencial destaca que el binomio PROCUP-PdIp realizó actividades conjuntas de 1976 a 1990 y como estructura orgánica 1990 a 1996. A este proyecto se sumaron células provenientes de grupos armados que operaron en las décadas de los 70, 80 y principios de los 90, entre ellas las que integraron la Liga y por sí solas no lograron avances significativos en sus objetivos particulares.

Al respecto, cabe precisar que al proyecto del PDPR-ERP se incorporaron células de las siguientes organizaciones:

- Brigada Campesina de Ajusticiamiento
- Organización Revolucionaria Armada del Pueblo
- Organización Revolucionaria Ricardo Flores Magón
- PROCUP
- PdIp
- Unión de Comandos Revolucionarios

Revela reporte confidencial del gobierno que los clanes armados operan en 22 estados/ Por José Martínez M.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

Bielsa R, Bonasso M, Calloni S, Sánchez M. 2002, *Qué son las asambleas populares*, Ediciones Continente, Argentina.

Castells, Manuel. 1996, *La Era de la información, La sociedad red*, tomo I, II y III, Siglo XXI. España.

Delgado Ramos Gian C. 2004, *La geopolítica petrolera imperial en el Golfo de México*. 17/05/2004

En http://www.elcorreo.eu.org/esp/article.php3?id_article=3649

Farinetti Marina. 1999. ¿QUÉ QUEDA DEL MOVIMIENTO OBRERO? Las formas del reclamo laboral en "La nueva democracia Argentina", en Trabajo y Sociedad, No 1, Vol.1, citado por Lenguita Paula en "Los desafíos teóricos de la identidad piquetera"

Giarraca, Norma. 2001, La protesta social en la Argentina. Editorial Alianza, Buenos Aires, Argentina.

Jelín E. 1985, *Los nuevos movimientos sociales*, tomo I y II, Centro Editor de América Latina, Bs. Aires. Argentina

Katz Claudio. 2004, *Más allá del neoliberalismo*, publicación: 04/03/2004
www.netforsys.com/claudiokatz

Lenguita Paula. 2001, LOS DESAFÍOS TEÓRICOS DE LA IDENTIDAD PIQUETERA. Ponencia presentada en el Primer Congreso sobre Problemáticas Sociales Contemporáneas, Octubre.
<http://www.ceil-piette.setcip.gov.ar/docpib/ponencias/lenguitapiq/html>

Lobato M. Suriano J. 2003, *La protesta social en la Argentina*. FCE, Buenos Aires.

Martínez M José. 2004, El País, infestado de grupos guerrilleros, Semanario La Crisis, México. 14 de mayo de 2004.
[.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum22|20040408031218](http://lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum22|20040408031218)

Naishtat. F. (1999) ACCIÓN COLECTIVA Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO. Fotocopias, Argentina. Material de Seminario.

OSAL. 2003, *Los desafíos de los movimientos indígenas y campesinos*. CLACSO, Argentina.

Riquelme Quintín. 2003, *Los sin tierra en Paraguay*, CLACSO, Argentina.

Svampa M. Pereyra S. 2003, *Entre la ruta y el barrio*, Editorial Biblos, Argentina.

DEMOCRACIA EN CRISIS, IDEOLOGÍAS, PRÁCTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES. ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Guido Galafassi

La serie de hechos sucedidos en la Argentina de los últimos años permiten, sin lugar a dudas, realizar un ejercicio de reflexión sobre la posibilidad de una sociedad democrática dentro del capitalismo, analizando las diferentes estrategias surgidas para hacer frente a la fuerte situación de crisis económica, social y política de este país. Para esto se tomarán las nociones de democracia directa, inclusiva y participativa como aquellas efectivamente presentes en la discusión ideológica actual en torno a los movimientos sociales y las nuevas prácticas políticas.

La noción misma de democracia y más precisamente de democracia representativa ha sido puesta en crisis por primera vez en forma relativamente masiva. Además del desprestigio que en las últimas décadas viene sosteniendo la noción de democracia en un sentido estrictamente político, a partir de la rebelión popular de diciembre de 2001 en Argentina, es la más profunda noción de representación democrática unida al régimen capitalista la que empezó a ser cuestionada. Así, del desprestigio de neto corte individualista se pasó a los inicios de una reflexión crítica que busca revalorizar las nociones comunitarias de democracia, en concordancia con una democracia participativa o inclusiva en sentido integral. En los meses posteriores a la rebelión popular, este debate estuvo fuertemente presente en todas las organizaciones políticas y sociales tomando cuerpo también en los medios de comunicación (manejados como en todo el mundo, por grandes corporaciones económico-financieras). Este incipiente proceso de discusión se hizo posible gracias a la emergencia de una serie numerosa y diversa de organizaciones populares y movimiento sociales, tanto en el ámbito urbano como rural. La crisis política de esta etapa democrática surgida en 1983 más la profunda crisis del modelo económico capitalista de corte aperturista, desindustrializador y neoliberal,¹ fue llevando a que en los años noventa, diferentes grupos sociales que iban quedando exclui-

dos de la sociedad, comenzaran a organizarse para retomar un proceso de luchas y protestas² que había quedado anulado con la fuerte represión (30 000 desaparecidos) de la dictadura militar iniciada en 1976. Pero estos movimientos de protesta tenían un carácter claramente diferente, pues fueron las grandes masas de trabajadores desocupados los que iniciaron y predominaron en todo este proceso. La nueva sociedad argentina que produce pobreza y desocupación en un extremo y alta concentración económica en el otro, estaba nuevas organizaciones sociales con nuevas prácticas políticas de protesta. Hacia fines de los años noventa, una infinidad de movimientos de desocupados, más diversos movimientos agrarios, más organizaciones de obreros que recuperaron productivamente sus fábricas abandonadas por los empresarios, conformaban un conjunto muy diverso de formas de lucha y resistencia en donde no sólo el modelo económico era puesto en duda, sino también el modelo político de la democracia representativa. El punto culminante llegó con la insurrección popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde aparecen además las asambleas barriales integradas mayoritariamente por sectores de clase media que hasta el momento habían sido los principales defensores del modelo. Pero este debate, y estado de efervescencia social y política, fue lentamente declinando a medida que la situación económica a lo largo de 2002 (y como consecuencia de la salida de la convertibilidad implementada por el gobierno peronista y provisional de Eduardo Duhalde, ex vicepresidente de Carlos Menem) entraba en una meseta de cierta estabilidad (aunque sin que desaparezca ni un ápice de la profunda crisis casi terminal del modelo neoliberal de desarrollo), quedando refugiado primordialmente en los sujetos sociales más críticos del sistema dominante (movimientos de desocupados, trabajadores de fábricas recuperadas, lo que queda de las asambleas barriales y movimientos agrarios); mientras el resto de la población regresaba de alguna manera a la apatía de la última década.

ACCIÓN COLECTIVA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

La consigna “que se vayan todos” utilizada en el levantamiento popular de diciembre del 2001 sorprendió a todos tanto por su espontaneidad como por su súbita e inesperada aparición. Pero este “que se vayan todos” ori-

¹ Cfr. por ejemplo a: Aspiazú y Nochteff, 1994; Basualdo, 2000; Bonnet, 2002, Gigliani, 2002; Pucciarelli, 2002, Mallimaci, 2002; Mira, 2003.

² Cfr. Gómez, 2002.

ginal estaba ingenuamente sustentado en la creencia de que era la “política” (por la acción de los políticos profesionales) la causante de todos los problemas de la Argentina. A pesar de esto, un espíritu fuertemente crítico al modelo de democracia representativa dominado por profesionales de la política estuvo efectivamente presente en el levantamiento popular. Esto es lo que permitió en los meses posteriores la organización de las asambleas populares (que funcionaron con base en un sistema de democracia directa) en Buenos Aires y otros centros urbanos, y una acción más mancomunada con los sujetos sociales que desarrollaban una lucha contra el sistema desde antes (pero con diversas estrategias y objetivos), como los movimientos de trabajadores desocupados, los trabajadores de empresas recuperadas y hasta con algunos movimientos de trabajadores y/o pequeños productores agrarios. En este proceso de debate, reflexión y acción colectiva, la consigna “que se vayan todos” fue cualificándose y llenándose de un contenido más complejo, por lo cual pasó incipientemente a significar “que se vayan todos los mentores del modelo neoliberal, incluyendo al poder económico” (Galafassi, 2002). Por lo tanto, aquí se comenzó a ligar, desde una visión crítica, la vigencia de la democracia representativa profesional con la existencia de una economía capitalista.

Mientras hasta fines del año 2001 la mayor parte de la población se desinteresaba por las políticas de gobierno, a partir del cacerolazo del 19 y 20 de diciembre, se comenzó a discutir, por lo menos por algunos meses, de manera más intensa el modelo de país deseado. Las ya mencionadas nuevas formas de organización social y política que se gestaron en los distintos barrios del área metropolitana de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del país a partir de las “asambleas populares (o barriales)” tuvieron un protagonismo exiguo, pero intenso durante algunos meses. En estas asambleas populares se había empezado a discutir principalmente los problemas locales referentes al trabajo, la salud y la infraestructura urbana del barrio, pero se debatió también de modo importante la situación económica y política general del país. Fue un fenómeno relativamente heterogéneo que casi no pasó del periodo de formación, pues al transcurrir el año 2002 estas asambleas fueron perdiendo fuerza en distintas formas. En algunos casos fueron “cooptadas” por los partidos de la izquierda más dogmática, lo que terminó por disolverlas y fundamentalmente quitarle cualquier posibilidad de realizar algún ejercicio de democracia participativa, como parecía que había comenzado a darse. Hacia el 2004, únicamente se mantienen algunas de ellas, pero con un número abultadamente menor de participantes y fundamentalmente con aquellos ciudadanos con un mayor nivel de compromiso con la realidad social y política, quedándose el resto de la población en su habitual “exilio interno”, cumpliendo con los cánones

establecidos por el mercado y la democracia representativa. Como se dijo anteriormente, estas asambleas estuvieron mayoritariamente conformadas por sectores de la clase media urbana. Paradójicamente, y luego de la efervescencia hubiera pasado, el candidato neoliberal a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, recibió casi 50% de los votos en las elecciones realizadas durante el 2003. Fue buena parte de la clase media la que apoyó a este nuevo representante político del neoconservadurismo estrechamente ligado al ex presidente Carlos Menem. La misma clase media que en este año 2004 se ha embargado fuertemente en la campaña por la "seguridad" exigiendo mando dura policial, tolerancia cero y endurecimiento de las penas, desconociendo absolutamente las causas económicas y sociales del problema junto al proceso de corrupción político-policial que nutre y sostiene a toda la problemática de la inseguridad.

A medida que avanzaba el año 2002, entonces, la protesta se fue diluyendo en intensidad y la movilización de la clase media que se había producido espontáneamente a principios del año, quedó fundamentalmente reducida a las asambleas populares, aunque con una ostensible pérdida de integrantes. Incluso muchas de las primeras asambleas populares, especialmente del área metropolitana de Buenos Aires terminaron por desaparecer. Por el contrario, las organizaciones populares basadas en los diversos movimientos de desocupados no sólo continuaron su lucha sino que incluso profundizaron sus reivindicaciones logrando a principios de 2002 adhesiones y comprensión en el resto de la sociedad; proceso que se fue revirtiendo nuevamente hacia fines del mismo año y durante el 2003 en consonancia con la dilución de la protesta. El proceso de reflujó de las clases medias a su posición de histórico apoyo al modelo se completa hacia el año 2003 con el creciente rechazo hacia toda forma de protesta popular y especialmente hacia los piquetes o cortes de ruta de los movimientos de desocupados, por considerarlos "molestos" al ritmo de vida cotidiano. El consenso hacia la criminalización de la protesta en consonancia con la campaña por la seguridad forman parte del mismo fenómeno de fuerte quiebre y enfrentamiento entre clases de la sociedad argentina posdictadura.

Los movimientos de trabajadores desocupados o "piqueteros" se fueron diversificando a lo largo de estos últimos años tanto en tipo de organización como en diferentes proyectos políticos. Hasta la asunción del presidente peronista Nestor Kirchner, todas las organizaciones de trabajadores desocupados compartían la idea de que no es suficiente sólo protestar y resistir a la crisis a través del corte de rutas, la toma de edificios públicos, el negociar con los funcionarios de turno o pedir a los hipermercados, o mantener comedores barriales y abrir centros de salud comunitarios, etc.

La salida a la crisis social era y es vista en términos políticos, pero no hay un solo proyecto político piquetero, sino varios, desde aquellos que siguen lógicas de construcción partidaria con mayor o menor acercamientos a los distintos partidos de izquierda y centro izquierda o agrupaciones sindicales más o menos combativas, hasta aquellos otros que apuntan a fortalecer el movimiento social construyendo nuevos lazos de poder y de solidaridad en una especie de "sociedad paralela". Incluso la política seguida por el presidente Kirchner agudizó muchas de las contradicciones entre los diferentes movimientos de desocupados, conformándose claramente dos tendencias: aquellas que apoyan al nuevo gobierno y aquellas otras (mayoritarias en número y en militantes) que mantienen una postura de oposición, aunque con numerosas diferencias en torno a los métodos de lucha y la forma de caracterizar la situación.

Las organizaciones piqueteras que responden a Luis D'Elia y Juan Carlos Alderete, es decir, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), pensaban en la conformación de un gobierno de unidad popular, de tinte populista y reformista, con los piqueteros al gobierno como parte de una coalición mayor (en cuyo imaginario incluyen a la Central de Trabajadores Argentinos, el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza, las Pymes, los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina, la Federación Agraria y las organizaciones de Derechos Humanos). Esto fue así, a pesar de que la CCC al responder al maoísta Partido Comunista Revolucionario parte de una concepción ideológica claramente diferente al reformismo auténtico de la FTV. Es que la CCC concebía como estrategia para vincularse a las masas, la necesidad de realizar esta alianza con un sector más populista. Así, los objetivos más inmediatos (porque en última instancia la CCC tiene como horizonte un esquema socialista) de esta conjunción se dirigen fundamentalmente a una estrategia redistributiva del poder y los recursos, basados en viejas identidades populistas que sostienen la necesidad de la integración al sistema y la correspondiente ilusión de retorno al Estado intervencionista benefactor. En la FTV está bastante arraigada la creencia en que la lucha contra la opresión debe fundamentalmente girar en torno a la cuestión de la ciudadanía (obtención-recuperación de derechos). Así, en relación con el trabajo, la estrategia va hacia la reivindicación del trabajo "genuino", como simplemente aquel puesto de trabajo clásico dentro de una sociedad capitalista, a lo que se tiende es a recuperar la figura del trabajador ocupado, ese trabajador típico de la etapa sustitutiva de importaciones de la organización fordista tradicional (Mazzeo, 2004: 41). Para esto es necesario un capitalismo reformado, de aquí el feroz ataque al neoliberalismo de estos grupos pero no necesariamente contra el capitalismo, porque lo que se pretende es un capital cons-

treñido o manicurazo, pero no la eliminación del capital como relación social. De alguna manera el actual gobierno representa para esta corriente, la realización de su proyecto político, por lo cual ha asumido una postura claramente conciliadora y con fuertes manifestaciones de apoyo a la política oficial; generándose en muchos casos enfrentamientos con el resto de las organizaciones piqueteras. Esta tendencia es absolutamente clara en la organización liderada por Luis D'Elia, quien, incluso, ocupa cargos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires; aunque la CCC también ha adoptado frente al gobierno de Kirchner una actitud mucho menos crítica que la del resto del espectro piquetero. A pesar de esto, la CCC (que responde al maoísta Partido Comunista Revolucionario) aún continúa visible a partir de movilizaciones, reuniones públicas, petitorios y declaraciones; mientras que la FTV ha casi desaparecido de la escena desde la asunción del nuevo gobierno. En la CCC también, y a pesar del fuerte liderazgo de Alderete, se reivindica y pone en práctica alguna forma de democracia participativa en su propia organización interna, especialmente en los niveles de base. Se puede decir también que la FTV parte de la concepción clásica que concibe el eje de articulación entre sociedad (o pueblo) – partidos políticos o movimientos políticos – representación – poder del Estado. Las nuevas y minúsculas agrupaciones piqueteros directamente vinculadas al gobierno (Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, Agrupación 26 de Julio, Frente de Desocupados Eva Perón y MTD Evita) comparten también obviamente esta concepción con la FTV. La CCC, en cambio, combina esta concepción con aquella otra (clásica también dentro de la izquierda) que a través de una vanguardia aspira a un cambio más profundo del sistema. Pero como se dijo antes, esta aspiración está mediada a partir de la estrategia de un Frente Popular más amplio.

La Coordinadora Aníbal Verón, por su parte, agrupa a una diversa (y cada vez más fragmentada) serie de agrupaciones de desocupados que mantienen su autonomía e independencia, pero que coinciden, en términos generales, en que la cuestión no pasa por llegar al poder, que según ellos está impregnado por los valores de un sistema que ya no tiene respuestas para la sociedad.³ Trabajan para cambiar radicalmente al sistema y dicen estar haciéndolo ya mismo y desde abajo. La propuesta de estos grupos

³ Se encuentran localizados mayormente, aunque no exclusivamente, en el sur del área metropolitana de Buenos Aires, siendo fuertes en Quilmes, Lanús, Almirante Brown, Florencia Varela, Berazategui, Sur de la Capital Federal, y provincia de Río Negro. La mayor parte de sus agrupaciones responden a la sigla MTD, es decir Movimiento de Trabajadores Desocupados.

es construir a partir de la experiencia concreta de transformación (en términos de contrapoder, poder popular, etc.) reconstruyendo lazos sociales y desarrollando relaciones sociales alternativas a las dominantes. Aquí no está presente la lucha por un trabajo genuino, sino por un trabajo "digno" entendido como trabajo igualitario, solidario, libre y compartido. Por lo tanto, si bien apuntan a la construcción del socialismo, no basan la construcción de éste sobre el trabajo asalariado, sino que parten de un abanico de reivindicaciones de las clases subalternas confiando en una potencia humana de forma más integral (no sólo dominada por lo productivo). Es decir que la lucha por la vida, no es únicamente la lucha por el empleo o por el desarrollo de la economía, para lo cual lo importante es romper con la lógica del trabajo-mercancía (de aquí su no adhesión a la óptica del trabajo genuino) (Mazzeo, 2004: 44). La autonomía respecto al Estado y a los partidos políticos se conjuga con la estrategia del cambio social a partir de la experiencia concreta, en donde la central es la transformación en la cotidianidad de los sujetos oprimidos. Es por esto que la democracia directa y la horizontalidad son parte constitutiva de sus métodos de trabajo. Esto es por lo menos lo que se plantea como principios básicos, aunque en la práctica sea sumamente difícil llevarlo a cabo, lo que se evidencia en la alta división y fragmentación que ha sufrido este espacio en los últimos dos años. Se localizan fundamentalmente en espacios olvidados por el sistema y están creando una especie de "sociedad paralela" que incluye el mundo de la producción, la salud, la educación y la formación política. En esta coordinadora se encuentran los que son, sin dudas, los grupos más cercanos ideológicamente a las teorías del contrapoder o del antipoder, y del autonomismo en general.

Las organizaciones piqueteras nucleadas en el Bloque Nacional Piquetero, que incluye a las agrupaciones de desocupados ligados a los partidos de izquierda, es decir, marxistas, creían que la Argentina, luego de los sucesos del 19 y 20 de diciembre, había entrado en un proceso revolucionario y, por lo tanto, intentaron ganar la calle para sumar el mayor número posible de militantes en pos de su estrategia política.⁴ La lucha contra la opresión y la exclusión es concebida como claramente insuficiente si se plantea

⁴ Integran actualmente el Bloque Nacional Piquetero, el Movimiento Territorial de Liberación (del Partido Comunista); la Federación de Trabajadores Combativos (que nuclea a varios partidos trotskistas como Movimiento al Socialismo, Partido de la Revolución Socialista y Frente Obrero Socialista); la Coordinadora de la Unidad Barrial (vinculada al Partido Revolucionario de la Liberación), la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (que responde a la organización política Quebracho) y el que constituye el componente mayoritario, el Polo Obrero (del Partido Obrero, de tendencia también trotskista).

sólo como una recuperación de los derechos ciudadanos, por lo cual bogan por un horizonte de transformación radical de las relaciones capitalista de producción. Fundamentalmente en la producción basan su estrategia, y su caracterización se sustenta en la clásica visión del socialismo que parte de la centralidad de trabajador asalariado como sujeto de la lucha para superar al capitalismo. Se supone al sujeto colectivo dentro del marco ortodoxo de la sociedad de las grandes fábricas planteando de alguna manera la semejanza entre organización de clases y organización piquetero. La reivindicación del trabajo genuino parte del reconocimiento de la necesidad de convertir al desocupado en obrero industrial como precondition indispensable del cambio social (Mazzeo, 2004: 42). El desocupado es visto como un pre-sujeto, y sus condiciones como infértiles para el desarrollo de una política revolucionaria. De esta manera, es necesario primero crear las condiciones de aplicación de las políticas revolucionarias, para lo cual hace falta, reconstruir y extender la relación de clase en el terreno de la producción. De esta manera, a diferencia del primer eje mencionado, estos grupos conciben la articulación clase obrera – vanguardia – revolución – poder del Estado como el paradigma principal que organiza la acción. En la pugna entre capitalismo y socialismo, la vanguardia política es un factor sumamente importante para la resolución. El MIJD (Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados) que responde a Raul Castells —preso durante el gobierno de Menem y De la Rúa— y la Agrupación Barrios de Pie (vinculada a la agrupación política Patrial Libre) suelen coordinar acciones con el Bloque Piquetero Nacional, aunque ideológicamente representen posiciones muchos más eclécticas que van desde el nacionalismo de izquierda hasta posiciones clasistas y revolucionarias.

El Movimiento Teresa Rodríguez (en alusión a una de las víctimas de la represión policial de la protesta en los años noventa) mantiene varias afinidades ideológicas aunque varias diferencias en la práctica social y política con el Bloque Piquetero Nacional, de hecho ha formado parte del mismo en sus inicios para abandonarlo un poco después. Descreen del verticalismo y rechazan la delegación, pero conviven en su seno prácticas asamblearias para la toma de las decisiones con formas y organismos de centralización que revisten un carácter más tradicional, como una mesa directiva nacional y otras regionales. Pero también en parte comparten con los grupos más cercanos al autonomismo la necesidad de un cambio social ahora y desde abajo, con experiencias concretas en la construcción en el terreno.

Lo que también fue ganando cada vez más importancia fue el proceso de recuperación, a partir de la gestión obrera, de las empresas en quiebra o abandonadas por sus propietarios. A pesar de las diferencias puntuales, la

historia reciente de estas empresas que terminaron bajo control de los trabajadores, transitaron todas por caminos similares: “retraso salarial, abandono patronal de la empresa, pasividad de la burocracia sindical, ocupación de la firma como última opción para conservar los puestos de trabajo” (Gaggero, 2002). Se calcula en alrededor de 200 las fábricas bajo control de los trabajadores en todo el país, marchando también hacia la constitución de un movimiento articulado de lucha y reivindicación sobre bases relativamente alternativas al capitalismo y a la democracia representativa. Es importante destacar que el proceso que dio origen a la recuperación de fábricas por parte de sus trabajadores se ha venido desarrollando como un tránsito desde situaciones de fuerte resignación frente a procesos de creciente precarización de la relación salarial, hacia la emergencia de procesos autogestivos de recuperación y mantenimiento de los puestos de trabajo por parte de los propios trabajadores. La confrontación abierta entre los trabajadores y la patronal fue un componente importante, en la mayoría de los casos, por cuanto el proceso mayoritariamente se origina a partir de una reacción defensiva de los primeros ante la posibilidad de pérdida del trabajo en un contexto signado por altos niveles de desocupación (Fajn, 2004). Una situación de intensa degradación general de las empresas es el punto de partida, en relación tanto con el contexto de crisis económica que dificultan la continuidad y viabilidad de muchas de las pequeñas y medianas empresas, así como vinculada con procesos de vaciamiento o *lock-out* patronal, a través de los cuales los empresarios buscaban maximizar los beneficios del capital diversificándolo en inversiones financieras. El conjunto de las empresas recuperadas fueron asociándose y nucleándose de acuerdo con criterios diferentes, aunque en un primer momento existieron encuentros de casi todo el espectro que ayudó a la constitución del movimiento social. Se editaba un periódico y se realizaban asambleas donde se debatían fundamentalmente dos opciones para la gestión de las fábricas. Por un lado, están los que plantean continuar la gestión obrera con la formación de cooperativas con una organización relativamente horizontal e igualitaria (a diferencia de la mayoría de las cooperativas históricamente existentes en el país); y por otro lado aquellos, en minoría, que proponían la estatización bajo control obrero. Mientras la primera opción solía tener una mayor aceptación entre funcionarios nacionales y municipales, la segunda fue fundamentalmente apoyada por los partidos de izquierda y los sindicatos combativos. De esta última los casos más paradigmáticos fueron la empresa textil *Bruckman* de la ciudad de Buenos Aires (en la cual la justicia dictaminó durante el 2003 la expulsión de todos los trabajadores y la devolución del predio a la patronal, estando actualmente en la gestión para la formación de una cooperativa que pueda salvar legalmente la

recuperación, sin que esto implique renunciar a sus principios ideológicos básicos), y la fábrica de cerámicas *Zanon* ubicada en la ciudad de Neuquén (Patagonia), donde el proceso continúa y la relación con el sindicato regional (en abierta oposición al nacional que no apoya el proceso) y los movimientos de desocupados y asamblearios de la zona —conformando la cooperativa del Alto Valle— fue una de las claves de la permanencia de la gestión obrera.

Estas y otras diferencias fueron dando origen a varios nucleamientos y organizaciones de empresas recuperadas. Estos movimientos mantienen orientaciones político-ideológicas diversas que expresan la diversidad de orígenes y modalidades de funcionamientos de las experiencias de las fábricas recuperadas. Lo que todos, en general, intentan es coordinar, difundir, apoyar, ampliar las experiencias y ser espacios de contención y aglutinamiento. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) señala como modalidad de resolución del conflicto la expropiación y la formación de cooperativas. Mantiene vinculaciones con la Universidad de Buenos Aires y con diversas asambleas barriales. El modelo paradigmático lo constituye la cooperativa IMPA que posee también un fuerte trabajo cultural y de difusión de ideas alternativas de organización social. Posee también una gran inserción en cooperativas del interior del país. A principios de 2003 se produce un desprendimiento de este agrupamiento con el nombre de “Movimiento de Fábricas Recuperadas”. Las diferencias ideológicas y metodológicas son mínimas planteando casi la misma forma de resolución del conflicto y las vinculaciones fundamentales de este movimiento se dan con la Pastoral Social de la Iglesia católica. Entre estos dos movimientos se reúnen aproximadamente 100 empresas. La Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas (FENCOOTER) propone crear cooperativas de trabajo con la posibilidad de expropiar con cargo, es decir, que los trabajadores salden la expropiación a cambio de sus deudas salariales. Por último, la Comisión Nacional de Empresas Recuperadas y en Lucha es la que marca claramente la diferencia, pues plantean el control obrero inspirándose en las ideas del marxismo. Los casos mencionados de *Brukman* y *Zanon* son el ejemplo de este movimiento, proponiendo la estatización, la expropiación definitiva sin cargo y una orientación social para el destino de la producción, rechazando así la inserción dentro del sistema capitalista, a diferencia del resto de los movimientos cooperativos. Mantienen relaciones con las Madres de Plaza de Mayo, organismos de Derechos Humanos, con algunos Movimientos de Trabajadores Desocupados y asambleas barriales. El debate político ocupa un lugar central en su dinámica de funcionamiento. A diferencia de las cooperativas, “poseen una estrategia política a largo plazo y han construido relaciones más estrechas y sólidas

con diferentes movimientos sociales y partidos políticos” (Fajn, 2004: 95). A pesar de esto, en términos legales se encuentran en una situación todavía no resuelta, pues la legislación actual y el Estado no acepta la forma de organización que el movimiento propone, dado que significaría aceptar la posibilidad de organizar la economía sobre otra lógica que no sea la del mercado.

En los espacios rurales, la protesta y la organización de diversos movimientos agrarios también adquirió cierta importancia durante los últimos años, aunque no haya estado tan presente en los medios, por lo que parecería que en parte no hubiera existido. El mundo agrario argentino es sumamente heterogéneo, donde la combinación “terrateniente ganadero – agricultor familiar capitalizado (tipo *farmer*)” domina buena parte de las regiones del país. No obstante, existen zonas de campesinos y otras de comunidades de campesinos indígenas ya sean en el norte como en el sur del país. Tanto los agricultores familiares como los distintos tipos de productores campesinos han tomado parte de los movimientos de protesta, junto a otros sujetos como trabajadores rurales, contratistas sin tierra, etc. Los problemas económicos derivados de la producción en un contexto de crisis, más la cuestión de la tenencia de la tierra o de la propia supervivencia como población rural fueron los ejes predominantes de las acciones colectivas, en franco contraste con un proceso de concentración económica que alcanzó ribetes de máxima expresión en el mundo rural durante esta etapa neoliberal. Un claro ejemplo de movimiento agrario de los productores familiares capitalizados es el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) que surgió por la acción espontánea de un sector de Chacareros (*farmers*) de una región vecina a la rica región Pampeana, que al no poder soportar más un fuerte proceso de incremento de sus deudas bancarias, poniendo en peligro la tenencia misma de sus propiedades (tierra y maquinarias), comenzó a gestarse una acción para impedir los remates judiciales que luego fue organizándose a nivel nacional y conformando un renovado esfuerzo por terciar en la puja histórica contra los grandes productores del campo. El MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) por su lado, representa un caso particularmente distinto, pues nuclea a pobladores y campesinos del noreste argentino con una tenencia más que precaria de la tierra y un nivel de subsistencia caracterizado por altos niveles de pobreza. Además su forma de organización, sus planteamientos y reivindicaciones los ubican por fuera de cualquier movimiento clásico, pues junto a la lucha por la tierra, poseen reivindicaciones ecologistas y dicen adoptar una forma de organización que los acerca a los nuevos movimientos autonomistas, manteniendo estrechos contactos con algunos de estos grupos urbanos, como es el caso del Movimiento de Trabajadores Desocupados

de Solano (Pcia. de Buenos Aires). El Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR) y la Unión de Campesinos Poriajhu del Chaco, continúan de alguna manera la lucha iniciada en los años setenta por las Ligas Agrarias del Nordeste, al mantenerse muchas de las problemáticas como la cuestión de la tierra y la imposibilidad de sobrevivencia de los campesinos ante el embate de los monopolios comercializadores y los grandes productores. La Red Puna del noroeste argentino, la Asociación de Criadores de Cabras del Neuquén o la Organización de Comunidades Mapuche - Tehuelche de Chubut son algunos ejemplos de la organización de los grupos de campesinos más pobres, en donde la presencia de grupos indígenas es importante. El objetivo de estos movimientos es fundamentalmente pelear para lograr un mínimo nivel de subsistencia, estando también presente el reclamo de identidad y tierras en aquellos casos en donde el componente indígena es más fuerte y en donde la confrontación entre la cultura occidental y la cultura de los pueblos originarios se hace fuertemente evidente. Así, se puede ver que la problemática en las áreas rurales es altamente compleja existiendo una importante diversidad de situaciones, demandas, sujetos y formas de organización que se entrecruzan de distintas maneras con el contexto de crisis y fuerte desigualdad creado por esta etapa neoliberal del capitalismo.

DEMOCRACIA, MERCADO Y REPRESENTACIÓN, Y EL INTENTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POR SUPERARLOS

La República Argentina representa indudablemente uno de los más altos exponentes del así llamado Consenso de Washington, que propuso para América Latina, una era posdictaduras militares basada en la democracia (estrictamente representativa) y en la potenciación del mercado. La primera como contraste formal con los gobiernos autoritarios y el segundo como continuidad y profundización del nuevo esquema de capitalismo posterior a la etapa proteccionista. Lejos de cualquier visión keynesiana, este consenso (al mejor estilo del puro liberalismo en sus orígenes) opone libre juego de las fuerzas del mercado a la existencia de un Estado con fuerte presencia —lo que termina agudizando las contradicciones propias del capitalismo, como lo demuestra la crisis del 2001—. Incluso la nación es atacada en este nuevo consenso (justificando la globalización capitalista), en tanto ofrece serias limitaciones a la expansión del mercado. La concepción de democracia también es más que superficial, al legitimar sólo formalmente esta nueva etapa sin proponer ninguna revisión del pasado dictato-

rial latinoamericano. Pero lo importante es que se hicieron evidentes, una vez más, las fuertes limitaciones del modelo democrático que acompaña a las sociedades capitalistas. La democracia basada en la representación desnudó a la claras el poder del representante y la sumisión del representado. Las prácticas neoliberales basadas primordialmente en cálculos financieros y fiscales que favorecen el crecimiento de la desigualdad en pos sólo de un cierto equilibrio macroeconómico, fomentaron todo tipo de procedimientos econométricos donde la transparencia en las transacciones estuvo ausente. Los nuevos profetas de la economía, todos discípulos de la Escuela de Chicago y defensores del Consenso de Washington,⁵ formaron ideología a través del poder político real y a través de los medios de comunicación para enmascarar el profundo proceso de exclusión social que el capitalismo mundial estaba generando. Los representantes políticos comenzaron cada vez más a utilizar la fuerza de sus representados exclusivamente para acordar con el poder económico, a cambio de una serie diversa de beneficios personales. Así, es imposible separar capitalismo neoliberal, corrupción sistémica y democracia representativa. Si el Estado-nación capitalista con democracia representativa fue siempre un sistema basado en la desigualdad y la competencia individualista, el capitalismo neoliberal potenció enormemente la desigualdad —agudizando las contradicciones— al destruir los escasos mecanismos de regulación existentes y dejar todo librado al juego de la oferta y la demanda. En síntesis, la República Argentina está inmersa desde 1983, en un proceso “democrático” donde el mercado se enfrenta a la misma existencia del Estado-nación moderno. Se continúa, de esta manera, la labor iniciada por las dictaduras de las décadas del 60 y el 70, a partir de la instalación de una democracia débil pero que pudiera llevar adelante las reformas necesarias para el éxito total del mercado.

Frente a esto, durante los años 90, comenzó a surgir una serie diversa de movimientos sociales y procesos de acción colectiva en pos de frenar esta avanzada del mercado. Si bien el enfrentamiento al neoliberalismo es claro en todas ellas, las propuestas para superarlo son diversas. Desde aquellos que proponen “retornar” a las formas capitalistas en donde el Estado tenía un papel más fuertemente regulador de todos los procesos economí-

⁵ Este Consenso de Washington se prolonga hasta el presente proyecto el proyecto de integración de las Américas llamado ALCA, construido sobre las bases fundamentales del modelo neoliberal (Lucita, 2002).

cos y sociales, hasta aquellos otros que pretenden directamente dejar atrás al capitalismo. Junto a las clásicas críticas sobre los procesos de explotación económica, aparecieron también fuertes críticas sobre las formas de la organización política. Así, la propia democracia representativa, típica del capitalismo comenzó a ser también un punto crucial por superar. Pero de toda la diversidad de movimientos, solamente algunas pocas organizaciones comenzaron a reivindicar nuevas formas de democracia no capitalista. Ciertas asambleas populares tuvieron un rol destacado aunque efímero en algunos casos debido a la pérdida de fuerza de estas formas de organización en el transcurso del 2002. Ciertos movimientos de desocupados (muchos de ellos ligados a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón) junto a algunos movimientos agrarios, también comenzaron a poner fuertemente el eje en el intento de nuevas prácticas democráticas, donde el concepto de democracia directa o participativa asumen una importancia fundamental junto con las ideas de autonomía y contrapoder, en el sentido de situarse por fuera de los mecanismos formales de la democracia representativa al desistir de participar en cualquier elección de autoridades nacionales o regionales. Algunas empresas recuperadas también rescatan las prácticas de democracia interna en la organización del trabajo y en algunos casos también en su inserción comunitaria. Pero hasta el momento, sólo aquellas que proponen la estatización bajo control obrero tienen una proyección más allá del ámbito de trabajo a partir de una propuesta de cambio radical tanto en lo político como en lo económico, aunque con una mayor identificación con los partidos de la izquierda ortodoxa.

Es decir que muchas asambleas populares como algunos movimientos de trabajadores desocupados y de empresas recuperadas, más algunas pequeñas organizaciones políticas y sociales favorables a la teoría de la democracia participativa, fundamentan su accionar en cuestionar la democracia liberal y comenzar a poner en práctica otras formas más radicales de democracia. Pero en todas estas organizaciones populares existen matices y diferencias respecto a al nuevo tipo de organización democrática. Las prácticas de democracia directa fueron importantes en casi todas las asambleas populares desde un principio; sin embargo, se diferenciaron posteriormente en conjunto con la disminución o desaparición de muchas de estas asambleas. Algunas de éstas fueron controladas por los partidos de la izquierda ortodoxa (basados en el centralismo democrático), y perdieron todo funcionamiento cercano al modelo de democracia directa. Es importante mencionar que estas prácticas de democracia directa no significaron en todos los casos cuestionar también el régimen económico capitalista, pues al centrarse en la problemática barrial desde una mirada extremada-

mente localizada, muchas veces la estructura y organización de la economía no entraba en los considerandos del debate. Otras en cambio han ido avanzando y profundizando su visión de la política y la economía acercándose a los postulados de la Democracia Participativa⁶ o Inclusiva⁷ tanto en términos de democracia política, económica y social así como en un nuevo concepto de ciudadanía. Y en algunos casos puntuales, la cuestión de la democracia ecológica también asume un papel central de las propuestas.⁸ En cuanto a los movimientos de trabajadores desocupados y agrarios es posible ver un mayor acercamiento al proyecto de Democracia Participativa o Inclusiva en algunos MTD agrupados bajo la Coordinadora Aníbal Verón y algunos movimientos agrarios como el Mocase. Aunque es importante aclarar que debido a su autonomía,⁹ manejan diferentes concepciones de organización interna; y el actual proceso de fragmentación está poniendo en crisis los postulados básicos del autonomismo y los principios fundamentales de la democracia directa.

En síntesis, el modelo de acumulación económica y de representación política impuesto —a costa de miles de desaparecidos— en los años setenta por la dictadura militar y su posterior profundización neoliberal de la mano fundamentalmente del peronismo, ha provocado un altísimo nivel de exclusión social con fuertes procesos de división interna en la comunidad, donde el individualismo extremo ha sido colocado como uno de los valores fundamentales de la cultura cívica y social. A partir de los años noventa, comenzaron a emerger una gran variedad de movimientos sociales sustentados en diversas consideraciones ideológicas y variadas prácticas de acción. Los niveles de protesta y organización de estos movimientos han ido creciendo y complejizándose, pero la falta de unidad y la alta fragmentación y división sigue siendo una característica importante del movimiento contestatario actual. Por lo tanto, el gran desafío sigue siendo la superación de los niveles de fragmentación bajo reivindicaciones comunes como la desaparición de los altos niveles de exclusión y desigualdad social

⁶ Cfr. Dieterich, 2001.

⁷ Cfr. Fotopoulos, 2002

⁸ Tal es el caso, por ejemplo, de las asambleas populares de la región de Esquel en la Patagonia, que están llevando adelante una fuerte lucha contra un proyecto de explotación minera, que de llevarse a cabo, terminaría en un desastre ambiental de enormes dimensiones. Ver: <http://www.noalamina.i8.com>

⁹ Algunos de estos han adoptado fuertemente las ideas de Contrapoder de Antonio Negri (2000, 2001) y Antipoder de John Holloway (2001, 2002), por lo cual se excluyen de participar en cualquier acción que implique la toma del poder político.

y la puesta en práctica de formas democráticas más igualitarias y transparentes presentes en toda la gama de movimientos sociales. La superación del capitalismo como forma de organización social, política y cultural ya constituye un problema mucho más difícil de ver en términos de objetivos comunes, pues las diferencias a este respecto son en algunos casos insalvables. Y es la consideración de este último punto, lo que impone muchas veces obstáculos a la posibilidad de acordar respecto a los primeros.

BIBLIOGRAFÍA

- Azpiazu, Daniel y Hugo, Notcheff (1994), *El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina*, Buenos Aires: Tesis/Norma.
- Basualdo, Eduardo (2000), *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa*, Buenos Aires: FLACSO-UNQ-IDEP.
- Bonnet, Alberto (2002), "La crisis de la convertibilidad", en Revista Theomai, núm. especial, Buenos Aires (versión electrónica: <http://www.unq.edu.ar/revista-theomai/numespecial2002>)
- Dieterich, Heinz (2001), *Bases del nuevo socialismo*, Buenos Aires: Editorial 21.
- Fajn, Gabriel (comp.) (2004), *Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad*, Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación.
- Fotopoulos, Takis (2002), *Hacia una democracia inclusive. Un nuevo proyecto liberador*, Montevideo: Nordan Comunidad.
- Gaggero, Alejandro (2002), "Algunos por la autonomía, otros por la estatzación", en Diario Página 12, 8 de septiembre.
- Galafassi, Guido (2002), "Argentina on fire: people's rebellion facing the deep crisis of the neoliberal market economy", en Democracy & Nature, vol. 8, number 2.
- Gigliani, Guillermo (2002), "La explosión de la deuda externa", en Cuadernos del Sur, núm. 33, Buenos Aires.
- Gómez, Marcelo (2002), "Crisis del capitalismo, formas de conciencia y resurgir de la acción colectiva", en Revista Theomai, número especial, Buenos Aires (versión electrónica: <http://www.unq.edu.ar/revista-theo->

mai/numespecial2002)

- Holloway, John (2001), "Doce tesis sobre el anti-poder", en AAVV, *Contrapoder, una introducción*, Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano.
- Holloway, John (2002), *Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder*, Buenos Aires: Herramienta.
- Lucita, Eduardo (2002), "ALCA, un proyecto hegemónico", en Revista Theomai, núm. 6, (versión electrónica: <http://www.unq.edu.ar/revista-theomai/numero6>)
- Mallimaci, Fortunato (2002), "Crisis terminal, pobreza y sentidos en la Argentina contemporánea", en Revista Theomai, número especial, Buenos Aires (versión electrónica: <http://www.unq.edu.ar/revista-theomai/numespecial2002>)
- Mazzeo, Miguel (2004), *Piqueteros, notas para una tipología*, Buenos Aires: FISyP-Manuel Suárez Editor.
- Mira, Pablo (2003), "Los hechos de la convertibilidad: mitos y realidades", en Encuentro de Economistas de Izquierda, http://www.geocities.com/economistas_de_izquierda
- Negri, Toni y Michael, Hardt (2000), *Empire*, Harvard University Press.
- Negri, Toni (2001), "Contrapoder", en AAVV, *Contrapoder, una introducción*, Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano.
- Pucciarelli, Alfredo R. (2002), *La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la Argentina actual*, Buenos Aires: Libros del Rojas UBA.

MOVIMIENTOS DE DESOCUPADOS EN LA ARGENTINA: LA ENCRUCIJADA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LOS SECTORES SUBALTERNOS

Ariel Wilkis y Juan Montes Cató

INTRODUCCIÓN

La Argentina de principios de siglo muestra signos de una mayor fragmentación, heterogeneidad y polarización social. Las imágenes de una sociedad dual donde bolsones crecientes de pobreza conviven junto con espacios de privilegio y riqueza social son las primeras instantáneas de un país que en las últimas décadas transformó su fisonomía. Los efectos combinados de las políticas estatales, la economía, el mercado de trabajo y el cambio en las relaciones entre el capital y trabajo pusieron en cuestionamiento los patrones que caracterizaron las formas de integración y conflicto asumidas entre 1940 y 1975.

A diferencia de otros países de Latinoamérica, la Argentina presentaba hacia mediados de la década de los '70 un mercado de trabajo relativamente integrado, una mayor presencia del trabajo asalariado, niveles bajos de subocupación y se registraban menores diferencias de ingresos entre sectores y calificaciones (Beccaria, 1999). Por otra parte, se desarrolló un fuerte complejo institucional alrededor de los sindicatos que le otorgaba protección social y presencia política a los trabajadores. Por último, el Estado adquirió rasgos híbridos de políticas universalistas (educación y salud) y particularistas asentadas en las presiones de los grupos sociales. La relativa homogeneidad de las clases sociales, sus universos socio-culturales compartidos y el imaginario de la movilidad social, conformaban la pertenencia e interdependencia dentro de la sociedad Argentina. Era una integración que no estaba exenta de conflictos, pero que a base de las luchas sociales y políticas los sectores subalternos marcaban su existencia social frente a otros grupos y el Estado.

En la década de los '90 se profundizan los procesos iniciados durante la última dictadura militar centrados en un debilitamiento del sector asalariado y sus representaciones sindicales, apertura económica indiscriminada, la desindustrialización y el replanteo del Estado en áreas claves de la economía y la protección social. Los altos índices de desocupación, subocupación, trabajo en negro y precario, así como los referentes a la pobreza, se convierten en los efectos de esta interrelación de factores. La *nueva cuestión social* fue principalmente vinculada con las transformaciones en el mundo del trabajo que mostraba cada vez más elementos de discontinuidad con la sociedad forjada desde mediados de siglo y que sus rasgos básicos se sintetizaban rasgos antes descritos. En algún sentido, la relegación social viene a vaciar la utopía del ascenso social intergeneracional característicos de los sectores populares durante el periodo anterior.

Esta condición social se inscribe en nuevos patrones de subalternidad social no presupuestos en los esquemas teóricos ni políticos del pasado. La condición obrera o asalariada que instituía un tipo dominante de vinculación de los sectores subalternos con el resto de la sociedad (Castel, 1995) ha sido resquebrajada por nuevas condiciones sociales de pertenencia y relacionarse, que redefinen el perfil de estos sectores. En otras palabras, la presencia de los trabajadores desocupados es una modificación cualitativa de las desigualdades sociales que organizan las prácticas, y experiencias sociales y personales de los sectores populares.

En este contexto, la disyuntiva sobre quién representa a los sectores subalternos reaparece y adquiere una importancia enorme en el marco de un país donde han surgido nuevos sujetos sociales, y en el cual la representación política clásicamente canalizada a través de los partidos políticos y, en gran medida, por los sindicatos, se encuentra en el centro del debate producto de la imposibilidad de estas formas institucionales de responder y canalizar las demandas de los sectores subalternos.

Los movimientos de trabajadores de desocupados que surgieron a fines de la década de los '90 son una experiencia reciente que, sin embargo, tienen trascendencia histórica en función de su constitución como nuevo actor político que ingresa en el campo de la representación de los sectores populares. En este trabajo tenemos un objetivo prioritario: dar cuenta de los procesos y condiciones que dieron origen al subcampo de representación política de los desocupados y, a su vez, trazamos la dinámica de su relación con el Estado.

El desarrollo del artículo es el siguiente: en primer lugar, describimos las condiciones institucionales que le dieron cuerpo al sector asalariado como actor político. A continuación, analizamos los procesos que llevaron a des-

articular el poder político y social de las organizaciones obreras, durante el periodo que se inicia con la dictadura militar de 1976 y se consolida en la década de los '90. En el último apartado nos centramos en la emergencia de las organizaciones desocupados y nos detenemos en los principales aspectos que lo constituyen como actores políticos.

ECOS DE LA ASALARIZACIÓN EN LOS SECTORES POPULARES

En su estudio sobre la relación entre la clase trabajadora y el peronismo, James (1990: 23) apunta a que "un legado crucial que los sindicalistas recibieron de la era peronista consistió en la integración de la clase trabajadora a una comunidad política nacional y un correspondiente reconocimiento de su estatus cívico y político dentro de esa comunidad". El creciente y potente proceso de asalarización de los sectores populares a partir del gobierno peronista de la década de los cuarenta dio forma al modo en que los sectores subalternos lograban constituirse como actores sociales reconocidos en el ámbito político. En gran medida, el hecho de que el movimiento obrero pudiese expresar casi universalmente la condición de subalternidad estaba explicada en que dicha condición se manifestaba bajo la modalidad de trabajo asalariado. Los sindicatos, en tanto organizaciones que cristalizaban los intereses de los asalariados, asumían por defecto un doble papel que los constituía en portadores de la representación obrera y también de los sectores populares.

Los arreglos institucionales que dieron cuerpo al proceso de asalarización estuvieron enmarcados por el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), cuyos componentes principales son: a) economía semi-cerrada vía protecciones, aranceles y diferentes regulaciones; b) nivel importante de industrialización; c) fuerte intervención estatal en la actividad económica, incluso como productor y empleador; d) transferencia de la renta agraria al Estado y al sector industrial; e) crecimiento sostenido en la demanda; f) *cuasi* pleno empleo; g) *trade off* positivo entre productividad y salario.

Las protecciones sociales de los trabajadores asumieron el paradigma de la sociedad nucleada en torno a la condición salarial (Peñalva, 2002; Castel, 1997): la reducción del riesgo social a través de un conjunto de soportes materiales y simbólicos que moldeaban la integración y la movilización social de los sectores subalternos. La relación salarial que estructuraba el modelo tradicional de relaciones laborales¹⁰ en la Argentina se basaba en las siguientes características: la estabilidad en el empleo, el trabajo a

tiempo completo, una fuerte presencia de los sindicatos en la regulación de las relaciones laborales, un mercado de trabajo relativamente equilibrado y un Estado que intervenía en la relación capital- trabajo. Las características de la relación salarial le brindaban a los asalariados tanto un modo de vida relativamente homogéneo como la posibilidad de reconocer, bajo la actuación de sus sindicatos, el *clivaje* estructural entre el capital y el trabajo, reforzando su unidad

El Estado de Bienestar en Argentina representó: "a) la expansión de los derechos sociales, b) una tendencia a la socialización de la reproducción vía el desarrollo del consumo de bienes colectivos, c) una legislación protectora del trabajo" (Grassi, 1996).

Esta modalidad de intervención estatal corresponde a las indicaciones de Habermas (1975) sobre la singularidad del Estado de posguerra. La diferencia de éste con el Estado estrictamente liberal consiste en llenar los vacíos funcionales del mercado, intensificadores de los conflictos tanto entre capitalistas como entre éstos y los trabajadores, para volverlo operativo pero limitando su autonomía. La política social opera sobre las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo con efectos contra cíclicos en la acumulación capitalista

La vinculación entre la lógica económica y la lógica de la política social reside en que la primera se dinamizaba mediante el consumo colectivo especialmente del sector asalariado, siendo la segunda la que garantizaba la parte "social" del salario. Es decir, representa el "costo" sobredeterminado políticamente de la reproducción de la fuerza de trabajo y que el capital no paga en forma directa.

La Argentina presentaba hacia mediados de la década de los '70 un mercado de trabajo relativamente integrado, una mayor presencia del trabajo asalariado, niveles bajos de subocupación y se registraban menores diferencias de ingresos entre sectores y calificaciones (Beccaria, 1999).

¹⁰ Este modelo se había constituido bajo los siguientes pilares: un alto grado de intervención estatal, una fuerte centralización, un fortalecimiento del poder institucional del sindicato con personería gremial, el predominio de determinadas categorías socioprofesionales, una negociación cupular. En lo que respecta a la organización del trabajo los rasgos fundamentales eran: la estructura de comando de la empresa era jerárquica y piramidal, se instaura una fuerte división entre las tareas de concepción y ejecución, se eliminan en los trabajadores de producción toda autonomía o iniciativa, los ritmos de trabajo eran impuestos por las oficinas de método o por la tecnología en casos de mayor automatización, la supervisión adopta más un rol de control que técnico, rigen acuerdos colectivos y no individuales (Catalano, 1992; Palomino, 1995; Fernández, 1998).

Los institutos centrales que dieron cuerpo a la protección social de la condición asalariada en la Argentina fueron la cobertura previsional, los seguros sociales de salud y las asignaciones familiares

Estos institutos de política social eran interdependientes de la constitución de un derecho colectivo del trabajo que codificaba la protección de los trabajadores en un nivel mayor que el derecho individual.

Estos componentes —ligados a la situación de empleo que apuntalaban un sistema estratificado por categoría laboral— fueron acompañados por elementos más universalistas: la educación y la salud pública. Ambos rasgos dieron cuerpo a un Estado de Bienestar híbrido dado la mixtura de componentes de los modelos social demócratas y corporativos (Lo Vuolo y Barbeito, 1997).¹¹

Sobre este legado institucional actuarán las políticas neoconservadoras desarrolladas con intensidad desde la década de los '90. En el cuestionamiento a sus fundamentos se encuentra la búsqueda de alterar las condiciones que permitieron la constitución de un sector asalariado fuertemente integrado y con capacidad de defender e incluso mejorar sus condiciones de vida.

DESARTICULACIÓN ESTATAL, INDIVIDUALIZACIÓN SOCIAL Y CRISIS POLÍTICA (1976-2001)

El principio del resquebrajamiento del poder social y político de los sectores subalternos está relacionado con el proceso que devino en la dictadura militar de 1976. El corte anti popular del gobierno de facto se evidencia en varios niveles.

Las primeras medidas de este nuevo régimen fueron un indicio cierto del nuevo rumbo y de lo que se presentaría con mayor crudeza años más adelante. La reforma financiera de 1977, comenzó a marcar la nueva etapa. La promoción estatal de tasas de interés más elevadas que las registradas a nivel internacional atrajeron capitales con una proyección corto placista y su combinación con un política destinada a proveer de mayor libertad para ingresar y egresar bienes y capitales del territorio, se convertían en una combinación que contribuiría a cambiar completamente la estructura

¹¹ Los autores señalan que las políticas focalizadas eran residuales en este modelo de Estado de Bienestar, principalmente las que estaban dirigidas a la vivienda y a la asistencia social.

productiva del país. Por un lado, la producción interna se veía perjudicada por la importación a bajo costo; y, por otro lado, la inversión productiva pasaba a ser menos atractiva y más riesgosa que la opción por la valorización del capital en el circuito financiero. El resultado final de este proceso fue la complementación entre la desestructuración industrial del país, la concentración y la extranjerización de gran parte de la estructura empresaria. Al mismo tiempo, el Estado nacional desarrollaría una escala de endeudamiento sin precedentes para proveerse de divisas que luego se fugarían del país ante la apertura del mercado (Basualdo, 2001). Con el tiempo, dicha deuda se convertiría en uno de los condicionantes fundamentales para la imposición de las pautas que presidirían el nuevo régimen de acumulación.

Otros de los indicadores de la política militar hacia el sector asalariado es el aumento del costo de vida y la caída del salario en un contexto donde estaba prohibida la actividad sindical.

Más allá de la conformación de nuevas pautas económicas, consideramos que uno de los elementos fundamentales que prepararía el terreno para la implantación de un nuevo modelo de país, fue la desestructuración de los colectivos sociales que hasta entonces sostenían y eran beneficiarios del modelo de acumulación vigente (Battistini, 2002). El componente social de la ciudadanía, que se asentaba en la capacidad de presión y de negociación de las organizaciones sindicales, debía ser desestructurado. Por medio de la exacerbación de la violencia estatal y la diversificación de los mecanismos del terror a cargo del aparato militar y paramilitar se logró, por un lado, desmontar todas las organizaciones colectivas y debilitar lo más posible su poder; y, por otro, generar por medio del miedo una fuerte individualización de la población. Este último elemento resultó el parámetro más eficaz para la constitución de una nueva sociedad. A través del repliegue de la población a actitudes absolutamente individuales, se transformó la cultura del país. A través de la "desaparición"¹² y el miedo subsecuente se

¹² Uno de los estigmas de la dictadura fue la desaparición, la elevación del otro a la naturaleza del que, del día a la noche, no está más ni se sabe de él ni se habla más de su persona. Múltiples historias individuales, y con ellas los hechos que las concatenaban y las ligaban a colectivos fueron "desaparecidas"; por un tiempo dejaron de ser nombradas y recordadas, pasaron a ser sólo mencionadas en su último acontecimiento a partir del "por algo será". Esta frase trataba de resumir toda una historia e interrumpía con ella la posibilidad de pensar al otro y referenciarse respecto de él. Ante esta situación la conciencia de los individuos aislados comenzaba a limitarse a que: "si el otro desapareció porque algo hizo, yo no debo hacer nada que pueda ponerme en el mismo peligro". Este tipo de ideas reproducía, por el miedo, la situación de aislamiento en que se encontraba la población. Cuando yo no hablo de alguien o algo que sucedió pierdo las referencias para pensar la historia de mi país y con ella mi propia historia (Battistini, 2004).

creaban las condiciones para anular la memoria colectiva, desligar la historia pasada de un nuevo presente y preparar el terreno para una sociedad anclada en nuevos valores (Battistini, 2004).

Tras la dictadura, la democracia que se iniciaba iba a anclar la ciudadanía sólo en sus parámetros políticos, comenzando a limitar, en cierta medida, el acceso a derechos sociales que estructuraran esa ciudadanía en los mismos términos en que se desarrollaba antes de la dictadura militar.¹³

La instauración democrática tuvo entre sus pilares, declararse como momento bisagra entre el pasado de la dictadura y un futuro que recomponga las contradicciones y conflictos de la sociedad. Para esto la esfera política se definió mediante la institucionalización de los intereses divergentes, y el conflicto social se pensó como un juego político dentro de las reglas del sistema. Los desbordes supuestos en otro esquema de conflictividad social son advertidos como amenaza a la transición. En este sentido, se refuerza la idea de complementariedad existente entre democracia, sistema y partidos políticos. El principio de subjetivación inherente a esta conformación es la legítima división entre representantes y representados y la monopolización del sentido de la política en los actores principales del juego, los partidos políticos.

El relato propuesto para constituir estos principios consistió en afirmar que la interferencia de la "sociedad" en la esfera política (diversas corporaciones y movimientos) fue la fuente de la inestabilidad crónica de la Argentina; por lo tanto, ahora se trata de definir ese espacio con prescindencia de los excesos de los actores sociales que no reconocen las limitaciones que autorregulan el juego político. Por un lado, era necesario afirmar un espacio diferenciado de la sociedad que revierta sobre ella una imagen de resolución de los conflictos (la figura del pacto democrático es esencial para esta imagen); y, por otro lado, se necesitaba redefinir los sujetos que podrán participar en él: los partidos políticos encarnan esta aparición al asumir al mismo tiempo la posibilidad de la mediación (arreglo entre partes) y la representación (Wilkis, 2003).

En este sentido el modelo de gobernancia impulsado prestó especial importancia a los mecanismos y procedimientos democráticos, lo que permitió un *quid pro quo*: una parte del significado representó la totalidad del sen-

¹³ Desde el momento en que se restringen los aspectos sociales de la ciudadanía se relativizan los correspondientes a los aspectos civiles y políticos. No hay ciudadanía plena si se limita a alguno de los elementos que la componen (Nun, 2000).

tido de la democracia y la ciudadanía. Este sesgo escindió los componentes políticos y civiles de la ciudadanía de sus elementos sociales. La estrategia de ciudadanía desarrollada durante la transición separó los componentes “políticos” de la democracia de la distribución del poder social y los modelos de desarrollo económico.

No obstante, durante los años ‘80, el ambiente de conflictividad manifestado por las organizaciones sindicales, así como las disputas entre distintos sectores del espectro empresario y con el mismo Estado, constituirían elementos absolutamente relacionados con la puja distributiva que se establecía en el marco de la crisis económica pero fundamentalmente ponía en evidencia las fisuras de la estrategia de escindir las dimensiones de la ciudadanía. Las organizaciones sindicales hacían valer políticamente el legado institucional de la ciudadanía social y no se resignaban a ser un actor subordinado en el sistema político; situación que se exacerbaba por el poder creciente que tenían los grupos dominantes más concentrados de la economía. La hiperinflación de fines de los ochenta y principios de los noventa iba a profundizar estas pujas al extremo y constituiría el momento de inflexión hacia la instalación de nuevas instituciones que darían el marco del nuevo modelo de ciudadanía.

NEOLIBERALISMO Y NUEVA CIUDADANÍA INDIVIDUALIZADA

A fines de los ‘80 las dificultades para estabilizar la economía implementando medidas de ajuste de corto plazo fueron radicalizando el diagnóstico hacia las tesis del neoliberalismo económico.¹⁴

“La profunda crisis hiperinflacionaria de fines de la década de los ‘80 trae como consecuencia un acentuado disciplinamiento del conjunto social, en tanto entabla una nueva relación entre el capital y el trabajo y, al mismo tiempo, del sistema político” (Basualdo, 2001). La impronta disciplinaria se ramifica sobre la sociedad tanto por el efecto desintegrador que tuvo la hiperinflación en ese momento como por la amenaza permanente de recaer en una erosión sistemática del salario y en el *caos social*. En este sentido, su efecto se instituyó en el ámbito de la sociedad al establecer como

¹⁴ Los diagnósticos iniciales coincidían que la crisis era de liquidez y no de solvencia, de aquí que los primeros planes de estabilización eran de corto plazo y sin modificar la naturaleza de las instituciones económicas y estatales forjadas durante las últimas décadas.

el peor de los males los procesos inflacionarios y vigorizar la idea de que la estabilización económica debía mantenerse a toda costa. Este efecto de "aprendizaje negativo" es uno de los factores que permiten entender el horizonte programático de políticas económicas de corte ortodoxo. La hiperinflación de 1989, así como las que le siguieron, pusieron sobre la agenda pública las debilidades de los patrones de desarrollo de posguerra y las medidas heterodoxas aplicadas en los '80. El desenlace de la "década perdida" constituyó la punta de lanza para el espíritu reformador que venía siendo sostenido por los acreedores externos y los organismos multilaterales de crédito que se constituían en grupos de presión cada vez más favorecidos frente a la crisis fiscal del Estado. En definitiva, el efecto desestabilizador de las crisis hiperinflacionarias, fiscal y externa, que licuaban la autoridad estatal, operó disciplinando al sistema político. En este sentido, la lógica pragmática de conservar cuotas de autoridad y orden social desplazó de la agenda pública alternativas de política económica disidentes con los postulados del "Consenso de Washington" (Torre, 1998).

Para estos últimos las presiones inflacionarias estaban vinculadas al comportamiento de las instituciones económicas características del patrón de desarrollo hacia adentro y promovido desde del Estado, tanto por la limitación a la competencia externa como por las erogaciones estatales en diversa áreas (Torre, 1998). Se derivaba de este análisis los objetivos de reforma económica: racionalizar la intervención del Estado y desregular los diferentes tipos de mercados, liderazgo del capital privado y economía abierta. La coordinación mercantil y su criterio de eficiencia se convirtieron en los fundamentos axiológicos de la impronta reformista (Battistini, 2002a).

La política a favor del mercado se sitúa en dos planos diferentes pero interconectados. Por un lado, la aseveración de que la sociedad encuentra en el mercado un paradigma de (auto)organización: cuanto menos intervención extra-mercantil exista en la coordinación social menos impedimentos habrá para el crecimiento. La objetivación del Estado como intervencionista, populista, etc., y el ajuste que se realiza en sus funciones fue legitimada por esta ideología.¹⁵ Por otro lado, la política pro-mercado asegura la dominación del capital sobre el trabajo al negar la desigualdad inherente a esta relación y aumentar la "libre" disponibilidad sobre él.

Desde 1990 cuatro ejes fundamentaron el plan neoliberal:

¹⁵ Sobre el neoliberalismo como ideología de la coordinación mercantil ver Lechner, 1997.

1. Generar condiciones máximas de rentabilidad.
2. Fortalecer y estabilizar la moneda.
3. Impedir la acción de factores capaces de perturbar el desarrollo natural de las fuerzas de mercado.
4. Limitar la acción del Estado.

Para alcanzar estas premisas el gobierno implementó las siguientes medidas:¹⁶

1. Transformaciones en el gasto público.
2. Retiro del Estado de su función productiva mediante privatizaciones.
3. Desregulación de mercados de bienes, servicios y financieros.
4. Desregulación del mercado de trabajo.¹⁷
5. Congelamiento de precios.

Las políticas de ajuste y estabilización de los gobiernos de Menem sustrajeron del discurso político y de la dinámica social toda posibilidad de concebir una política universalista de la distribución social del excedente y de las decisiones públicas; el acompañamiento más o menos silencioso de los partidos mayoritarios y de los nuevos partidos de pretensión progresista, la aceptación por parte de ellos de las relaciones de poder instituidas por las reformas y el apoyo más o menos activo de los grandes sindicatos, produjeron un vacío político y acentuaron la distancia entre la política y la experiencia social de deterioro de las condiciones de vida y de las capacidades de intervención pública. Como señala Marcelo Gómez (2002), "la nueva matriz mercadocéntrica requería una primera anulación de 'lo político' (las masas, las demandas sectoriales, la acción colectiva) por la cual el orden social sólo podía discutirse o transformarse desde la política, y luego una virtual anulación de 'la política' escindiéndola del proceso de acumulación".

¹⁶ Las leyes de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica de 1989 fueron las medidas paradigmáticas del nuevo rumbo económico. El plan de Convertibilidad de 1991 fue otro instrumento para afianzar el giro reformista.

¹⁷ Desde 1991, la Ley Nacional de Empleo (N° 24.013) y posteriores normativas estuvieron dirigidas a flexibilizar las relaciones laborales (Battistini, Bisio y Montes Cató, 1999).

Por esta razón, al abandonar el peronismo sus antiguas funciones de voceros o tribunos de las necesidades sociales y convertirse en pregoneros del modelo económico, se produjo un debilitamiento de la presencia de las clases populares en el campo político (Sidicaro, 1995). Este abandono debilitó de manera sustancial las capacidades de reacción de importantes sectores ligados tradicionalmente al peronismo, los cuales veían a un gobierno de ese signo político realizar acciones que deterioraban sus condiciones de vida, agregado a un sindicalismo mayoritario que opuso poca o ninguna resistencia a las políticas neoliberales.

De esta manera, en el plano de las capacidades sociales de intervenir en las políticas públicas se manifestó un claro deterioro del sector asalariado y un corrimiento absoluto a favor de los sectores más concentrados tanto nacionales como extranjeros. El efecto inmediato ha sido un aumento de la desigualdad social, la concentración económica y el disciplinamiento de los trabajadores.¹⁸

La privatización de los servicios públicos y la generación de un auge de consumo para ciertos segmentos sociales otorgó un "poder de compra" que ahondaba la distancia entre quienes encontraban beneficios en la estabilidad y la apertura, y quienes, a través del ajuste y la desindustrialización, quedaban marginados de esta dinámica y debían desarrollar estrategias de supervivencia por fuera de las organizaciones tradicionales o insertos en redes de distribución particularistas-clientelares. Si durante los años '80 la ciudadanía era pensada y actuada con base en la escisión entre sus dimensiones, subordinando el componente social al político y al civil, la década de los '90 va a marcar un nuevo hito al formularse una concepción individualizada de dicha noción. La mercantilización de los intercambios sociales transformó a los "capitales" poseídos por los sujetos en el criterio selectivo para asegurar la efectividad de obtención de beneficios y protecciones otorgados por el Estado o los agentes a quien delegaba la responsabilidad de distribuir bienes y servicios públicos (salud, educación, protección social).

¹⁸ Entre 1990 y 2000 la brecha en la distribución del ingreso entre el sector más pobre y el más rico de la población aumentó 44% (Salvia y Donza, 2001). Para un análisis detallado de las principales transformaciones de los indicadores del mercado laboral que señalan el deterioro creciente de las condiciones de vida de los trabajadores -desempleo, precarización, pérdida de salario real, etc.- durante la última década, ver Battistini, 1999; Santarangelo y Schorr, 2000 y Escenarios Laborales N° 2, 2002.

En este sentido, la desarticulación de las condiciones de vida de los sectores populares fue impulsada por una conversión de los principios organizativos que asentaban la noción de ciudadanía social, desde mediados del siglo pasado. No bastaba sostener la escisión entre los conflictos ligados a los derechos sociales y la esfera política tal como se expresaba en los discursos y prácticas de la transición democrática; lo que hacía falta era apuntalar una noción de ciudadanía que quebrase las referencias a estructuras colectivas para intervenir en las disputas sociales y políticas,¹⁹ la alquimia resultante era una mezcla de débil referencia a la justicia democrática y fuerte apoyo en las bondades de la equidad del mercado. Los efectos de la ciudadanía individualizada dualizaron la relación entre Estado y sociedad en dos esferas paralelas pero interconectadas: una democracia procedimental y un mecanismo individualista en la reproducción de las condiciones de vida.

Si asumimos que la ciudadanía moderna es una creación social y política, el resultado provisorio de un conflicto entre grupos sociales sobre las condiciones y expectativas que gobiernan las decisiones jurídicamente vinculantes en el manejo de la contradicción entre la igualdad formal democrática y la desigualdad capitalista, los años '90 institucionalizaron una estrategia a dos tiempos: reducción de la ciudadanía a las capacidades individuales por fuera de marcos colectivos de protección y estructuración del conflicto distributivo en una dinámica fragmentada y particularizada.

El aumento exponencial del desempleo alentó de manera poderosa ambos procesos y llevaron a una individualización de la experiencia social. La consecuencia fue la búsqueda cada vez más larga y desalentadora de un trabajo. Precisamente, la estigmatización de los desocupados, sumado a la desarticulación de representaciones que pudiesen condensar opciones colectivas, fue reforzada por un conjunto de políticas sociales que se asentaba en una estrategia de ciudadanía individualizada; lo cual fomentó la privatización de los servicios sociales y las intervenciones focalizadas en los sujetos "excluidos" de los beneficios de las políticas económicas. De esta manera, la emergencia de una matriz mercado-céntrica (Cavarozzi, 1997) replantea la naturaleza y los efectos de la política social: se busca refuncionalizar la reproducción de la vida a la dependencia en el mercado: "las políticas sociales expresan —y al mismo tiempo van dando sustento— a un proceso global de privatización de la vida y de deconstrucción de suje-

¹⁹ Las prácticas y posiciones ideológicas que caben definirse como neoliberales se asientan en un programa deliberado de destruir las estructuras colectivas, capaces de resistirse a la lógica del "mercado puro" (Bourdieu, citado en Bauman, 2001).

tos sociales que hasta ahora le daban sentido en términos de derechos” (Grassi, 1996).

La lógica dominante de transformación de la política social estuvo signada por el conjunto de reformas que constituyeron los paquetes de ajuste estructural, que representaban la visión condensada en el “Consenso de Washington” para superar las crisis económicas de la América Latina. Es decir, existió una afinidad en el nuevo modelo y los principios de reducción del déficit fiscal, privatización y desregulación de mercados.

En definitiva, la naturaleza de esta transformación está representada menos por la cantidad del gasto absoluto destinado a la política social que por el sentido en ella inscrita. La racionalidad reformista es de carácter bifronte: el nuevo modelo responde, por un lado, a la mercantilización de bienes y servicios en todas las esferas de intercambio social; y, por otro, a la idea de compensación a aquellos que acumulan más desventajas. Es en este sentido que los nuevos conceptos en políticas sociales son, por una parte, *desregulación* y *privatización*; y, por otra, *focalización*, *compensación*, *descentralización*.

El nuevo modelo de política social ha derivado en una estructura social más desigual y fragmentada; sus componentes principales han llevado a colocar la distribución del bienestar social en los niveles más bajos de la historia reciente. Su propio funcionamiento destierra los principios protectores y universalistas a través de una mayor presión hacia una reproducción individualizada de las condiciones de vida. La nueva política se desconecta de la protección del empleo y el aumento de consumos colectivos, ambos vinculados a una lógica económica de crecimiento vía estímulo de la demanda interna, y aparece reparando las fallas del modelo económico neoliberal. Sin embargo, los mecanismos compensatorios se muestran insuficientes frente al aumento de la pobreza y la indigencia, y en el mediano plazo aparecen perpetuando estas situaciones.

ORGANIZACIONES DE DESOCUPADOS: ACERCA DE LA RESISTENCIA DE LOS SECTORES POPULARES

El paradigma de políticas sociales emergente consistió en refuncionalizar la dependencia de las condiciones de vida al mercado y consagrar un tratamiento asistencial a los pobres y desempleados, que tendían a aumentar al ritmo de las políticas del gobierno de Menem²⁰ y luego De la Rúa.²¹ La implementación de diversos programas sociales no lograban recomponer

el entramado social socavado por los altos índices de desempleo y empobrecimiento: la desocupación pasaba de representar a 8% de la población económica activa a principio de la década de los noventa a superar los dos dígitos en el 2002. Los índices de la pobreza no arrojaban datos más alentadores, pues a fines de este mismo año la mitad de la población se encontraba bajo la línea de pobreza, y un porcentaje muy significativo no contaba con ingresos para cubrir las necesidades alimenticias. La mera posibilidad de caer en alguna de estas situaciones tendía a disciplinar al conjunto de trabajadores que todavía tenía empleo; lo cual generaba un escenario en que las condiciones de trabajo se precarizaron y se fueron desmontando un conjunto de beneficios sociales obtenidos durante largos años de lucha.

Cuando la desocupación se convirtió en un problema estructural, los sindicatos no pudieron representar las demandas que los “nuevos sujetos excluidos” planteaban; las explicaciones sobre esta bifurcación tienen varias aristas. Tal vez el abigarrado interés de los sindicatos de preservar su poder institucional los limitaba para comprender la existencia de este sector social que quedaba sin representación. Por otra parte, la cultura y la historia sindical los enmarcaba en la dinámica del trabajo asalariado sin comprender el potencial político de aquellos que quedaban fuera del empleo.

La imposibilidad de organizar o canalizar las reivindicaciones de los desocupados plantea una pregunta fundamental: ¿de qué manera los sujetos

²⁰ El gobierno de Carlos Menem se extendió durante dos mandatos (cada uno consta de un periodo de cuatro años). Para gobernar durante dos mandatos seguidos se propició, previamente, una reforma constitucional que habilitase esta posibilidad. Entre los planes de Menem también estaba el de reformar nuevamente la Constitución, con el objeto de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales por tercera vez. Esta instancia fue bloqueada por gran parte de los partidos políticos y la sociedad. En el 2003 se volvió a presentar, llegó a la instancia del *ballotage* y finalmente no se presentó. Todos los sondeos de intención de votos para esta instancia daban una amplísima intención de voto a Nestor Kirchner, lo cual motivó que Menem desistiese de combatir en la contienda electoral.

²¹ La agudización de la crisis económica heredada del gobierno menemista, y dilapidación de la legitimidad política durante el breve interregno del presidente De la Rúa, provocó un escollo insalvable a través de las vías institucionales ordinarias; lo cual derivó en un “levantamiento popular” que dio por tierra, primero con el ministro de economía y luego con el propio presidente y su gabinete. El vacío de poder fue recompuesto medianamente por el gobierno de Eduardo Duhalde (recordemos que éste había perdido la contienda electoral justamente contra de De la Rúa) quien llamó a elecciones presidenciales a menos de un año en la presidencia.

que se encuentran en esta situación de desprotección y ruptura de vínculos estructurantes, ensayan nuevas prácticas que apuntan a resignificar su lugar en el mundo? A contrapelo de la formulación que realiza Castel en sus últimos trabajos, donde considera que la desafiliación produce un proceso en el cual los desocupados pueden variar entre la resignación y la violencia esporádica, creemos que los desocupados en Argentina han logrado superar una etapa inicial de pasividad y articularon diversas formas de organización que posibilitaron crear un entramado capaz de reconstituir algunos de los lazos y vínculos quebrados por las políticas de exclusión.

Las organizaciones de desocupados aparecen por afuera de los canales de expresión de demandas más tradicionales, organizándose en torno al piquete²² y a articularse como uno de los grupos con mayor grado de resistencia a la implementación y puesta en marcha de las políticas de corte neoliberal (De Peña y Montes Cató, 2002; Cross y Montes Cató, 2002). En este sentido, la emergencia de las organizaciones de desocupados señala la formación de un sub campo de representación política específico. El capital en disputa es, en gran medida, la representación legítima de los subordinados y la voz de la protesta.

Algunas concepciones han intentado explicar la emergencia de las organizaciones de desocupados sólo como una reacción a una determinada frustración. Estas argumentaciones cercanas a teorías psicosociales no toman en cuenta que ante una situación de frustración, por ejemplo la falta de trabajo, lo que puede derivarse es una acción de signo completamente opuesto, de retraimiento o pasividad. Algunas otras nociones inspiradas en teorías funcionalistas consideran a estos sujetos como un conjunto desviado de lo establecido por las normas y las formas institucionales de procesar los conflictos, y no como una vía establecida de intervención política. Precisamente, uno de los rasgos distintivos para comprender las acciones de las organizaciones piqueteras es ver la dimensión política puesta en juego a través de sus prácticas y acciones de orden colectivo. Así, "la aparición de los movimientos de piqueteros significó un verdadero desafío para el paradigma de la exclusión, aquellos desposeídos de iniciativa política empezaban a dominar la escena pública e instalar nuevos interrogantes

²² En términos generales, el piquete se ha convertido en el modo de protesta predominante de los desocupados pobres. Pero más allá de su significación, en tanto recurso de acción, el piquete condensa otros significados, dado que pone en juego historias y expectativas colectivas. Asimismo, las experiencias construidas en torno a éste, son disruptivas con otras experiencias políticas e identitarias (Montes Cató y de Peña, 2002).

sobre la naturaleza del conflicto que expresaban” (Cross, Lenguita y Wilkis, 2002: 78).

Las primeras manifestaciones colectivas de resistencia al modelo se produjeron en las provincias más empobrecidas del país y adoptaron una figura más cercana a lo que los historiadores han dado en llamar revueltas, rebeliones o motines. A diferencia de las organizaciones de desocupados, que aparecerán más adelante, estas expresiones del descontento poseen un carácter más explosivo y menos orgánico. Estas primeras expresiones constituyen, sin lugar a dudas, los antecedentes de las organizaciones de desocupados y serán el espejo dónde mirarse a la hora de articular las experiencias piqueteras en el conurbano bonaerense²³ y el resto del país.

Si bien hemos reparado detenidamente en los aspectos contextuales en los que se consolidan las organizaciones piqueteras, no son las condiciones las que explican el crecimiento exponencial de las organizaciones de desocupados. Para poder comprender este pasaje entre la “pura pasividad” a la constitución de variantes políticas de representación hay que considerar tres aspectos: el primero refiere al grado de eficacia que las organizaciones de desocupados han tenido al momento de evaluar la ligazón entre medida de fuerza y obtención de demandas. La distribución de los planes asistenciales, especialmente en sus versiones iniciales (Plan Trabajar)²⁴ no ha escapado de la tradicional lógica clientelar y de reparto discrecional. Lo novedoso es que la organización de instancias de representación y presión por fuera del aparato clientelista ha podido quebrar el duro entramado de complicidades y sujeciones entre los dirigentes y los punteros políticos.

El segundo aspecto está asociado con la capacidad de organizar nuevos espacios de sociabilidad y dotar de sentido a prácticas sociales cercanas

²³ Como en otros países latinoamericanos, en Argentina, la mayor concentración poblacional se encuentra ubicada alrededor de la capital de la nación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está rodeada por lo que se llama el Conurbano Bonaerense; región conformada por diversos distritos y donde se ha desarrollado el mayor número de organizaciones de desocupados.

²⁴ El campo de las políticas sociales en Argentina está constituido por un conjunto de programas que tienen dos características: a) superposición y dificultades al momento de delimitar las diferencias de objetivos y administración burocrática (hay programas nacionales, provinciales y municipales) y b) discontinuidad. En relación con nuestro objeto de estudio tres son los que más impacto han tenido en términos numéricos. El *Plan trabajar* (en sus diversas versiones PT I, II y III); el *Plan jefes y jefas de hogar* que posee aspiraciones universales (aunque en realidad está dirigido sólo a los jefes y jefas de hogares en situación de desempleo) y el reciente plan *Manos a la obra*.

al asociativismo y cooperativismo. En efecto, el movimiento de desocupados²⁵ no puede comprenderse como organizaciones que solamente articulan instancias de protesta y de reivindicación, constituyen y se constituyen en territorios, determinados por demandas y carencias específicas (limitaciones en infraestructura educacional y de salud; carencia habitacional; violencia horizontal). Este conjunto de necesidades fueron retomadas por las organizaciones y canalizadas mediante diversas actividades que abarcan desde talleres de formación hasta la generación de emprendimientos productivos. En gran medida, estos proyectos pueden solventarse gracias a que los desocupados cuentan con un ingreso monetario proveniente de los planes asistenciales. Pero el elemento que inscribe esta construcción en parámetros novedosos es que la individualización generada por los programas asistenciales de corte liberal es revertida por acciones colectivas, a través del redireccionamiento de las prácticas. El sentido de los comportamientos estará definido por una fuerte impronta colectiva, dando por tierra el proceso de debilitamiento del sustrato colectivo implicado en los programas de empleo.

El tercer elemento que consideramos esencial para explicar el desarrollo de la experiencia piquetera (delineado de manera provisoria con anterioridad) refiere al carácter político contenido en las acciones de estas organizaciones. Aquí es importante diferenciar *lo político* como una forma de acción y relación social instituyente de relaciones y distinciones sociales; de *la política*, entendida como la institucionalización de la política en una esfera determinada de la sociedad. La capacidad de instalarse como actores legítimos y la aspiración instituyente de sus acciones en el marco de ciertas oportunidades políticas (Tarrow, 1994) abiertas a raíz de un escenario donde la representación como manera de organización colectiva de las demandas entra en crisis, posibilitó que los desocupados pudiesen comenzar a determinar algunos elementos que caracterizan la relación con el resto de los actores sociales, pero fundamentalmente con el Estado.

Estos tres elementos interrelacionados definen el campo de lucha material y simbólica. Resaltemos que la lucha simbólica adquiere una significación

²⁵ Existe una copiosa bibliografía sobre los movimientos sociales. Para una síntesis de las diversas corrientes de análisis y discusiones, ver Pérez Ledesma, M. (1994). Sólo resaltamos que hacia el interior de los movimientos sociales conviven también tensiones, líneas internas y sectores en conflicto, es decir, no son monolíticos. A pesar de las disputas existentes, este hecho no inhibe que pueda utilizarse una noción de naturaleza movimientista para caracterizar este fenómeno.

vital en la medida que define las modalidades y las formas reconocidas o no al momento de reivindicar las demandas. Como recuerda Bourdieu en torno a la huelga “lo que se denomina formas de lucha legítimas (la huelga es legítima, pero el sabotaje no) es una definición dominante que no es percibida como tal, que es reconocida por los dominados en la medida en que se desconoce el interés que tienen los dominantes por esta definición” (Bourdieu, 2000: 252).

Hacia el interior del movimiento de desocupados pervive un conjunto numeroso de organizaciones referenciadas en diversas tradiciones políticas y experiencias de lucha. A grandes rasgos pueden identificarse cuatro agrupamientos: la Federación Tierra y Vivienda (FTV), ligada a experiencias de tomas de tierra durante la década de los ochenta e incorporada a la CTA (esta central es opositora a la hegemónica CGT); la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que está asociada a un corriente sindical minoritaria y con el Partido Comunista Revolucionario; el Polo Obrero (PO) vinculado del Partido Obrero; y la coordinadora Aníbal Verón que aglutina a los diferentes MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados).

Si bien habían existido algunos intentos de establecer un espacio de interacción y acción entre las diferentes organizaciones de desocupados, especialmente durante el año 2001 a través del llamado al primer congreso nacional piquetero, las diferencias ideológicas y estratégicas imposibilitaron la constitución de una instancia que pudiera aglutinar las diversas expresiones. De hecho, una de las organizaciones tenía proyección hegemónica, nos referimos a la FTV pues pretendía para sí la determinación de las principales bases del movimiento. Uno de los objetivos del primer congreso era el de lograr imponer esa mayor ponderación sobre el resto de las organizaciones. Los desacuerdos aceleraron las diferencias y determinaron la integración de los cuatro agrupamientos a los que hacíamos referencia. Las diversas corrientes entablarán de ahí en más vínculos contradictorios entre ellas manteniendo cierta autonomía sin dejar de lado instancias de acción conjunta.

En gran medida, la representación *del otro*, referenciado en el gobierno menemista y delarruista favorecía el aplacamiento de las diferencias²⁶ y ponía de relieve a las estrategias de oposición como punto de encuentro

²⁶ Aunque existe diferencia entre las organizaciones y los referentes principales de cada una de ellas, producto de historias y anclajes políticos diversos, los límites de las diferencias son variados, movibles y se construyen estratégica y tácticamente.

entre las diversas organizaciones; aunque el propio modo en que era utilizado el piquete como recurso de protesta ya comenzaba a tener algunas fisuras. En efecto, mientras la FTV y la CCC proponían seguir con los cortes de ruta habilitando una vía alternativa de circulación, las organizaciones más intransigentes realizaban los cortes de ruta sin dejar ningún tipo de paso optativo. Estos modos de utilizar el piquete eran el factor más visible de las disputas hacia dentro del campo de las organizaciones de desocupados. Finalmente, la crisis del 2001 que permitió nuevamente la llegada del peronismo al gobierno nacional (ahora de la mano de Duhalde) marcará un punto de inflexión en la relación con el Estado y entre las organizaciones de desocupados.

Prácticamente todas las organizaciones aumentarán el número de participantes gracias al mayor número de planes gestionados por cada una de ellas (en ese momento, la crisis ocupacional y la pobreza se profundizó luego de la devaluación que evaporó los magros ingresos con los que contaban las familias). El objetivo manifiesto del gobierno era contener la conflictividad social que podía arrasar nuevamente con todo el sistema político. Existía una lectura prácticamente compartida por el conjunto de actores sociales, que entendía que se estaba a las puertas de un proceso ingobernable (apuntemos que la crisis de diciembre del 2001 alimentaba empíricamente estas representaciones e interpretaciones con respecto al devenir) y de final abierto. Esta lectura apocalíptica sumado al aumento exponencial en el número de planes llevó a prácticamente a todo el espectro piquetero a acordar una tregua con el gobierno que llegó hasta mediados del 2002. Si bien el gobierno no cubría las aspiraciones de las organizaciones piqueteras —incluso varias de ellas se le oponían— ninguna llevó adelante una política que pusiera en jaque su estabilidad. Algunas en sintonía con la interpretación dominante de gran parte de los actores políticos sobre el callejón sin salida que se presagiaba si el gobierno fracasaba, otras por la propia debilidad de conformar un frente alternativo.

La estrategia estatal estaba orientada en dos sentidos diferentes. Por un lado, como se dijo, aplicó una política destinada a aumentar el número de planes sociales; pero simultáneamente algunas fracciones del propio gobierno (resaltemos que hacia dentro del Estado prevalecen tensiones y conflictos entre diferentes líneas políticas) promovían acciones tendientes a criminalizar la protesta social. Esta segunda orientación del accionar estatal encontrará un freno a seis meses de asumir el nuevo gobierno: en junio de ese año, en uno de los cortes de ruta producidos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y liderado por los MTD, son asesinados dos

militantes a manos de la policía provincial. Este episodio va a generar una dura réplica por parte del conjunto de las fuerzas populares que adquirirá visibilidad a través de una movilización, donde participa el conjunto de organizaciones sociales (incluidas las asambleas populares que habían nacido a fines del 2001 y que representaban a la clase media, especialmente capitalina).

En el marco de una nueva agudización de la crisis, al gobierno de transición no le quedó otra opción que fijar definitivamente el llamado a elecciones. Las diferencias históricas hacia dentro peronismo solapadas en diversos momentos históricos mediante la hegemonía de algunas de las fracciones internas, no encontraba en esta particular y en gran medida decisiva coyuntura²⁷ un candidato que aglutine al conjunto de corrientes que coexistían dentro del partido justicialista.²⁸ La imposibilidad de presentar un sólo candidato se resolvió con la candidatura de tres figuras: Menem, Rodríguez Saa y Kirchner. De esa contienda, saldrá electo Néstor Kirchner que a poco de asumir adoptará una serie de políticas, especialmente en materia de derechos humanos, que sorprenderá al conjunto del campo popular, porque retomaba muchas de las banderas que las organizaciones de desocupados y otras organizaciones sociales habían levantado como estandartes de su lucha. Entre las acciones más representativas se destacan: cambio del jefe de las fuerzas armadas; pasan a retiro a un conjunto de generales que había prestado servicio durante la dictadura; se alienta la derogación de las leyes de punto final (estas leyes ponían un freno a las denuncias judiciales sobre hechos de lesa humanidad durante la dictadura militar); la Escuela Mecánica de la Armada (aquí funcionó uno de los centros clandestinos más importantes y representativos de la dictadura) es recuperada de las manos de las fuerzas armadas para construir un museo de la memoria.

Estas medidas que tenían una orientación diametralmente opuesta a las promocionadas durante las anteriores gestiones gubernamentales, fueron un hecho novedoso en el marco de la última década y media. A ellas se le sumó un discurso —en el plano económico— con una fuerte impronta

²⁷ Estimamos que los momentos de crisis abren la posibilidad a la instauración, potencialmente, de nuevos marcos de relacionamiento. Quien logra imponer los elementos constitutivos de esas disposiciones logra también un marco adecuado para sus aspiraciones y objetivos, fijando los límites en los siguientes años. Si bien no tenemos aspiraciones deterministas, comprendemos los límites impuestos, por ejemplo, del modelo productivo o del régimen de acumulación.

²⁸ El peronismo, como expresión genérica, adopta una manifestación partida en la figura del partido justicialista.

neokeinesiana de signo productivista. Si tomamos en cuenta los altos índices de desocupación, este tipo de modelo económico dirigido al mercado interno contribuía a la creación de un horizonte de expectativas diferente.

Ambos aspectos, medidas en materia de derechos humanos y discurso productivista, sumado a la implementación de nuevos programas de empleo —entre los que se destaca el plan “Manos a la Obra” que fomenta la formación de microemprendimientos productivos— generará nuevos quiebres en las relaciones entre las organizaciones piqueteras, producto del mayor acercamiento o distanciamiento con la nueva administración gubernamental. La FTV que ya había dado muestras de un perfil más conciliador con el gobierno tenderá a desarticular los vínculos que la unía con la CCC, y privilegiará su relación con el gobierno. Estos mismos quiebres y disputas en torno al tipo de relación que debe regimentar el vínculo con el Estado también impactarán en los MTD aglutinados en la Coordinadora Aníbal Verón. En efecto, en los primeros meses del 2004 se produce una escisión dentro de este nucleamiento, fundamentalmente en función de la proyección de las organizaciones: profundizar el rol opositor con medidas de fuerza o reorientar las actividades hacia dentro del propio territorio y de las organizaciones.

COMENTARIOS FINALES

La dinámica de los procesos sociales, y específicamente aquellos en que está en juego la proyección de las organizaciones que le dan forma y representación a los sectores subalternos, adoptó un carácter sumamente móvil y cambiante, y está encontrando nuevas formas de expresión a partir de la emergencia de la desocupación. Si los sindicatos se constituyeron históricamente como una de las instituciones capaces de canalizar las demandas de los sectores populares, gracias al solapamiento entre condición asalariada y sectores populares, durante la última década se evidenció de manera manifiesta las dificultades que poseen los gremios al momento de absorber las demandas y aspiraciones de un sector que ha visto complejizada su morfología.

Si bien desde la década de los sesenta han surgido otras formas de expresión de los sectores populares, esa disputa por representarlos permaneció prácticamente inalterable bajo el modelo de representación vía el trabajo. Esta hegemonía se explicaba y también se potenciaba gracias a la densidad ideológica y el anclaje que obtuvo el peronismo en los sectores subalter-

nos. Durante los años ochenta y noventa los sindicatos que habían hegemónico la representación de la subalternidad, verán erosionado su rol, resultado de la devaluación de su figura como interlocutor válido y también debido a su incapacidad para dar curso a las demandas al problema de la desocupación. Esa situación abrirá la posibilidad de que experiencias organizativas de diversa índole e historia comiencen a determinar el desarrollo de porciones cada vez más significativas de desocupados.

Por otra parte, la naturaleza de las relaciones entre los sectores subalternos y el Estado no están determinadas de una vez y para siempre, se encuentran definidas a partir del desarrollo de disputas hacia dentro de las propias organizaciones. Precisamente esas disputas se explican en la coyuntura actual por la que pasa nuestro país a través de la tendencia entre resistencia o integración. Si la resolución de este problema durante los gobiernos menemista y delarruista era sencilla, el gobierno de Kirchner presenta serias dificultades al momento de interpretar su desarrollo. Creemos, sin embargo, que debe explicarse esa tensión buceando en los corrimientos observados en las propias organizaciones.

En definitiva, en este artículo presentamos el contexto histórico del surgimiento de un actor colectivo que, en sus diferentes facetas y tensiones internas, ingresa en el campo político reclamando la representación de los sectores populares.

BIBLIOGRAFÍA

- Altimir, O. y L., Beccaria (1999), *El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina*, documento CEPAL, serie reformas económicas, núm. 28.
- Basualdo, E. (2001), *Sistema político y modelos de acumulación*, Buenos Aires: UNQUI/ FLACSO/IDEP.
- Battistini, O. et al. (1999), "Transformaciones de la negociación colectiva durante la vigencia de gobiernos constitucionales a partir de 1973", en Fernández, A. y R., Bisio (comps.), *Política y Relaciones Laborales en la Transición Democrática en Argentina*, Lumen-Hvmanitas.
- Battistini, O. (1999), "Exclusión Social en el Mercado del Trabajo. El caso de Argentina", Publicación de la Organización del Trabajo y la Fundación Ford, como parte del Equipo Técnico Multidisciplinario para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, Santiago.

- Battistini, O. (2002a), "Las reglas del juego en un nuevo régimen de acumulación", en Baima, M. et al. [en colaboración con Mariano Félix y Melina Deledicque], *Globalización, empleo y generación de ingresos*, Buenos Aires: GT ONG-BM.
- Battistini, O. (2002b), "Transformaciones culturales en el trabajo y acción sindical. Un juego de intereses contradictorios", en Fernández, A., *Crisis, sindicalismo y después*, Buenos Aires: Biebel.
- Battistini, O. (coord.) (2004), *El trabajo frente al espejo. Rupturas y continuidades en los procesos de constitución de las identidades de los trabajadores*, Buenos Aires: Prometeo.
- Bauman, Z. (2001), *En busca de la política*, México: FCE.
- _____ Boletín *Escenarios Laborales*, (2002) publicación electrónica del CEIL-PIETTE del CONICET, núm. 2.
- Bourdieu, P. (2000), "La huelga y la acción política", en Pierre Bourdieu, *Cuestiones de Sociología Acción*, Buenos Aires.
- Castel, R. (1997), *La metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires: Paidós.
- Catalano, A. (1992), "El sindicato y la construcción de nuevas identidades profesionales y sociales", en *Fundación F. Ebert*, Cuaderno núm. 2, Buenos Aires.
- Cavarozzi, M. (1997), *Autoritarismo y democracia. La transición del Estado al mercado en la Argentina*, Buenos Aires: Ariel.
- Cross, C. y J., Montes Cato (2002), "Crisis de representación e identidades colectivas en los sectores populares. Acerca de la experiencia de las organizaciones piqueteras", en Battistini (coord.), *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina Movilizada*, Asociación Trabajo y Sociedad.
- Cross, C. et al. (2002), "Piqueteros: de la exclusión a la revitalización del conflicto social. Apuntes para comprender la emergencia del movimiento piquetero como un nuevo sujeto político en los conflictos del trabajo", en Battistini (coord.), *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina Movilizada*, Asociación Trabajo y Sociedad.
- De Peña, J. y J., Montes Cató (2002), "Crises de representation et fragmentation sociale: le cas de piquetes et des coupers de route argentins", mimeo.

- Fernández, A. (1998), *Crisis y decadencia del sindicalismo argentino. Sus causas sociales y políticas*, Buenos Aires: Editores de América Latina.
- Gómez, M. (2002), "Crisis del capitalismo, formas de conciencia y resurgir de la acción colectiva", en *Revista Theomai*, número especial, invierno.
- Grassi, E. (1996), "Políticas sociales e investigación antropología (Problemas y propuestas)", en Hintze, Susana (comp.) (1996), *Políticas sociales. Contribución al debate teórico-metodológico*, Buenos Aires: Colección CEA-CBC.
- Lechner, N. (1997), "Tres formas de coordinación social", en *Revista de la CEPAL*, núm. 61, abril.
- Lo Vuolo, R. y A., Barbeito (1998), *La nueva oscuridad de la política social. Del estado populista al neoconservador*, Buenos Aires: CIEPP-Miño y Dávila Editores.
- Nun, J. (2000), *Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, Buenos Aires: FEC.
- Palomino, H. (1995), "Quiebres y rupturas de la acción sindical: un panorama desde el presente sobre la evolución del movimiento sindical en la Argentina", en Acuña, C. (comp.), *La nueva matriz política Argentina*, Buenos Aires: Nueva Visión.
- Peñalaba, S. (2002), *Liberalisation, destructuration de la societe salariale et desaffiliation en Argentine. Cadre d'interpretation et hypotheses de recherche sur la genese de la crise sociale et institutionnelle contemporaine*, mimeo.
- Perez Ledesma, M. (1994), "Cuando lleguen los días de la cólera (movimientos sociales, teoría e historia)", en *Revista Zona Abierta*, núm. 69, Madrid.
- Salvia, A. y E., Donza (2001), "Cambios en la capacidad de Bienestar y en la desigualdad distributiva bajo el nuevo modelo económico en el Gran Buenos Aires", en *Revista Papeles de Población*, año 7, julio-septiembre, núm. 29, CIEAP-UAEM.
- Santarcángelo, J. y M., Schorr (2000), "Desempleo y precariedad laboral en la Argentina durante la década de los noventa", en *Revista Estudios del Trabajo*, núm. 20, segundo semestre.
- Sidicaro, R. (1995), "Poder Político, liberalismo económico y sectores populares, 1989-1995", en AAVV, *Peronismo y Menemismo*, Buenos Aires: Ediciones El cielo por asalto.

Tarrow, S. (1994), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza.

Torre, J. C. (1998), *El proceso político de reformas económicas en América Latina*, Buenos Aires: Paidós.

Wilkis, A. (2003), "Desobediencia Civil y Crisis de representación. Un análisis de las movilizaciones de diciembre de 2001", mimeo.

SUBTERFUGIOS IDEOLÓGICOS DEL TRABAJO. UNA MIRADA POLÍTICA SOBRE LA LUCHA DE LOS DESOCUPADOS

Paula Lenguita

Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante a sus ideas.

KARL MARX

INTRODUCCIÓN

Llama la atención una renuente paradoja que tiene un efecto recurrente hacia la polarización social. Las ideas dominantes se empeñan en oscurecer las formas de resistencia de los que menos tienen. Mientras acallan con vehemencia las formas bárbaras de los que más tienen.

La función paradójica se realiza en pos de la polarización social cuando no sólo reproduce la dominación existente sino que, en el mismo movimiento, la contiene mediante el beneficio ideológico de la tergiversación.

Las ideas allí contenidas nos ubican frente a una dinámica no necesariamente sincrónica, entre los mecanismos de constitución de la pobreza y la riqueza. A pesar del modo imperante de dar sentido al problema de la distribución, la asignación de la riqueza solamente puede ser entendida a partir de ciertas distinciones históricas. Con lo cual, por supuesto, también se comprenden históricamente los conflictos sociales que de esa distribución emergen, más allá del empeño constante por señalar los elementos “novedosos” de las disputas en el capitalismo.

En particular nos abocaremos aquí a discutir los intentos de minimizar, por no decir negar, el poder de ciertas acciones colectivas que se enfrentan al modelo neoliberal. Con el objetivo expreso de combatir las lecturas que atomizan dichas apuestas disidentes y jerarquizan aquellas relaciones políticas horizontales.

Para recuperar la historicidad del momento presente es preciso reconocer su sentido resultante y fetichizado, así como también todas aquellas condiciones y aspectos que logran ocultarse. Por tal razón, el tema de la asincronía del capital y el trabajo en la fase neoliberal es el marco sobre el cual realizamos nuestro abordaje sobre el carácter político de la lucha de los desocupados. Su relevancia se centra en que dicho abordaje allana los desafíos del conflicto social que está constituyéndose, mientras visibiliza una preocupación que todo intelectual debería expresar.

LA MÁSCARA NEOLIBERAL

La depredación es el signo del capitalismo. A su paso vienen arrasando con la vida y la riqueza de todo el planeta. Desde los recursos naturales hasta la población han caído en su trampa. Tal embestida adquiere mucha más relevancia a partir de la reciente fase neoliberal, fundamentalmente porque la enorme capacidad regenerativa del sistema en su conjunto siempre conserva para sí la violencia como recurso estratégico. Si bien no es nuevo que el capital actualmente emplee la violencia para mantener y extender, según corresponda, su movilidad y predominio, lo nuevo aparece ante la iniciativa del neoliberalismo.

Para no convalidar la ambigüedad epistemológica que subsiste en el empleo del término, en tanto caracterización distintiva de la fase actual del capitalismo, se debe explicitar qué se entiende por neoliberalismo. Para nosotros es un cambio de estrategia capitalista constitutiva de la salida a la crisis de la década de los setenta, según la cual se fortalece el avance depredador del capital por medio de una hegemonía ideológica sin precedentes.

Por ende, la novedad en la fase reciente de embestida del capital está en que sus objetivos han encontrado eco sin fronteras aparentes. Su logro está en haber acallado a su paso toda crítica. Por tal razón, su falta de escrúpulos frente a lo que hace con la vida se ha vuelto determinante. Su empeño en acabar con lo humano, al someterlo a formas bárbaras de esclavitud, fomentando la miseria y el desamparo, no halla obstáculo alguno: los intelectuales sólo tímidamente alzan su voz.

Teorías y políticas van y vienen intentando amortiguar las contradicciones, intentando mover un poco el punto de equilibrio de la distribución de la riqueza, intentando encontrar el rostro humano del capitalismo; sin embargo, más tarde o más temprano se vuelve siempre al punto de partida: la competencia es por definición la negación del otro. La dinámica de la competencia supone por naturaleza una negación de todo lo circundante que no puede ser apropiado, incorporado o sometido. La competencia implica el fortalecimiento propio y el debilitamiento ajeno. El otro es siempre la negación de uno mismo y por eso hay que buscar su destrucción. La humanidad no puede construirse a partir de estas bases porque la humanidad es el reconocimiento de uno mismo en el otro, con el otro. El sometimiento del otro, su destrucción, su humillación, su aniquilamiento, insoslayable en la lógica de la competencia, constituye la negación de la humanidad, de lo humanitario. La humanidad ha sido desarticulada por las mismas causas que alientan la competencia: el mercado, la tecnología, los medios de comunicación, la ideología del progreso capitalista. Por eso la humanidad se tiene que construir, se tiene que reconocer, se tiene que reconcebir. Por eso la posibilidad de generar un proyecto civilizatorio distinto al del capital sólo podría provenir del otro, de todos los otros, de los negados, de los sin rostro (Ceceña, 1997).

En tal sentido, es preciso reconocer, tal como lo hizo Perry Anderson hace algún tiempo, el rotundo éxito ideológico del neoliberalismo, que tiene por finalidad acabar con la crítica a tal embestida genocida del capital. Es necesario admitir que la estrategia del capital se consolidó, a partir de alcanzar una escala mundial nunca antes vista en su favor. Con la proliferación de un cuerpo argumentativo coherente y lúcido, en pos de profundizar cambios estructurales categóricos e irreversibles al corto plazo, logró lo que nunca antes: acrecentar la libre empresa y la competencia con una ortodoxia aplastante en todos los resquicios del planeta.

Políticamente, entonces, ha alcanzado un éxito quizá ni soñado por sus ideológicos, hacia la proyección del supuesto sobre la falta de alternativas para sus principios. Un pensamiento único al cual todos, sus partidarios o detractores, tienen que atenerse, asumiendo como propios los imperativos del hambre y la codicia, según se hallan ubicados en la estratificación social. Es probable que, desde el principio del siglo, ninguna sabiduría convencional consiguiese lo que ésta, un predominio de gesto tan difundido.

Pero el crédito no puede ser únicamente de la sapiencia como se pergeño la política neoliberal; para su triunfo ha debido convocar fuerzas históricas más robustas.

Tales logros fueron efectivos por el servicio de una vieja receta. Se fomentó la competencia en un escenario particular: según el cual el desempleo es lo suficientemente masivo como para desmovilizar, disciplinar y controlar la lucha del trabajo. Ahí, en dicho equilibrio de fuerza a su favor, es donde gana la partida.

Con la máscara cínica del progreso, el “fin de la historia” y el “efecto derrame” para los países periféricos, la violencia neoliberal tejió una aceptación, sin reservas, de cuantiosas políticas genocidas sobre amplios márgenes de la población que trabaja. Por todo, y frente a semejante embestida, la crítica se ha vuelto vacía, por ende, el problema está en cómo recomponerla.

EL ESTADO DEL TERROR

El trauma de la violencia capitalista asumió distintos momentos en la experiencia argentina. Precisamos considerar cada una de estas manifestaciones, sus características y maneras de operar, para concluir un marco en el cual se expresa específicamente la violencia sobre el trabajo.

Dicho trauma tiene un capítulo fundacional con la dictadura militar iniciada en 1976, la cual fue llamada significativamente “Proceso de Reorganización Nacional”. Su iniciativa estuvo en desmantelar, hasta lo irreconocible, todo aquello que presentara el signo del régimen sustitutivo y, como procedimiento, aniquiló todo foco de resistencia a tales objetivos manifiestos. Su función fue la de imponer, a cualquier costo, los nuevos elementos propios de un régimen de acumulación financiera: la proliferación de flujos de capitales externos de uso no productivo.

Al promocionar así la especulación financiera como motor de este capitalismo de tinte neoliberal, doblegó sin miramientos el proceso de industrialización antes imperante, con su correspondiente embestida sobre los actores que lo desarrollaron. Con la desaceleración productiva en marcha, a través del privilegio delegado al control de los flujos financieros, se potenció una recesión generalizada que la inflación intentó convalidar. Hay que decir que estas apuestas neoliberales, con consecuencias dramáticas para los más desprotegidos de la actividad económica, han sido políticas impuestas por los países “desarrollados”, y seguidas a rajatabla por los

que gobernaron en la periferia. Todo para sostener, mediante la actividad financiera como recambio, un derrumbe previsto por la desvalorización brusca del capital

En continuidad con estas imposiciones para salvar el capitalismo, la restauración de la democracia en 1983 fue funcional al neoliberalismo. Con formas menos dramáticas que sus antecedentes, pero sólo al principio. Con Carlos Menem los atenuantes perdieron su razón de ser, se impulsaron la recetas neoliberales de Friedman y Hayek sin miramientos: en agosto de 1989 se aprobaban dos leyes, las cuales otorgaban al Poder Ejecutivo amplios márgenes de acción para encarar la reestructuración económica y estatal: la Ley de Emergencia Económica (disminuyéndose la carga fiscal y las normas restrictivas para la inversión extranjera y, suspendiendo los subsidios y las subvenciones se combatió a los regímenes de promoción industrial) y la Ley de Reforma del Estado (con la declaración de la emergencia administrativa, se suspenden los pagos del Estado y se sentó las bases para las privatizaciones de empresas estatales).

La alianza, a pesar de las expectativas populares, hizo lo propio. Privatizó los restos del aparato estatal, desaceleró y desreguló lo que faltaba en la actividad económica y, al mismo tiempo, reinauguró una tendencia a la flexibilización del trabajo, consolidando su precariedad. Con lo cual su forma de pasar a la historia es a través de haber profundizado, hasta lo insostenible, la destrucción del empleo y la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario.

Evidentemente, en orden a los imperativos del nuevo orden económico mundial, todas y cada una de las medidas de la dirigencia local se impusieron al servicio de cimentar una sociedad altamente polarizada, en la que 20% de la población más rica recibe 14.6 veces más que 20% de los más pobres (esto es aún más significativo desde el punto de vista histórico, ya que esa misma relación en 1974, a comienzos del ciclo, era de 7.8).

Las consecuencias de la servidumbre estatal nos muestra a las claras que no todos perdieron. Los grupos más concentrados de la economía transnacional, para quienes por lo visto han trabajado, han podido reposicionarse en nuevos nichos productivos. En ese mismo movimiento han visto el provecho de apropiarse de ciertos recursos estratégicos de los Estados. Al privatizarse sectores claves de la actividad económica, los Estados han perdido el control de la iniciativa económica y se han debilitado frente a los vaivenes de las imposiciones del endeudamiento.

Desestructurados, debilitados y subordinados por intereses foráneos, el aparato estatal continuó asumiendo recetas viciadas por el ajuste, como

actividad más propia. La lista de los ajustes del gasto público y la toma de deuda no dejan de disminuir. Contrariamente se amplían las estrategias de apertura comercial y los límites a la inversión externa, como así también, a su falta de principios se le suma que la desgravación fiscal se dirige en beneficio de los que más tienen y en detrimento de los que menos.

Por tal razón, la instrumentalización del neoliberalismo ha convertido a quienes nos dirigen en un grupo de creyentes, que maniatados por las ataduras de la deuda pública, se aferran a la esperanza del "efecto derrame". Su debilidad es tan grande que estuvo a poco de provocar su propio suicidio en la crisis de finales del 2001, la cual, también por su virulencia, se ha vuelto una imagen más del trauma argentino.

Tal trauma de la sublevación no es en vano, ya que los Estados estos últimos años no han hecho más que hipotecar la riqueza potencial, la Argentina ha venido comprometiendo un "potencial" de producción a una deuda pública, que a todas voces es impagable. Tal condena social también ha conducido a la privatización de recursos productivos estratégicos, además de las empresas estatales en manos privadas, la banca y la industria están, en un altísimo porcentaje, en manos de capitales extranjeros. Por eso la debilidad de quienes nos han conducido a sobrevaluar en los actuales indicadores de la pobreza, según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) casi veintiún millones de argentinos están en esa condición mientras la mitad de ellos ya se halla en condiciones de indigencia.

Indudablemente, la depredación del capital también encuentra como víctimas aquellos que fueron serviles a sus objetivos. Ataca también a la iniciativa de gobiernos que se han vuelto cómplices de su virulencia. Su codicia es tan alta que no se detiene frente a quienes son claves para sus metas. No se detiene frente a los fieles súbditos de sus formas de violencia social. Debilita y condena hasta el suicidio a aquellos que son sus verdugos, que han logrado disciplinar al trabajo, mediante la dictadura, la hiperinflación y el desempleo de masas.

LA AMENAZA ES EL SÍNTOMA

Más allá de la máscara neoliberal, el capital siempre muestra su cara más oscura. Las claves de su desenvolvimiento, más allá del espejismo y los atajos ideológicos de cada momento histórico específico, siempre están en la violencia que le es intrínseca.

La violencia siempre está allí, agazapada, esperando, a punto de entrar en escena en el capitalismo, y más aún cuando éste está en peligro, como fue el caso de la crisis de los setenta. A finales del siglo pasado se puso en jaque la rentabilidad del capital, y ese contexto moldeó una hegemonía de características inéditas que aniquila con ideas del bienestar y la inacción todo lo que se le enfrenta.

Sin embargo, si bien la ideología neoliberal se ha porfiado en pregonar recetas para el progreso y el bienestar de los que no lo tienen, lo que ha producido, lo que nos ha dejado, ha sido que muy pocos disfrutaron y disfrutaron de las bendiciones vociferadas para todos.

Si bien la hegemonía neoliberal es ya un hecho, su paradoja no deja de sublevarse. Naturalmente, millones de personas ya no tienen fuerza para creer en sus promesas, cuando se resisten cotidianamente a sus terribles efectos. Aunque las ideas dominantes se imponen hasta lo insostenible de su nulidad, el hecho de que un territorio de vitalidad económica ha quedado concentrado en muy pocas manos se observa a través de las consecuencias de la violencia neoliberal en la Argentina. Por ello, someramente, en el apartado anterior, intentamos identificar los impactos manifiestos detrás del disfraz que los tergiversa.

Desde un punto de vista más general, como en otras latitudes, en nuestro país la violencia del capital operó visiblemente sobre la acción política de los trabajadores. Primero negándola, aniquilándola, y luego acorralándola tan sólo a los márgenes previstos por la representación democrática. No obstante, una vez allí tampoco se conformó, y volvió a imponerse con toda virulencia.

La democracia trató de ocultar la violencia estatal detrás de la apariencia de igualdad ciudadana. Pero al mismo tiempo fue violenta en sus acciones, desde la imposición de políticas que marginaron, pasando por la represión directa sobre las víctimas de esa marginación que se rebelasen, hasta la obscenidad de un discurso que trata de convencer de la necesidad de ajustar a los más pobres para aspirar a un porvenir venturoso (Battistini, 2002: 35).

Antes y después de la democracia, la violencia neoliberal atacó a través del terror: configurando una perspectiva traumática para todo intento de oposición.

El trauma de la dictadura militar y el de la dictadura económica, con la hiperinflación, en conjunto produjeron una especial de simbiosis. Una asociación del inconsciente colectivo que forzó la aceptación a las drásticas medidas neoliberales.

La amenaza siempre estuvo presente. Su intimidación cambia de forma según la necesidad del capital, pero la función superó las circunstancias realizándose como la amenaza a la vuelta al pasado y el retorno del terror.

Mientras el neoliberalismo nos dejaba en manos del crecimiento de la pobreza y la cotidianidad de la indigencia, resultado ambas de un desempleo de masas y una precarización laboral, la dictadura y la hiperinflación se convirtieron en imágenes permanentes, sin necesidad de ser explicitadas, que condicionaban el disciplinamiento. Al someternos bajo el dominio de estas ideas del retorno al terror, nos hundió en una catástrofe que no imaginábamos, el carácter estructural del desempleo de consecuencias dramáticas para el presente y el futuro.

Una vez constituido el desempleo como otra manera de disciplinamiento social, ya sus antecedentes no tenían razón de ser y fueron condenadas a la revisión del presente. Necesitamos saber cómo dar cuenta de las actuales condenas de la Argentina, cómo se ha podido desplegar semejante sinrazón. Para ello, necesitamos hacer un alto en pos de precisar, cómo opera específicamente la violencia del capital sobre el trabajo en este periodo neoliberal.

A sabiendas que la conflictividad del capital y el trabajo corrientemente queda en manos del sentido común de lo evidente, que está condicionado por los portadores del poder decir, que oculta, queriéndolo o no, lo relevante de dicha relación, nuestro compromiso se inicia frente a la función de la ideología. Su modo de empleo moldea los puentes de la relación del capital y el trabajo y, por ello, es pertinente recrear una forma alternativa de considerarla.

Para seguir es requisito recrear los márgenes de la actual relación de explotación del trabajo, reconociendo los signos específicos del conflicto que provoca la profundización del disciplinamiento sobre los que trabajan, y el lugar que en ello ocupa la amenaza del desempleo.

LAS MARCAS DE LA EXPLOTACIÓN

La actual relación del capital y el trabajo expresa su violencia a través de la perversión: se propone en pos de mercantilizar el trabajo, a tal extremo

que lo deshumaniza, llevando a grandes márgenes de población activa a la marginalidad más acuciante. Pero esto no es nuevo, lo nuevo de su perversión está también en la eficacia ideológica de su empleo:

El sistema se volvió así cada vez más perverso, ya que siguió manteniendo la ilusión del empleo asalariado, cuando las posibilidades de acceso a él se iban diluyendo, sobre todo para los sectores menos favorecidos económicamente (Battistini, 2002: 17).

La perversión de prácticas y de argumentos sobre el trabajo ha llevado a dismantelar la política del pleno empleo y la destrucción de un aparato sindical que era su espejo. Según creemos, a escala mundial, esta perversión se instala sobre una transformación estructural del proceso productivo.

Dichas políticas focalizadas, discontinuas y cortoplacistas sobre el empleo asalariado no han considerado nunca, en su formulación de programas, los vaivenes y particularidades de cada región donde se implantaron. Tan sólo son un paralelo de lo hecho por los ajustes macroeconómicos cimentados por los Estados en la fase neoliberal.

En conjunto, las nuevas relaciones de producción que han fragmentado y debilitado el universo laboral y las transformaciones sistémicas de la limitación de la autonomía estatal (para el ejercicio de su soberanía) han logrado desarticular al interlocutor o mediador tradicional de los conflictos laborales. De tal manera, el movimiento sindical ha quedado desprovisto de poder para paliar la desigualdad, subordinación y marginalidad en que se halla el asalariado.

Basta observar como síntoma de la crisis sindical la realidad pauperizada de todo el empleo asalariado, más allá de la actividad, la complejidad y la paga que le corresponda. La forma más significativa de esta manifestación de debilidad la asume la figura del contrato temporal y la pasantía. Ahí el uso de la fuerza de trabajo se recompone bajo la consigna del "trabajo justo a tiempo", donde la flexibilización del empleo apunta a un ideal en el que la empresa podría llamar a un asalariado cuando tiene necesidad de él y pagarle solamente por las horas o las tareas que son directamente productivas.

Pero hay que decirlo, el capital se desenvuelve en una contradicción permanente. La realización de sus intereses más salvajes se ve contrarrestados por su propia necesidad para reproducirse. La renuente paradoja del des-

envolvimiento del capitalismo, se lleva a cabo mediante la contradicción entre la acumulación y la reproducción del capital.

Este tema clave del sistema económico, hoy se expresa en la necesidad de las empresas de una mano de obra fiable y formada, capaz de alcanzar niveles elevados de productividad. De ahí las tentativas de estabilizar núcleos duros y diferentes niveles de periferia de mano de obra: los trabajadores temporales, a los que se convoca para ciertas ocasiones, sólo son efectivos del lado de un núcleo estable y permanente de otros (requisito para la reproducción eficiente del capital). Inversamente, la contradicción se refleja en el despliegue del trabajo sobre el capital, donde la precarización viene acompañada por una necesidad de elevar la cualificación y la permanencia del trabajo (generalmente no reconocidas en la paga de las calificaciones).

Dicho contrasentido en la estrategia de mercantilizar y flexibilizar al extremo la mano de obra, y particularmente de las estrategias cada vez más selectivas de contratación del trabajador, deja como resabio un continente no menor de trabajadores librados a su suerte. Quienes ven tan sólo en el autoempleo o los magros subsidios estatales una salida para su condición de asalariados sin trabajo.

Con esta emergencia del desocupado estructural, se ve a las claras cómo el capital se desembaraza absolutamente de la responsabilidad de sobrevivir de la mano de obra, siendo el Estado el único responsable por enmendar estas consecuencias del desarrollo irracional del capitalismo. Más nítidamente, se vislumbra que la salida neoliberal a la crisis del capitalismo provocó, con éxito, la desvinculación del empleo en relación con el trabajo y la destrucción de la figura clásica de trabajador asalariado.

DESVÍNCULOS DEL TRABAJO

El disciplinamiento sobre el trabajador que proyectó la figura del desempleo, en tanto estrategia del capital, renueva una vieja receta que hoy se sirve de un elemento estructural con el cual antes no contaba.

Por medio de recursos informáticos, ahora se está profundizando la automatización del trabajo, a tal extremo que, no solamente se continúa un proceso de objetivación del saber materializado en la máquina herramienta, sino que se agrega una objetivación del propio proceso de trabajo, al deslocalizarse la producción como conjunto.

Por tanto, el capital ha logrado deslocalizar su producción, mediante los medios informáticos, y desdibujar, así, las fronteras de la unidad de producción (la fábrica y la oficina). Esta nueva forma de integración de los trabajadores y sus productos del trabajo se efectúa a través de redes de contacto que controla el capital de manera absoluta; y con ello, amplía y profundiza su alcance allí donde antes no intervenía, hoy opera en la separación de los colectivos de referencia, aislándolos a los trabajadores de manera determinante.

Ambas novedades en la estrategia del capital, la deslocalización de la producción y su correspondiente aislamiento del trabajador, dan materialidad a las formas diversas de precarización del trabajo y polarización social, en sentido general: el desequilibrio ocupacional extiende cada vez más la brecha salarial, la reducción de los puestos de trabajo en la administración pública (entre otros sectores paliativos de la economía) aumenta la inestabilidad laboral del conjunto de trabajadores; en suma, la creciente oferta de fuerza de trabajo es una afluyente indiscutido para la merma del ingreso real.

La lógica fundamental de esta desvinculación también ha impactado sobre la relación entre lo económico y lo social, cuando desvincula la renta del empleo.

Del lado de la economía han imperado las reglas de la competencia y el libre mercado, dejando el camino libre a las privatizaciones, la libre circulación de capitales, y a la flexibilidad en las modalidades de contratación del trabajo. Mientras del lado de lo social, sigue vigente una realidad distinta, el Estado debe redistribuir una fracción cada vez más reducida de las riquezas producidas, derivada de los impuestos, a una masa cada vez más amplia de desempleados, bajo la forma de subsidios.

En esta desvinculación del trabajo de la esfera de lo económico vemos operarse la función disciplinaria del desempleo, en tanto imagen de la pérdida de la condición de asalariado.

En este sentido, los efectos de la implantación del modelo neoliberal se han traducido en una flexibilización de las condiciones de trabajo y una inmensa red de recursos productivos hoy destinado al flujo financiero de escala supranacional. La desvinculación del trabajo, por medio de la deslocalización de la producción, se expresa en formas diversas de inestabilidad del empleo y genera condicionantes políticos para los ya debilitados sindicatos y los todavía jóvenes contingentes de desempleados organizados.

Por eso, junto a la expresión directa de la lógica del capital, en tanto forma actual de la deslocalización de la producción, es preciso advertir también

su consecuencia ideológica, en tanto resultante político hallamos la fragmentación del colectivo de trabajo, y aislamiento del poder de resistencia del trabajador, evidenciado permanentemente mediante la figura de los desocupados.

Ciertamente todos los límites se han roto para la propiedad privada y la reproducción del capital, pero ninguno para quienes viven de su empleo.

La desvinculación del trabajo de su soporte económico, y los desequilibrios recientes en la clásica relación salarial, viene operando eficazmente sobre las ideas dominantes en el trabajo. Hoy más que nunca, el proceso de concentración y descentralización empresarial ha provocado un duro golpe sobre el mercado de bienes y el mercado laboral. Con lo cual la reproducción de las condiciones de trabajo, finalmente, terminó en las manos exclusivas de un Estado cada vez más debilitado, quien ofrece a amplios márgenes de la población que trabaja dádivas de lo más miserables y materializa así su ambición de ser partícipes de la explotación, en la condición de subordinación.

Sin embargo, no todo es tan terminante, todo poder, en algún momento, provoca con su desenvolvimiento un contrapoder. Si bien se ha corrido el límite del trabajo, en relación con las esferas de lo social y lo económico, es distinto lo que ocurre desde el punto de vista político.

EL PODER DE DESEMPLEO

Desde lo político, como todo contrapoder, la resistencia se ubica en lo más impredecible. La degradación a que nos condena el capital es tan profunda que la rebeldía se ha ubicado en lo más hondo, en lo más extremo, allá donde el dominio de capital perdió la partida o, dicho de otro modo, ahí donde no le interesa estar, ahí donde lo pequeño e insignificante se vuelve grande y adverso.

Si bien los desocupados contribuyen a conformar las imágenes-trauma del disciplinamiento de los que tienen trabajo. No obstante, también dicha condición del empleo permite la emergencia de principios renovados del conflicto laboral, y he ahí su poder.

Al preguntarnos por qué razón son los desocupados los portadores del poder de resistir, los que alzan la voz, los que gritan y denuncian la violencia neoliberal, frente a la apatía de los que tienen trabajo, nos estamos preguntado por cierto aspecto de la resistencia reciente. La razón que lleva a los desocupados a ser los protagonistas ineludibles de la resistencia

reciente está en que son la figura de los que nada tienen, y allí en ese vacío recuperan su razón política.

En su nombre se enarbola para algunos la negación del trabajador y para otros, entre los cuales me incluyo, la potencialidad manifiesta del poder de resistencia, aún, a primera vista, esto parezca extraño. Los que protestan no son asalariados procurando mejoras de sus condiciones laborales o sociales, sino desempleados procurando conseguir trabajo. En esta forma de expresión del conflicto se evidencia una incontrastable paradoja.

Según ésta, los que protestan si bien no se hallan estrictamente hablando desde una relación social, se consideran trabajadores en condición de desocupados. Las recientes configuraciones colectivas se expresan como cambio en la naturaleza de las reglas de conformación de la relación capital y trabajo, pero no se pueden entender fuera de este vínculo.

Para reconocer la expresión que asume el poder del desempleo, en el campo actual del conflicto del trabajo, es preciso cuestionar el recurso ideológico de las fórmulas disuasivas. Desde los recorridos realizados por la historia, señalaremos los aspectos ideológicos que la contienen y configuran, y su función para ocultar y tergiversar aquellos sucesos de la resistencia. Por mediación simbólica, del sentido atribuido a la atomización del conflicto laboral y la jerarquización de las organizaciones de desocupados, las formas políticas del trabajo, y los conflictos laborales que se le asocian, quedan reducidos a expresiones de debilidad, ocultándose las formas alternativas de estas luchas y su potencialidad.

En su momento fue la idea sobre “el fin del trabajo”, que operó atacando las formaciones colectivas de la resistencia laboral, fue la que conformó cierto cuestionamiento sobre la centralidad del trabajo, desde el punto de vista de la conflictividad social propia del sistema capitalista. En la actualidad, el fetichismo de la ideología reinante se sirve de otra manera para resignificar la lucha del trabajo, esta vez a través del paradigma de la exclusión.

Según una premisa basada en la polarización dentro/fuera, se pretenden describir las consecuencias negativas de la explotación capitalista, y, según nuestra hipótesis, esta interpretación hace posible la predominancia de la idea sobre la debilidad del peso ejercido por el trabajo en los conflictos capitalistas contemporáneos, que abordaremos a continuación. Por ende, enseguida desarrollaremos el fetiche de la exclusión en tanto obstáculo para reconocer el poder de los más débiles. Perspectiva que, necesariamente, nos conduce a discutir una temática ya clásica en los estudios políticos: la centralidad política del trabajo.

Pensamos que las discusiones teóricas han llegado tan lejos que están manipulando de manera negativa las luchas actuales; tal tergiversación alcanza su grado extremo cuando se llega a afirmar que, por razón de un desempleo masivo, hoy la esfera del trabajo ha perdido su peso en los conflictos sociales (premisa, por cierto, totalmente incontrastable con la realidad nuestra y ajena).

Por supuesto nuestra posición, poco influyente todavía, intenta sortear los obstáculos de minimizar el poder de los grupos no tradicionales que resisten frente al neoliberalismo. En principio, nos servimos de los hechos pasados para afirmar que: el protagonismo de los desocupados organizados ha sido irrefutable a la hora de comprender los antecedentes del conflicto social en Argentina, que tuvo como punto más radical la caída del presidente De la Rúa en diciembre del 2001.

EL FETICHE DE LA EXCLUSIÓN

Existe un elemento ideológico que combate el potencial político del desempleo. Dicho de otro modo, el poder de desempleo se ve limitado por un recurso ideológico que ha tenido amplio alcance en nuestra región, manifiesto a través del paradigma de la exclusión.

Con esta metáfora, para representar a los que tienen trabajo, se ha proyectado la imagen de un grupo social desvalido, excluido y al margen de lo social. Una significación absolutamente negativa que se emplea, sin miramientos, en los debates teóricos interesados por las transformaciones del mundo del trabajo, y ni hablar de la presencia que alega a la hora de describir la especificidad de los desempleados en los estudios empíricos, que no se esfuerzan por combatir conceptos sino por convalidar supuestos.

Según suponemos la noción de exclusión es mecanicista como elemento explicativo pero, aún más importante, despolitizante y sesgada como herramienta conceptual para el análisis social. Con su empleo se consolidó una interpretación negativa del carácter político del sector que gana la ruta en el piquete, que enseguida ve resurgir su influencia en las representaciones que se construyen sobre los piqueteros por parte de los medios de comunicación (por cierto, versiones mucho más estigmatizadas que en el caso de los discursos académicos, que todavía deben cuidar sus formas).

Evidentemente el estigma de la exclusión funciona tanto hacia fuera, en las más variadas imágenes negativas que se configuran sobre los piqueteros (criminalizándolos y victimizándolos) como hacia dentro, proyectándose

los mismos mecanismos sobre su definición de sí de los propios protagonistas. Por tal razón, una mirada así construida sobre la nulidad del poder de los desempleados impone una crítica sobre la función ideológica que allí opera.

El fetiche de la exclusión funciona en los discursos para subestimar estigmatizando el poder de los que resisten en la ruta. En sí misma es una noción mecanicista, y en algún sentido tautológica, ya que su argumento se cierra en una sociedad bipolar que se recrea en un sentido polarizante, resultando la falta de cambio y de ruptura con dicha polaridad antecedente. Como recurso ideológico es una clasificación que no cuestiona sino afirma y sostiene la realidad polar de la explotación del trabajo. Aún más, al hacerlo subordina, en tanto niega, el potencial político de aquellos que se enfrentan a esta polarización: los desocupados, por su condición de excluidos de la relación asalariada se ven desvalidos de su capacidad política como actores del conflicto laboral; la metáfora se completaría del siguiente modo: al estar en los márgenes nos son partícipes de la lucha interna del trabajo y el capital

Sin embargo, dicha escenificación del estar dentro o fuera no es ingenua. Su mirada despolitizante sobre la realidad del trabajo no es un residuo de sus supuestos mecanicistas, sino al revés. En pos de conservar la función ideológica de la polarización dentro/fuera se ata a una concepto de por sí reificado, inhabilitando su función explicativa sobre una realidad en permanente transformación. Sin ir más lejos, es la propia práctica de la lucha de los desocupados organizados la que pone en dudas y cuestiona, sin más, la naturaleza explicativa de la noción de exclusión. Son los nombrados excluidos, en los márgenes, los que se expresan en el centro del conflicto laboral hoy vigente.

Queriéndolo o no, la noción de exclusión no ha sido explicativa de una realidad que no puede representar por su propia naturaleza conceptual. Por ello pensamos que su función es política. Más allá de los espacios en los que cobra vida y se recrea, el paradigma de la exclusión tergiversa el potencial político de los actores emergentes en los cortes de ruta. Y como elemento específico de las ideas dominantes obstaculiza el potencial político de los que considera excluidos, cuando sobredetermina el valor de los que incluye, de los que poseen trabajo y capital (a pesar de que, por supuesto, también establece una jerarquía entre ellos).

Por lo tanto, es innegable que el tema de la asincronía en la relación del trabajo y el capital, y sus formas de interpretación dominante, es ahora más que nunca relevante. En las ideas que dominan sobre la actual relación del capital y el trabajo hallamos, sin dudas, una representación plena

de los actuales desafíos políticos emergentes. La producción del sentido del conflicto es hoy un tema central para el reconocimiento de los desafíos políticos venideros. Por lo tanto, subestimar el potencial político del desempleo ha tenido como consecuencia la incompreensión de la centralidad política del trabajo y sus distintas formas de expresión, y ha conseguido, tal vez lo que buscaba, obstaculizar el poder de los sectores subordinados.

En un contexto de hegemonía ideológica del neoliberalismo, es esta expresión la que cobra todo su potencial como recurso argumentativo imperante. Toda su utilidad se emplea en un contexto en donde lo que se dice parece tener más presencia que lo irrefutable de la realidad, aún si ambos sentidos entran en contradicción. Su eficacia no debe buscarse en la pertinencia analítica, ya que hemos dicho que su lógica mecanicista es la única que ha podido emplear para ocultar su razón política. Todo su potencial está en el momento histórico de su empleo, en donde es ella o cualquier otra la herramienta conceptual empleada con el objeto de despolitizar la lucha de los sectores subalternos que, necesariamente, siguen su enfrentamiento con los sectores dominantes. Por lo tanto, no le importa ser sesgada en su interpretación de la realidad, aun cuando su sentido sea opuesto a lo evidente.

En síntesis, la versión dicotómica de la inclusión / exclusión si bien expresa todavía su influencia frente a la lucha de los desocupados se queda sin sustento. Justamente en la actual coyuntura política del trabajo que estos grupos expresan, el hecho de "estar fuera" de la influencia del capital, más que negarlos como sujetos políticos lo potencia en tanto tales.

LA CENTRALIDAD POLÍTICA DEL TRABAJO

Pasemos a comprender cuáles eran las características fundamentales de la política laboral en la etapa donde todavía no se pretendía cuestionar la centralidad del trabajo como hemisferio específico del conflicto capitalista.

Históricamente, la sociedad de comienzos del siglo XX ha visto emerger la figura de los sindicatos como estructuras políticas que centraliza los intereses de los trabajadores. Independientemente de la radicalidad o no de sus perspectivas ideológicas, los sindicatos institucionalizaron el conflicto laboral y morigeraron así lo que antes se expresaba en pobladas y disturbios callejeros. Por tanto, asumimos que su intervención de alguna manera

provocó cierto disciplinamiento del trabajo frente a la explotación de que es objeto.

La intermediación sindical produjo rotundas modificaciones del carácter político del trabajo, en la medida en que se pasó a legitimar el conflicto que sostiene se lo hizo regulando la lucha que lo expresa, las formas de acción que lo materializan y los intereses específicos de la protesta obrera.

Toda esta redefinición cobró su punto más emblemático a partir del compromiso histórico, entre los capitalistas, el Estado y los sindicatos, en el marco del Estado de Bienestar.

Los acuerdos entre las clases, propios del compromiso histórico dentro del Estado de Bienestar, suponían cierta integración de la diversidad asalariada a una esfera contenedora. Se incluía en dicha condición un amplio margen de la población que trabajaba, presentándola como la totalidad. Con esta inclusión se produjo una acción del sentido que tenía como correlato disminuir los conflictos y sentar las bases para el disciplinamiento posterior.

En principio, el bienestar de unos pocos años fue el terreno fértil sobre el cual se operó la noción de inclusión asalariada y la imagen del disciplinamiento de los que están afuera, los desocupados. Mediante este mecanismo de la inclusión, se operará el abandono de la radicalización del conflicto de clases, que se expresa en formas de pragmatismo de diversa índole, pero que en general se concentra en la disputa salarial y la mejora de las condiciones de trabajo.

Con la caída del compromiso histórico se desnuda la verdadera cara del capital. Con la caducidad del Estado del Bienestar se vuelve evidente el carácter depredador del capitalismo.

Claramente se devela la condición de explotación que hoy soporta el trabajo, con su correspondiente debilidad política en tanto ha quedado preso de la ideología constitutiva de la relación salarial clásico. Sin utopías y sin reivindicaciones radicalizadas, los trabajadores hallan negativo todo lo que les es propio. Cualquier instancia que no se moldee con esa figura es considerada bajo el dominio del fetiche de la exclusión, y todo se vuelve a recrear desde el juego de los intereses mercantilistas más sinceros, y sujetos de la ley de oferta y demanda del empleo.

Sin condiciones de reproducción ni demandas radicales, los trabajadores aparentemente no tienen nada, están excluidos de lo económico y de lo político de manera dramática. Así se expresa la ideología dominante respecto al trabajo, y lo que es lo mismo, de tal manera se han recompuesto los discursos de la relación imperante entre el trabajo y el capital. Siempre

en detrimento del primero, y con la máscara neoliberal más que nunca, la ideología logró desplazar la capacidad política del trabajo, y recrear formas contestatarias diversas que se le opongan.

Más allá de la diversificación de propuestas y modalidades estratégicas de los últimos tiempos, la propia naturaleza de la institución sindical es su condena como órgano político de la lucha laboral. Sus objetivos tienden a ser más limitados al reconocimiento, defensa y ampliación de los derechos de los trabajadores, que a la propuesta de un proyecto de emancipación. En el mejor de los casos, en épocas del compromiso histórico, consiguió condiciones aceptables de supervivencia del trabajador y reglamentaciones piadosas sobre las maneras de contratación, pero no hizo lo propio con los problemas profundos que debe enfrentar la clase subordinada frente a las inclemencias del capital.

La caída de ese acuerdo puso a las claras todo lo que se había abandonado en pos de cierto pragmatismo sindical. Esta desestructuración de las reglas de juego y de los territorios institucionales de la lucha de clases se magnificó a través de una incapacidad temporal de realineamiento político del conjunto de los trabajadores. Sin embargo, y más allá de lo que quisiesen algunos, esta incapacidad política no es permanente, ya que hallamos testimonios de la fortaleza de la acción colectiva, que a la larga configuraran sólidas identidades políticas del trabajo, herederas siempre de lo que dejó la experiencia del pragmatismo sindical.

Al contrario de estos alegatos dominantes, que son las ideas dominantes de nuestro tiempo, la centralidad del trabajo sigue siendo explicativa desde el punto de vista político, cómo explicar la contundente embestida que han protagonizado los movimientos de desocupados que, al protestar, se definen como trabajadores más allá de no tener empleo. El hecho de que estas personas que ya no poseen su condición asalariada insistan en identificarse con el trabajo, nos da la pauta de cuán fuerte es la función de integración social que sigue cumpliendo el trabajo.

LOS DESPLAZAMIENTOS DEL CONFLICTO

En los últimos años, con la aplicación incesante del programa neoliberal, fuimos testigos impávidos de los alegatos sobre la debilidad política del trabajo, derivada, genéricamente, de la falta de reacción de los trabajadores y sus sindicatos frente a la inclemencia de la desocupación y la precarización laboral.

El programa neoliberal consolidó ciertas transformaciones de la estructura social, ya que modificó, sustancialmente, las relaciones sociales de producción del periodo de sustitución de importaciones en la Argentina. No obstante, lejos estamos de decir que por ello el conflicto de los asalariados ha desaparecido, o que la acción sindical a él asociada sea un recuerdo del pasado; ciertamente la reestructuración del mundo del trabajo ha provocado cambios y desplazamientos, pero no la desaparición del carácter político del conflicto laboral.

El segundo elemento que ha de considerarse será de carácter más superestructural, en sentido marxista, es el que se refiere a la deserción sindical, por opción u omisión, para hacer frente a las leyes flexibilizadoras y formas cada vez más precarias de la relación laboral, en tanto dirigencia que obstaculizó o desatendió los intereses de los trabajadores a los cuales deben representar. El carácter sombrío que la lucha por el trabajo ha tenido en el lapso se debe, en parte, a hechos contundentes como el enorme contingente de trabajadores que no logra obtener un salario, pero también ocasionado por cierto "transformismo político" (Basualdo, 2001) de la clase dirigente que debería representarlos. El rol de los movimientos sindicales en el contexto de apertura de las economías nacionales al comercio y a los flujos financieros internacionales debe ser abordado, desde nuestra perspectiva, a partir de la globalización generalizada de las asimetrías sociales y la desregulación y precarización laboral que han modificado la base social y la misión de los sindicatos, influyendo en la transformación de su relación con el Estado, el sistema político, el patrono y los propios agremiados.

En este marco, la emergencia del régimen de acumulación financiera hizo posible la constitución de un nuevo sujeto de la protesta laboral. Con la nueva fase del capitalismo se cimentó un escenario del conflicto capitalista que configuró el surgimiento de las organizaciones de trabajadores desocupados. Por lo tanto, no se puede cuestionar la vigencia de la dimensión política del trabajo, expresada tanto en la figura sindical como en esta reciente perspectiva contestataria que libran los que no tienen empleo. Tal vez, lo que sí se puede decir aunque parezca extraño, en función de los desplazamientos, es que los que no tienen trabajo son la referencia más inmediata, por su recurrencia y contundencia numérica, a la hora de evaluar hacia dónde está dirigido hoy el conflicto laboral en la Argentina.

En este marco de reflexiones, son los movimientos de trabajadores desocupados un caso clave para comprender el desarrollo general del proceso, entendiéndolo como el resultado de los cambios antes señalado y como la potencialidad de una novedad política sobre la toma de decisión, la capacidad de acción y la orientación de un colectivo en conflicto social.

Para pensar la relación histórica del conflicto, y la variedad de protagonistas a él asociado, es necesario admitir que actualmente las resistencias son en parte fragmentadas y localistas; tan sólo en la segunda mitad de los noventa, la Argentina fue el escenario de formas más orgánicas de contrahegemonía. La emergencia, consolidación y expansión del conflicto piquetero desnuda ciertos desplazamientos del poder de lucha del trabajo, en lo relativo a sus identidades, reivindicaciones y modalidades de acción.

Las rupturas con las experiencias pasadas son muchas, es por ello que se puede pensar en la emergente de una novedad en los protagonistas, pero no así en el contenido político de sus demandas. Contrariamente a la postulación de los teóricos de la novedad en el caso de los movimientos sociales recientes, lo emergente no opera sobre la dominación del capitalismo, sino que debe comprenderse como integrado a expresiones diversas de la explotación del trabajo.

Son los desaciertos pasados los que enriquecen el presente de las luchas del trabajo. Por tal razón, no hay una ruptura sino una continuidad de las formas de protesta en las que cohabitan distintas estrategias, identidades e intereses. Tanto es así que las nuevas prácticas comprometen también a los sindicatos y les muestran las desavenencias de su pragmatismo de la aceptación. Básicamente, lo viejo y lo nuevo se funden en los movimientos piqueteros de los noventa. Pensar lo contrario sería asumir a los actores involucrados como ausentes de memoria.

El cambio puede pensarse no como pérdida sino como potencialidad de una novedad política. En esta recomposición aunque hallamos transformación en beneficios del capital también hay focos de resistencia respecto al conflicto por la distribución de la riqueza. En definitiva, no se puede pensar en el carácter "novedoso" como algo desprovisto de historia, del conflicto laboral presente, sino en el marco de admitir formas de continuidad y ruptura con experiencias ante decentes que revisten mayor visibilidad, a la luz de las actuales condiciones del capitalismo vernáculo.

Sin embargo, esta ampliación y diversificación de las lógicas de la acción colectiva plantea nuevos desafíos para el conjunto heterogéneo de los movimientos de trabajadores ocupados como desocupados. Instalando interrogante sobre los mecanismos empleados para la toma de decisiones, las formas de participación, más democráticas y horizontales, que se presentan como un reaseguro frente al peligro de la desvinculación del trabajo, de su carácter político permanente. También se señala como problema la dificultad de conformar una unidad sincera de esa diversidad, más allá de la institucionalización, como recurso para mantenerse en el tiempo, que ya mostró sus defectos.

LOS NUEVOS TERRITORIOS DEL CONFLICTO

Si bien la violencia del capital devastó todo lo vital, el tiempo permite la reencarnación de identidades políticas de la resistencia; en ese contexto surge la figura del piquetero. Quien no se identifica con referentes cercanos al Estado (quien es más su oponente) sino fuera de la lógica de los tradicionales partidos políticos y organizaciones sindicales, muy vinculados con patrones estado céntricos que hoy hay perdido sentido y fortaleza, junto a los Estados devastados por el neoliberalismo

La lucha piquetera supone una tendencia que se ha profundizado en los últimos dos años, hacia una mayor radicalidad en las formas de lucha. En tal sentido, el piquete es un tipo de lucha que se expande por todo el territorio y, con esta proliferación, subrepticamente, provoca cierto grado de integración de las organizaciones que lo adoptan. Esta radicalización se expresa tanto en la duración temporal de las acciones de protestas como en la generalización de cortes de rutas, bloqueos, sabotajes, ocupación de lugares de trabajo, en el enfrentamiento con las fuerzas represivas (con aceptaciones masivas a la gran politización de dichas demandas).

Al haber considerado la vitalidad de las formas políticas del trabajo, nos concentraremos ahora en la singularidad que asume las expresiones recientes del conflicto laboral, por ello nos detendremos en las características de la resistencia piquetera.

Trataremos aquí uno de los elementos distintivos de esta resistencia piquetera, el corte de ruta, que hace mención de su carácter político al provocar una ruptura en la circulación del capital y su alcance territorial.

La potencialidad del desempleo debe hallarse particularmente en su denuncia de las condiciones de explotación, y ésta se expresa fundamentalmente en la capacidad reivindicativa del corte de ruta. Su poder estratégico, como medida de protesta, le viene heredado de todo el capital acumulado por la lucha sindical.

El corte de ruta supone un tipo de ruptura tal y como lo es la huelga general. El mecanismo del piquete no hace más que denunciar la violencia del capital en el disciplinamiento del desempleo. Son sus víctimas las que emplean para sí un recurso estratégico del desenvolvimiento del capital, quebrar la circulación de mercancías y trabajadores. Sin embargo, su novedad se halla en el espacio en el que se manifiesta.

Han cambiado los territorios del conflicto laboral pero no su lógica intrínseca. Los cortes de ruta se recrean en una geografía distinta a la de la

unidad productiva, pero su intermediación sostiene el mismo principio de obstaculizar los recorridos de la producción y el intercambio del capital.

Las acciones reivindicativas en curso presentan una inscripción territorial más amplia que la geografía predominantemente urbana, en la que se inscribía la lucha social en el pasado reciente (desplazamiento de los territorios de protesta). La recurrencia de largas marchas y manifestaciones que atraviesan durante días y semanas los espacios regionales y nacionales parecen ser expresión de una nueva territorialidad social de la protesta que acerca los espacios urbanos y rurales, reinstalando vínculos espaciales que contrarrestan la dinámica de segmentación territorial promovida por el neoliberalismo. Los cortes de caminos y bloqueos aparecen como estrategias tendientes a reapropiarse colectivamente de los espacios y a recuperar una visibilidad social colectiva, negada por los mecanismos de poder.

En parte esta modificación es la respuesta que asume el trabajo frente a la estrategia de deslocalización de la producción. Los modos de reapropiación territorial en el caso de los cortes de ruta y reapropiación de las fábricas, son maneras distintas de oponerse a la lógica del capital. Pero siempre conducidas por la lógica disruptiva que es el arma intrínseca del trabajo: como lo fue en su momento, la huelga general. En principio, esta novedad rotura el ámbito tradicional de la protesta laboral (la fábrica, la empresa, la oficina) pero no la expresión de visibilidad de los sujetos en conflicto, destinada a la interrupción u obstaculización del ciclo de trabajo.

Los piqueteros, más allá de sus particulares referencias ideológicas y aspiraciones políticas, han elegido la calle y la ruta para emplear un método de visibilidad pública de sus reclamos. Siempre el recurso de entorpecer los flujos mercantiles del intercambio, del cual no forman parte. Inhibidos de esta posibilidad, por su condición de desocupados, los piqueteros acuden a la ruta o la calle procurando dar visibilidad a la protesta, y subsidiariamente alcanzan el mismo objetivo de obstaculizar el normal desenvolvimiento del sistema económico, aunque no participen en él.

La potencialidad de la lógica territorial ha llevado, en algunos casos, a revisar la instrumentalización de los mecanismos de toma de decisión. Fuera de los límites impuesto por la institucionalización del conflicto, la cercanía de los actores los ha llevado a ensayar en los recursos de las asambleas nuevos modos de participación colectiva, signados por la horizontalidad, dúctil a la cotidianidad, que implican relaciones distintas para recrear un proyecto político permanente. En medio de una pobreza agobiante se puede ver emerger espacios de horizontales, que sin etiquetas ni manipulación iluminada, imponen una lógica organizacional desafiante.

PALABRAS FINALES

La crítica a la ideología dominante nos ha llevado a revisar viejos alegatos sobre el potencial político de la lucha de los considerados excluidos. De tal modo, ensayamos una lectura contrahegemónica sobre el poder político de los desocupados en su ejercicio de la resistencia.

Al clarificar las distancias que nos separan de las imágenes dominantes sobre el conflicto del capital y el trabajo, mostramos algunos modos específicos del de la ideología, siempre al servicio de tergiversar la realidad de la clase subordinada. Sus recursos no se acaban con estas líneas, sus centros de dominio se reproducen permanentemente; sin embargo, nuestro compromiso tiene que ser la denuncia en todo resquicio donde operen las ideas dominantes. Los cuestionamientos no sólo deben estar dirigidos a un reconocimiento de la violencia del capital, en todas sus modalidades, sino que nos deben conducir a producir alternativas para descomponer los procesos internos de tal dominación.

Para recorrer ese camino, el aporte tiene que estar del lado de la crítica que la experiencia de los sectores subalternos nos está demarcando. La mirada tiene que dirigirse a aquellos lugares donde se constituye el conflicto, y no donde se lo interpreta. El no recaer en la caracterización del poder de turno, más cercana al reconocimiento de las instituciones que frenan las demandas, es un reaseguro que nos ubica en la resistencia, que generosamente ofrece indicios del lugar que ocupa el poder dominante: ya que allí se gesta la alternativa disidente de dicha política permanente.

El combate a la luminaria de lo evidente, del simple juego de las voluntades particulares, es el modo que hallamos para sortear la ideología dominante, que registra en lugar de comprender y clasifica en lugar de interpretar el conflicto del sistema capitalista hoy presente.

Según nuestra hipótesis, el movimiento piquetero es la expresión alternativa al mencionado proceso de debilitamiento del trabajo, como eje de conflicto en las sociedades contemporáneas. Son los desocupados organizados los que alientan la vitalidad del hemisferio del trabajo, como anclaje intrínseco del conflicto capitalista. Su carácter político, más allá de su condición de no asalariado, evidencia, sin proponérselo quizá, nuevos recorridos para las demandas, las formas de acción y contenido del conflicto sistémico.

BIBLIOGRAFÍA

- Basualdo (2001), *Sistema político y Modelo de Acumulación en Argentina. Notas sobre el transformismo político durante la valorización financiera (1976-2001)*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Battistini, Osvaldo (2002), "La democracia constituida sobre la violencia", en *La atmósfera incandescente*, Buenos Aires: Trabajo y Sociedad, pp.17-38.
- Ceceña, Ana Esther (1997), "Neoliberalismo e insubordinación", en *Chiapas*, núm. 4, México: Era-Instituto de Investigaciones Económicas, pp.33-42.
- Offe, Claus (1988), *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, Madrid: Sistema, pp. 163-244.

REFLEXIONES SOBRE EL ORDEN VISUAL NEOLIBERAL Y EL ACONTECIMIENTO PIQUETERO²⁹

Paula Abal Medina

Numerosos trabajos de investigación de las ciencias sociales insisten en evidenciar el acontecimiento piquetero como emergencia de una visibilidad que adquiere centralidad política (Lenguita, 2002; Svampa y Pereyra, 2003; MTD Solano y Colectivo Situaciones, 2002; Saur, 2002).

Esta coincidencia teórica nos llevó a reflexionar sobre la dimensión visual del orden neoliberal, entendiendo la visibilidad como tecnología del poder y centrándonos, entonces, en su función disciplinadora y normalizadora. Sostenemos que el neoliberalismo construye un régimen escópico particular y nuestro objetivo es poder dar cuenta de su especificidad. Posteriormente, analizamos el momento de resistencia y por tanto, el desencadenamiento de luchas oculares como correlato de la “emergencia piquetera”. Una visibilidad en pugna y discutida resignifica por un lado, el ejercicio visual neoliberal pero, además, vuelve centrales otras tecnologías del poder. En este sentido, en la segunda parte del artículo estudiamos las dimensiones semánticas (construcciones discursivas) y táctiles (intervenciones, manipulaciones) que se fortalecen con mayor intensidad a raíz de la gravitación política adquirida por las organizaciones piqueteras. Por último es importante destacar que el recorrido planteado se circunscribe y está motivado por las experiencias argentinas que tuvieron lugar a lo largo de la década de los noventa.

El recorte temporal planteado —los noventa— requiere una aclaración que nos permita al menos mencionar los orígenes del neoliberalismo en nuestro país y sus particulares condiciones de emergencia desde la última dictadura militar. Afirmamos, entonces, que el ejercicio de la visibilidad neoliberal adquirió características particulares durante el terrorismo de Estado que

²⁹ Agradezco muy especialmente a Julián La Rocca, Paula Lenguita y Karina Crivelli por las sugerencias y comentarios realizados al presente artículo.

tuvo lugar entre 1976-1982, donde se condensan brutalmente en la figura del "desaparecido" y en los denominados "centros clandestinos de detención". La tenebrosa imposición de oscuridad que se materializa en dicha figura y en esos espacios era acompañada por la visibilidad brutal de una geografía que exaltaba el poder de muerte estatal.

No vamos a analizar estas peculiaridades pero queremos poner de manifiesto su profundo impacto y evidenciar que el orden visual del neoliberalismo de los noventa concentrado en la figura del "excluido" se sustenta y construye sobre la agonía de ese pasado prolongado por la memoria y las ausencias. Su geografía, la de los noventa, exalta la monumentalidad de una pretensión de consumo compulsivo materializada en el proclamado ingreso al primer mundo.

El artículo se divide en los siguientes apartados: 1. Reflexiones sobre el orden visual neoliberal. 2. La exclusión como herramienta para la re-mercantilización del trabajo. 3. El acontecimiento piquetero y la lucha por la visibilidad. 4. La intervención extorsiva: transitoriedad de la "asistencia". 5. Criminalización de la protesta e intervención represiva. 6. Reflexiones finales.

REFLEXIONES SOBRE EL ORDEN VISUAL NEOLIBERAL

Imágenes visiblemente invisibles,
perceptibles pero no descifrables,
dadas en un relámpago y sin lectura posible,
presentes en un brillo que repelía la mirada

M. FOUCAULT (1973)

Martin Jay se refiere a la centralidad del sentido de la vista como dominante en el desarrollo del pensamiento occidental.³⁰ La metáfora visual se encuentra presente en las ideas platónicas del "ojo del espíritu", en las "ideas claras y distintas" cartesianas expuestas a la "fija mirada mental"; en los desarrollos marxianos de *La ideología alemana* cuando sus autores aluden a la "camera obscura" para explicitar las formas de operar de la

³⁰ Jay sitúa el ocular centrismo específicamente tras el surgimiento de la ciencia moderna, la revolución de Gutenberg en la imprenta y el énfasis albertiano en la perspectiva en la pintura. Recomendamos ver Jay, Martin (1988 y 2003).

ideología (Jay, 2003: 253-254). El ocularcentrismo ocupa un lugar privilegiado en la epistemología como el sentido "más discriminador y digno de confianza de los mediadores entre el hombre y el mundo" (Jay, 1988: 194). Si esta preocupación en torno al dominio de la experiencia visual continúa resguardando su gravitación lo cierto es que se puede "hablar de un cambio discursivo en el pensamiento francés del siglo XX en que la denigración de la visión reemplazó su anterior celebración" (*ibid.*: 196).

No pretendemos aquí abocarnos a realizar una fundamentación y un desarrollo exhaustivo del lugar central otorgado a la visión. Simplemente nos permitiremos ubicar este giro importante en la manera de interrogar esa centralidad en los escritos del pensador francés Michel Foucault.

En primer lugar, podemos destacar la relativización de la ubicuidad de la visión³¹ en los desarrollos del autor, y en segundo lugar, identificar que el ejercicio de este sentido es interpretado en tanto forma de dominación social. El título de uno de sus escritos, "El ojo del poder", evidencia esta preocupación por la función disciplinaria y normalizadora de la mirada.

A propósito de "El Panóptico", Foucault afirmaba que el proyecto de Bentham es el del ejercicio de un "poder por transparencia", de un "some-timiento por proyección de claridad". Se trata de instaurar "una mirada que vigile, y que cada uno, sintiéndola pesar sobre sí mismo, termine por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo; cada uno ejercerá esta vigilancia sobre y contra sí mismo" (1989: 18). Una nueva tecnología ocular del poder se expresa en el modelo de cárcel de Bentham que es exactamente inverso al del poder monárquico.

Hasta aquí nuestras reflexiones en torno a la dominación ocular como "visibilidad invisible". Nos interesa ahora ubicar un quiebre, una mutación en el ejercicio de la mirada; el que situamos temporalmente hacia mediados de la década de los setenta con la irrupción del neoliberalismo.

Sostenemos que el neoliberalismo establece una nueva estructura de la visibilidad; se trata de una visibilidad selectiva que puede sintetizarse como el ejercicio de una "visibilidad invisibilizante". Para evitar caer en juegos de palabras trataremos de explicitar con mayor detalle a qué nos referimos aludiendo a las especificidades que asume el neoliberalismo en nuestro país desde principios de la década de los noventa y fundamentalmente

³¹ En "El ojo en el poder", Foucault destaca que "en las técnicas de poder desarrolladas en la época moderna, la mirada ha tenido una importancia enorme, pero está lejos de ser la única ni siquiera la principal instrumentación puesta en práctica" (1989:18).

intentaremos dar cuenta de las particulares características que asumieron las "luchas oculares" en la sociedad argentina.

Justificaremos nuestra inquietud teórica sobre el poder de la mirada de la siguiente forma: sostenemos que la noción de "exclusión" debe entenderse como una metáfora visual, cuyo sentido particular está orientado a sustentar y reproducir relaciones de dominación. Para cumplir este objetivo se requería una nueva definición del ejercicio de la visibilidad. En este sentido "lo social" pasa a estar constituido por lo "incluido"; la mirada practicada ahora selectivamente domina no imponiendo una visibilidad omnipresente sino instaurando zonas de oscuridad y de claridad social.

El poder de no mirar y no mostrar lo excluido y el poder de mirar y mostrar lo incluido; permiten al neoliberalismo, en tanto proyecto político del capital, operar de la siguiente forma: 1. lo excluido es una segmentariedad establecida por el capital que permite constituirse como amenaza disciplinadora de lo incluido. 2. En tanto sólo es visible como "exclusión", es decir, como oscuridad social, puede ser iluminado fugaz y alternativamente por un acto de categorización que construya "revelaciones" sobre esa oscuridad social. La inexistencia podrá recuperar una existencia despiadada cuando ocurra algo intolerable para el poder. 3. Es, sin embargo, la condición de oscuridad de lo "excluido", la garantía que sustenta esa ficción de visibilidad con efectos

En este sentido, el capitalismo neoliberal recrea nuevas formas de dominación ocular y el acto de categorización de "excluido" es una necesidad para la reproducción del capital en tanto sujeto social dominante. Esta afirmación nos permite situar la *historicidad* de "la exclusión" y nos lleva a reflexionar sobre su *determinación material*.

Afirmamos entonces que la "exclusión" es un constructo ideológico situado históricamente y determinado materialmente. El ejercicio de la mirada, entendido en sentido foucaultiano, como tecnología del poder, interviene ya no dominando por "transparencia" y ya no sometiendo "por proyección de claridad" sino garantizándose vastas zonas de oscuridad como "reserva permanente", como "recurso disponible incondicional" de un poder que domina "oscureciendo" y somete proyectando "esa oscuridad" como sombra paralizante y totalizante de la realidad que visibiliza. Un poder que, podríamos decir, para exaltar los contrastes con la práctica visual que la antecede, domina por oscuridad y somete por proyección de sombras.

En este momento debemos reconocer que nuestra argumentación está inconclusa. Hasta aquí especificamos tres modos de garantía del dominio neoliberal: "exclusión-inclusión" como dominio sobre los incluidos; y

cimientos del poder en la constitución de la “exclusión” sobre los cuales potencialmente pueden y podrán edificarse numerosas prácticas visuales que otorgarán sentidos —significaciones— particulares al par “exclusión-inclusión” (“excluidos ignorantes” frente a incluidos; “excluidos delinquentes” frente a incluidos; “excluidos improductivos” frente a incluidos, etcétera).

También debemos decir que estas mutaciones de sentidos otorgadas al par mencionado son además efecto de las luchas oculares y de las resistencias a esos actos de iluminación estigmatizantes. En breve, trataremos de abocarnos a ese momento dialéctico de la mirada.

Sin embargo, adeudamos una reflexión sobre cómo opera la imposición de oscuridad entre aquellos sentenciados a tal estado. Quizás debamos aquí explicitar o admitir que nuestra argumentación tiene al respecto un rumbo determinado o que argumentamos habiendo concluido anticipadamente. Por eso preferimos presentar en primer lugar ese punto de llegada. Si aún no vamos a decir nada en torno a la manera de operar sobre esos excluidos sostenemos que es allí donde ese ejercicio se volvió más falible, resistible y discutido. Las nuevas tramas de dominación que sostuvieron ese par de antagonismo reprogramable “exclusión-inclusión”, resultaron más eficaces en el segundo componente y, por el contrario, mucho más vulnerables en relación con el primero.

Evidenciamos que con lo dicho estamos discutiendo con diversos abordajes que afirmaron que el proceso de expulsión-exclusión retiraba la posibilidad de que los expulsados emergieran como sujetos con potencial de transformación. El carácter dialéctico de la noción “sujeto” en tanto sujeto sometido y sujeto de la historia, siguiendo aquellas argumentaciones, se desvanece. Los sujetos por su condición de “desujetados” quedarían imposibilitados de emerger como sujetos políticos. La principal justificación de estas perspectivas la podemos encontrar en su “inutilidad” en tanto sujetos prescindibles para el funcionamiento de la máquina social (Castel, 1997: 445).

No es este el debate que pretendemos desarrollar aquí pero debemos decir que las conclusiones que se extraen del postulado de “los excluidos”, como simple dato de la realidad social, conllevan a desconocer la profunda significación de su existencia social. Frente a las “formulaciones más puras” del neoliberalismo que afirman que vastos sectores de la población no sirven por obsoletos, por improductivos, etc.; ciertos desarrollos teóricos de las ciencias sociales señalan, tomando dicha formulación como supuesto, que los excluidos en tanto “inservibles e innecesarios” no pueden constituirse como sujeto transformador del orden social.

Nos parece que estos enfoques contribuyen a confundir el discurso ideológico neoliberal con la realidad social. Vale la pena, por lo menos, formular la siguiente interrogante: más allá de sus prédicas, ¿puede prescindir el neoliberalismo de amplios sectores sociales convertidos instantáneamente en “inútiles para el mundo” o por el contrario requiere de su presencia oscura, de una demarcación social de “excluidos-incluidos” que se presente como contradicción indeterminada de la realidad social pero cuya determinación invariable sea la de evitar remitir al par capital-trabajo como contradicción estructural del capitalismo? ¿No es la exclusión-inclusión acaso el dispositivo que permite la reproducción del capital como sujeto social dominante durante la fase del capitalismo neoliberal?

LA EXCLUSIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA RE-MERCANTILIZACIÓN DEL TRABAJO

Nos planteamos en este apartado ilustrar a través de un ejemplo una de las formas en las que opera el par excluidos-incluidos. Fundamentalmente queremos destacar que “la exclusión” es una forma de inclusión subordinada que garantiza a partir de su presencia oscura, la reproducción del capital en su fase neoliberal. El objetivo central perseguido es lograr la re-mercantilización del trabajo. Por ello afirmamos: se trata de “disminuir los costos laborales” pero en el sentido de asegurar la eliminación del componente político que puede transformar al salario “en variable independiente”.³²

Podemos observar que es esta una suerte de “reparación histórica” al capital; el neoliberalismo viene a garantizar que los salarios vuelvan a regirse por “las leyes de la oferta y la demanda”. En una entrevista realizada a Von Hayek se puede observar esta intencionalidad cuando dicho exponente teórico del neoliberalismo se refiere al “keynesianismo”.

Reason: La fórmula económica Keynesiana procura una relación simbiótica, casi perfecta, con las fuerzas políticas del estado de bienestar moderno. ¿En qué punto puede romperse esta unión? ¿Cómo puede el Keynesianismo ser derrotado políticamente?

Hayek: Realmente debo comenzar con el propio Keynes. Keynes se desesperó en los años 20 por la posibilidad otra vez de hacer flexibles a los salarios **Arribó a la conclusión de que debemos aceptar a los salarios**

³² Ver Negri (2003).

como son y ajustar la política monetaria a la estructura salarial existente. Eso, por supuesto, lo obligó a decir "No deseo ninguna restricción en la política monetaria porque tengo que ajustar la política monetaria a una situación dada".

Pero él pasó por alto que, en ese mismo momento, los sindicatos sabían que el gobierno estaba bajo la obligación de corregir el efecto de la política sindical, y es así que obtuvimos una espiral desesperada. Los sindicatos presionan hacia arriba los salarios, y el gobierno tiene que proporcionar el dinero suficiente para mantener el nivel de empleo a ese nivel de salarios, y esto conduce a una espiral inflacionaria. Esto surge de las consideraciones prácticas de Keynes en el corto plazo -- que no podemos hacer nada respecto de la rigidez de salarios. De hecho, los Británicos en los años 20 estaban muy cerca del éxito. El muy doloroso, y tonto, proceso de la deflación era casi exitoso por completo en el final de la década del 20. Entonces, se asustaron por el largo periodo de desempleo. Creo que si hubieran durado un año o dos más, probablemente habrían triunfado" (la negrita es nuestra).

En nuestro país el genocidio estatal de la dictadura militar, el desmantelamiento industrial y el desempleo masivo coincidieron en el objetivo de subordinar el trabajo. Pero volviendo a nuestro recorte temporal, nos gustaría mostrar cómo operó la exclusión, en tanto presencia oscura, como amenaza y elemento disciplinador de los incluidos. Para ello vamos simplemente a ilustrar una de las formas de operar del par "excluidos-incluidos".

Durante los noventa se sancionaron diversas reformas laborales que alteraron profundamente la naturaleza protectoria del derecho individual y colectivo del trabajo. Sabemos que dichas reformas perseguían el objetivo de reducir los denominados "costos laborales".

El derecho del trabajo hasta entonces vigente, edificado trabajosamente al calor de intensas luchas sociales, comenzó a erosionarse y cedió lugar a una infinidad de normativas que disminuyeron los costos laborales, degradaron la estabilidad laboral y permitieron la fragmentación del colectivo del trabajo al facilitar políticas de individualización de las relaciones laborales.³³

Es interesante destacar que dichas reformas construyeron un discurso ideológico que proclamaba la "defensa de los excluidos", "de los que tienen

³³ Una de las reformas más polémicas de la década se produjo con la sanción de la Ley 24.013 (1991), que introdujo nuevas modalidades de contratación a plazo fijo vulnerando el principio de estabilidad laboral; asimismo, se disminuía el costo laboral al reducir drásticamente o hasta eliminar las contribuciones patronales y las obligaciones indemnizatorias.

hambre”, “de los elementos externos” –según el hablante. Es decir, que las reformas que proponían la más brutal desprotección del trabajo en diversos institutos (contrato de trabajo, indemnización por despido, vacaciones, negociación colectiva, etc.) fueron “justificadas” en pos de lograr la inclusión de los excluidos.

La mayoría de dichas reformas fueron el resultado de presiones muy fuertes ejercidas por los organismos internacionales e implementadas sin resistencias por parte de las autoridades locales. En un informe elaborado por el FMI (1993) se sostiene que:

un desempleo alto y en aumento no se debe a una competencia excesiva ni al ritmo vertiginoso de las innovaciones tecnológicas. Es más probable que sea obra de mercados de trabajo inflexibles y de la falta de competencia (...) La solución del desempleo persistentemente alto debe buscarse principalmente en el área de las políticas estructurales. Hay que efectuar reformas que aumenten la flexibilidad de los trabajadores y de los mercados – sobre todo los de trabajo (...) es urgente reexaminar el financiamiento y la generosidad global de los planes de seguro social a fin de eliminar las características que desalientan la creación de empleos por elevar los costos del trabajo a cargo del empleador en relación con la remuneración de los empleados y que reducen los incentivos para que el desocupado se emplee (...) debe impedirse que a consecuencia del poder de mercado de las personas actualmente empleadas —“**los elementos internos**”— el nivel del salario real sea demasiado alto para que los desempleados — “**los elementos externos**”— puedan encontrar trabajo (la negrita es nuestra) (FMI, 1993: 70-72).

Unas líneas después, se acusa a quienes siguen “defendiendo la rigidez de la normativa laboral” y de esta forma sólo imponen “un beneficio social para los recursos humanos empleados, que quedan protegidos de la competencia de los desempleados, y no para toda la sociedad” (*ibid.*: 72).

Resultan particularmente interesantes estas afirmaciones expresadas por el FMI porque nos permitieron encontrar los sentidos e intereses de las argumentaciones de diversos funcionarios del Estado nacional, en ocasión del tratamiento legislativo de reformas laborales de índole flexibilizador durante la década en cuestión.

Específicamente, durante el debate parlamentario de un proyecto de reforma laboral en 1991,³⁴ el Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores sostiene que: “de alguna manera el proyecto trata de contemplar no la situación de aquellos compañeros que tienen trabajo sino de los compañeros que no lo tienen”. “(...) Considero que no es tan precisa la denominación (se refiere a ‘flexibilización’), porque el sólo hecho de que pretendamos dar mayor cantidad de empleo no significa flexibilizar, sino tener pleno conocimiento de que no podemos legislar únicamente para los que tienen para comer. También hay que legislar para los que tienen hambre” (Sdor. Britos).

En primer lugar, se intentó situar la argumentación a partir de la construcción de una disyuntiva entre dos sectores sociales: trabajadores y desocupados. Desde una forma particular de describir la “realidad social” se afirma que la situación de padecimiento de los desocupados o de los “elementos externos” es el resultado de una legislación excesivamente favorable a los trabajadores o “elementos internos”. De este modo, se alienta un enfrentamiento entre dos grupos sociales que ocupan estructuralmente una misma posición subordinada respecto al capital.

Anteriormente nos referimos al ejercicio de la visibilidad que opera a través del par excluidos-incluidos; la especificidad de las reformas laborales que atacaron tanto el derecho individual como el colectivo, se justificaron únicamente con base en la existencia de excluidos. En este caso “los incluidos” coinciden directamente con los trabajadores; queremos decir que en el acto de develamiento de quiénes son los incluidos; se afirma que son los trabajadores.

Lo velado por la unidimensionalidad del pensamiento único es entonces la división que define el nos-otros de la relación laboral: el capital y el trabajo. La noción de incluidos engloba “todo” lo que no es exclusión. Sin embargo, lo que se ilumina, lo que se hace existir de la categoría de “inclusión”, son únicamente los sectores trabajadores.

Cuando antes nos referimos a las formas de operar del neoliberalismo en tanto proyecto político del capital, definimos que “lo excluido es una segmentariedad establecida por el capital que se constituye como amenaza disciplinadora de lo incluido”. Podemos entonces decir ahora que dicha amenaza opera sobre los incluidos sólo en tanto trabajadores. Los inclui-

³⁴ Dicho proyecto de reforma fue aprobado y sancionado en 1991, y se trató de una de las leyes que más fuertemente atacó los principios protectorios del derecho individual del trabajo. Actualmente se encuentra parcialmente derogada.

dos, *trabajadores asalariados*, son responsabilizados por la situación de carencia de trabajo de los excluidos. Los actos de iluminación pueden de esta manera instituirse en ambos polos de la demarcación social “excluidos- incluidos”.

EL ACONTECIMIENTO PIQUETERO Y LA LUCHA POR LA VISIBILIDAD

Creo que los piquetes hicieron estallar la apatía, pero de una manera alternativa. Sacudimos el país de los dulces sueños que Menem y toda esa política, y fuimos como el estallido de una nueva luz...

(MTD de Solano - Colectivo Situaciones, p.54)

Con anterioridad cuestionamos las perspectivas sociológicas que perpetuaban la forma de dominación neoliberal al conminar a los excluidos a la reproducción de su estado. Bourdieu llegó a afirmar, incluso, por la redundancia en esa sentencia teórica, que las diversas maneras de organización de los desocupados se transforman en un “milagro sociológico”.

Finalmente llegamos al núcleo central que motivó la escritura del presente ensayo. El neoliberalismo, como específico histórico de un modo de dominación social, requiere de la existencia de una segmentariedad de excluidos en tanto presencia oscura. Los sujetos sometidos a esa oscuridad, cosificados en dicha condición, irrumpen como sujetos vivientes cuando logran instalar la lucha por la visibilidad y de esta forma amenazan con subvertir el orden de oscuridad neoliberal. Recuperar la visibilidad significa entonces hacer emerger las relaciones de explotación vigentes en el capitalismo neoliberal.

Nos proponemos pensar, en lo que sigue, de qué manera la exclusión es resistida en la Argentina de los noventa. Dicha resistencia no supone la conquista de la visibilidad de una vez y para siempre. Sin embargo, es interesante destacar que su emergencia en una espacialidad del mercado —la ruta— produce un cambio profundo en el acto de categorización de excluido.

Los excluidos se han transformado en piqueteros. El afuera al que eran condenados por el orden neoliberal, los elementos externos como los prefieren designar el FMI, reaparecen empujados por el hambre y la miseria en un espacio neurálgico del capital: la circulación de las mercancías.

Negados los espacios de la producción y el consumo, irrumpen en el adentro mercantil para interrumpir la circulación de unas mercancías que no produjeron y que tampoco consumirían. La ruta bloqueada por la organización colectiva de los trabajadores discute las “libertades económicas”.

Los piqueteros niegan el papel que la reproducción del capitalismo neoliberal requiere a los excluidos: su presencia oscura. Podríamos afirmar que el corte de ruta es un “paro de oscuridad”. El corte de ruta significa parar la reproducción del papel que les es asignado-impuesto socialmente en tanto “presentes oscuros”.

Asimismo, expresa una simple suspensión en la reproducción de ese orden: la visibilidad se sostiene durante el corte de ruta. Los piqueteros suelen referirse con insistencia a la idea de “poner el cuerpo” para sostener su lucha. Efectivamente queremos destacar ese otro elemento de la organización colectiva de los trabajadores desocupados que es el costo de esa lucha. Parar la ruta, parar la circulación de mercancías para parar en su “condición de oscuros” supone *exponer* sus cuerpos.

La desocupación en tanto condición social había surgido como estado individual. Los trabajadores que perdían sus empleos los perdían “solitariamente”. El capital les negaba la única fuente de supervivencia al inutilizar su fuerza de trabajo, mostrando de esta forma su inconmensurable poder mortífero. Un proceso arduo de construcción de subjetividades es el antecedente de “ese estallido de una nueva luz” en las rutas. Entonces, otro elemento que se expresa en el corte de ruta; es también el “paro” en su existencia individual.

Si los excluidos materializaban una amenaza para los incluidos, su devenir en piqueteros los transforma en una amenaza para el capital en la medida que visibles y organizados colectivamente resisten las “garantías” de la reproducción ampliada del capital.

La visibilidad política adquirida deberá enfrentarse una y otra vez con un dominio que apelará desde su posición dominante simultánea y alternativamente a sostener el orden neoliberal, a partir de la manipulación de esa visibilidad. Una nueva morfología de la intervención social —regímenes táctiles y semánticos del poder— será construida una vez desatadas las luchas oculares.

Sostenemos, entonces, que una vez derruida la ficción de la exclusión, en tanto oscuridad, el neoliberalismo se ve obligado a reinventar el ejercicio de su dominio en pos de garantizar la reproducción del orden social. Se

seguirá apelando a prácticas visuales pero éstas adquieren necesariamente, por imperio de la organización colectiva de los trabajadores desocupados, características muy divergentes. La imposición de oscuridad comienza a encontrar sus límites, el “poder de dejar morir” es resistido por quienes luchan por sobrevivir y haciéndose visibles revelan la profunda contradicción sobre la que se erige el orden neoliberal.

En los próximos apartados analizamos dos formas de intervención estatal sobre esa realidad visible que operan de manera simultánea: a una la denominamos “intervención extorsiva” y a la segunda “intervención represiva”.

INTERVENCIÓN EXTORSIVA: TRANSITORIEDAD DE LA “ASISTENCIA”

A mediados de los noventa comienzan a implementarse políticas focalizadas dirigidas a los trabajadores desocupados. Dichas políticas se asientan sobre ciertos supuestos que aparecen inexplicitados. En primer lugar, la exclusión surgida como contrapartida del desempleo es asimilada a una carencia individual de los individuos: la falta de educación y capacitación para desempeñarse en el trabajo. Es el discurso de la obsolescencia en los momentos de “la tercera revolución tecnológica”. Por este motivo circulan redundando construcciones discursivas que hablan de “mejorar la empleabilidad”.

En segundo lugar, es interesante vislumbrar una paradoja del discurso dominante; en principio las políticas focalizadas se instrumentan a partir de los denominados “Programas de Empleo Transitorio”. La paradoja resulta de observar por un lado una demarcación dualizada de la sociedad con un adentro y un afuera, la sociedad de los “excluidos-incluidos” y por otro lado, fundamentalmente desde la “teoría económica neoliberal” se reproducen los discursos de antaño que conciben el desempleo como “fenómeno transitorio” o friccional.

El primer supuesto, desocupados por obsoletos, da cuenta de un primer momento de definición de la desocupación que pretende que la reproducción de dicho estado siga a la vez garantizando la ruptura vincular entre los propios afectados. Los desocupados son entonces culpabilizados individualmente y sus esfuerzos deberán encaminarse a lograr la mejora de su *empleabilidad*.

La intervención material del Estado neoliberal, instrumentada a partir de los Programas de Empleo Transitorio, es el resultado de la gestación

de vínculos entre los desocupados, de su inesperada organización, de su capacidad de resistencia y del poder adquirido a partir de haber logrado instituir un espacio de protesta —la ruta— que obstaculiza el ejercicio de las más consagradas y proclamadas libertades económicas. Como lo afirma Dahrendorf (1974), y probablemente sea esta una de las pocas tesis que compartimos con dicho autor, el capitalismo tiende a institucionalizar las formas de expresión de los antagonismos de clase con el objeto de suavizar y contener la intensidad del conflicto social.³⁵ En este sentido, los desocupados organizados y el corte de ruta como mecanismo de protesta, se encuentran fuera de toda regulación estatal y, por ello, su potencial transformador y amenazante para el orden neoliberal.

A partir de estas reflexiones, nos surgen las siguientes interrogantes ¿en qué medida los programas de empleo pretenden una regulación del conflicto social?, ¿de qué forma su débil institucionalización permite al Estado neoliberal suavizar la intensidad del conflicto?, ¿cuáles fueron las resistencias de las organizaciones piqueteras y de qué manera lograron resignificar los objetivos estatales de dichas políticas?

Queremos destacar que la “transitoriedad” de la asistencia estatal a los desempleados se transforma en un mecanismo de “extorsión”. La imposibilidad de sostener ya a mediados de los noventa la exclusión como presencia oscura, lleva a una intervención estatal que pretende establecer formas de contención del conflicto a partir de “ayudas” condicionadas por esa “transitoriedad”. La inclusión de los desocupados a los programas de empleo se organiza a partir de proyectos de duración limitada³⁶ a cargo de “organismos responsables” que, en la mayoría de los casos —por las “exigencias” de la propia reglamentación—, son los municipios.³⁷

³⁵ El surgimiento del derecho colectivo del trabajo es un ejemplo de las características que adquieren dichas formas de regulación. Específicamente podríamos reflexionar sobre la reglamentación del derecho de huelga y el establecimiento de instancias de “conciliación obligatoria”.

³⁶ Los proyectos de los diversos Programas de Empleo Transitorio tienen una duración de entre 3 y 6 meses. Para obtener más información sobre las características de dichos programas ver Svampa, M. y Pereyra, S. (2003); especialmente capítulo 2, parte III: “Organizaciones piqueteras, gobiernos nacionales y planes sociales: los avatares de una relación difícil”.

³⁷ Los Programas de Empleo (especialmente nos referimos al Trabajar y al Programa de Emergencia Laboral) establecían la figura de un “organismo responsable” a cargo de la ejecución del proyecto. Asimismo, según los programas, dichos organismos debían poseer personería jurídica, una antigüedad mínima en dicha personería, asegurar la provisión de insumos y materiales para la ejecución, el dictado de cursos de capacitación, experiencia

Los montos de las ayudas³⁸ garantizan la reproducción de la miseria (son programas de simple "contención de la pobreza"), pero también permiten la supervivencia de quienes los perciben. Una supervivencia particular que literalmente puede evitar la muerte pero supone una vida cimentada en la desnutrición, la enfermedad y la indignidad humana.

Se trata de un instrumento estatal que manteniendo la arbitrariedad a partir de su falta de institucionalización,³⁹ actúa sometiendo la visibilidad de los desocupados organizados. Con esto queremos decir que los denominados "planes" se intercambian por la desmovilización de los piqueteros. La extorsión consiste en lograr la cesión permanente de esa visibilidad recuperada.

La intervención estatal extorsiva cumplió parcialmente con los objetivos que se había propuesto. Los dispositivos de dominación que se crearon para la ejecución de los proyectos (transitoriedad y una reglamentación que tendía a habilitar mayoritariamente a los municipios como "organismos responsables") fueron desafiados y, entonces, se neutralizaron sus efectos disciplinadores. En primer lugar, la "transitoriedad" de la condición de beneficiario resultó fuertemente cuestionada. Los cortes de ruta se acrecentaron toda vez que el Estado pretendía "dar de baja beneficiarios de empleo". La relación extorsiva impuesta tendía de este modo a invertirse cuando peligraba la percepción de la "ayuda no remunerativa". Las llama-

en el desempeño de actividades conexas a las propuestas en el proyecto etc. Los diversos requisitos actuaban de modo tal de obstaculizar la posibilidad de que organizaciones de base pudieran constituirse en "organismos habilitados" para realizar las presentaciones. También en caso de que las organizaciones cumplimentaran los requisitos legales (personería jurídica y antigüedad de la misma) posteriormente podían ser rechazados sus proyectos en el proceso de evaluación, ya que entre sus criterios centrales se establecía la viabilidad técnica, logística y financiera de los Organismos Responsables.

³⁸ Los Programas de Empleo (mayoritariamente, exceptuamos, por ejemplo, al Trabajar con materiales) sólo financiaban las "ayudas económicas no remunerativas" que oscilaban entre \$120 y \$200.

³⁹ En la nota anterior (8) establecimos algunos de los "requisitos" que podían inhabilitar a los Organismos Responsables. Asimismo, otros criterios tales como "Nivel de pobreza y conflictividad de la zona de ejecución del proyecto", "Cobertura de población meta del Programa", "Calidad y pertinencia del proyecto", etc. funcionaban como mecanismos que por su ambigüedad permitían una gran discrecionalidad para la aprobación de los mismos. Es importante destacar que las entidades responsables de llevar a cabo los procesos de evaluación son las "Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral" que dependen directamente del Ministerio de Trabajo de la Nación quien designa directamente a los Gerentes.

das “plantas transitorias de empleo” devenían así en “plantas permanentes”. En segundo lugar, las organizaciones de trabajadores desocupados lograron gradualmente sortear también la multiplicidad de “requisitos” que les impedían constituirse en “organismos responsables de los proyectos”, y de esta forma también fortalecieron sus vínculos al compartir no sólo el espacio de la lucha política en la ruta y en las asambleas⁴⁰ sino también en los barrios generando múltiples experiencias comunitarias. En tercer lugar, esta dimensión territorial acrecentó su capacidad organizativa a partir de la cual comenzaron a establecer nuevas reivindicaciones: la generación de emprendimientos productivos de diversa índole que permitieron a las organizaciones piqueteras formular nuevas consignas políticas tales como “la nueva fábrica es el barrio”⁴¹ o la de “crear una economía alternativa”.⁴²

INTERVENCIÓN REPRESIVA Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

La coerción se convierte en determinante y dominante en la crisis suprema, y el ejército ocupa inevitablemente la vanguardia en cualquier tipo de lucha contra el proyecto de inauguración real.

PERRY ANDERSON (1981:74)

En el límite... la intervención represiva. Es esta la tesis que queremos sostener en el presente apartado. El corte de ruta se asocia al delito; las interpelaciones se realizan a partir de la criminalización de la protesta social. La forma de operar es descomponiendo y falseando la visibilidad de la protesta: neumáticos quemados, caras tapadas y palos son los emergentes que focaliza y amplifica, en última instancia, el ejercicio visual neoliberal cuando “prepara” su redespliegue hacia la represión.

⁴⁰ No hicimos referencia en el presente artículo a la “asamblea” como instrumento de construcción de un sentido colectivo de los trabajadores desocupados organizados. Sin embargo, esta modalidad resulta muy significativa para el desarrollo de sus luchas políticas.

⁴¹ Ver Cross (2004).

⁴² Ver MTD de Solano Y Colectivo Situaciones (2002).

Perry Anderson agrega, a lo citado en el epígrafe, que “el poder capitalista puede considerarse, en ese sentido, como un sistema topológico con un centro ‘móvil’: en cualquier crisis se produce un redespliegue y el capital va a concentrarse de sus aparatos representativos a los represivos” (*ibid.*: 74).

Lo expresado por Anderson, en ocasión de su análisis del concepto gramsciano de hegemonía, ubica muy bien el “momento” de la represión, de la violencia aunque también podemos afirmar que oscurece la multiplicidad de elementos que conforman una suerte de dispositivo de dominación del neoliberalismo; que —como lo analizamos a lo largo del artículo— opera a través de un complejo número de elementos en las tramas relacionales que construye con los sectores subalternos (“los excluidos”); dispositivo que combina: oscuridad, individualización; culpabilización, extorsión, criminalización... y también represión. Hecha esta aclaración, retomamos su afirmación respecto a situar “la fuerza” como el último determinante del sistema de poder.

No nos referimos ahora “al poder de dejar morir” que se ejercita cuando se inutiliza fuerza de trabajo, sino particularmente al “poder de reprimir, de matar”. Para llevarlo a cabo se requiere de la construcción de una “fisonomía del piquetero”. Los rasgos o las marcas de ese “identikit” (perdonen la metáfora penal) son los elementos que pueden ser recreados como insignias de la violencia. De nuevo: el humo, el fuego, algún vidrio roto, los pañuelos que cubren las caras, los palos; etc. Podríamos afirmar que es éste el momento visual y semántico de la intervención represiva; durante el cual se devela la “peligrosidad” de la protesta y, por tanto, de sus protagonistas: los piqueteros.

Por un lado, la “peligrosidad” piquetera como develamiento que funciona a partir de la descomposición de la visibilidad de la protesta. Sin embargo, podemos ubicar también otra anticipación de la intervención represiva en la tentativa de instituir una división entre “los piqueteros”: “los buenos y los malos”, “los violentos y los pacíficos”, “los ideologizados y los que realmente tienen necesidades”.

Es pertinente preguntarnos por qué no es posible constituir una asimilación entre el conjunto de los piqueteros y la violencia delictual. Este aspecto es interesante pero, debemos reconocer, inabarcable para los objetivos que nos propusimos en el presente trabajo. Empero, planteamos la siguiente reflexión.

En principio, afirmamos que la imposibilidad de asociar completamente “piqueteros-violentos” o mejor dicho la imposibilidad de afirmar “todos

los piqueteros son violentos” se basa en los límites que la propia resistencia, que la lucha sostenida por la visibilidad marcaron al Estado neoliberal.

Quizá sea entonces el momento adecuado para explicitar la concepción de estado⁴³ que manejamos como “supuesto teórico” en este artículo, especialmente desde que nos referimos a las diversas formas de intervención estatal. Retomamos para ello los desarrollos de Poulantzas en tanto entendemos que el Estado, al igual que sucede, por lo demás, con el capital, “debe ser considerado como una relación, más exactamente como la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase tal como éstas se expresan, siempre de modo específico, en el seno del Estado” (Poulantzas, 1980).

Explicitamos muy brevemente algunos elementos que se desprenden de la concepción adoptada para después aproximarnos a brindar una respuesta parcial al interrogante que nos formulamos. Analizamos en este momento la relación particular que podemos establecer entre el Estado y las luchas populares.⁴⁴

1. El Estado en tanto relación condensa no sólo la relación de fuerzas entre fracciones del bloque en el poder, sino igualmente la relación de fuerzas entre éste y las clases dominadas.
2. Las luchas políticas de los sectores subalternos tienen siempre efectos, esta vez “a distancia”, en el Estado.
3. Los aparatos del Estado organizan-unifican el bloque en el poder desorganizando-dividiendo permanentemente a las clases dominadas, polarizándolas hacia el bloque en el poder y cortocircuitando⁴⁵ sus organizaciones políticas propias.

Los elementos enumerados son sólo una selección del complejo y enriquecedor desarrollo realizado por Poulantzas. No obstante, creemos que suficientes para especificar nuestra posición respecto a la imposibilidad del

⁴³ La noción de “Estado” es discutida más ampliamente en un artículo que cuestiona la concepción de “Estado social” de Robert Castel. Ver Abal Medina y Cross (2003).

⁴⁴ Ver Poulantzas (1980), especialmente el capítulo “El Estado y las luchas populares”.

⁴⁵ La expresión “cortocircuitando” es copiada textualmente del libro de Poulantzas (1980).

Estado neoliberal para asimilar, sin criterios selectivos, a los piqueteros con la violencia.

El crecimiento cuantitativo de los piqueteros, el cualitativo en términos de consolidación y expansión de la organización colectiva, la cada vez mayor centralidad política en función de demandas que atacaban más fuertemente el sistema neoliberal; permitieron —hacia finales de los noventa— un mayor sostenimiento de su visibilidad en tanto sujeto político (volviendo entonces ya más fugaces y esporádicos las etapas de “retirada” a la oscuridad). En cada momento de predominio de uno u otro elemento del dispositivo de dominación neoliberal, los desocupados visibilizados y organizados opusieron resistencias oculares, semánticas y táctiles; creando una compleja trama de relaciones que abarcaba momentos de desarrollo, de coexistencia, de sometimiento, de choque, de desometimiento.

Si como lo afirma Poulantzas el Estado se encuentra atravesado por las luchas populares, y si las mismas siempre poseen efectos sobre éste, podemos señalar que su centralidad establece un límite a su accionar y particularmente a la posibilidad de “enfrentar” toda esa visibilidad, por medio de una intervención represiva. La pretensión de instituir fracturas internas en el “movimiento piquetero” a partir de actos de categorización selectivos que afirman la existencia de “piqueteros violentos” y el uso de la represión como recurso de última instancia; comienzan a delinear, a nuestro entender, el máximo nivel de las contradicciones internas del Estado neoliberal.

REFLEXIONES FINALES

Las reflexiones finales son siempre complejas en un texto que adoptó fundamentalmente la forma de un ensayo. Porque a lo largo de estas líneas hemos realmente *ensayado* un “recorrido” que nos permitiera interpelar el devenir de la exclusión como constructo ideológico del capitalismo neoliberal en “visibilidad política”, expresada por la organización colectiva de los trabajadores desocupados. Nos parece que ese recorrido contiene necesariamente imprecisiones, preguntas y problemas irresueltos.

Por estos motivos queremos insistir en los límites de esta escritura. Si nuestra intención ha sido la de evidenciar este pasaje del “objeto exclusión” al “sujeto piquetero”; el mismo carece de linealidad y está atravesado por las complejas tramas de dominación que siguen caracterizando el predominio del orden neoliberal y su forma particular de reproducir las relaciones de explotación. En todo caso los senderos de subjetivación abiertos por las

luchas colectivas construyen nuevas geografías que *resisten* las fronteras demarcadas, que *resignifican* los sentidos pero que también indefectiblemente *reproducen* ese dominio. No se trata de proclamar ninguna suerte de determinismo; simplemente queremos evitar la minusvaloración de un orden social que permaneció dosificado e incuestionado durante muchos años.

El neoliberalismo recreó tecnologías de dominación materiales y simbólicas. La remercantilización del trabajo se sustentó sobre una nueva demarcación social de "excluidos-incluidos". La imposición de una presencia oscura — presente pero no descifrable— la individualización y responsabilización de los excluidos-desocupados, la culpabilización de los incluidos-trabajadores, la transitoriedad de la asistencia estatal en pos de "contener el conflicto social", la criminalización de la protesta social y de los sujetos de la protesta en tanto piqueteros, la estigmatización selectiva de ciertas organizaciones de trabajadores desocupados y la intervención estatal represiva, son los elementos de un dispositivo de dominación que es, sin duda, mucho más vasto y complejo. Si bien es cierto que se pueden establecer ciertas temporalidades en la sucesión de cada uno de estos elementos, esto es únicamente en tanto predominantes en ciertos momentos del desarrollo neoliberal; sin embargo, la particularidad es su coexistencia.

La organización colectiva de los trabajadores desocupados, la lucha por la visibilidad, el paro en las rutas, la inversión de la extorsión frente a las políticas estatales de asistencia transitoria, la emergencia de nuevas reivindicaciones, actuaron de tal modo para debilitar la "eficacia" de los elementos referidos del dispositivo de dominación neoliberal e hicieron emerger "un estallido de nueva luz" que delataba las nuevas formas de organización de la producción capitalista.

Sin embargo, hasta aquí hemos relatado fundamentalmente las diversas tecnologías de dominación que el neoliberalismo dirigió a los excluidos y las resistencias que los mismos opusieron a la pretensión de reproducirlos en dicha condición. No hemos, en cambio, analizado los elementos que actúan sobre los "incluidos"; simplemente hemos afirmado que los constituye la amenaza de la "exclusión", y ubicado ciertos actos de iluminación selectiva de los incluidos en tanto trabajadores.

La exclusión discutida, múltiples grietas y fisuras que erosionan el orden neoliberal; no obstante, la "inclusión" parece transformarse en una demarcación indiscutida, que se reproduce clausurándose. Este ensayo no puede terminar sin abrir, entonces, nuevas interrogantes: ¿cuáles son los elementos del dispositivo neoliberal que nos permiten dar cuenta de la forma de reproducción de la dominación entre los incluidos?, ¿en qué medida

la resistencia al par exclusión-inclusión requiere la gestación de fisuras en ambos lados de esa demarcación?, ¿cómo se resignifica ese par frente al "pasaje" objeto-exclusión y sujeto piquetero? Una última interrogante se vincula directamente con los sucesos de diciembre de 2001: ¿se puede sostener que en ellos se expresó una protesta social que resistió la categorización de "incluidos"?, ¿cómo dar cuenta de la "realidad sumergida" de esa expresión de protesta?, ¿expresaron esos acontecimientos un límite al componente represivo del Estado neoliberal?

BIBLIOGRAFÍA

- Abal Medina, P. y C., Cross (2003), "Los trabajadores desocupados frente al derrumbe de la sociedad salarial. Repensando las categorías de Robert Castel a partir del surgimiento de las organizaciones piqueteras", en *Sexto Congreso Nacional de Estudios del Trabajo (ASET)*, publicación en CD.
- Anderson, P. (1981), *Las antinomias de Antonio Gramsci. Estado y revolución en Occidente*, Barcelona: Fontamara.
- Castel, R. (1997), *La metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires: Paidós.
- Cross, M. C. (2004), "La Federación de Tierra y Vivienda de la CTA: El sindicalismo que busca representar a los desocupados", en Battistini, O. (comp.), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores*", Prometeo.
- Dahrendorf, R. (1974), *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*, Madrid: Rialp.
- Debates parlamentarios (1991), Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, Tratamiento Ley 24.013 (versión taquigráfica).
- Fondo Monetario Internacional (1993), *Perspectivas de la economía mundial*.
- Foucault, M. (1973), *Raymond Roussel*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1989), "El ojo en el poder", en Bentham, J., *El Panóptico*, Madrid: La Piqueta.
- Foucault, M. (1991), "Nuevo orden interior y control social", en Foucault, M., *Saber y Verdad*, Madrid: La Piqueta.

- Jay, M. (1988), "En el imperio de la mirada: Foucault y la denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX", en Couzens Hoy, D. Foucault, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Jay, M. (2003), Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural, Buenos Aires: Paidós.
- Lenguita, P. (2002), "El poder del desempleo. Reflexiones críticas sobre la relevancia política del movimiento piquetero", en Battistini, O. (comp.), *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*, Buenos Aires: Trabajo y Sociedad.
- MTD de Solano y Colectivo Situaciones (2002), *La hipótesis 891. Más allá de los piquetes*, Buenos Aires: Ediciones Mano a Mano.
- Negri, T. (2002), Crisis de la política. Escritos sobre Marx, Keynes, las crisis capitalistas y las nuevas subjetividades, Buenos Aires: Ediciones El Cielo por Asalto.
- Poulantzas, N. (1980), *Estado, poder y socialismo*, Madrid: Siglo XXI.
- Svampa, M. y S., Pereyra (2003), Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires: Biblos.
- Von Hayek, F. (1977) Entrevista realizada por Hazlett, T. y publicada en la revista *Reason*. Publicación electrónica.

PIQUETEROS: LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LA POLÍTICA ESTATAL

Clara Bressano, Mariana Galvani y Sebastián Guevara

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN ARGENTINA

En los últimos 25 años la escala de la acumulación de capital en Argentina sufrió una contracción, la cual se profundizó de manera singular en la última década.⁴⁶

Esta reducción de la economía se manifestó principalmente en las políticas públicas implementadas a principios de los '90, políticas que inmediata y mediatamente hicieron crecer la tasa de desocupación. La sobrevaluación del peso y la apertura comercial provocaron el abaratamiento de las importaciones que impidieron la competencia en el mercado interno de las industrias locales, impacto que generó el cierre de muchas de estas industrias y la reducción de otras. En el mismo sentido, el proceso de privatizaciones de las empresas de servicios e industrias públicas permitió que las nuevas gestiones privadas redujeran el personal de planta.

Es en este escenario de (re)estructuración capitalista que, en la Argentina bajo el "Plan de Convertibilidad" implementado por la administración

⁴⁶ Un claro ejemplo de esto es lo expresado por Iñigo Carrera: "La siguiente comparación da una imagen inmediata de la magnitud y significación del achicamiento de la economía argentina. En términos puramente internos, el valor del PIB de la Argentina alcanzaba en el [periodo] 60/74 para comprar mensualmente 18 millones de las canastas de bienes y servicios sobre las que se computa el índice de precios al consumidor. En el 75/89, equivalía a los 24 millones de canastas. En el promedio del periodo 90/01, sólo alcanza para comprar 22 millones de canastas. Al mismo tiempo, la población promediaba los 23 millones en el 60/74, 29 millones en el 75/89, para alcanzar los 34 millones de personas en el promedio del periodo 90/00. Estas evoluciones relativas implican una equivalencia de 0,77 canastas por habitante por mes en el periodo 60/74, de 0,84 en el periodo 75/89 y de sólo 0,64 en el periodo 90/00. Para el año 2001 esta equivalencia ha caído a 0,61 canastas". Iñigo Carrera, p. 10.

Menem, la desocupación sufre un aumento de 18.4% en 1995. Cifra significativa si consideramos que a principios de los '90 ascendía sólo a 8.6%.⁴⁷

Lo que el gobierno, durante esos años, pretendió mostrar como un efecto transitorio, una disrupción en el modelo, en realidad era parte constitutiva del mismo: fuerte redistribución regresiva de la riqueza, mayor pauperización y desestructuración del mercado de trabajo. En este sentido coincidimos con el análisis del economista Claudio Lozano:

El Plan de Convertibilidad logró dos aspectos en lo relativo al costo laboral, por un lado encarecerlo en dólares, y por otro transformarlo en prácticamente el único costo de la economía argentina (...) El impacto de la política oficial sobre los costos laborales, expresado en su encarecimiento relativo con respecto a otros factores y en su transformación en el único costo susceptible de ser reducido; y la consolidación de una salida exportadora divorciada de la ampliación del mercado interno, son argumentos suficientes para demostrar tanto la organicidad de la tasa de desempleo con el modelo económico y los agentes que la sostienen, como la funcionalidad de los niveles elevados de desocupación con el objetivo principal de la política oficial cual es el descenso de los costos laborales.⁴⁸

Esta política económica se torna insostenible, entra en crisis, y estalla junto con el gobierno de la Alianza en diciembre de 2001.

La desocupación asciende para mayo del 2002 a 21.5% de la población económicamente activa, y supera 40%, si tomamos en cuenta el subempleo.⁴⁹ Así, desde diferentes expresiones políticas los signos de la retracción se hicieron visibles a través de las cifras de los salarios⁵⁰ y el empleo. Si bien, el crecimiento de la desocupación en la Argentina puede ser entendido como

⁴⁷ Fuente: Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

⁴⁸ Lozano y Feletti (1995: 37).

⁴⁹ Fuente: EPH.

⁵⁰ Ya que, al caer los salarios a 44% del nivel alcanzado en 1974 aún más bajo que el descenso producido en plena dictadura militar, para mantener las condiciones de vida más miembros de la familia obrera deben salir en busca de empleo. Lo que se muestra en el crecimiento de la Tasa de Actividad (de un 39.1% en 1991 a un 45.7% en 2003 según datos de la EPH).

condición normal de la acumulación de capital, es decir, un momento más en la formación del ejército industrial de reserva;⁵¹ no hay que pasar por alto las condiciones en las que se desarrolla este proceso. Nos encontramos aquí frente a un crecimiento del desempleo que no se da en el marco de una expansión general de la economía, si no que, por el contrario, se enmarca en la contracción que venimos indicando, donde la desocupación no equivale a la población que fluctúa su inclusión en el mercado, sino la constitución de una parte de éste que difícilmente vuelva a estar incluida en el sistema productivo.⁵²

El desempleo adquiere así carácter de estructural ya que, frente al contexto de desindustrialización profundizado en el último periodo, pocas son las perspectivas de reinserción laboral genuinas. Es en este sentido que la existencia como factor permanente de este ejército industrial de reserva se constituye en un efectivo instrumento de *disciplinamiento social*, permitiendo que la venta de la fuerza de trabajo se realice sistemáticamente por debajo de su valor.

Es en este marco de crisis y pauperización que distintos sectores de trabajadores, ocupados y desocupados, articularon políticas de resistencia. En un principio estas políticas estaban relacionadas sólo con los efectos locales de las privatizaciones, regiones enteras que perdieron su fuente de sostén fueron protagonistas de distintos tipos de revueltas populares. Frente al crecimiento de la desocupación y la miseria, estas resistencias se generalizaron, tomando distintas formas. Son los "piqueteros", una parte de los desocupados que se organizan políticamente, los que se constituyen en una expresión de resistencia frente a la muerte segura que implica el desempleo, cobrando visibilidad en el escenario político a través de la lucha organizada por la supervivencia.

La organización permitió a los desocupados, que la conforman, resignificar su situación en clave de una identidad política; de esta manera lo que era

⁵¹Tal como se lee en *El Capital*: "La magnitud relativa del ejército industrial de reserva crece, por consiguiente, a medida que crecen las potencias de la riqueza. Y cuanto mayor es este ejército de reserva en proporción al ejército obrero en activo, más se extiende la masa de superpoblación *consolidada*, cuya miseria se halla en razón inversa a los tormentos de su trabajo. Y finalmente, cuanto más crece la miseria dentro de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, más crece también el pauperismo oficial" (destacado en el original). Marx, 1980: 588.

⁵² "Por tanto, al producir la acumulación del capital, la población obrera produce también, en proporciones cada vez mayores, los medios para su propio exceso relativo. Es esta una ley de población peculiar del régimen de producción capitalista". Marx, *op. cit.*, p. 575.

una carencia, una falta (la falta de trabajo) se transforma en una positividad, en una manera de ser y hacer. Esta identidad expresada en diversas organizaciones, permite la crítica política del modelo, ya no como un problema de individuos particulares sino como un problema social.

Al mismo tiempo es necesario para la comprensión de su total dimensión política, ponerlo en relación con un Estado nacional que establece políticas excluyentes; un sistema que funciona mundialmente sobre la base de crear población excedente; una sociedad que responde negando, "estigmatizando" producto, a su vez, de una relación en tensión con el conjunto de los trabajadores, que ven en este actor una amenaza, pero encerrando al mismo tiempo la posibilidad de una alianza que pueda potenciar la acción política conjunta. Nos encontramos así, ante factores estructurales y subjetivos que operan como disciplinadores sociales "suscitados por el desempleo de masas y la experiencia de proximidad, social y espacial, con la pobreza, lo que debilita globalmente el nivel de conflictividad abierta".⁵³ De este modo entendemos que la desocupación y su resultado inmediato, sujetos sin un empleo que les permita garantizar condiciones mínimas de vida, son la consecuencia estructural del proceso de acumulación. No pudiendo, por tanto, ser vistos y analizados simplemente como un sector excluido, sino como expresión y resultante de un proceso global. Por tal motivo, la relación con los demás actores cobra relevancia, no sólo para comprender su tensión, sino para aprehender las limitaciones y potencias que encierran sus reivindicaciones. Las de un sector que se encuentra, por momentos, atacado no sólo desde los medios de comunicación, sino también por aquellos sectores de la población ocupada que se encuentra afectada por las mismas consecuencias estructurales del proceso de acumulación de capital.

MOVIMIENTO PIQUETERO Y SUS LUCHAS

Como señalábamos anteriormente, las primeras articulaciones en cuanto a políticas de resistencia fueron las diversas "puebladas" que recorrieron distintas provincias de la Argentina. Levantamientos populares de carácter masivo reclamaron al Estado que interviniese ante la pérdida de trabajo de ciudades enteras al cerrar las empresas públicas privatizadas. La metodología utilizada para realizar el reclamo y garantizar que el gobierno, tanto nacional como provincial no hiciera oídos sordos, consistió en la

⁵³ Vakalouik, mimeo.

interrupción del tránsito en rutas nacionales, acción política denominada "piquete" o "corte de ruta".

Entre 1996 y 1997, en los levantamientos de las ciudades petroleras de Cutral-Co-Plaza Huincul (provincia de Neuquén) y Gral. Mosconi (provincia de Salta), el gobierno responde por primera vez con el otorgamiento de planes sociales, entregando asistencia financiera frente a la demanda de la población de puestos de trabajo y "programas de reconversión industrial", buscando escapar, así, al destino impuesto de convertirse en "pueblos fantasmas".⁵⁴

Estos levantamientos se conformaron en el antecedente inmediato de los cortes de ruta que se extendieron por todo el país,⁵⁵ convirtiéndose, el piquete o corte de ruta, en la principal modalidad de lucha que adoptarán los desocupados que se organizan políticamente para llevar a cabo distintas reivindicaciones.

A medida que el piquete se generalizó como acción política distintiva de las diversas organizaciones dejó de representar "únicamente una medida de acción directa —y por lo pronto, de duración limitada—, transformándose paulatinamente en un modo de organización relativamente estable que suele exceder la inmediatez del reclamo puntual. Los movimientos de desocupados ven en el corte de ruta un instrumento de lucha, un medio de presión a través del cual canalizar reivindicaciones específicas (planes trabajar, bolsas de alimentos, útiles escolares, ropa, calzado). La práctica del piquete prosigue, además, un objetivo estratégico: visibilizar idearios políticos-sociales; trasladar la realidad barrial a la geografía pública".⁵⁶

La emergencia de este método de lucha fue articulando y conformando un nuevo actor: los piqueteros, que desde 1996 quedarán constituidos por distintas corrientes y grupos que integran un entramado complejo, con puntos de articulación y divergencia dentro del abarcador término de movimiento piquetero. Tomando una tipología simplificadora, pero aclaratoria en cuanto a las orientaciones políticas de cada una de las organizaciones, seguimos la utilizada por Maristella Svampa.⁵⁷ Encontramos,

⁵⁴ Para un análisis detallado del movimiento cutralquense ver Favaro, *et al.* (1997, 13-27).

⁵⁵ Extensión que alcanzó también a la denominación de "corte de ruta". Ya no se trata sólo de interrupción del tránsito en las rutas nacionales, sino además del bloqueo de los accesos a las grandes ciudades, o de arterias importantes, para la circulación, dentro de las mismas.

⁵⁶ Perazzi, 2000: 120.

⁵⁷ Dentro de las corrientes denominadas sindicales encontramos a organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) enmar-

entonces, las organizaciones de corriente sindical, las organizaciones de extracción partidaria, y aquellas que se constituyen como organizaciones territoriales autónomas. Estas diversas organizaciones tienen en común su estructuración alrededor de la problemática de la desocupación. El conflicto por trabajo, que fue extendiéndose en el ámbito nacional, encontró como principal interlocutor al gobierno en sus distintas instancias (nacional, provincial y municipal).⁵⁸ Éste respondió con la entrega de planes de empleo, bolsones de alimentos, en menor medida herramientas y otros elementos para poner en marcha microemprendimientos, cambiando de este modo el eje de la disputa; ya que si bien los piqueteros no abandonan el reclamo de trabajo “genuino”, la obtención de la mayor cantidad de planes se convirtió en el eje articulador del movimiento piquetero. De esta forma, podríamos decir, junto con Svampa, que si la respuesta del gobierno a la desocupación fueron los planes sociales, de alguna manera también, la emergencia del movimiento piquetero está ligado a la institucionalización de los mismos.

PLANES:⁵⁹ EN BUSCA DE LA “PAZ SOCIAL”

Ante la aparición y consolidación del desempleo, el Estado debió modificar sus políticas en esta área.⁶⁰ Si hasta 1995 eran de carácter focalizado,⁶¹ pen-

cada en la CTA, en las partidarias al Polo Obrero (PO), Movimiento sin Trabajo Teresa Vive (MST), Barrios de Pie, Frente de Trabajadores Combativos (FTC), Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa) y las organizaciones autónomas que contienen a la Coordinadora Aníbal Verón, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), tipología desarrollada en Svampa y Peryra, 2003.

⁵⁸ Si bien se produjeron reclamos a empresas privadas, ejemplo de esto son las concentraciones frente a los supermercados reclamando bolsones de comida y frente a grandes empresas reclamando puestos de trabajo por parte de diversas organizaciones piqueteras, éstos no dejan de ser aislados y episódicos.

⁵⁹ Si bien haremos referencia a los distintos planes de empleo implementados en nuestro país daremos mayor importancia al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados por tratarse del que se encuentra en vigencia en la actualidad.

⁶⁰ “Desde la promulgación de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013/91, en la que se establece la creación de programas de empleo para grupos de difícil inserción laboral, siempre bajo la lógica de la economía de libre mercado propia de los noventa, se dinamizaron programas de empleo que fueron vistos como complemento del modelo económico vigente. La población objetivo, tal como prevé la norma, sumaba a desocupados, jefes de hogares pobres y especialmente a aquellos que estaban radicados en regiones en crisis. Esta función la cumplieron todos los programas de empleo transitorio”. Lanari, 2003.

sados como transitorios y complemento de la política económica vigente;⁶² a partir de 1996 comenzaron a implementarse planes que pretenden tener carácter universal.⁶³ El primer plan con estas características es el “Plan Trabajar” antecedente del actual “Jefas y Jefes de Hogar Desocupados”. Estos planes le permitieron a los distintos gobiernos dar una respuesta inmediata tendiente a controlar el conflicto generado por la expansión de la desocupación, pero fueron incapaces de hallar soluciones duraderas que modificaran las condiciones estructurales que generaban el reclamo.⁶⁴

La crisis se imponía como la emergencia del conflicto que debía ser controlado, para eso se hacía cargo de la presidencia de la nación el Dr. Eduardo Duhalde,⁶⁵ quien desde el discurso de asunción, el primero de enero de 2002, anuncia cuáles serán las prioridades de su gobierno:

Desde mañana, sin delegar la responsabilidad en la recuperación de la paz social que me compete y la tarea que debo realizar, estaremos trabajando juntos con las fuerzas políticas, empresariales,

⁶¹ El carácter focalizado da cuenta de un desplazamiento y reconfiguración de las respuestas del Estado hacia los problemas sociales: dejan su carácter universalista propio del estado de bienestar y reconfiguran una delimitación entre los sectores de la población en condiciones de mayor riesgo, estableciendo recortes y criterios de quién “merece” una ayuda con mayor urgencia. Tal y como lo plantea Álvarez: “Intentan compensar los efectos de ajuste sólo para los grupos más vulnerables y en los territorios donde su impacto presenta características alarmantes, aumentando relativamente los fondos que tradicionalmente se destinaban —aunque sigue siendo un gasto mínimo en relación con las necesidades— de un conjunto de la población que ya no puede acceder a otro tipo de beneficio social”, en Álvarez, 2000: 142.

⁶² “Desde 1993 hasta 1995, el Ministerio de Trabajo, implementó programas de carácter transitorio y de inserción directa, intensivos en mano de obra y destinados a desarrollar obras de infraestructura económica y de interés social. Los mismos fueron financiados por un monto aproximado de U\$S 300 millones dando con ello cobertura a 200.000 personas”. Lanari, *op. cit.*

⁶³ “Desde 1995 y hasta el 2002, según los datos disponibles, se utilizaron más de \$2.500 millones, para satisfacer en parte las necesidades de ingresos e integración social que al menos brindó a 1.700.000 personas la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo transitorio”. *Ibidem.*

⁶⁴ “Las estrategias de políticas sociales adoptadas en el marco del estado neoliberal, ponen en evidencia una racionalidad que subordina enteramente los objetivos del bienestar a los de la acumulación. En el pensamiento político social que lo hegemoniza, la pobreza cabe como ‘mal inevitable’. De ahí que el asistencialismo sea la estrategia posible, cuya eficacia se agota en el objetivo de contribuir al control social”. Grassi, 2000: 78.

⁶⁵ Representante del partido justicialista.

laborales y organizaciones no gubernamentales en la elaboración inmediata de un programa de salvación nacional. Participar de ese abierto proceso de diálogo, es afirmar que queremos mirar de frente a cada argentina y cada argentino y decirles que conocemos sus angustias y desesperanzas y que estamos dispuestos a salvar solidariamente la Nación recuperando la dignidad de cada miembro de la comunidad.⁶⁶

El plan Jefes y Jefas aparece, entonces, como la respuesta más importante del gobierno de Duhalde para enfrentar la crisis, tal y como se puede leer en un informe realizado en el año 2002 por el ministerio de trabajo: “De las recomendaciones formuladas por la Mesa de Diálogo Argentino,⁶⁷ resulta procedente dictar las normas imprescindibles para enfrentar la **crisis**, estableciendo el Derecho Familiar de Inclusión Social”.⁶⁸

La implementación de los planes sociales tuvo como eje garantizar la “paz social” haciéndose escuchar con mayor frecuencia aquellos discursos que veían en la profunda crisis la posible disolución de los “lazos de nacionalidad”, de “exclusión masiva” situación que tornaba imperioso la necesidad de articular políticas para “incluir” a estos sectores en riesgo, “mantenerlos dentro de la sociedad”, “contener” el conflicto. Es significativo que algunos de los dirigentes piqueteros de los sectores políticos llamados

⁶⁶ Discurso de Asunción a la Presidencia de la República Argentina del Presidente Eduardo Duhalde, el 1 de enero de 2002.

⁶⁷ “Cuando en enero de 2002 el Presidente de la Nación Eduardo Duhalde, el Embajador Carmelo Angulo y Monseñor Estanislao Karlic lanzaron el Diálogo Argentino el país atravesaba una profunda crisis político-institucional, económica y social. Ante una sociedad fragmentada y en estado de abierta confrontación, el desafío del Diálogo era inmenso: definir una serie de lineamientos comunes potencialmente traducibles en un conjunto de políticas públicas integradas en un Proyecto Nacional a corto, mediano y largo plazo. Luego de un mes de intenso trabajo el Diálogo Argentino había mantenido casi una centena de reuniones con más de 400 instituciones representativas de la vida política, social, cultural y económica de la República. Como fruto de este trabajo, la Mesa del Diálogo identificó una serie de coincidencias sobre las problemáticas que debían ser abordadas para superar la crisis integral y restablecer la paz social.”, en <http://www.undp.org.ar/boletines/septiembre/Notas/Nota6.htm>

⁶⁸ Informe octubre de 2002 secretaría de empleo — DGE y FPE “El plan jefes/ jefas de hogar brinda asistencia a 2 millones de personas”, www.trabajo.gov.ar (negritas nuestras).

“duros”, necesitaran discutir con el gobierno en el mismo plano discursivo que éste les planteó, es así que la paz social es algo que los dirigentes pueden negarles al gobierno, en palabras de Néstor Pitrola:⁶⁹ “Compañeros, impugnar el pacto con el Fondo Monetario significa otro año de rebelión popular. Están equivocados si creen que van a tener un año de paz social: van a tener un año de piquetes, van a tener un año de cortes de ruta”.⁷⁰ Desde esta perspectiva hubo un pronunciamiento positivo por una gran parte de intelectuales frente a la implementación del plan:

El logro por excelencia, si cabe este vocablo, fue el de funcionar como un paliativo frente al contexto caótico vivido hace apenas trece meses. Fundamentalmente tendió a descomprimir la situación social de profunda crisis, inestabilidad e incertidumbre a tal punto que, si bien el monto monetario del plan es “nada”, ya que no alcanza a satisfacer necesidades básicas de un hogar tipo, para los que se encuentran del otro lado, es decir, totalmente **excluidos**, resulta algo frente a la nada y al vacío en el que se hallan inmersos. En muchos sectores del conurbano bonaerense estos planes han sido una barrera de contención muy importante. Más que la satisfacción a las necesidades individuales, familiares, ha sido un programa de contención comunitaria ya que frente a la nada, frente al fenómeno de la exclusión, tener eso posibilita de alguna manera paliar la situación más allá de los exiguos que son.⁷¹

Desde esta perspectiva los planes no sólo permiten la posibilidad de percibir un ingreso de subsistencia en condiciones paupérrimas, sino que, por otro lado, también tiene un efecto secundario: la mejora notable en las tasas de empleo. De esta forma las variaciones en las tasas de ocupación y desocupación, según se considere “ocupados” a los beneficiarios de los planes de empleo, o si se los considera simplemente desocupados tiene una incidencia en la percepción de la situación social; ya que si se toma en cuenta a quienes perciben los Planes Jefas y Jefes como trabajadores activos, la disminución en los índices de desempleo es notoria, como puede apreciarse en las variaciones observadas en los datos oficiales del segundo y tercer trimestre de 2003:

⁶⁹ Dirigente del Polo Obrero.

⁷⁰ Discurso de Néstor Pitrola en Acto del Partido Obrero realizado en Atlanta el 23-01-03.

⁷¹ Entrevista propia a investigador de CONICET.

Tasa de	Segundo Trimestre 2003		Tercer Trimestre 2003	
	Tasas generales	Recalculo sin plan jefas y jefes	Tasas generales	Recalculo sin plan jefas y jefes
Actividad	45.6	45.6	45.7	45.7
Empleo	37.4	35.1	38.2	35.9
Desocupación	17.8	23.0	16.3	21.4

Por lo tanto la implementación del plan no fue planteada como solución al problema estructural de empleo, sino como una política de control. En tanto que política de beneficencia mantiene “la concepción tradicional de los destinatarios como pobres “vergonzantes”, y cuya situación se atribuye a los desajustes personales o grupales en el marco de una relación de tutela con el Estado y de contraprestación de servicios y bienes, por trabajo. Los pobres son sujetos de las políticas de *asistencia*, no sujetos de derechos”.⁷²

La prolongación en el tiempo de esta política estatal la ha transformado en objeto de críticas. Más allá del debate en torno a considerarla como política activa de empleo, o si tiende a transformarse en una política de carácter pasivo; si es un plan transitorio (en tanto acción re-distributiva) o simplemente un seguro de desempleo paralelo (de menor monto, claro está); lo cierto es que se presenta como el principal ingreso que permite la subsistencia de gran parte de la población. Ello a pesar de no haber cumplido el principio de universalidad, se encuentra cerrado el ingreso a nuevos beneficiarios (más allá de que reúnan los requisitos necesarios).⁷³

Frente al creciente conflicto, la lucha en torno a los planes fue fortaleciendo paulatinamente a las distintas organizaciones de desocupados, e inclusive creando a muchas otras. Tal es el caso de las organizaciones piqueteras más pequeñas que, frente a la modificación implementada por la administración de De la Rúa,⁷⁴ comenzaron a articularse en coordinadoras potenciando su capacidad de presión.

⁷² Álvarez, *op. cit.*, p. 147.

⁷³ Por un lado se cerraron los padrones de inscripción, pero cuando estaban abiertos quedaban afuera las personas mayores de 18 años sin hijos o familias con hijos mayores de 18.

⁷⁴ Durante la administración de De la Rúa con el objetivo de eliminar la estructura clientelar en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social introduce una modificación en cuanto a su distribución. Si antes se encontraban en manos de los municipios, con la modificación se propone que éstos sólo sean asignados a ONG’s responsables de su ejecución.

Así a partir de 1999, las organizaciones piqueteras ven la posibilidad de reencauzar los fondos del Estado hacia sus barrios, estableciendo una nueva dinámica entre la asistencia social estatal y la posibilidad de autogestión.

Pese a la vitalidad y fortalecimiento que las distintas organizaciones de desocupados obtuvieron con la administración de los planes, efecto colateral de la política estatal de control, su condición de desplazados del sistema productivo lleva a que la mayor parte de sus demandas se orienten al Estado, configurando una relación de dependencia.

Esta dependencia que el movimiento piquetero encuentra frente al Estado muestra inmediatamente aspectos de su limitación: su organización para la lucha política le ha permitido obtener como conquista subsidios estatales, que son, al mismo tiempo, la respuesta inmediata que le permite al Estado garantizar, no sin conflicto y con un ingreso que sólo alcanza para la reproducción de la vida en el límite de subsistencia, en cierta medida la buscada "paz social".⁷⁵

Las políticas de control estatal frente al conflicto parecen haber garantizado una cierta estabilidad, sin que la crítica y lucha política hayan cobrado la suficiente fuerza y presencia para lograr del gobierno una modificación de fondo en sus políticas.

ACCIONES Y LÍMITES: PARTE DE LA DISCUSIÓN PIQUETERA

La articulación de un frente nacional, en el año 2001, con la realización de la Primera Asamblea Piquetera Nacional,⁷⁶ fue la manifestación de un sector en consolidación en el ámbito nacional, capaz de articular y elevar demandas sectoriales; al tiempo que se estableció como un actor en abierta

⁷⁵ En palabras de un periodista de *Página/12*, que considera la implementación del plan como un desarticulado de organizaciones sociales: "No se llegó a un nivel de organización social y comunitaria; incluso debilitó alguna estructura de organización primaria como los clubes del trueque y creo que eso es lamentable. Si hubiese habido algún aporte del Estado para sostener estos clubes de trueque se podrían haber sumado aportes de organización social, en cambio los clubes de trueque virtualmente han desaparecido. Han sido suplantados por los 150 pesos en el bolsillo, creo que es lamentable. No se avanzó a un nivel de articulación superior a eso. Cada uno agarra la plata, se la mete en el bolsillo y se va a su casa". Entrevista propia.

⁷⁶ Celebrada en La Matanza, provincia de Buenos Aires, el 24 de julio de 2001. Participaron en ella, el PO, el MTR, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), la FTV y la CCC.

confrontación con el gobierno nacional, estableciendo un plan de lucha conjunto por desarrollar: cortes de rutas escalonados y crecientes (24, 48 y 72 horas consecutivamente) en todo el país.

Sin embargo en la segunda Asamblea Nacional,⁷⁷ si bien se reiteraron las articulaciones entre las diversas corrientes en un plan de lucha nacional, las divergencias existentes empezaron a expresarse hasta el punto de hacer imposible la realización conjunta del plan de lucha.

Ésta expresó el punto en el que se abre un proceso de rupturas y desprendimientos de distintos sectores. Las divergencias manifestadas decantaron en la creación del Bloque Piquetero Nacional (BPN),⁷⁸ organización que se diferenciará de las posiciones adoptadas por la corriente sindical. Esta diferenciación cristalizará más tarde en las distintas posturas que adoptaron los dos grandes sectores frente a las políticas estatales. Así el sector sindical, en el año 2002, participó activamente en los consejos consultivos creados por el gobierno de Duhalde para la implementación de los Planes Jefas y Jefes. Mientras que las corrientes que componen el Bloque y aquellas denominadas autónomas, que participan de determinadas medidas de lucha organizadas por el bloque, establecen como plano de acción la confrontación.

Pese a las distintas posturas políticas, el movimiento de desocupados se articulará en torno a la obtención de subsidios estatales, límite y condición de posibilidad para su existencia. Ninguna de las partidas de planes sociales fueron garantizados sin lucha. Sin ese ingreso se torna complejo, en principio, pensar en la construcción y fortalecimiento de los proyectos político-sociales de las distintas organizaciones.

Qué reconfiguración, qué tipo de lucha se implementa para la obtención de los planes, qué uso se dará a las partidas arrancadas al Estado, son las cuestiones que a medida que transcurría el 2002, iban paulatinamente a diferenciar a las distintas organizaciones que componen el movimiento.

Si en un principio aparecen los piqueteros como un todo homogéneo centrado en la necesidad de conseguir los planes; con el tiempo fueron evidenciándose distintas estrategias, posturas políticas y formas de construcción.

⁷⁷ Realizada nuevamente en La Matanza, el 4 de septiembre de 2001. Sumándose en su participación distintas organizaciones provenientes del interior del país.

⁷⁸ En febrero de 2002 se consolida un frente integrado por distintas organizaciones, mayoritariamente de la corriente partidaria (PO, MTL, MTR, CUBa, FTC).

LOS PLANES

La relación que las distintas organizaciones tuvieron con los planes no sólo cambia al mirar las distintas corrientes al interior del movimiento piquetero, sino que muchas organizaciones cambiaron internamente de posición en cuanto a la aceptación o rechazo de los mismos.

Las organizaciones que comenzaron rechazando absolutamente los planes por el monto, por la dependencia hacia el Estado, que encierra su aceptación, y porque son políticas tendientes a paliar la situación y no a solucionarla,⁷⁹ entendieron que su aceptación impactó en la configuración política de la organización, así como también en las características de su crecimiento. Tal y como lo expresa un miembro del Frente de Trabajadores Combativos, el cambio de posición no los eximió de otros problemas:

Los criterios en relación al reparto de lo obtenido han marcado de hecho los distintos periodos por los que ha pasado el FTC. Un primer momento, más "político", casi sin planes ni bolsas ni nada para repartir. Y un segundo momento de "masificación", muy progresivo pero que—al mismo tiempo—introdujo profundas contradicciones. La masificación del FTC le ha dado una fuerza que no tenía, una potencialidad que le permite comenzar a pelear por una correcta orientación de "unidad de clase" entre los trabajadores. Pero al mismo tiempo, se incorporan elementos ideológicos "luchistas", "piqueteros", en cierta manera despolitizantes y no de clase, no solidarios. Criterios que se resumen en algo así como el que no se moviliza no come.⁸⁰

Esta modificación en la posición también la expresa un dirigente nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuando sostiene que a pesar del rechazo y las críticas, la distribución de los planes era un componente real de las relaciones políticas barriales:

⁷⁹ En la actualidad existen algunas organizaciones que continúan rechazando los planes sociales y toda ayuda del gobierno por estas razones, pero su incidencia dentro del movimiento piquetero, así como dentro del escenario político general, es prácticamente marginal.

⁸⁰ Sáenz, 2003.

Eso fue así hasta 1996. Entonces nos dimos cuenta que, en manos de los gobernantes, de los punteros políticos, estos programas sociales eran utilizados para generar una situación humillante para los compañeros: a cambio de esos programas sociales se les obligaba a ir a actos políticos para hacer números, a salir a pegar afiches, a pintar paredes (...) Nos dimos cuenta que lo que nosotros lográbamos en las luchas no se lo podíamos regalar a ellos para que hagan de jueces nuestros, teníamos que elaborar desde nosotros mismos un criterio para ir resolviendo nuestros problemas.⁸¹

De todos modos, el hecho de que las distintas organizaciones comiencen a aceptar los planes sociales no desplaza el problema central: la lucha por garantizar trabajo productivo. Como ejemplo de esto, expresa un dirigente de la UTD salteña:

Cuando el gobierno dio los Planes Trabajar creía que íbamos a machetear, desyuyar o a barrer las calles, pero cuando vamos a discutir a Buenos Aires les digo que esos planes son una marginación. Yo no voy a pedir Planes Trabajar, voy a pelear por lo que nosotros producimos: gas y petróleo, para que los petroleros reinviertan la plata que se llevan de acá y por las regalías petroleras, gasíferas y otras alternativas, con proyectos productivos, con propuestas más que nada.⁸²

Desde distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, se plantea el mismo conflicto, adoptando por su contexto diferencial otra perspectiva. El MTR lo explica en estos términos:

Ésa es una pelea importante, o sea, nosotros nos oponemos a todos aquellos compañeros, inclusive a las concepciones de otros movimientos que centran la importancia nada más en conseguir el plan. Conseguir el plan es importante pero más importante es recuperar lo que nosotros decimos la cultura del trabajo, eso es elemental.⁸³

⁸¹ Rauber, 2002.

⁸² Xiques, 2003.

⁸³ Citado en Svampa y Pereyra, *op. cit.*, p. 192.

La respuesta que cada una de las organizaciones fue adoptando frente a la obtención del plan estableció corrimientos y contradicciones. Se generaron nuevos problemas ante la política de masificación en el reparto del plan (política tendiente a debilitar el control por parte de las organizaciones piqueteras); pero, al mismo tiempo, hacía visible la necesaria aceptación de los mismos, siendo el único recurso de subsistencia.

La conformación del Bloque Piquetero Nacional, las rupturas y el cambio de posición de los partidos de izquierda frente a la obtención de planes consolidó una estrategia de lucha tendiente a la confrontación; diferenciándose de la corriente sindical, que se inclinó principalmente por una estrategia de negociación. En palabras de un dirigente nacional del BPN:

Nosotros creemos que no hay lugar para tregua, creemos en un gobierno de los trabajadores y del pueblo. Estas son las diferencias abismales con estas corrientes que le han dado tregua (FTV y CCC). Nosotros no le dimos tregua aún cuando han dado satisfacción a algunos de los reclamos porque sabemos que estas son soluciones pasajeras, los planes jefas y jefes que han abierto ventanillas para el BPN son solamente un paliativo insignificante que no alcanza ni para la primera semana del cobro de estos compañeros. Aspiramos a la liberación de la clase.⁸⁴

Si bien se presentaron dos posiciones de lucha diferentes, la capacidad organizativa de ambas se articuló en pos de adquirir y controlar mayor cantidad de planes. Ésto permitió, a pesar de la fuerte confrontación entre ellas, emprender algunas medidas de lucha conjuntas. "En cualquier momento vamos a estar en una trinchera común, ante la devastadora ofensiva de la clase capitalista, con todas las organizaciones aun con aquellas que se dieron una estrategia de no-confrontación con el gobierno",⁸⁵ reconoce un dirigente del BPN.

Ante la aceptación generalizada de los planes, y las distintas políticas adoptadas frente al Estado nacional, paulatinamente la discusión en torno al trabajo comienza a vislumbrarse como prioridad.

Se plantean distintas posiciones en cuanto a la utilización de los planes. Las organizaciones de tinte sindical entienden la obtención de los mismos

⁸⁴ Rauber, *op. cit.*

⁸⁵ *Op. cit.*

como un derecho adquirido. En cambio, las partidarias se detendrán a discutir distintas concepciones acerca de lo que significa el trabajo genuino. Muchas organizaciones, en su mayoría territoriales, encontraron en la autogestión de los planes una forma de organización y reconceptualización del trabajo comunitario. A la vez que tanto las partidarias como las sindicales la encuentran como una instancia de transición hasta alcanzar puestos de trabajo en espacios productivos.⁸⁶

LA RESPUESTA FRENTE AL PLAN

Los microemprendimientos fueron una de las respuestas que ciertas organizaciones adoptaron, sobre todo las que hallan su construcción política centrada casi exclusivamente en lo territorial, con la perspectiva de alcanzar lentamente cierta independencia respecto de la política estatal. Esta resignificación apuntará a transformar esos planes exclusivamente asistenciales, en una fuente de trabajo para los barrios o la comunidad en la que operan.⁸⁷ De esta forma, la autogestión del plan, despojándolo del elemento de aceptación pasiva, permitió resignificarlo políticamente en tanto comienza a ser gestionado colectivamente permitiendo la producción, y financiamiento en función de las necesidades de la comunidad.

Asimismo, los microemprendimientos se han constituido en las fuentes de producción que en principio han podido garantizar bienes y servicios imprescindibles para el barrio, pero que, al mismo tiempo, se proyectan en tanto posibles establecimientos productivos independientes, capaces de expandir su producción más allá de las necesidades del barrio. Pero la mayor parte de las organizaciones entienden que esta respuesta implica fundamentalmente un fuerte trabajo de construcción política; así lo expresa un militante del MTL:

Las huertas comunitarias, la carpintería y las panaderías han sido escuelas de solidaridad social. Y esto en parte es así porque a través de esas actividades buscamos construir organización, romper la

⁸⁶ Svampa, Pereyra, *op. cit.*, p. 193.

⁸⁷ "La UTD (Unión de Trabajadores de Desocupados) de General Mosconi, tiene la particularidad de pensar y generar proyectos productivos que pongan en marcha las potencialidades económicas de la región, tornándose el eje principal no ya la supervivencia individual sino de supervivencia colectiva a nivel regional, que incluye a los desocupados, sus familias, pero también a los ocupados". Xiques, *op. cit.*

cultura del individualismo y recrear la cultura de la solidaridad. Es a partir de esa cultura que aspiramos a construir un ideario de poder popular en cada uno de los sectores.⁸⁸

Desde esta perspectiva, el control de los planes deja de constituirse en un fin y pasa ser un medio, que permite principalmente rearticular y poner en práctica una nueva forma de socialización y revalorización de los propios integrantes de las organizaciones. Así queda expresado, por un dirigente del MTD de Solano, en donde el problema del trabajo pasa a ser un factor secundario:

Cuando la gente se acerca las expectativas son resolver el problema del trabajo, pero el MTD no es eso (...) es un proyecto que toma como eje el tema del trabajo, pero su objetivo es la recuperación del ser humano. Pueden cortarnos los Planes Trabajar, mandarnos el aparato represivo, pero lo que hay aquí es una forma de pensamiento diferente, y eso no lo van a poder detener.⁸⁹

Al tiempo que los microemprendimientos se presentan como una instancia distinta desde la cual organizar políticamente, también se presentan como la respuesta autónoma y práctica frente a la necesidad (más allá de los planes y las políticas estatales), por ello tienen una carga de proyectos que deben consolidarse y garantizar el futuro de los miembros de la comunidad:

La otra vuelta se ha inaugurado una planta de ropa producto de un convenio entre la UTD y Pluspetrol y los funcionarios nos decían: "¿Cómo va a haber una fábrica de ropa si se están cerrando?", y yo les respondí: "A mí no me importa, a mí me importa el impacto social y el impacto económico" (...) Cuando lo comentamos con los funcionarios políticos te miran de arriba a abajo y piensan que estás loco o, simplemente, no les conviene porque tocás todos los poderes, se supone que esto lo tienen que hacer los políticos, no nosotros, pero vos no te podés quedar en que les corresponde a

⁸⁸ Rauber, *op. cit.*

⁸⁹ Sáenz, *op. cit.*

ellos y no hacerlo, sino ¿qué alternativa le das a los hijos nuestros, a los que vienen atrás?⁹⁰

Las organizaciones, incluso, han llegado a hacerse cargo de tareas de administración que deberían ser realizadas por el gobierno:

Nosotros estamos haciendo prácticamente el trabajo del gobierno pero mientras ellos se están llenando los bolsillos de plata, nosotros nos estamos llenando de causas judiciales. Esa es la diferencia, nosotros tenemos que luchar para tratar de sobrevivir, de salir adelante, pero no nos dejan... no nos dejan... ⁹¹

Como base de construcción político social, el microemprendimiento instala la necesidad de asumir como propias otras reivindicaciones; ir más allá de la problemática de los trabajadores desocupados interviniendo en los conflictos de otros sectores.

Se pide para los maestros, para el hospital, para todos, para los bomberos, para los jubilados, para los enfermos, también nos ocupamos de los estudiantes, se pide para todo el conjunto del pueblo. A los wichi-mataco se les refaccionó la escuela, tienen una fábrica de ladrillos, ahora les estamos haciendo un taller artesanal y se les dio participación en el centro tecnológico y de investigación.⁹²

Esta situación no se limita a aquellas zonas arrasadas por la reestructuración económica del interior del país, como refleja una integrante de la FTV de La Matanza, al comentar las reivindicaciones que llevaron a un corte de ruta realizado conjuntamente con la CCC:

⁹⁰ Xiques, *op. cit.*

⁹¹ *Op. cit.*

⁹² *Op. cit.*

Pedíamos alimentos, hospitales móviles, que se ensanchara la ruta 3 a la altura del km 29, pedíamos aulas para dos escuelas, que siguieran construyendo 6 escuelas más en el distrito porque las que hay no dan abasto para la cantidad de chicos que hay.⁹³

En este horizonte, se encuentra la tensión de producir para un mercado capitalista competitivo, establecer precios de mercado y obtener maquinaria que así lo permita, y continuar y expandir la producción pero manteniendo los principios que se estructuran alrededor de los proyectos: la construcción colectiva de nuevas relaciones de trabajo y sociedad. Esta tensión ha permitido la discusión colectiva de comenzar a construir, y articular lo que han denominado "economía solidaria" o Mercado Central Piquetero,⁹⁴ espacio que permitiría la circulación de los bienes producidos no sólo por las distintas organizaciones de desocupados, sino junto con las empresas recuperadas como Zanón o Brukman. Esta necesidad de dar constancia, y salida a la producción autónoma surge como estrategia política general necesaria de las organizaciones. Martino, dirigente del MTR lo plantea de esta manera:

Si la producción no tiene una salida el proyecto va a caminar muy poco tiempo (...) en parte, nosotros elegimos hacer un proyecto para resolver el problema inmediato de nuestra gente, pero creemos que la solución definitiva del problema no va a salir del mejor o peor funcionamiento de estos proyectos en sí, si esto no está en el marco, a nuestro entender, de una estrategia política más general, o sea, pensar en un proyecto productivo por más imperioso y bueno que pueda ser para sobrevivir como isla dentro de un mercado capitalista creemos que es imposible.⁹⁵

⁹³ Rauber, *op. cit.*

⁹⁴ El Mercado Central Piquetero fue un proyecto presentado por el MTR, en el marco de la III Asamblea Piquetera realizada por el Bloque Piquetero en el año 2002. Ésta, sin embargo, fue rechazada por el Polo Obrero por oponerse a una "economía piquetera", en Svampa y Pereyra, *op. cit.*, p. 191.

⁹⁵ Martino, 2002: 87-88.

La aceptación de los planes de trabajo y su respuesta alternativa (proyecto de microemprendimientos) no parecieran ser soluciones de largo plazo ante las condiciones actuales del trabajo; “no pareciera que pueda sostenerse la solución al problema del desempleo, sobre un principio de atraso tecnológico o postulando el puro uso de la fuerza física, salvo que se acepte una demanda de nula calificación, precariedad y salarios de subsistencia.”⁹⁶ Si tomamos en consideración esta realidad, las respuestas y articulaciones de las distintas organizaciones encuentran, más allá de sus distintas perspectivas políticas, un nudo difícil de desenredar.

LOS PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA: EL CLIENTELISMO

Como venimos desarrollando, las organizaciones de desocupados han desplegado al compás de sus luchas, distintas relaciones frente a la política estatal: dependencia, confrontación y autogestión son las respuestas que han cristalizado.

Pero a medida que fueron configurándose estas distintas relaciones, la construcción interna se ve afectada por mecanismos complejos derivados de esta misma relación: el clientelismo.

El clientelismo⁹⁷ puede ser entendido más como una consecuencia o un derivado de la descomposición de las prácticas políticas habituales de los punteros⁹⁸ peronistas en los barrios, pero producto, al mismo tiempo, de la creciente masificación de alguna de estas organizaciones. Pese a sus polí-

⁹⁶ Grassi, *op. cit.*, p 85.

⁹⁷ “El clientelismo va más allá de un vínculo desigual entre quienes distribuye y quien recibe recursos, bienes o servicios, propios también del asistencialismo. Supone entre otros atributos, la presencia de una combinación peculiar de desigualdad y asimetría de poder con una aparente solidaridad mutua en términos de identidad personal, sentimientos y obligaciones interpersonales. Este modelo, implica sobre todo la presencia de una norma de reciprocidad, una serie de significados compartidos que sostengan las acciones de intercambio” Cardarelli, G. y M., Rosenfeld, “Clientelismo: fase superior del asistencialismo. Acerca de la relación entre el Estado y las Organizaciones No Gubernamentales”, en Oszlak, *op. cit.*, p. 233.

⁹⁸ El término “punteros” refiere a: “Representantes de un partido político, intendente, gobernador o grupo determinado, puestos a dedo por los de mayor jerarquía de dichas organizaciones, en virtud de amistad o afinidad política. En general, la labor de los punteros es la de ‘cuadricular’ el barrio y tener ‘bases de apoyo’ en cada cuadra, a cuyos miembros brinda favores, apoyo, recursos, etc. —y luego los cobra—. Es la forma clásica de hacer política barrial por parte de los partidos políticos tradicionales, para mantener el control sobre los distintos barrios a la vez que alimentar su política clientelar”. Rauber, *op. cit.*

ticas tendientes a eliminar dichas prácticas, el crecimiento cuantitativo de muchas de estas organizaciones implicó la incorporación de los mismos punteros del barrio. Así, dirá un miembro de la FTC con el crecimiento aparecen “consecuencias no buscadas”:

El éxito de la masificación incorpora el peligro de seguir creciendo por la “vía regia” de los planes, lo que multiplica problemas como producto inevitable de las tensiones acumuladas, de las sordas peleas apolíticas por el reparto. Esta distorsión “luchista” del movimiento puede dar lugar al desarrollo de los peores rasgos del mismo: a cierto “clientelismo burocrático” donde el compañero no participa de la lucha o de la movilización con una cuota incrementada de conciencia en su cabeza, sino simplemente forzado por las circunstancias. Estos es un grave error que tiende a educar en un sentido equivocado a los compañeros.⁹⁹

De esta manera muchas organizaciones encontrarán que la respuesta política a la obtención de planes puede generar, más allá de las distintas discusiones y propuestas analizadas anteriormente, forma paralelas de relaciones clientelares, que por parte de un dirigente de la CTA recibe el nombre de “clientelismo de izquierda”, ya que entiende que

(...) muchas organizaciones, exclusivamente centradas en garantizarle a esos cientos de miles de desocupados un ingreso para que puedan comer, pero no hay nada detrás de eso un planteo político que se proponga la construcción de la conciencia, más allá del discurso duro, supuestamente antisistema; en definitiva no están construyendo conciencia con cada uno de los compañeros a los cuales dicen representar. Por eso, para mí, esa práctica termina siendo un clientelismo de izquierda, que plantea que: proporcional a la cantidad de planes trabajar que tengo, será la cantidad de gente que puedo movilizar para algún acto público o una acción concreta.¹⁰⁰

⁹⁹ Sáenz, *op. cit.*

¹⁰⁰ Rauber, *op. cit.*

La implementación de los Consejos Consultivos (integrados por representantes del gobierno municipal, y organizaciones de trabajadores, empresariales, sociales y confesionales) establece muchas veces que las políticas de disciplinamiento se territorialicen, desplazando el conflicto a lo local, factor que favorece a estas prácticas clientelares (por la proximidad de los dirigentes, por el conocimiento de la fuente de recursos); prácticas que, de todos modos, no mitigan los espacios reales de participación.

FRENTE A LOS LÍMITES

La mayor parte de las organizaciones que componen el movimiento piquetero se estructuran, tanto política como organizativamente, en torno a la política asistencial del gobierno no sólo nacional, sino también provincial.¹⁰¹ Sin embargo, no dejan de ser significativas las organizaciones que critican y caracterizan de limitada la actividad política que se estructura centralmente en torno al reclamo de bolsas de comida y planes sociales. Así, frente a lo que se percibe como un límite en la construcción política, comienzan a manifestarse con mayor fuerza las críticas a estas perspectivas de construcción, aunque todavía hoy no haya sido posible estructurarlas como una nueva perspectiva política. Significativamente, frente a los sectores que mayormente argumentan que los planes son sólo utilizados “políticamente”, como si no fuera necesaria la politización del reclamo, es necesario recordar que de los dos millones de planes concedidos hasta el 2003 sólo 117 mil eran administrados por las organizaciones piqueteras,¹⁰² cifra que nos permite entrever la complejidad de esta articulación y las debilidades de quienes insisten en desplazar el eje de discusión y disputa frente al desempleo estructural.

Frente a la complejidad de la dependencia estatal, la lucha principal sigue siendo, como lo expresan distintos dirigentes de las organizaciones enmarcadas en la corriente sindical, “(...) por comida, y no para hasta conseguir la ocupación plena; por eso los programas unen indisolublemente estos dos temas: comida y reapertura de fábricas”, reconociendo no estar de acuerdo “con el tema de los Planes Trabajar o con las bolsas de alimentos, pero lamentablemente es lo que hoy tenemos a nuestro alcance”. Sin

¹⁰¹ Ya que si bien nos venimos refiriendo centralmente al Plan Jefas y Jefes, desarrollado por el gobierno nacional, las distintas provincias también tienen sus propios planes.

¹⁰² Cifras del 2003 nos permiten establecer que el principal administrador de planes es el municipio concentrando aproximadamente 63.6%, frente a 0.8% por parte de las organizaciones piqueteras. Fuente: www.siempro.gov.ar

embargo, pueden entrever, en este panorama complejo, la articulación de nuevas alternativas políticas “la gente hoy va por más, por ejemplo, por la recuperación de empresas que han sido cerradas en el país, que son muchísimas; ya hemos logrado la recuperación de cuatro o cinco. Y eso es un avance importante; significa que hay organización”.¹⁰³ Encontramos por otro lado, en otra organización, una crítica más profunda a la posibilidad de visualizar una salida en microemprendimientos que garantizan únicamente la subsistencia; así Martino entiende que

(...) la solución definitiva del problema no va a salir del mejor o peor funcionamiento de estos proyectos en sí, (...) por eso es que le damos muchísima importancia a la construcción política también y dentro de la construcción política, no solamente debemos entender el proceso de educación de nuestra propia gente, sino también participar activamente de la lucha política general (...).¹⁰⁴

Esta necesidad de articulación política general, también es expresada por agrupaciones como el FTC:

El FTC tiene necesariamente otra cara, dadas las constricciones a las que está sometida: es también una “cooperativa de distribución” de lo obtenido mediante la lucha. Y de producción en pequeña escala de micro emprendimientos. Esta cara hace a las limitaciones materiales del movimiento. (Porque) esta “cooperativa” de distribución y pequeña producción que es el FTC, para nosotros —a diferencia de la Aníbal Verón o el MTL— no es una virtud: es producto de la necesidad. Lo que hay de virtud acá es el hecho riquísimo de la reconstrucción de los vínculos solidarios, de la jerarquización de la mujer, etc. Pero esta construcción de “solidaridades” no debe confundir (...) el FTC no puede estar por la utopía reaccionaria de la construcción de relaciones sociales “paralelas”, de “economías alternativas” que se piense que puedan significar bases materiales para la emancipación de los trabajadores, mientras se deja las principales palancas de las fuerzas productivas en manos de los capitalistas.¹⁰⁵

¹⁰³ Rauber, *op. cit.*

¹⁰⁴ Martino, *op. cit.*

¹⁰⁵ Sáenz, *op. cit.*

Por otro lado, las pequeñas organizaciones, principalmente abocadas a la construcción exclusivamente barrial, a diferencia de las organizaciones partidarias y sindicales, han podido desarrollar una estrategia política que tendió a quebrar, lo que en las más numerosas se presenta claramente: la lógica clientelar. Sin embargo, esta constitución de trabajo exclusivamente centrado en la comunidad lleva a una organización política que posee como horizonte la construcción de una sociedad comunitaria, en donde no sea necesario el trabajo en términos de empleo, pudiendo proyectar una transformación particular, aislada de los procesos generales. Esta posibilidad de configurar en microescala una sociedad sin trabajo, tendiente a modificar cotidianamente las relaciones, desestima rápidamente la problemática de la incorporación a trabajos productivos. Más allá de los debates sociológicos, y filosóficos, entendemos, junto con Oskar Negt, "que las utopías de la sociedad de trabajo no se encuentran agotadas a nivel mundial, sino, por el contrario (...) resulta evidente que los pueblos pobres nutren sus esperanzas de liberación de la miseria justo en el desarrollo de una sociedad de trabajo".¹⁰⁶

Entendiendo al desempleo como conflicto, el problema del trabajo y la forma de resolución se torna en el eje sobre el cual se comienza a diferenciar cada vez más las distintas organizaciones. Así, una de ellas sostiene: "en muchos casos los movimientos desarrollan panaderías, huertas, confección de calzado, etc., pero creemos que esto debe ser visto como producto de la necesidad, que no debe ser transformado en estrategia".¹⁰⁷

De esta manera, vemos que hay planteos que tienden a articularse como respuestas inmediatas frente a la necesidad, o simplemente, en tanto políticas realmente establecidas, conquistadas a pesar del contexto de crisis. Partir de alguna de estas perspectivas comienza a configurarse como la matriz sobre la cual las distintas organizaciones se piensan, y proyectan políticamente para dar respuesta al problema del desempleo. Este eje comienza a ser el articulador de las distintas posiciones, y creciente diferenciador de las distintas organizaciones.

Producto de estas nuevas posiciones se establece necesarias discusiones en torno a cómo articular la lucha con el conjunto de la clase obrera.

La FTV, enmarcada como ya dijimos en la Central de Trabajadores Argentinos, desarrolla su articulación en el marco de las acciones barriales con organizaciones sindicales encuadradas en dicha central.

¹⁰⁶ Negt, 1995, p. 69.

¹⁰⁷ Sáenz, *op. cit.*

Por el lado de las corrientes partidarias, casi todas se proponen como frentes de trabajadores tanto ocupados como desocupados, y plantean el límite de la acción reivindicativa.¹⁰⁸

LA LUCHA DESARTICULADA: SU RELACIÓN CON OTROS SECTORES

La relación del movimiento piquetero con otros sectores sociales ha ido variando a lo largo de las fluctuaciones políticas y económicas del país.

El movimiento piquetero y los llamados sectores medios junto a la "opinión pública" presentan a nuestro entender dos momentos en su relación: el primero se desarrolla desde la crisis de diciembre de 2001 hasta mediados de 2002. Se presenta como una posible alianza en crecimiento, esto se expresó en la consigna que por ese momento entonaban las distintas asambleas que agrupaban a los vecinos de los barrios de la capital federal: "piquete y cacerola la lucha es una sola", presentando a las dos modalidades de la protesta social como parte de lo mismo, unificadas.¹⁰⁹ El segundo momento, al que hacemos referencia, comienza a mediados de 2002, el punto de inflexión más visible es la "matanza de avellaneda",¹¹⁰ empieza aquí el alejamiento de los sectores medios y la "opinión pública", diluyéndose esa posible unión que prometía el primer momento.

Los piqueteros se transforman en algo que hay que ocultar, no reprimir sino ocultar; el gobierno debe hacer algo para impedir que se interrumpa la libre circulación. Se considera que el reclamo del movimiento piquetero

¹⁰⁸ En palabras del referente nacional del PO: "No creemos que la simple lucha reivindicativa por sí misma abra una salida a la crisis, porque cada vez luchamos desde una condición social más degradada, y lo que está proponiendo el capital, la banca, el FMI, es un paso a la barbarie. Para nosotros la organización política de los trabajadores es inevitable, no queremos que nuestra lucha se agote en el plano reivindicativo". Rauber, *op. cit.*

¹⁰⁹ Javier Palma explica así el cacerolazo: "Los antecedentes de esta modalidad de protesta se remontan a 1998 cuando la flamante Alianza UCR-Frepaso, en su intento de captar al electorado independiente, llamó a la realización de un cacerolazo en contra del gobierno de Carlos Menem y la corrupción de su gestión (Schuster *et al.*, 2002: 22). Este fue el primer cacerolazo de alcance nacional (...) Eminentemente urbanos y muy vinculados a los sectores medios, los cacerolazos alcanzaron su máxima expresión en diciembre de 2001. Entonces la bancarización forzosa de la economía sumada a la recesión que para entonces cumplía tres años gestaron una marcada presencia social en la calles de estos sectores sociales". Palma, 2004.

¹¹⁰ El 26 de junio de 2002, durante un corte en el Puente Pueyrredon, Darío Santillán y Maximiliano Kosteky son asesinados por la policía de la provincia de Buenos Aires.

es legítimo pero que la protesta es molesta y perjudicial para el resto de la sociedad, por esto se apoya la política de diálogo desarrollada por el gobierno. Muestra de esto es una encuesta realizada por el CEOP¹¹¹ donde 42.0% de los encuestados se mostró a favor de mantener el diálogo y 54.1% entiende que el reclamo de los piqueteros es justo y legítimo.

En el marco de una "sensación de reactivación económica", donde el gobierno de Néstor Kirchner tiene una imagen positiva que desde su asunción no baja de 70% llegando a ascender hasta 85% según las encuestas publicadas en el último año, los piqueteros se presentan como lo contrario a la reactivación, empeñados en hacer visible que hay problemas que no se solucionan y tampoco se avanza en su solución.

En este contexto se refuerza la estigmatización como problema individual y no social, la desocupación se transforma en "no búsqueda de trabajo", lo que en el 2001 era una consecuencia de la crisis por la que atravesaba el país, en el 2003-2004 se trata de "falta de voluntad".

Se ha comenzado a generalizar la idea, en algunos sectores de la sociedad, de que los miembros de las distintas organizaciones son sólo "vagos". Dicha estigmatización los condena ante la "opinión pública" como aquellos que sólo se agrupan para vivir del subsidio, siendo cada vez más recurrente instalar el problema desde el punto de vista del "derecho de todos" a la libre circulación, contra el derecho de unos "pocos" a reclamar por trabajo y condiciones dignas de vida.

Esta creciente individualización del movimiento de desocupados crea condiciones crecientes de aislamiento entre este sector, los llamados "excluidos del sistema" frente a aquellos que se encuentran incluidos, los trabajadores, quienes paradójicamente se están también en condiciones de suma precariedad. Coincidiendo estas posturas con la estrategia de aislamiento que propone el actual gobierno, que ha decidido no reprimir los conflictos, sino apuntar al desgaste de los mismos.

Podemos establecer entonces una relación entre las políticas que viene aplicando el gobierno en cuanto a los "piqueteros" y la "imagen pública" de estos últimos que se ha construido. Produciéndose una separación entre distintos sectores afectados por la crisis, llegando en algunos casos al enfrentamiento directo.¹¹² El problema queda planteado como responsa-

¹¹¹ *Clarín*, 28 de diciembre de 2003, "Apoyo al diálogo con los piqueteros".

¹¹² En el mes de febrero de 2004, durante un corte de calle en la ciudad de Buenos Aires se produjeron incidentes que terminaron con la agresión de un piquetero hacia un taxista. Hecho que provocó la airada reacción del sindicato de peones de taxis.

bilidad de quienes sufren la crisis y no como parte de los cambios estructurales que afectaron a la sociedad argentina. Nos encontramos, así, frente a una clase obrera escindida, con reclamos particulares y a veces violentamente contrapuestos, sin poder establecer una relación de cooperación.

Sin embargo, el carácter visible de la lucha piquetera y la permanente convocatoria a otros sectores ponen de manifiesto no sólo los intereses particulares del movimiento, sino que evidencian la necesaria acción de la clase obrera en su conjunto. Al exigir tanto los planes como el aumento del monto que perciben, las organizaciones luchan por la suba del salario, dado que los subsidios funcionan de hecho como un salario mínimo en el mercado de trabajo. Vemos, entonces, cómo la lucha por un interés particular encierra un interés general cuando la lucha por la subsistencia de unos implica una mejora de las condiciones de vida para el resto de la clase. La acción conjunta tendería a impedir la continuada venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, y con ello el paso acelerado a la condición de sobrante de otra parte de la población.

A MODO DE CIERRE

El movimiento de desocupados se enfrenta a un desafío: la mejora en las condiciones de vida de quienes no pueden acceder al mercado de trabajo, sólo puede encontrar una salida de largo plazo con la participación y articulación con otros sectores de la sociedad que, desde su particularidad, también expresan los efectos devastadores de la reestructuración capitalista. La posibilidad de articular un discurso inclusivo, “universalizador” puede permitir la reconstrucción, desde las mismas organizaciones del movimiento de desocupados, de una política alternativa orientada a desmontar este estigma que profundiza su aislamiento.

El movimiento piquetero encierra en sí mismo la posibilidad de mejorar las condiciones generales de vida del conjunto de los trabajadores. Posibilidad que realiza al presionar para mejorar sus propias condiciones de vida. Al luchar por su subsistencia inmediata, al exigir el aumento en el número y monto de los planes sociales, en la realización de “microemprendimientos” productivos que ayuden a la supervivencia —tanto individual, de la organización, del barrio, o de la región—, etc; presiona por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores en su conjunto, elevando el piso mínimo de tolerancia.

Rechazamos el pensamiento de la "exclusión" para comprender la realidad actual ya que apela a la normalización estatal, a encontrar formas políticas que integren lo que aparece como el "desorden a combatir", a través del establecimiento de la paz social. El rechazo a esta categoría parte de comprender a los desocupados no como el resultado de aquellos que fracasan en la venta de su fuerza de trabajo, o de analizarlos desde quienes no poseen recursos; sino que son aquellos que expresan el límite último de un modo de producción social que no conoce exterior. Esta situación muestra la necesidad de articular propuestas políticas que cuestionen y planteen una solución no en términos de inclusión sino de una respuesta progresiva que abarque a los distintos sectores de la sociedad en su conjunto, es decir, una propuesta universalizadora.

Esta posibilidad se potencia con la acción política conjunta entre los sectores ocupados y desocupados de la clase obrera. Acción conjunta que hasta ahora viene intentando realizar el movimiento piquetero, mostrando con esto una determinación específica, ya que al encontrarse fuera de la "producción" necesitan permanentemente estar en lucha para sobrevivir. Convocando en cada paso al conjunto de la clase obrera. Cada corte de ruta permite hacer visible la necesidad de esta acción conjunta; cada piquete es un llamado a los trabajadores en activo. Sin perder de vista, a su vez, que esta determinación específica de los desocupados les pone el límite de ser simplemente eso, un sector de la clase obrera argentina que, por sus condiciones de existencia, necesita estar permanentemente en lucha y llamando a la acción del conjunto para poder sobrevivir.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, S. (2000), "Políticas de desarrollo social, transformaciones y paradojas", *Estado y Sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI*, núm. 27, abril, Buenos Aires: Eudeba.
- Favaro, O. et al. (1997), "La conflictividad social en Neuquen. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales", en *Realidad Económica*, núm. 148, mayo-junio, Buenos Aires.
- Grassi, E. (2000), "Las políticas sociales y la cuestión del trabajo", en Oszlak (comp.) *Estado y Sociedad. Las nuevas reglas del juego*, vol. II, núm. 26, marzo, Buenos Aires: Eudeba.

- Iñigo Carrera, Juan, "Estancamiento, crisis y deuda externa. Evidencias de la especificidad del capitalismo argentino", en *Ciclos en la historia. La economía y la sociedad*, núm. 23.
- Lanari, M. E. (2003), *Las Políticas de Empleo en los países del MERCOSUR 1990-2003. Estudio Analítico Sobre Programas de Empleo Ejecutados en Argentina*, Buenos Aires: mimeo.
- Lozano, C y R., Feletti (1995), "Convertibilidad y desempleo. Crisis ocupacional en Argentina", en *Cuadernos del Sur*, núm. 20, diciembre, Buenos Aires: Tierra del Fuego.
- Martino, Roberto (2002), "Debates en el FMS-Argentina. Los trabajadores toman la palabra. Emprendimientos productivos: respuestas obreras al cierre de empresas y la desocupación", en *Cuadernos del Sur*, núm. 34, noviembre, Buenos Aires: Tierra del Fuego.
- Marx, Karl (1980), *El Capital*, tomo I, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Negt, O. (1995), "La imaginación productiva. Homenaje a André Gorz, un realista revolucionario de nuestros tiempos", en *Cuadernos del Sur*, núm. 20, diciembre, Buenos Aires: Tierra del Fuego.
- Perazzi, P. (2000), "Radiografía de los movimientos de trabajadores desocupados. Un enfoque antropológico", en *Cuadernos del Sur*, núm. 34, noviembre, Buenos Aires. Tierra del Fuego.
- Rauber, Isabel (2002), *Piquetes y piqueteros en la Argentina de la Crisis*, Buenos Aires, mimeo.
- Sáenz, Roberto (2003), *El FTC, una experiencia que busca ser distinta*, Ponencia presentada en el III Coloquio de Economistas Políticos de América Latina, Buenos Aires.
- Svampa, M y S., Peryra (2003), *Entre la Ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires: Biblos.
- Palma, Javier (2004), "Escenas de la subalternidad politizada. piquetes, saqueos y cacerolas: representaciones de lo popular politizado en la prensa gráfica", Tesina de Grado de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires, mimeo.
- Xiques, Mario (2003), *La otra cara del piquete. La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (Sata)*, Ponencia presentada en el III Coloquio de Economistas Políticos de América Latina, Argentina.

OTRA VEZ EN LA VÍA: CARTONEROS Y PIQUETEROS EN LAS CALLES ARGENTINAS¹¹³

Cecilia Cross y Débora Gorbán

INTRODUCCIÓN

La desintegración de la sociedad industrial, a partir de mediados de la década de los '70, ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación y análisis teóricos en las ciencias sociales. Esta crisis ha tenido un impacto tan fuerte no sólo a nivel económico y productivo sino en el plano político, que a esta altura de los acontecimientos, asociar la caída del Estado benefactor con la crisis de las instituciones y actores políticos tradicionales se ha convertido casi en un lugar común entre los científicos sociales.

Como veremos oportunamente, la crisis del trabajo ha golpeado con mayor fuerza a los sectores más pobres de la sociedad, quienes han sufrido más directamente los efectos de la precarización y el desempleo de largo plazo. Es por esta razón que focalizaremos nuestra atención en éstos; porque si bien es cierto que el deterioro de sus condiciones materiales de vida es muy profundo, no lo es menos que la crisis de la política ha realimentado su vulnerabilidad. Dentro de éstos, hemos escogido a los trabajadores desocupados pobres. Con el fin de buscar dos subgrupos cuya actitud frente a la falta de trabajo fuera diferenciada, nos centraremos en los recolectores informales de residuos (cartoneros) y en los trabajadores desocupados organizados (piqueteros), residentes en el conurbano bonaerense.

El hecho de escoger a un sector de la población privado de los beneficios de la relación laboral clásica nos obligó a revisar, en primer lugar, los indicadores que dan cuenta de la crisis del trabajo y la concentración del

¹¹³ Una primera versión de este trabajo fue presentada en el XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. "América Latina: por un Desarrollo Alternativo". Arequipa-Perú, 4 al 7 de noviembre de 2003.

ingreso, en el último cuarto del pasado siglo. De esto nos ocuparemos en el primer apartado del presente artículo.

Debido a la capital importancia que ha tenido el peronismo en el proceso de incorporación de los sectores populares al ámbito político en los años cuarenta, así como en el “vaciamiento de la Plaza” en la década de los '90 (Martuccelli y Svampa, 1997), en el segundo apartado analizaremos la crisis de las instituciones políticas tradicionales a la luz de dichos acontecimientos.

Una vez explicitado el contexto político y socio económico en que situaremos nuestro análisis, circunscribiremos nuestra perspectiva de análisis en términos teóricos, para finalmente dar paso al análisis de la información recabada en el campo y a las conclusiones de nuestro trabajo.

Para la realización de este material, entre octubre de 2002 y marzo de 2003 se llevaron a cabo 20 entrevistas e historias de vida entre “cartoneros” y “piqueteros”. La elección de estos dos grupos responde a que representarían, provisoriamente, dos modalidades polares de subsistencia. Somos conscientes de que esta distinción, de utilidad en el plano analítico, no puede ser empleada para clasificar a los sujetos reales en el plano empírico, dado que ambas condiciones no son mutuamente excluyentes. Por esta razón hemos caracterizado como piqueteros a quienes participan de alguna organización de desocupados (aún cuando recojan basura como complemento de sus ingresos), y como cartoneros a quienes no tienen ningún tipo de vinculación con estas organizaciones ni perciben ningún ingreso adicional al obtenido en su actividad de recolección.

En la lectura de las entrevistas, nos concentramos específicamente en el rastreo de aquellos aspectos y dimensiones de los relatos que ponen de relieve la crisis entre trabajo e identidad política. Para ello hemos centrado el análisis en lo que los sujetos dicen en relación con la política y lo que ésta significa para ellos, tanto en función del pasado, como de cara al futuro.

EL LEGADO DE LOS '90: POBREZA, DESEMPLEO Y FIESTA ESPECULATIVA PARA POCOS

El signo de los '90 fue el proceso de valorización financiera, que se instala en Argentina durante la última dictadura militar. En este sentido, y contrariamente a lo proclamado por el discurso dominante, el papel del Estado es central. Su función primordial es la de transferir ingresos desde

los sectores asalariados y medios, hacia el capital concentrado en todas sus expresiones.

En el periodo inmediato posterior a la implementación del Plan de Convertibilidad, esto es, entre 1991-1992, se produce una expansión significativa del empleo. El incremento alcanza 4.6% habiendo sido muy dinámico el sector asalariado. Esto se explica, en buena medida, por la recuperación de la economía en la etapa pos hiperinflacionaria. Ésta viene acompañada además por un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios: el salario mínimo real urbano sufre un incremento de 150% en este periodo (Beccaria, 2002).

Sin embargo, esta tendencia no se prolongó más allá de 1993 donde la tasa de empleo se estancó para caer con posterioridad, es decir, entre mediados de 1994 y mediados de 1995. Ya para 1993, el desempleo comienza a ser percibido como un problema acuciante. Por entonces, alcanza a 10% de la PEA, lo que puede ser explicado casi exclusivamente a partir de la ampliación de la oferta de empleo (ver gráfico 2).

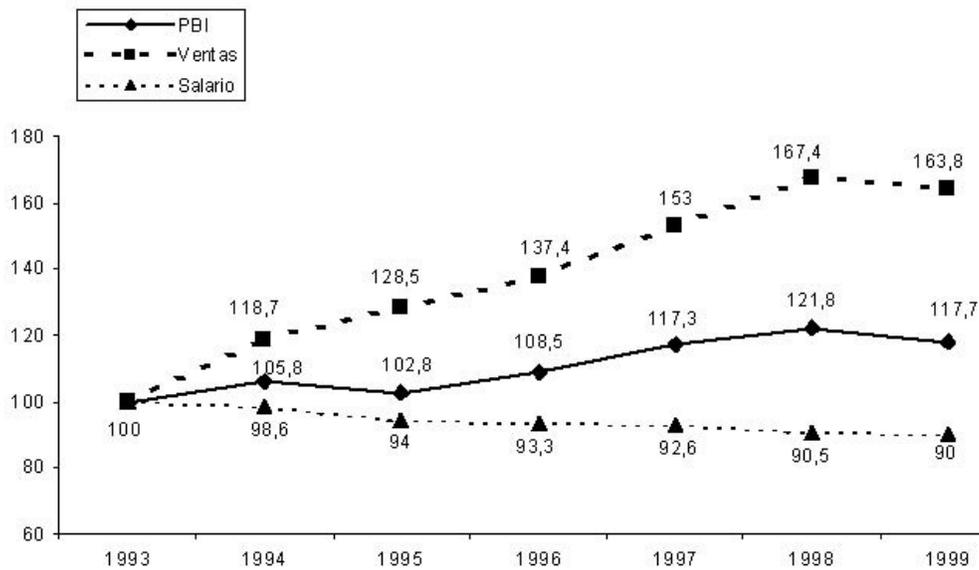
En lo que respecta a los salarios, a partir de 1993, el lento crecimiento y/o la destrucción de puestos de trabajo, y el consecuente mayor subempleo, sumado a las nuevas (des) regulaciones introducidas para el mercado laboral, restringieron el poder de negociación de los sindicatos. El resultado fue un reducido dinamismo de los sueldos y salarios, que se estancaron primero y se deterioraron después (Beccaria, 2002; Zapata, 2002).

Lo cierto es que en los primeros cinco años del periodo, el empleo estuvo signado por dos fuerzas de sentido opuesto: por un lado, la expansión económica favoreció la creación de puestos de trabajo en una economía que había atravesado una fuerte etapa de estancamiento. Paralelamente, un aumento en la productividad (sobre todo en el sector servicios) y la reestructuración estatal, tendieron a destruirlos y a reducir su elasticidad a los crecimientos del producto (Beccaria, 2002).

Mientras tanto, en el contexto de una tasa de desocupación en permanente crecimiento y el deterioro constante de los salarios, las utilidades del capital concentrado local experimentaron una tendencia alcista que se mantuvo hasta 1998 (gráfico 1). En un trabajo realizado en 2002 por el INDEC sobre grandes empresas, se puede observar que por una parte, en el lapso de 1993 al 2000, las utilidades de las 500 mayores empresas aumentaron 14%, mientras que el valor agregado lo hizo 30%. Por otra, la participación de los salarios cayó desde 46.4% hasta 32.3% el mismo periodo. Lo que se pone de manifiesto a partir del análisis de estos datos es el aumento de los beneficios empresarios en desmedro de los ingresos

de los asalariados. A su vez, del total de las utilidades percibidas por las 500 empresas más grandes, 90.9% es concentrado por las 200 mayores. Estos últimos datos permiten apreciar la magnitud y el alcance del proceso de concentración del capital y el ingreso.

Gráfico 1. Evolución del PBI a precios de mercado, evolución de las ventas de las 200 primeras empresas y el salario promedio real, 1993-1999 (índice base 1993=100)



Fuente: Dirección nacional de cuentas nacionales y área de economía y tecnología de FLACSO.

Entre tanto, desde 1995 se produjo una masiva fuga de capitales golondrina a razón de U\$S 2500 MM por año (Calcagno y Calcagno, 2000). Una vez estabilizada la situación financiera, es decir, entre la última mitad de 1996 y hasta mediados de 1998 (momento en el que la Argentina entra en proceso recesivo), el empleo crece fuertemente. En esta etapa, éste creció a una tasa de 6% anual, lo cual se explica en 50% por el crecimiento del empleo no registrado, que a fines de los 90 ascendía a 38%. Es probable que este crecimiento pueda ser efecto de la proliferación de modalidades de contrato precarias, como el tiempo de prueba. De hecho, esta modalidad registró una tasa de despidos ocho veces superior a la de los contratados por tiempo indeterminado; lo que hace suponer que dicha política

no fue utilizada como una instancia para poner a prueba la aptitud de los trabajadores, sino como una forma de precarizar la relación laboral (Beccaria, 2002). Sin embargo, la expansión del empleo no registrado fue característica en todo el lapso, aún en empresas "formales", debido a que, por un lado, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, el cuentapropismo no cumplió un rol de actividad refugio (Beccaria, 2002) y, por el otro, el Estado abandonó su función reguladora (Battistini, 2002).

Así como la recesión afectó negativamente el nivel de los salarios, fue terriblemente destructiva en términos de empleo. La desocupación siguió creciendo durante 1999, a pesar de que por entonces se registró un crecimiento de trabajadores en situación de subocupación, que ayudó a amortiguar la caída. En 2000 y 2001, esta tendencia no va a ser revertida, sino profundizada: a pesar de que desciende la tasa de actividad, el desempleo abierto seguirá en aumento, principalmente por destrucción neta de puestos de trabajo. Hacia octubre de 2001, la desocupación alcanzaba 19% de la PEA; si sumamos a los subocupados demandantes, esta cifra se eleva hasta 29.8% (Fuente EPH, INDEC).

La instauración de un modelo de acumulación basado en la valorización financiera se encontraba de alguna manera condenado a terminar en una crisis de las magnitudes de la actual. Dicho esquema supone, y supuso puntualmente en este caso, la destrucción del aparato productivo y de la mano de obra, creando desempleo e instalando un modelo de concentración de la riqueza y pauperización difícilmente soportable. De hecho, lo sorprendente no son los hechos acontecidos en 2001, sino que hayan tardado tanto tiempo en ocurrir. Años atrás Oszlak (1997) señalaba que: "(...) la razón por la cual las reformas económicas han dañado a los gobiernos democráticos menos de lo esperado, no se debe a que los costos hayan sido inesperadamente leves, sino a que los intereses afectados resultaron inesperadamente débiles".

El estallido de la desocupación puede ser explicado fácilmente como resultado directo de las llamadas "reformas estructurales". La apertura comercial ensayada fue abrupta, sin que el Estado asistiese al proceso de adecuación productiva. En un contexto de fuerte atraso tecnológico es esperable que aumente la relación empleo-producto agregada del sector de transables, como consecuencia de la desaparición de firmas o sectores de poca eficiencia. Por otra parte, el atraso cambiario desalentó la inversión con fines exportadores.

Adicionalmente, si bien el tercer sector sufrió un importante incremento, éste no se vio convertido automáticamente en empleos debido al crecimiento de la productividad sectorial. Es decir que en este caso, el aumento

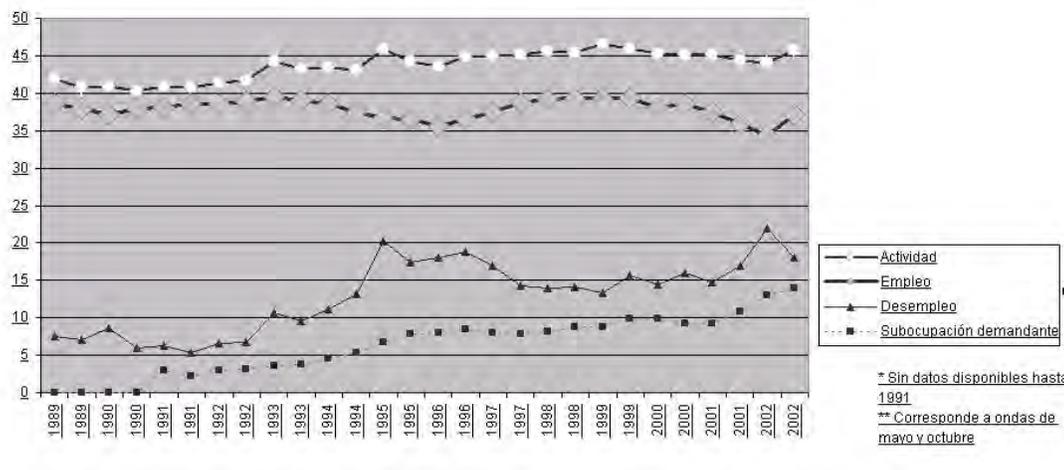
de la productividad, ocurrida sobre todo con posterioridad al proceso de privatizaciones, estuvo acompañada por la caída del empleo o de la elasticidad empleo-producto (Beccaria, 2002).

Sin embargo, pueden identificarse otras causas complementarias como el fracaso estatal para encarar políticas que permitieran encontrar salida a las situaciones de desempleo prolongado, la resistencia de los empresarios a contratar personas que hubieran perdido su "empleabilidad", el aumento de modalidades precarias de contratación, y la continua reducción salarial para compensar los diferenciales de productividad respecto a otros lugares del mundo; todo lo cual generó, como hemos visto, una presión adicional sobre el mercado de trabajo al incrementar la demanda de empleo (Battistini, 2002).

La crisis institucional desatada en diciembre de 2001 aceleró los tiempos políticos y económicos, y generó la caída no sólo de dos presidentes, sino también de la paridad cambiaria y del modelo. Para mayo de 2002, el desempleo alcanzaba 21.5% (sin los planes Jefe y Jefa de Hogar hubiera sido de 23.6%) de los activos, lo que sumado a los subocupación demandante arrojaba una cifra de 34.2% de los argentinos con serios problemas de empleo. En octubre 2002 estas cifras disminuyeron (17.8% y 31.6%, respectivamente), a pesar de que se registró un leve incremento en la tasa de actividad (41.8% a 42.9%).¹¹⁴ Adicionalmente, debemos señalar dos fenómenos que se asociaron al desempleo para terminar de configurar el actual escenario de pobreza y marginación. En primer término, que la desocupación en el periodo estudiado golpeó con mayor fuerza a los jefes de hogar. En segundo, que la destrucción de puestos de trabajo vino acompañada por una marcada devaluación de las calificaciones, manifestada por el deterioro salarial de los sectores de la población con secundario completo y más, y un marcado aumento del desempleo abierto en los sectores con menor nivel de instrucción (Beccaria, 2002). Este efecto, ampliamente distorsivo para el mercado de trabajo debido a que suboptimiza la inversión educativa (sobre todo la estatal), es, sin embargo, una estrategia corriente del sector empresario cuando la oferta de trabajo supera con creces a la demanda (Todaro, 1999).

¹¹⁴ Fuente EPH, INDEC.

Gráfico 2: AGLOMERADO GBA - Actividad, empleo, desempleo y subocupación demandante* (1989-2002)**



En términos de perspectivas hacia el futuro, el panorama no se muestra más alentador. De hecho, si la salida prematura del sistema educativo condena a quienes la sufren a un futuro errante en el mercado de trabajo, no es menos cierto que esta situación no se agota en el tramo de la generación que la padece directamente. De hecho, de acuerdo con los datos analizados, ocurre que la pobreza es menos determinante a la hora de predecir el abandono de la escuela por parte de los jóvenes que el nivel de instrucción alcanzado por los jefes de los hogares a los que éstos pertenecen. En efecto, en el partido de La Matanza, 70% de los jóvenes pobres o indigentes pertenece a hogares, cuyo jefe o cónyuge o ambos han alcanzado la primaria completa como máximo nivel educativo. En palabras de López: “la baja escolarización se constituye entonces en un indicador cierto de pobreza y un mecanismo central de transmisión intergeneracional de la pobreza: Padres pobres con baja escolarización con hijos pobres que repiten la historia educativa de sus padres situación que reproduce el estado de pobreza” (López, 2001: 19).

Es cierto, por otra parte, que muchos de estos jóvenes no hubieran accedido a la escuela media en el pasado pero, en ese momento, el trabajo operaba como un ámbito de aprendizaje y formación, así como también habilitaba el pasaje de los jóvenes a la vida adulta, hecho que no se verifica en el contexto actual de inestabilidad y desempleo (Kessler, 2002).

A lo largo de estas páginas hemos podido ver cómo la convertibilidad se transformó en sinónimo de paridad cambiaria, y ésta, a su vez, no sólo de modernización y crecimiento, sino también de desviación del gasto público,

desregulación, apertura del mercado de capitales, aumento de la dependencia crediticia externa y la privatización de las empresas públicas. No obstante, todo esto redundó en la creciente pauperización de los sectores populares y el cada vez más excluyente mercado laboral, convirtiéndose en el corolario perfecto de una serie de atropellos que minaron la capacidad de resistencia y las herramientas de construcción de las instituciones, que tradicionalmente habían representado los intereses obreros. Lo que queremos afirmar, una vez más, es que todos estos cambios fueron el fruto de un particular clima ideológico y económico internacional así como también de un proceso de debilitamiento de "las defensas sociales", de más de 25 años, que fueron plasmados en una particular política estatal. De esto nos ocuparemos en el próximo apartado.

EL PERONISMO EN LA ARGENTINA: UNA HISTORIA DE ESPERANZA, PASIÓN Y TRAICIONES

¿COMBATIENDO AL CAPITAL?

Más allá de los recurrentes debates presentes en la historiografía y las ciencias sociales en torno al rol del peronismo como momento de integración plena de los sectores populares a la vida política argentina (Germani, Torre, Murmis y Portantiero *et al.*) no es posible negar que la implementación de la versión argentina del *estado providencia*, llegó de la mano de los dos primeros gobiernos de Juan Perón (1946-1952; 1952-1955).

Este hecho ha dejado una fuerte impronta en la constitución del salariado nacional, y en nuestra cultura política, en tanto en el momento de la incorporación de los asalariados como sujetos políticos relevantes, la condición de trabajador aparecía asociada a la identidad política peronista (Battistini, 2003).

Esta situación se dio en un contexto bastante particular, que es lo que Martuccelli y Svampa (1997) han llamado "el modelo nacional popular".

Este modelo, con sus particulares formas de estructurar el discurso y de leer la realidad, marcó a la política argentina, mucho más allá de la duración del gobierno peronista. Con Perón en el exilio, los sindicatos adquieren un rol protagónico que, sin embargo, no logra eclipsar o desplazar la figura del líder, a pesar de los numerosos intentos propios y ajenos por lograrlo.

Hasta principios de los '70 en Argentina, las estructuras del sindicalismo peronista actuaron como núcleos desde los cuales los trabajadores construían y reafirmaban su identidad social, y a partir de las cuales se posicionaban frente a algunos sectores del capital, encarnados en la *oligarquía*. Ésta, cuyos límites precisos son difíciles de establecer, dado que se trata de una categoría política antes que económica, va a cumplir la función del *alter* que refleja el *nosotros* peronista. La identidad así reforzada se articula con base en círculos concéntricos de inclusión, interrelacionados desde líneas ideológicas comunes: por un lado, como apelación al sistema político (sobre todo al Estado), y, por otro, como espacio de reivindicación de los derechos de los trabajadores al interior de la producción (a través de la organización sindical). Si bien la forma de articulación entre ambas esferas fue transformada a partir de 1955 por la proscripción del partido y el exilio de Juan Perón, la intrincada relación entre pertenencia social e identidad política no pudo ser rota, al menos hasta el advenimiento de la última dictadura militar (1976-1983) (Battistini, 2003).

En efecto, ante los distintos procesos que dificultaron la acción directa del círculo político partidario, el sindicato comenzó a ocupar un lugar de preponderancia y pasó a ser, para los trabajadores (sobre todo en el caso de los más jóvenes), el espacio privilegiado de integración. Los jóvenes que llegaban, de la mano de sus padres, al partido o al sindicato, lo hacían desde la convicción de quien ha adquirido de pleno derecho un status social que no puede serle arrebatado. Por otra parte, el desarrollo de servicios desde las estructuras obreras hizo que desde los años sesenta las mismas generaran una atracción *per se*, gracias a la posibilidad de ofrecer recursos de propiedad social. En todo este proceso, lo político actuaba como articulador de distintas dimensiones que incluían al trabajador y a su propia historia, dotándolo de una pertenencia social susceptible de reforzar su identidad colectiva. En ese mismo sentido las relaciones con la empresa eran más reflejas que refractarias. Como fue dicho, la existencia de conflictos de intereses y de tensiones que atravesaban estas relaciones, no anulaba la posibilidad de reeditar permanentemente el pacto social. Esta posibilidad estaba sustentada en el hecho de que ambos términos se reconocían como interlocutores válidos; generando espacios de negociación, desde la cooperación o aún desde el conflicto (Battistini y Gorbán, 2003).

Esta situación es la que va a sostener en el tiempo a la llamada "resistencia" peronista, que va a ver coronados sus esfuerzos con la vuelta del líder a principios de la década de los '70. Sin embargo, para entonces, las profundas diferencias ideológicas y políticas (exacerbadas con la muerte de Perón) que van a cruzar tanto al *movimiento* como a la sociedad en su

conjunto, darán lugar a uno de los periodos más sangrientos y oscuros de nuestra historia.

SEDUCIENDO AL CAPITAL

Como dijimos anteriormente, el modelo nacional popular inaugurado por la primera presidencia peronista no pudo sobrevivir a la caída a nivel mundial del estado *providencia*. Sin embargo, no debe olvidarse que en la Argentina este derrumbe vino de la mano de una dictadura militar feroz y sanguinaria, que supuso además una transferencia brutal de riqueza a favor de los sectores más concentrados del capital, como hemos visto en el apartado anterior.

Lo que el mal llamado “Proceso de Reorganización Nacional” vino a destruir es una relación de fuerzas que no era funcional a las pretensiones capitalistas. Esta relación que, como dijimos, no había podido revertirse totalmente con la proscripción del peronismo ni con la muerte de Perón, a partir de mediados de la década de los sesenta había empezado a materializarse en formas aún “más peligrosas” para el conservadurismo que el fantasma populista.

La crisis económica de la década de los setenta, junto a la crisis de la deuda externa del año 1982, azotaron en distintos grados las economías de varios países del mundo; pero la reconversión productiva y la reforma del Estado tienen en el caso argentino otro objetivo, aún más importante, que la adaptación a un nuevo contexto macroeconómico: “(...) el objetivo ‘velado’ es realmente el cambio en la relación de poder entre capital y trabajo, que se había tornado en demasiado incómodo a las pretensiones empresarias en los ‘70” (Battistini, 1995).

De hecho, y como ya se ha señalado en el primer apartado, el rumbo que la dictadura imprimió a las políticas gubernamentales no pudo ser revertida por el advenimiento de la normalidad institucional.

En el marco de un proceso hiperinflacionario feroz, el peronismo vuelve al gobierno en julio de 1989 de la mano de Carlos Menem. Empero, va a hacerlo con una nueva matriz que refleja lo inexorable de las transformaciones operadas en el entramado social.

De esta forma, los trabajadores quedan huérfanos de protecciones sociales, aún simbólicas, generando una incompatibilidad entre aquella “estructura del sentir” y la nueva realidad del peronismo en el poder. La fase de fuerte “dualización social parece ir acompañada en lo político por una creciente despolarización, producto de la crisis generalizada de los lenguajes políti-

cos" (Martuccelli y Svampa, 1997: 48). Bajo una apariencia pluralista, esta manera de hacer política parece adaptarse a un escenario de crisis de las formas de representación y consolidación de las democracias presidencialistas, las que en este proceso van vaciándose de sentido.

Paralelamente, y más allá de las estrategias adoptadas, las organizaciones sindicales no poseen los medios necesarios para reeditar su rol de articuladores del conflicto y la movilización social. Sea tanto porque carecen de los recursos materiales para hacerlo, como por la profunda crisis de legitimidad en la que los sume su falta de poder político real, su distancia con la problemática obrera y/o la crisis del trabajo en todas sus formas.

Asimismo, los lazos simbólicos y materiales que establecían los vínculos individuales con ellas se han roto. Pero, además, esta ausencia se suma a la inhospitalidad de un "afuera", donde la amenaza comienza con la desocupación y termina con la desafiliación (Castel, 1995). En el espacio laboral quedan los trabajadores aislados, en permanente competencia entre sí, debido a la proliferación de formas atípicas de contratación y sin un "nosotros" que los contenga y les otorgue protección. Por fuera de este espacio, quedan los trabajadores sin empleo, azotados por la pobreza, atrapados entre la desesperación por lo que han perdido y la incertidumbre frente al porvenir.

Como fue dicho, en los años del pleno empleo el trabajador se reconocía con otros en la fábrica y desde allí encontraba un lugar desde donde referenciarse políticamente. En la actualidad, al haberse desdibujado el espacio de lo político, el lugar de la fábrica pierde efectividad para asegurar la identidad social del trabajador. Hasta los setenta, a pesar de la convivencia de distintas formas ideológicas, la doctrina y el simbolismo peronista se erigían como un referente colectivo, que dotaba a la cultura del trabajo de un sentido explícito y positivo.

Al mismo tiempo, y sumado al empobrecimiento progresivo de las capas medias, las formas de protesta social del periodo, de carácter violento y disperso, "expresan la crisis de representatividad de los actores políticos en una modernidad cada vez más excluyente". El resultado de esto es la desorientación de los diferentes actores que enfrentan el abrupto final del antiguo modelo de integración social, al mismo tiempo que "experimentan subjetivamente las consecuencias de la crisis de las identidades sociales" (Martuccelli y Svampa, 1997: 44).

En efecto, si la desestructuración del espacio público, reforzada y encabezada por el gobierno menemista, dejó a los sectores populares sin referencia, no corrieron mejor suerte las demás expresiones mayoritarias de la

política nacional. Este espacio que no pudo ser llenado por ninguna otra manifestación política, terminó por desdibujar también al resto de los sectores de la vida política nacional. La experiencia fallida de la Alianza y la *cuasi* desaparición del radicalismo como tal en el escenario electoral, no han hecho si no reforzar la sensación de que la distancia entre *los políticos* y la sociedad es cada vez más profunda e insalvable. Los acontecimientos de diciembre de 2001 llevaron al paroxismo esta certeza: Tras el reclamo por "Que se vayan todos", la legitimidad de la autoridad gubernamental, pero también la de los organismos parlamentarios, locales y judiciales llegó a su punto más bajo.

Frente a esta situación, es necesario volver a poner la lupa sobre las situaciones particulares y los intentos de reconstrucción del entramado social que con carácter más o menos deliberado, ensayan los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Las grandes explicaciones en términos institucionales pierden efectividad en vistas del vaciamiento de sentido que las instituciones han sufrido. Esta es la convicción desde la cual nos hemos propuesto analizar la crisis política que nuestro país se encuentra atravesando. De esto nos ocuparemos en los apartados que siguen.

ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS PARA PENSAR LA CRISIS

El concepto que utilizaremos para dar cuenta de esta problemática es el de *acción política*, debido a que interesa particularmente contemplar el componente subjetivo que el concepto *acción* supone. De esta forma, estamos en condiciones de considerar el posicionamiento de determinado sector no sólo frente al Estado, sino en relación con los demás sectores sociales¹¹⁵ con quienes se relaciona (en forma conflictiva o cooperativa), en pos de acceder a determinados recursos materiales y simbólicos socialmente valorados y disponibles en el espacio público. Nos referimos a recursos que les permiten no solamente su reproducción material sino, también, su afirmación social como individuos valiosos y dignos.

De hecho al hablar de *afirmación social* o *recursos simbólicos* no hacemos sino afirmar esta pretensión. La acción, como tal, supone la atribución de significados por parte de quien la lleva a cabo, los que pueden ser aprehendidos a partir del discurso y adquieren su sentido en un espacio social de significados compartidos.

¹¹⁵ De hecho es una pregunta perentoria en este marco, la forma en que ese *alter social* se construye.

A lo largo del presente artículo veremos cómo, en el caso estudiado, resulta necesario incorporar una perspectiva que exceda la conformación de subjetividades plurindividuales, debido a la importancia que van a adquirir la conformación de nuevos sujetos colectivos, para explicar y atender en toda su dimensión el fenómeno abordado. En efecto, de las entrevistas realizadas surge claramente cómo el análisis bidireccional (entre instituciones y sujetos) se muestra estéril, debido a la incapacidad de unos y otros de reconocerse mutuamente. Éste déficit representativo es producto de un estado que podríamos denominar “anomia política” Siguiendo a Novaro (1995), sostendremos que “lo que era representativo ya no lo es, porque lo que buscaba ser representado ya no existe”.

Creemos que la razón por la cual estas perspectivas no pueden dar cuenta de lo que hemos llamado *anomia política*, es que dichas explicaciones no pueden encontrarse mientras sigamos pensando en una sociedad constituida por individuos aislados, a la espera de canales institucionales que formalicen sus vínculos con el ámbito público. Especialmente, cuando a partir de la crisis del trabajo, los canales existentes se muestran estériles para expresar la complejidad de la sociedad actual. En una sociedad donde la condición de subalternidad y el ser asalariado han dejado de corresponderse, y en la que no han surgido nuevos canales de comunicación entre el espacio público y el privado, no tiene sentido forzar las interpretaciones reduciéndolas al mero estudio de las causas de la apatía electoral o la caída de la tasa de afiliación sindical, sencillamente porque esas prácticas han adquirido su sentido en un contexto histórico y social determinado (y más bien acotado en lo que a la historia del capitalismo se refiere) y no deben ser dotadas de un carácter de inmanencia del que carecen. De ahí que lo que proponemos es analizar, sin perder de vista los cambios experimentados por nuestra sociedad en los últimos años y sin sobrestimar sus impactos estructurales, las presentes articulaciones entre trabajo, identidad política y acción colectiva.

Consideramos que esta es la manera en que mejor podremos explicar la conflictividad actual, en un contexto en que las viejas formas de la política se niegan a morir y las nuevas no terminan de nacer.

ACCIÓN COLECTIVA E IDENTIDAD

Todo abordaje empírico requiere de una delimitación teórica desde la cual se pueda “leer” la realidad. En el caso de estudio propuesto, afrontar la complejidad que reviste supone recurrir a un bagaje de herramientas que nos permitan aprehender procesos diversos. En el siguiente apartado nos

proponemos dar contenido a ese bagaje a partir del desarrollo, e imbricación, de dos conceptos principales: la acción colectiva y la identidad política, ambos en relación con el trabajo.

La acción colectiva, o su estudio, se encuentra estrechamente ligada al análisis de los movimientos sociales (Tarrow, 1997; Mellucci, 1999; Tilly, 1978, 1986). Desde diferentes perspectivas se ha intentado definir cuáles son los elementos teóricos que dan lugar a la acción colectiva a fin de poder dar cuenta de la naturaleza y condicionamientos de los movimientos sociales. Si bien no es el objetivo de este artículo indagar acerca de la constitución o no de movimientos sociales en el caso de los dos grupos estudiados, creemos que los conceptos teóricos desarrollados en estos abordajes nos ayudarán a comprender las formas en que se construyen lazos de sociabilidad, con base en las experiencias compartidas y la realidad cotidiana, pero también en el marco de la protesta y la movilización. De esta manera, podremos liberarnos de los constreñimientos impuestos por aquellos esquemas tradicionales e institucionales, que nos imponen la "necesidad" de encontrar "nuevos modos" que reproduzcan viejos esquemas.

Para S. Tarrow (1997), la acción colectiva adopta formas diversas, es decir, puede ser: breve o sostenida en el tiempo, institucionalizada o disruptiva, monótona o dramática. De hecho, es dentro de las instituciones y de la mano de los grupos constituidos, donde se produce la mayor parte de las acciones colectivas, que lejos de suponer una amenaza o un cambio, en su mayor parte, sostienen el orden estatuido. Nosotros podríamos agregar que estas formas de la acción colectiva son las que se desarrollan en las instituciones que hoy se encuentran discutidas. Sin embargo, Tarrow pondrá el acento sobre otro tipo de acción, que creemos resulta interesante para pensar las actuaciones políticas de los sectores populares: la acción colectiva contenciosa. Esta acción colectiva es tal cuando es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones mencionadas, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros (Tarrow, 1997).

En efecto, cuando los canales políticos de comunicación entre lo público y lo privado no pueden sobreentenderse, es necesario abordarlos a través de conceptos que nos permitan aprehenderlos en su conformación. Es por eso que en nuestra red conceptual entenderemos a la acción colectiva como proceso (Melucci, 1999), en el cual interviene co-constitutivamente la identidad como construcción. Estos conceptos nos dejan asir la dimensión relacional, y de esta manera observar cómo se construyen estas acciones, cómo se desarrollan, quiénes son sus enemigos, con quién entablan los conflic-

tos. Por otra parte, siguiendo la propuesta de Tarrow, pensar en términos de redes o estructuras de interacción, es decir, de los grupos de contacto directo e instituciones en que se hallan insertos los potenciales participantes de acciones colectivas (Tarrow, 1997), nos permitirá dar cuenta de aquellas acciones que desde otros enfoques ni siquiera son percibidas.

En este artículo nos centraremos, específicamente, en las acciones colectivas que encuentran en el trabajo (no – trabajo) su núcleo articulador, ya sea que éste aparezca entre los objetivos de la acción, los intereses detrás de ella o entre los motivos que la movilizan. Queremos aclarar que entendemos a la protesta como un elemento dentro de este tipo de acción colectiva, esto es, como un momento de exposición directa, pública y disruptiva, de prácticas que la exceden. En este sentido, sostenemos la necesidad de dar cuenta de la interacción entre los aspectos que hacen a la realidad cotidiana y aquellos que se ponen en juego en el momento crítico de la protesta, alimentándose y alimentando las formas de sociabilidad que los generan y que (a su vez) permiten generar.

Al mismo tiempo, consideramos con Tarrow (1997) que estas acciones colectivas tienen poder porque desafían a sus oponentes, despiertan solidaridad y cobran significado en el seno de determinados grupos de población, situaciones y culturas políticas.

En este contexto, la identidad actúa como motor y como posibilidad de la acción; según Pizzorno (1989) la participación en la acción colectiva es necesaria para confirmar la propia identidad colectiva y renovar la eficacia del círculo de reconocimiento, en el cual uno puede continuar actuando y siendo visto como la misma persona. Es decir, no solamente la confirmación o formación identitaria se convierte en una motivación para la acción (refutando las teorías de *rational choice*) sino que, a su vez, se transforman en un resultado de la misma. De este modo, la acción colectiva actúa como lugar de construcción de referencias identitarias que hacen que los beneficios obtenidos a través del desarrollo de la acción no sean únicamente materiales sino también —y a veces fundamentalmente— simbólicos, ya que actúan “asegurando” la identidad de las personas que en ella participan en reemplazo del papel que anteriormente ejercían otras instituciones (sindicatos, partidos).

De esta manera, entender el elemento identitario como constitutivo y motivador de la acción colectiva, nos permite comprender las apuestas “de sí”, las luchas por el sentido de un determinado estado de cosas que se ponen en juego en aquella. Y esto es así porque “la gente no puede actuar sin una identidad. Cuando nadie cuestiona la identidad que ha recibido, hace uso de ella, cuando la identidad se encuentra amenazada o deteriorada

luchan, incluso sin ser conscientes de que lo hacen, por asegurarse una. El sentido de mi acción no es asegurar utilidades sino el reconocimiento” (Pizzorno, 1989).

Como hemos mencionado anteriormente, los individuos actúan para confirmar o salvaguardar lo esencial de los sentidos y la identidad de su existencia, sobre todo si los modelos disponibles bajo la forma de repertorio y de reivindicaciones, forjados en el curso de la historia del grupo, se ven amenazados (Tilly, Tarrow, Mc Adam, 1998).

En el próximo apartado, realizaremos el análisis de las entrevistas efectuadas a piqueteros y cartoneros, tomando como marco los conceptos teóricos hasta aquí explicitados. Pero primeramente daremos cuenta del abordaje metodológico utilizado en la investigación así como las técnicas empleadas en el trabajo de campo.

PIQUETEROS Y CARTONEROS FRENTE A LA POLÍTICA

Como fue explicado oportunamente, el objetivo de este trabajo es centrarnos en el análisis de posicionamiento político de un grupo de trabajadores pobres desocupados o informales, quienes, a partir de las violentas transformaciones llevadas a cabo en los '90, han sido arrojados fuera del esquema productivo tradicional o, como en el caso de los más jóvenes, que no han ingresado nunca en él.

UN PASADO COMÚN

Las diferencias de ahora, con todo esto del tema de los presidentes, todo eso, fueron quedando mucha gente sin trabajo. Y bueno, estamos así. Cada vez hay más pobres.

MARCELO – Vª LA CÁRCOVA

En la búsqueda de algunas razones que permitan explicar la creciente brecha entre los sectores más pobres de nuestra sociedad, y las formas tradicionales de representación política, vimos que no era posible analizar a los dos grupos con los que trabajamos, en término de actitudes polares frente a la política. A pesar de que *a priori* podría decirse que los piqueteros en tanto sectores movilizadas y los cartoneros, en tanto trabajadores informales sin una aparente articulación política que trascienda su activi-

dad, se encuentran transitando caminos paralelos a partir de su situación de desocupación y marginación del mercado de trabajo, la manera en que articulan su discurso no posibilita sostener estas diferencias en forma taxativa.

Su histórica pertenencia al mismo sector socio-económico pareciera prevalecer sobre estas diferencias actuales, en al menos dos sentidos: por un lado, porque el *cirujeo* es una actividad común entre quienes se encuentran en ambos grupos, ya sea como complemento de ingresos o como actividad principal, insumiéndoles en cualquiera de los casos muchas horas de su jornada y viviendo en forma parecida esa realidad de trabajar en la calle. Por otro lado, porque sus referencias a un pasado, más o menos remoto, en el que el trabajo permitía la existencia digna, propia y familiar, es la base desde la que se articulan las demandas presentes, pero es también lo que da sentido a un presente de penurias y privaciones. Esta prevalencia de una particular "cultura del trabajo" es lo que permite explicar esa visión común del pasado, más allá de las diferentes trayectorias particulares.

En efecto, ese pasado más favorable, estaba signado por la posibilidad cierta de conseguir un trabajo, un trabajo que además otorgaba ciertos beneficios sociales, especialmente valorados cuando se tiene una familia a cargo. Frente a esto, el momento actual representa para los trabajadores el quiebre y cierre de ese periodo.

No, él [su padre] me dijo que en ese momento, era diferente... El me decía que se laburaba y se ganaba bien, era otra época me decía mi papá... (Rubén, 25 años, FTV, La Matanza).

Cuando yo vine de Entre Ríos, a los 13 años había trabajo de sobra, elegías trabajo, te gustaba este te ibas a aquel, este te pagaba más y así... (Juan Carlos, 26 años, cartonero, V^a La Cárcova).

Yo fui (...) oficial zapatera, trabajé en una empresa también de limpieza de oficinas, Y mirá, trabajé en total, trabajé cuando tenía 18 años, empecé trabajando, trabajé, estuve trabajando como 7 años en la fábrica de zapatos, después estuve trabajando como 2 años en la de limpieza, después quedé sin trabajo y en qué terminé... en el cartoneo (Lidia, 56 años, cartonera, V^a La Cárcova).

Este particular modo de ver y entender el trabajo, hace que el momento en el que se asume la responsabilidad de formar una familia propia sea un hito fundamental, a partir del cual se vuelve necesario, y hasta imprescindible, conseguir un empleo tradicional. En efecto y como fue dicho anteriormente, el ingreso al "mundo del trabajo" se convertía en una instancia de pasaje e ingreso a la vida adulta. Aún entre los más jóvenes, a quienes en su mayoría puede percibirse como víctimas de segunda generación de la inestabilidad laboral, el drama del desempleo no parece tocarles directamente si no hasta que son ellos quienes deben ocuparse de que a sus hijos no les falte "nada".

No entienden que nos falta (...) todos tienen chicos y quieren llevarle algo a la casa, póngale fruta o un poco de menudo, eso es lo único que tenemos para llevar (...) (Rosa, 45 años, cartonera, Zárate).

Mi viejo nos dio todo hasta que, lo que pudo (...) Mi vieja también hasta que desgraciadamente murió, nos habrá faltado para una garrafa o para pagar la luz pero de comer mi viejo, gracias a Dios, nunca nos hizo faltar (...) A los 18 años tuve mi primer hija, y... bueno ¿viste? Ahora me toca a mí mantener cuatro hijos, y se te hace duro todos los días... porque no podés... uno que es grande, bueno, la pasó, ya está, pero ellos que son chicos y primordialmente tienen que estar los chicos, y yo los traje al mundo, viste y yo los tengo que mantener (Emilio, 25 años, FTV, La Matanza).

Las aspiraciones, tanto futuras como aquellas en función de las cuales se evalúa la propia infancia y la de sus hijos, no parecen haberse modificado: "Tener un techo, que no falte para comer, que puedan estudiar, al menos terminar la escuela primaria (...)" (Emilio, 25 años, FTV, La Matanza). En este sentido, podemos afirmar que sin demasiadas distinciones, el trabajo aparece asociado a la condición de dignidad, de la vida adulta, entendida ésta como tal a partir del momento en que se debe asumir la responsabilidad de los hijos. Lo que es aceptable para un joven sin hijos, se vive como un problema en la medida en que el mismo joven tiene una familia a su cargo. El trabajo es reconocido como la única posibilidad de "ganarse el pan dignamente", sigue representando valores tradicionalmente ligados a una cultura del trabajo, les permite ser reconocidos positivamente por otros y por sus semejantes. Paralelamente, pareciera existir un fuerte man-

dato por el cual cualquier situación laboral debe ser aceptada en pos de que "no falte nada", si es que esto fuese posible. En muchos de los casos ni siquiera los más grandes sacrificios se revelan como suficientes para lograr este ideal, entonces la situación de frustración es inmensa; pero parece que lo es más por las carencias vividas en el hogar, que por la actividad que se realiza para tratar de paliar las necesidades.

Nosotros consideramos que este es un trabajo como todos los demás. Ahora lo que la gente discrimina, y bueno será que ellos tienen. Realmente a nosotros no nos parece incómodo esto, porque es un trabajo como todos, y si no nos rebuscamos con esto; tampoco tenemos para comer, y tampoco para sobrevivir (...) y nosotros pensamos en las criaturas primero, después en los grandes digamos, porque los que más sufren son los chicos (Teresa, 27 años, cartonera, Curita).

Sin embargo, subsiste una sensación de vergüenza entre aquellos que deben salir a pedir o a juntar residuos para vender, si bien cumplir con el mandato de que "no falte nada" no pone en cuestión ejecutar trabajos que aparecen como "incómodos". Salir de noche, recolectar en barrios lejanos al ámbito cotidiano, son intentos por sobrellevar la vergüenza propia y la discriminación ajena. En última instancia, la vergüenza es dejada a un lado ya que "se sale por necesidad" o como dice uno de los entrevistados "por obligación".

De este trabajo nada me gusta, pero tengo que mantener a mi familia, y qué querés que haga? (...) yo no veo la hora de abandonar la carreta (...) si a mí me sale un trabajo, yo dejo. Pero si yo dejo la carreta ahora, quién me da de comer a mí?... O a mis hijos?... O a mi señora?... Nadie (Marcelo, 38 años, cartonero, Curita).

Y la primera vez sentí mucha vergüenza, pero había que salir. Voy de noche para que no me vean. A nadie le gusta hacer este trabajo, pero bueno yo pienso "acá no me conoce nadie" (Francisco, 41 años, V^a Hidalgo, cartonero).

De todas formas, en la medida en que se empieza a percibir que el problema es compartido por la mayor parte de la gente en el barrio, esta sensación va siendo revertida. Entonces, el nuevo *clivaje* que permite la revalorización personal empieza a estar entre aquellos que “trabajan” (aun como cartoneros o cirujas) y los que roban o se abandonan, y no “la luchan”, aunque esa lucha sea vista en esta primera instancia como una pelea individual o familiar, por la propia subsistencia. Podemos decir que esto expresa una lucha por la propia identidad, por asegurarse una cuando ésta se encuentra amenazada o deteriorada, ya que el sentido de la (propia) acción no es asegurar utilidades, sino el reconocimiento del ámbito social en el que un individuo se encuentra inserto (Pizzorno, 1989).

(...) ahora yo tengo compañeros de la primaria que los conozco porque somos casi todos del mismo barrio, que están todos sin trabajos, mayormente son todos compañeros que son de mi edad y ya todos tienen chicos (...) Te digo la verdad, vos salís a la noche a buscar cartón y ves chicos, señoras con chicos que están juntando cosas de la basura (...) aunque yo también lo hago, no me da ni vergüenza ni nada, porque yo no le estoy haciendo mal a nadie (...) Hay mucha gente que te mira con mala cara, porque estás revisando la bolsa y yo prefiero estar revisando la bolsa y no robar... (Raúl, 25 años, FTV, La Matanza).

Y con los planes no alcanza, no? Es decir la gente, la mayoría va a los comedores, con dos tres chicos es imposible (...) Yo me arreglo dando clases, yo siempre daba clases a los chicos de secundario, preparo chicos para dar examen (...) con eso y alguna cosa que le salga a mi marido... cuando consigue... cuando hay. Pero está todo el mundo tratando de hacer... Hay mucha gente a la vez que cartonea, muchísima, y el tema del lugar donde se llevan los residuos es un lugar que está lleno de gente, escarbando en la basura y tratando de conseguir algo... por ahí el más joven es como que dice: bueno, ya está, lo tengo que hacer, lo hago, viste? Por ahí vio en la casa que laburaban la madre y el padre, pero el que tiene más de 40 años le cuesta más... le cuesta un poco más (Susana, 46 años, FTV, La Matanza).

Porque esto vos lo hacés porque estás sin laburo, pero muchos discriminan y dicen que sos ciruja, que sos ratero, que lo otro...

hay muchos capaz que vienen, que se vienen con un carro y a aprovechan a robar y todo eso, y la culpa todo cae entre nosotros. Cualquier cosa que haga, ven un carro ya lo primero es los cirujas. Y no son toda la gente así (Juan Carlos, 26 años, cartonero, Vª La Cárcova).

Por otra parte, y como decíamos anteriormente, el apego a los valores de la cultura del trabajo se observa tanto entre "piqueteros" como entre "cartoneros". Las transformaciones descritas en la primera parte de este artículo, han devastado el modelo de trabajo que instalara el peronismo en los '50, desde lo material pero también y fuertemente desde lo simbólico. Y es en este último plano que tal modelo o concepción del trabajo ha sobrevivido, al menos en lo que hace a los valores que se sostienen, se defienden y se intentan transmitir, aún desde el desempleo y la lucha diaria por la subsistencia. Es decir, las "marcas" de una socialización anterior dentro de un modelo nacional popular encarnado en el peronismo, en el caso de los más viejos, así como la transmisión y aprehensión de aquellos valores forjados en el mismo, en el caso de los más jóvenes, permiten explicar aquella "coincidencia". Y esto es así ya que, su común pertenencia de clase, les confiere una historia y un pasado colectivo en común.

Estas coincidencias también, y por motivos similares, se observan a la hora de dar cuenta de sus opiniones y percepciones, respecto de "los políticos" y "la política". En los testimonios de los entrevistados encontramos referencias al vínculo existente entre la situación de pobreza y carencias en la que viven, y la actuación de la dirigencia en general. Piqueteros y cartoneros coinciden en sostener una visión negativa de los políticos en tanto se los percibe como ajenos a la realidad y a la problemática inmediata que atraviesan.

Una aclaración inmediata debiera ser que al hablar de los políticos, casi invariablemente se hace desde una visión acotada y parcial que incluye en este grupo casi exclusivamente a los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, y a quienes ejercen algún cargo público. Por extensión, la política es la actividad que éstos desarrollan, tanto en función de la administración de los asuntos públicos como en las prácticas que llevan a cabo para conseguir los votos de la gente de los barrios en los que viven. Esto no es un dato menor, en cuanto supone una mirada influida por una estrategia discursiva producto de la visión neoliberal de la política, en la que los asuntos privados se dirimen en el mercado, los públicos en el Estado, sin que, preferentemente, deba existir una conexión entre ambas esferas.

Egoísmo, desinterés, ausencia, desconfianza, descreimiento son algunas de las características atribuidas a, o generadas por, las acciones de los políticos, que parecen desprenderse de los discursos de los entrevistados.

No, no me presenté [a los Planes Jefes y Jefas] porque nunca creí. Yo tenía una nenita enferma tenía, y anduve pidiendo los remedios para ella, y no se lo querían dar (...) los políticos, sillas de ruedas, que me hacía falta a todo el mundo y nunca nadie me dio nada. Ahora cuando dijeron para anotarse en ese jefas y jefes de familia no fui. No creía, si nunca me dieron nada. Y ahora salieron... pero yo no me anoté (Pablo, 38 años, cartonero, Curita).

(...) y los políticos... le importa el buche de ellos... A los políticos ni yo ni vos le importan....a ellos no les interesa si hoy vos tenés para comer o no, mientras ellos tengan para comer... a ellos no les va a faltar un plato de comida, en cambio a mí hay muchas veces que me faltó. Pero ellos no me van a dar de comer (Emilio, 25 años, FTV, La Matanza).

Ahora bien, es interesante ver que en esta lectura existe un dejo de resentimiento respecto a esta distancia entre la política (y los políticos) y la problemática cotidiana de la gente. Así, ese resentimiento se expresa como reproche, y también, como veremos más adelante, como demanda hacia el Estado.

R: Estoy pensando todavía. Me parece que el voto no va a ser lo mejor para nadie, no? Me parece que mucha gente este año no va a votar. Va a ir y va a poner el voto en blanco, para quién es no sé, el voto en blanco.

E: Y, posiblemente para Menem.

R: Y bueno. Entonces van a tener que poner cualquier cosa, no sé. Porque ahora no pensaría en votar porque con todo lo que pasó, todo lo que (...) Ya no te da confianza más nadie para votar ahora (Rubén, 25 años, V^a La Cárcova, cartonero).

Porque los supermercados no te dan nada, y la cámara de supermercadistas deja de proveer, ellos dicen que le dan a la municipalidad, pero la municipalidad tampoco lo recibe, o sea que nosotros tratamos de negociar que se lo diera al municipio y que el municipio lo repartiera en los comedores, pero tampoco se logró (...) Sólo en el caso de la gente que los presionan, como en el caso de la gente del bloque piquetero, y que tienen un acuerdo político del PJ y por eso les dan algunos alimentos (...) es muy difícil el diálogo con la gente de la Secretaría de, no con la Secretaría así en particular, pero como organización (...) y ese tema le pasa a todas las organizaciones, aquellos que transan con el PJ, tienen más posibilidades los que no, nos vamos quedando afuera (Mirta, 43 años, FTV, La Matanza).

Sin embargo, como se adelantara, a pesar de este sentimiento de enajenación que se expresa en torno a las estructuras partidarias tradicionales, se sigue demandando al Estado y al gobierno por la solución de los problemas en que se hallan inmersos. Lo que parece legitimar este reclamo es lo grave y profundo de la crisis, que, de acuerdo con los relatos, no deja margen para que las personas queden libradas a sus propias fuerzas.

Al fin y al cabo el gobierno se tiene que dar cuenta que hay mucha hambre... Acá y en las provincias se nota más... porque yo tengo parientes que son de la provincia, parientes de parte de mi papá que son del Chaco... él tiene primos, sobrinos, allá; que viven de la cosecha del algodón (...) hoy en día no tienen ni para comer, prácticamente que ellos van a cazar algo... Acá no vas a cazar en el medio de la capital (Rubén, FTV, La Matanza).

Mejorando, para mí principalmente es que le tienen que dar trabajo a la gente, porque... mucha gente hay sin trabajo, privilegiar eso porque tienen que darle trabajo a la gente para que puedan alimentar sus hijos, y no andar pidiendo, ¿entendés? Ojo, que pedir no quiere decir... A mí pedir no me da vergüenza, la otra vez yo me fui a juntar cartón a San Justo pasé por una panadería y me llamaron y me dieron factura, pan, que a veces vos no lo podés comprar (...) por lo menos no digo que el pan es super, pero para una taza de mate cocido tenés (Emilio, FTV, La Matanza).

Y no sé [qué le pediría al Estado], que sé yo, que hagan una buena administración y que el país salga adelante, nada más. Que le den trabajo a la gente. Vos fijate que hay millones de gente que sobrepasa (...) Vos fijate que acá, los trabajos que te dan ahora son de 20, de 18 a 30 años, de 30 para adelante dice que no porque ya no va más. Y cómo? Entonces lo que tienen de 30 a 50 no pueden trabajar en ningún lado tampoco, porque ya sobrepasan la edad. Entonces no sé. Si cada vez va a haber así con la edad, cada vez más gente va a haber sin trabajo igual, así que (...) Aparte quieren cubrir muchas cosas con los "Planes Trabajar". Vos fijate que en una familia que tiene 3, 4 chicos, no te alcanzan 150 pesos (Rubén, 38 años, cartonero, V^a La Cárcova).

Estas explicaciones sobre lo que el pasado y el presente significan, nos devuelven una imagen sensiblemente distinta de la lisa y llana apatía por la política con que se han pretendido justificar las actitudes políticas de los sectores populares en la Argentina. Lo que vemos detrás de estos relatos es una profunda desazón por la indiferencia (o por la falta de sensibilidad) que las instituciones tradicionales tienen frente a las urgencias que deben afrontar estos sectores. En efecto, pareciera que la política ha quedado relegada al ámbito de la administración de los bienes estatales, administración que no considera ni incluye el drama de la pobreza entre sus prioridades.

Cabe resaltar que ambos grupos han sido y son sujetos de prácticas políticas clientelares de parte de las estructuras políticas tradicionales. Sin embargo, para ellos en muchos casos éstas no sólo conllevan un significado político sino también de supervivencia, y es en este último sentido que estas prácticas son resignificadas por aquellos; ya que se constituyen en una vía más a través de la cual pueden acceder a recursos dirigidos a satisfacer sus necesidades más inmediatas.

No, en mi familia nunca se habló de política, nunca discutimos de política (...) No, siempre íbamos a votar, cada vez que nos tocaba ir, pero... la general es obligatoria así que... las internas no, casi nunca fuimos... y eso que algunas internas ahí en el barrio te pagan... Hay muchos que agarran viaje, son \$15 viste? Por lo menos tenés para comprar pan y eso... Así que muchos agarran viaje, van y votan... pero no es muy interesante la política en casa... (Rubén, cartonero, V^a La Cárcova).

Yo... para mí, no entiendo de política, no me interesa la política. Para mí es que nadie tenga hambre, que todos tengamos una educación para que nos manejen los de arriba... porque eso es lo que están queriendo hacer. Los chicos se están muriendo de hambre (Elvira, 33 años, FTV, La Matanza).

En definitiva, el ser de la política, las prácticas reales de los políticos (su indiferencia, su ausencia, su *ajenidad*) se enfrentan con el deber ser según los propios testimonios de los entrevistados, con aquello por lo que la política (los políticos) debería luchar y defender. Esta brecha se hace presente no sólo entre la práctica real de las estructuras políticas tradicionales (y sus "representantes") y aquellas reclamadas por los sectores populares (y sus necesidades), sino también en el sentido que unos y otros le otorgan a la política.

No obstante, parece haber un punto de quiebre en el cual las representaciones de piqueteros y cartoneros comienzan a distanciarse. El futuro y cómo éstos se proyectan, desde qué lugar y las percepciones respecto de su presente y el de la sociedad, se convierten en ejes que ponen de manifiesto las diferencias en sus niveles de organización.

EL FUTURO

No, Argentina tiene que ser lo que era. Yo me acuerdo que antes había trabajo, cuando vos buscabas te daban trabajo (Miguel, V^a La Cárcova).

Proyectarse hacia el futuro, la proyección de sí mismo y de los semejantes, y la forma en que éste se piensa, permite dar cuenta de las expectativas, deseos de los sujetos; lo cual no es ajeno a la realidad del presente. Pizzorno dice que "el dictado impuesto por los yoes futuros se hace probablemente más extenso cuanto más débil es la persistencia de los yoes pasados"; es decir, cuando la identidad anclada en el pasado no le proporciona al yo la seguridad de ser reconocido por parte de aquellos entre los que debe actuar, las nuevas identidades asentadas en destinos futuros comunes se manifiestan (Pizzorno, 1989).

Para aquellos que se encuentran insertos en redes que los interpelan en tanto atienden a su realidad particular, su percepción respecto al futuro incluye estos "destinos futuros comunes". No debido a que se espere una transformación de quienes detentan el poder público ni un cambio funda-

mental de las condiciones que atraviesan, si no porque creen en la propia capacidad de instalar las demandas de modo tal que no sea posible seguir ignorándolas. Empero, y a pesar del realismo de sus representaciones, la continuidad del proyecto "de lucha" iniciado en el presente, les permite trazar una fuga hacia adelante donde se encuentra encerrada la esperanza del cambio.

Ojalá fuera posible una posición más estable, pero no. Yo creo que esta pelea sigue y no, no se termina. O sea, puede matarnos a balazos y seguir dando palos pero no termina, la lucha va más allá de un mes o dos meses. Yo creo que como están, yo no creo, es difícil que se arreglen las cosas acá, es difícil. No veo un futuro mejor, yo no lo veo. Ojalá que con lo que venimos luchando día a día algún día lo puedan llegar a ver mis hijos o los hijos de mis hijos, mis nietos, pero... (Claudia, 28 años, FTV, La Matanza).

Ahora me siento cómoda, me siento cómoda, sí... Me siento cómoda con lo que estoy haciendo si bien a veces se complican algunas cosas pero este me parece que vale la pena luchar. No solamente por lo tuyo, por la chiquita si no que por el conjunto y como que también nosotras incluimos a la familia, porque la experiencia que nosotras vamos teniendo la volcamos en nuestras casas, entonces se van sumando los maridos, los hijos, los hermanos, es como que van entendiendo cuál es el tipo de lucha que nos estamos dando dentro de la FTV, y (...) también es una manera de demostrarle a los chicos que no se puede bajar los brazos, porque por ahí, viste, el padre baja los brazos y no, hay que seguir viste? y eso es una Argentina mejor por el futuro de todos (Mirta, 43 años, FTV, La Matanza).

Paralelamente, en el caso de los cartoneros esta proyección cambia considerablemente, específicamente debido a que no han podido encontrar formas colectivas de encauzar su desesperación, parecen vivir atrapados en un presente perpetuo de pobreza e indignidad, en el cual la posibilidad de pensar el futuro queda reducida al anhelo de volver al trabajo perdido, a otro que no implique "salir con la carreta", o bien proyectan en sus hijos aquellas oportunidades que a ellos les fueron negadas o truncadas, procurando asegurarles, al menos, la educación.

No lo que más me gusta es trabajar de albañil. Aparte laburás, ganás más, no te discriminan tanto (Carlos, 49 años, cartonero, Curita).

Y gracias a Dios sí [pude estudiar]. Pude estudiar y así mismo puedo darle la enseñanza a mis hijos también, porque ellos lo necesitan, no sé (...) el futuro para ellos, no quiero que, no hay ninguna deshonra, pero que ellos terminen como yo en una carreta. (Coty, 45 años, cartonera, Curita).

Yo pienso que en el futuro tengo mi casa, tengo mi mujer, tengo (...) ya terminamos toda la casa, no nos falta nada, tenemos todas las cosas adentro que sacamos todo a crédito y tenemos que pagarlo con esto, juntado cartón, todo eso, saqué televisión, saqué el centro musical, el ropero, todo lo fui pagando con lo que juntaba cartones, así que (...) ya para el futuro, lo único que nos queda es vivir (...) y ya está, nada más (Pablo, 38 años, cartonero, V^a La Cárcova).

De todos modos, ambos grupos comparten un mismo aspecto en lo que respecta a esta percepción del futuro y la posibilidad de que éste se modifique. En ningún caso se deposita en la política ni en sus instituciones tradicionales la responsabilidad de mejorar sus condiciones de vida, y de los demás. En todo caso, las expectativas, si las hay, residen en las futuras acciones y evolución de la organización a la que pertenecen y aquello que desde éstas puedan lograr. O bien, en la suerte e ingenio personal y de la familia en función de mejorar, en lo inmediato, su propia situación económica.

A su vez, también se pueden observar similitudes entre ambos grupos a la hora de intentar relatos que den cuenta de su historia reciente y su vínculo con la política en general. Las interpretaciones que desarrollan se centran en aspectos más individuales, localizados y de corto plazo, sin referir a grandes explicaciones, más abarcativas, que permitan esclarecer el porqué de su situación. En efecto, en muchos casos, aquellas señalan el final de la década de los '90 como el periodo oscuro que signa, sino el comienzo, la profundización de sus avatares. Sin embargo, en esta alusión no aparecen demasiadas relaciones entre la caída personal y las políticas adoptadas por los gobiernos de turno. En todo caso, las referencias a la vinculación existente entre ambas se circunscriben a un periodo inmediato al empeo-

ramiento de la situación individual, o a un representante político en particular, pero en la mayoría de los casos son leídas como datos aislados desde la propia vivencia.

Cuando estábamos con Menem, mal o bien, ojo no es porque lo defienda a Menem, pero mal o bien trabajábamos...yo trabajaba, tenía mi familia...el quilombo empezó cuando se fue Menem y entró el De la Rúa este, porque fue así, con De la Rúa es cuando yo peor estaba...No digo que Menem fue mejor... pero yo estaba mejor, la plata te alcanzaba, a mí nunca me faltó para comer, trabajo: poco, mal o bien, había, entendés? Yo me quedé sin trabajo en el 98. Al final, en el 98. Pero no por culpa de él... porque era una empresa dónde todos metían mano para todos lados y se hacían los boludos con la gente, porque dentro de toda esta gente, había mucha gente boliviana, no es porque yo le tenga bronca a los bolivianos, no tengo nada... pero por pocos pesos te sacan el trabajo. A ellos les convenía más tener gente en negro, que no cubrir, que tener que pagar obra social y todo eso... Y ellos me tenían que cubrir la obra social porque yo tenía chicos, no solamente a mí, a todos mis compañeros (Raúl, 25 años, FTV, La Matanza).

Yo no le hecho la culpa al gobierno ni nada. Yo de afuera no puedo ver bien lo que está pasando, no sé quién tiene la culpa, si se están robando como dicen entre políticos, yo no entiendo. Lo único que sé es que uno pensaba con ese plan de jefes y jefas tener un trabajo y nos anotamos y todo y nos perdieron los papeles porque fuimos a la municipalidad, mucha gente hubo, fuimos a la mañana temprano a anotarse y a muchos se les perdió los papeles y resulta que fuimos otra vez a averiguar y están cobrando otras personas lo nuestro. Y debe ser alguno que esta cobrando el sueldo que a uno le tendrían que dar. Así que no, no sé. No le hecho la culpa a nadie, no sé cómo es, que esta pasando, no sé (Rosa, 45 años, cartonera, Zárate).

Es que yo pensaba así, porque yo pensaba así, decía estos piqueteros de mierda están cortando la ruta, qué se creen que son los dueños de la ruta y ahora estoy acá. Y yo creo que ellos pensarán lo mismo pero no saben lo que va a pasar después... yo creo que piensan lo mismo. Claro, porque se dan cuenta quiénes somos, porque todo

esto habrá empezado hace 2 años o 3 quizá y yo decía eso y ahora me ven ahí, entendés? Y a mí me conocen, yo (...) mi casa es la tercera o cuarta casa del barrio, porque éramos los primeros hace 28-30 años, entonces a mí me conocen desde que yo tenía 6 años. ¿Entendés? Cómo puede ser que la familia está ahí... Es como que los que tienen trabajo no se dan cuenta... Me gustaría, me gustaría que entiendan, porque hay muchos que no...o no quieren entender (Elvira, 33 años, FTV, La Matanza).

A MODO DE CIERRE: LA POLÍTICA COMO DESAFÍO Y COMO RESPUESTA

Como hemos visto, las profundas transformaciones estructurales que afectaron a nuestro país desde 1976 hasta el final de la década de los '90, junto a la represión del Estado durante la dictadura, significaron la reindividua-lización y descolectivización de los componentes de la relación salarial, poniendo en crisis al trabajo y su función como principal integrador social. Así, en este proceso, la falta de trabajo se tradujo en pobreza y hambre, pero también y fundamentalmente, en el quiebre de lazos sociales, solidaridades y en una crisis de las identidades políticas. Dentro de éstas, el peronismo, que en un momento supo incluir en su construcción aquellos valores sociales tradicionalmente ligados a la identidad de los sectores populares, no pudo escapar al distanciamiento entre los dirigentes y las masas. De esta manera, se quebraba la referencia entre la vida cotidiana y lo político, encerrando a "la política" en los locales partidarios y en los pasillos, *lobbies* y oficinas de las instituciones públicas de gobierno.

Por otra parte, la puesta en evidencia de la pobreza de la democracia "que supimos conseguir", fue interpretada desde múltiples enfoques. Así, desde algunos discursos se denunció la creciente apatía y el desinterés de la población, y se sostenía que si la "gente" se reencontraba con la dirigencia, y aumentaba su participación, la democracia podía perfeccionarse. Sin embargo, creemos que lo que en verdad sucedió fue que tanto los partidos como las instituciones se vaciaron de contenido, volviéndose en muchos casos estériles para dar solución a los problemas reales de la ciudadanía. De esta forma, las demandas de los sectores populares no encontraron eco en las estructuras fantasmas, ocupadas en negocios, *lobbies*, "paquetes de medidas" y "reformas estructurales". A su vez, la percepción por parte de estos sectores de la complicidad de los políticos con su situación de pobreza y exclusión, se ha expresado en los relatos de los entrevistados, cuando sostienen que la política se "olvidó de ellos".

En definitiva, tanto los “piqueteros” como los “cartoneros”, pertenecen al sector que más fuertemente sufrió el embate de la impotencia y la connivencia de la política y los políticos. Empero, si bien ambos coinciden en la desacreditación de políticos e instituciones, sus representaciones y percepciones sobre el futuro son diferentes. En el caso de los piqueteros, a partir de su participación en una organización, está presente la “ilusión” de poder influir en la dirección del cambio.

Si bien el carácter cualitativo de este estudio no nos permite extender las conclusiones, debido a las características intrínsecas de este tipo de estrategia, creemos que la perspectiva utilizada sí nos permite aportar a un debate que exige recuperar la voz de los protagonistas de la realidad, para no caer en análisis eruditos que naturalicen la debilidad de nuestra democracia. En efecto, para analizar la política y su relación con la sociedad en la Argentina actual, no podemos dejar de lado el papel y la responsabilidad de la dirigencia, en los procesos políticos y económicos que desembocan en escenarios como el de hoy; así como no podemos suponer “comportamientos políticos” a partir de supuestas preferencias electorales. Creemos que poder comprender la crisis de la política implica realizar un análisis que piense a los sujetos en su relación con otros, como sujetos políticos en el sentido que Hanna Arendt (1998) le da al término. No podemos pensar que la solución de esta suerte de “anomia política” radica en el reemplazo de algunos dirigentes por otros. Recuperar la política (en su sentido más amplio señalado en este artículo) implica reconstruir los lazos de solidaridad, desde las prácticas y estrategias cotidianas, atravesadas por la necesidad de seguir construyendo y sosteniendo una política distinta, que nace en las calles, en los barrios, para constituirse en una herramienta de transformación de una realidad que nos duele. Una realidad que exige anteponer a los efectos pretendidamente apolíticos de la ideología neoliberal, más política, más debate, un mayor encuentro entre los distintos sectores sociales, y más valor para enfrentar un desafío que nunca debemos abandonar: refundar la democracia. Porque una democracia de excluidos es la más cruel de las paradojas.

BIBLIOGRAFÍA

- Arendt, Hanna, (1998), *La condición humana*, Barcelona, España: Paidós.
- Basualdo, E. (2000), *Concentración y centralización del capital en Argentina durante la década de noventa*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

- Battistini, Osvaldo (1995), "Convenios Colectivos y Flexibilidad Laboral: La Negociación por el poder", en *II Congreso Nacional de Ciencia Política*, 1 al 4 de noviembre, Mendoza.
- Battistini, Osvaldo (2002), "La democracia construida sobre la violencia", en *La Atmósfera Incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*, Buenos Aires: Trabajo y Sociedad.
- Battistini Osvaldo y Débora, Gorbán (2003), "La mutación del trabajo en la Argentina. algunas reflexiones en torno a las tesis de R. Castel", Trabajo presentado en Pre- Congreso La Plata de la ASET, del 2 al 4 de julio, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP
- Battistini Osvaldo (2003), "Cultura obrera en Argentina: desde su apogeo hasta la dilución", trabajo presentado en el IV Congreso de la ALAST, septiembre, La Habana.
- Beccaria, Luis (2002), "Empleo, remuneraciones, y diferenciación social en el último cuarto del siglo XX", en VV AA, *Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los 90*, Buenos Aires: UNGS, Biblos.
- Calcagno, Alfredo Eric y Eric, Calcagno (2002), *La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla)*, nueva edición actualizada, Buenos Aires: Catálogos (1999).
- Castel, Robert (1995), *La metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires: Paidós.
- Gutiérrez Castañeda, G. (1996), "Sujetos democráticos e imaginarios sociales", en R. Lanz et al. (coord.), *¿Fin del sujeto?*, Mérida: Universidad de los Andes/Universidad Central de Venezuela.
- Kessler, G., "De proveedores, amigos, vecinos y barderos: acerca de trabajo, delito y sociabilidad en los jóvenes del Gran Buenos Aires", en VV AA *Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los 90*, Buenos Aires: UNGS, Biblos.
- López Artemio (2001) / Consultora Equis (Equipos de Investigación Social) "El Ojo de la Tormenta", en www.lamatanza.gov.ar/pdfs/matanza2001.pdf
- Martuccelli Danilo y Maristella, Svampa (1997), *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires: Losada.
- Melucci, Alberto (1999), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México: Colegio de México.

- Novaro, Marcos (1995), "Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática", en *Sociedad*, abril, Buenos Aires.
- Oszlak, O (1997), "Estado y sociedad nuevas reglas del juego", en *Revista del CLAD*, octubre.
- Palermo V. y M, Novaro (1996), *Política y poder en el gobierno de Menem*, Buenos Aires: Norma.
- Pizzorno, A. (1989), "Algún otro tipo de alteridad: Una crítica a las teorías de la elección racional", en *Sistema 88*, Florencia.
- Tarrow, Sidney (1994), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza Universidad, (Madrid, 1997 [1994])
- Tilly, Charles (1978), *From Mobilization to Revolution*, McGraw-Hill Publishing Copany.
- Tilly, Charles (1986), *The Contentious French: Four Centuries of Popular Struggle*, Cambridge, USA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Tilly, Charles et al. (1998), "Para una cartografía de la política contestaria", en *Politix*, núm. 41.
- Vitullo, Gabriel (1999), "Participación electoral, comportamiento político y desestructuración social en Argentina y Brasil", publicación electrónica en Clacso.
- Zapata, Francisco (2002), "Salarios mínimos y empleo en Argentina, Chile y México", en *Papeles de Población*, núm. 32, abril-junio, México: Centro de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.

ESQUEL: EL PODER ESTÁ EN LA CALLE

Carlos Gustavo Espinoza

Río Cuarto - Córdoba, Argentina

La trayectoria de la investigación latinoamericana en los últimos años no puede entenderse sin su contexto de transformaciones sociales, de escenarios internacionales y nacionales, de las atmósferas culturales generadas. En ellas se sitúan los movimientos, los conflictos y contradicciones del pensamiento en evolución sobre la comunicación.

JESÚS MARTÍN BARBERO

Resumen: Este trabajo es un desarrollo analítico desde el punto de vista cultural y comunicacional de un caso particular, donde convergen diferentes actores sociales, tradiciones, formas y pautas culturales en torno a un problema minero con procesamiento de cianuro, y la posible instalación de minas en proximidades de la ciudad de Esquel; lo que consecuentemente provocaría graves impactos ambientales y sociales. En lo referente a la comunicación, se explora un espacio urbano donde la expresión espontánea exige repensar un emisor colectivo diferente; excediendo una simple y directa vinculación del término comunicación con los medios masivos.

INTRODUCCIÓN

¡NO ES NO!, remarcan unas y otras pintadas callejeras en la turística ciudad de Esquel, localidad con espíritu de pueblo enmarcada en el noroeste chubutense. Esa simple, breve y concisa consigna es nacida en las urnas el 23 de marzo de 2003, en histórica consulta popular realizada —por exigencia también popular— para conocer la decisión de la comunidad respecto a la instalación de una planta de tratamiento minero con procesamiento de lixiviación de cianuro, a seis kilómetros del centro de la ciudad —el primer emprendimiento minero más cercano a una población en el mundo—.

Se trata del poderío del neoliberalismo que se hace presente con toda su magnitud en una localidad de 30 000 habitantes, quienes se expresaron con plena dignidad, luego de un largo camino de trabajos y esfuerzos del movimiento de vecinos autoconvocados que con empeño y lucha buscan concientizar a través de la información científica amplia; tarea ardua que se inició antes del 2001 en momentos del principio de la preocupación.

Es que el tema de la minería en países sudamericanos y sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales son una importante parte del proyecto de mercado común ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que se propone ponerse en marcha a principios del 2005; lo que pondría fin a los intentos de integración regional autónoma y el consecuente encierro de toda América Latina en una relación casi exclusiva con los Estados Unidos.

Sobre lo propiamente minero, el marco legal argentino otorga enormes ventajas jurídicas y fiscales a todas estas inversiones, leyes 24.196 de Inversión Minera y 24.224 de Reordenamiento Minero, y el "Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno", aprobado por el senado argentino el 29 de diciembre de 1997, comprometen el aprovechamiento conjunto de los recursos mineros a toda la zona fronteriza desde Antofagasta (norte de Chile) hasta el sur de la provincia de Santa Cruz, donde además se asientan gran cantidad de Parques Nacionales, Reservas Ecológicas, Áreas Protegidas y zonas turísticas, ante este estado de realidad presentado es que el pueblo de Esquel permanece en pie de lucha para impedir la explotación, pues los cateos y la exploración ya se han realizado y se siguen realizando actualmente. En total, alrededor de 70 países han modificado su legislación minera para atraer inversiones extranjeras, incluyendo los establecimientos de incentivos y reducción de impuestos (Instituto Panos, 1996). En el caso de la Argentina, lo hizo a través de créditos otorgados por el Banco Mundial.

Además los emprendimientos mineros requieren ser emplazados en un determinado sitio, lo que genera un conflicto si se trata de territorios empleados o reclamados por una comunidad, no sólo por su localización sino también por los efectos que conlleva sobre los modos de vida, las tradiciones, valores y costumbres de poblaciones enteras. "Esquel se convierte en paradigma de un No, sorprendiendo al globalizador con su ALCA. Es David retando a Goliat sabiendo incluso que el Imperio habrá de influir en los líderes visibles del pequeño pueblo, para atomizarlos y dominarlos. Y éste es ese preciso momento", señaló días pasados un vecino autoconvocado en una revista independiente.

Con la aparición de la empresa minera en la zona, esto generó gustos y disgustos en la comunidad. También hay que considerar el contexto social que presenta altos niveles de desocupación —alrededor de 5 000 personas— no es un dato menor, puesto que esto también lo utilizó este anónimo agente minero, del que poco se sabía, para buscar adhesión social.

Es así que resulta importante poder analizar el movimiento popular conformado, pues éste enfrenta al propio neoliberalismo, el saqueo económico y el poder simbólico y coercitivo que se utilizaron y utilizan, para buscar convencer y acallar voces. La visión que aquí se incorpora es de carácter “culturalista”; los movimientos sociales nuevos no deben ser interpretados en clave política exclusivamente (si por esto se entiende una lucha por el poder) sino como prácticas centradas en la construcción de identidades colectivas y de reconocimiento de espacios de relaciones sociales.

La ciudad de Esquel nunca en toda su historia había atravesado una situación de semejante envergadura, jamás se había vivido una disyuntiva de tales dimensiones. Ahora era el momento de enfrentar el problema. En octubre del año 2002 la empresa *Meridian Gold* presentó el informe de Impacto Ambiental, tercera aprobación necesaria (para la explotación); documento que despertó la reacción de técnicos y ambientalistas de la región, quienes procuraron transmitir información realmente independiente desde una perspectiva ambiental más amplia. Desde esos sectores se comenzó a informar a la población que hasta el momento había sido mantenida ajena a las discusiones; mientras el proyecto de exploración ya estaba en marcha y la empresa canadiense buscaba la aprobación para iniciar a principios de enero de 2003 la etapa de explotación, mediante este informe ambiental. El giro que se daba por este entonces fue rotundo. Ahora correspondía establecerse en la comunidad un amplio debate sobre el tipo de desarrollo deseado, y si éste debía basarse en la minería o en actividades tradicionales de menores impactos ambientales. Fueron varios los vecinos que se preocuparon, y con varias reuniones informativas en la escuela 205, comenzó a trazarse un interesante entramado comunicativo alternativo, que se propuso la ampliación de la información independiente y sustentada en actores “visibles”, personificada, con nombres y apellidos. “La idea de construir colectivamente y con autonomía una opinión diferente frente a la manera en que se están dilapidando los recursos naturales de la provincia”, sentenciaba una invitación a participar de las asambleas.

Desde este espacio se construyó un contrapoder, lento, paulatino; pero muy fuerte. En las asambleas es donde convergen las opiniones, los datos científicos, las propuestas, y se trazan estrategias de acción. Sin líderes, sin conductores, con amplio protagonismo de la palabra y la horizontalidad.

De esta manera y con mucho trabajo silencioso, el movimiento de vecinos autoconvocados de Esquel logró que el Consejo Deliberante de la ciudad fijara la fecha para la realización de la consulta popular, en la que participó 70% de la población sobre un padrón correspondiente a algo más de 19 500 habitantes. Los registros fueron contundentes, 81% (11 065 votos) se expresó a favor del *no a la mina*, el sí obtuvo 17%, y 2% correspondió a votos anulados y en blanco.

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿cómo se constituye este contrapoder que se convirtió en poder real después de la consulta?

LA COMUNICACIÓN

Martín Barbero hace referencia a los actuales estudios acerca de la comunicación y llama la atención sobre los cambios de paradigma que se han dado en las distintas etapas del fenómeno comunicativo. Por ello sostiene que *los procesos sociales de América Latina son los que nos están cambiando el "objeto" de estudio a los investigadores de comunicación.*

La propuesta de la empresa minera alude a una nueva forma de reproducción social, no sé si rotunda, pero sí al menos se puede afirmar que modificaría las formas actuales en gran medida; lo que asegura esto es que los procesos materiales se trastocarían y al mismo tiempo, los significados de espacio y tiempo ligados a estos procesos. Resulta importante poder analizar este panorama, pues *contiene consecuencias materiales para el ordenamiento de la vida diaria y la forma en que interpretamos el mundo y cómo nos desenvolvemos en él.* El problema está latente y parece próximo, pero al mismo tiempo, en el reciente movimiento de vecinos autoconvocados aumenta la conciencia vecinal de los derechos a involucrarse en el destino de la ciudad.

Para conformar algún tipo de poder alternativo por fuera de las agendas de organismos oficiales, se utilizaron diversos elementos, pero el mayormente remarcado fue el comunicativo. Comunicación e información para elaborar y sustentar la "otra mirada" y desenmascarar a una mega empresa omnipotente.

Es el "decir" difundido para el convencer, el vencer con argumentos, no se trataba de superar sólo al poder económico sino también al poder simbólico ejercido en esas otras comunicaciones asentadas y respaldadas por estructuras oficialistas de comunicación, muy propagandísticas en su presentación.

Mientras los vecinos elaboraban folletos trípticos blanco y negro que se traspasaban de unos a otros, la empresa minera repartía casa por casa un tríptico color, tamaño A4, con muy buena calidad gráfica. Esta acción, más allá de los propios argumentos de cada uno, mostraba a las claras la abismal diferencia económica de un grupo de vecinos y una mega empresa, y los objetivos antagónicos y para nada compatibles de unos y otros.

Aparte de la folletería, ambos fueron a dar charlas a las escuelas primarias y de nivel medio, la minera desde interlocutores como los geólogos, hidrogeólogos y demás técnicos, que transmitían un mensaje tecno-cientificista con poco *feedback*. Por el otro lado, los vecinos se preocupaban por incluir diversos comunicadores, un geólogo, un trabajador, una ama de casa, un descendiente de pueblos originarios, en sí, se trataba de un grupo que solía modificarse; pero mantenía esa diversidad.

Pero si en los dos planos antes expresados se presentaban las dos posturas, lo sobresaliente como espacio de oportunidad y fortaleza de los vecinos, es lo realizado en las marchas en la calle y en las asambleas.

Las marchas se realizan los días 4 de cada mes, comúnmente la convocatoria es en la plaza Gral. San Martín —frente a la municipalidad—. A los vecinos de Esquel, pronto se les sumaron los de la Comarca del Paralelo 42° y la Comarca de Los Alerces, las caminatas se realizan por las calles de la ciudad, hasta la esquina de San Martín y 25 de Mayo, lugar donde están las instalaciones de la Minera El Desquite S. A., adquirida por Meridian Gold de Canadá en 1992. Estas marchas llegaron a convocar 8 000 personas el 4 de marzo de 2003 —días antes del plebiscito—, más de 25% de la población total de Esquel estaba volcada en las calles.

Respecto a las asambleas, comenzaron tíbicamente a finales del 2001 con 50 o 60 personas aproximadamente, pero poco a poco crecían en cantidad y llegaron a ser de 400 o 600 personas. Están basadas en la diversidad de puntos de vista, con oradores que piden la palabra, el tratamiento de temas y preocupaciones actuales, luego se votan las propuestas y se integran comisiones para investigar con profundidad cada temática. En este espacio de discusión participan vecinos de distintas clases sociales, inclinación político partidaria, postura religiosa, niveles educativos, origen étnico; todos aunados por una misma idea: "NO a la mina". Muchos no saben precisamente del otro, tampoco suelen conocer precisamente los nombres de esos otros, pero aun en estas condiciones intercambian información cara a cara y se actualizan, saben que juntos han conformado uno de los movimientos sociales más importantes de la Patagonia en los últimos tiempos. Es muy fuerte el sentido de pertenencia alcanzado, el aprendizaje continuo, la complementariedad, la co-responsabilidad de cada uno

y el efecto sinérgico son elementos característicos sobresalientes de estos actores sociales movilizados. Es así que desde la asamblea se han generado propuestas creativas de comunicación: la creación de una página web (www.noalamina.i8.com), la distribución de folletería informativa en lugares estratégicos de la ciudad, proliferas pintadas callejeras con fondo de la bandera argentina que remarcan: "No es No", "11.065 veces NO", "NO pasarán jamás".

"Todos vamos a luchar día a día para que se vayan", o muralismos diseñados por artistas locales, como por ejemplo uno que está ubicado en la calle Belgrano que ilustra a una mujer embarazada, el continente americano, un conjunto de personas con las manos en alto, de fondo una montaña que se "expresa", y una leyenda que proclama: "Prefiero morir de pie, a vivir arrodillado".

Ante el desamparo político en los niveles nacionales, provinciales y municipales, y la arremetida del poder económico transnacional, surge el redescubrimiento de lo popular, tal como lo manifiesta Barbero, "el nuevo sentido de esa noción cobra hoy revalorización de las articulaciones y mediaciones de la sociedad civil, sentido social de los conflictos más allá de su formulación y sintetización política, reconocimiento de experiencias colectivas no encuadradas en formas partidarias".

Es mucha la expresión popular, mientras tanto la lucha en Esquel continúa atenta, expectante y activa; a la espera de decisiones políticas contundentes.

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

Los medios masivos de comunicación locales ante esta presentación de la minera muchas veces parecieron desbordados. Algunos con firmes posicionamientos adoptados por el SÍ y otros con neutralidad o más cercanos al NO. Los medios masivos nacionales vieron el fenómeno de la movilización, no el minero esencialmente, como una fuente noticiosa, es por ello que los días previos al plebiscito la aparición de los medios fue importante, pero más por la cantidad de gente en la calle que por el problema minero. La aparición existió, pero sólo fue puntual y coyuntural. Pocos son los que se encargan de seguir el tema, que parece lejos de acabar, y nada han publicado en este ámbito acerca de los nuevos cateos que se siguen haciendo en la zona.

El trabajo de los vecinos autoconvocados nunca se sustentó en la comunicación que los medios masivos elaboraban. Se fortaleció la sociedad civil, la misma población valora su capacidad de organización para resolver y enfrentar problemas comunes; y poco a poco se conformó un importante espacio de participación social. En este sentido, Patricia Safa sostiene que las organizaciones vecinales se han revitalizado ante una ciudad en crisis, porque se ha puesto en entredicho un modelo de desarrollo urbano que favorece a las grandes empresas e intereses económicos particulares, a costa de los intereses de la población.

La televisión puede mostrar y hacer creer en lo que muestra, la imagen misma posee esa particularidad de poder producir el *efecto de realidad*. Este poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social (y desmovilización social), según sostiene Bourdieu, a lo que agrega, "quien todavía cree que basta con manifestarse, sin ocuparse de la televisión, corre el serio peligro de errar el tiro: hay que producir, cada vez más manifestaciones para la televisión, es decir, manifestaciones que por su naturaleza despierten el interés de la gente de la TV (...)". Por ello, quizá, la atención dispensada también desde los medios internacionales, como el *Washington Post*, el *New York Times* y la visita a Esquel de Naomi Klein (canadiense, defensora de la lucha antiglobal y partidaria de pelear con acciones concretas y no simbólicas).

La comunicación televisiva nacional únicamente apuntó el tema en el *maremagnum* y la vorágine de la realidad del país, pero varias veces eclipsado por el ámbito internacional con la guerra de Irak. Esquel y la minería sólo fue una mención, los aspectos señalados por Bourdieu son importantes, pero hay que tener en cuenta que "el interés de la gente de la gente de la TV" es otro, parece ser bastante alejado del rescate y defensa del patrimonio social, natural y cultural.

Este cuestionamiento nos conduce a ver la comunicación como flujo que circula entre las tramas de este fenómeno social, y no tengamos que remitirnos exclusivamente a la red tecnológica que trazaron los medios de comunicación, porque de esa manera se estaría limitando el problema comunicativo, que es más profundo y más amplio. La transformación social, y de alguna manera cultural que se hizo explícita en Esquel en torno al tema de la minería no debe ser observado como efecto de innovaciones tecnológicas; sino vinculándolo a los aspectos culturales y analizando el interior de los movimientos populares y su constitución. Ese es el centro de la problemática aquí planteada, y es de alguna manera una manera de reconocer un emisor colectivo nuevo, que se constituye de manera compleja.

El sentido de lo urbano, dice Néstor García Canclini, se restituye y lo masivo deja de ser un sistema vertical de difusión, para convertirse en expresión amplificadora de los poderes locales.

LOS ACTORES SOCIALES EN MARCHA...

Buscar el principio de constitución que nuclea a estos movimientos populares implica llegar a una trama de diferencias, diversidades y pluralismos que se procesan bajo una misma idea; en este caso puede ser la calidad de vida y la protección de un hábitat o la rebeldía ante el imponente arrollamiento de los procesos económicos que no conocen de fronteras ni de grupos culturales. Lo importante es el "reconocimiento de un mestizaje, dirá Martín Barbero, que en América Latina no habla de algo que pasó, sino de lo que somos, y que no es sólo hecho racial, sino razón de ser, trama de tiempos y de espacios, de memorias e imaginarios (...)".

Es en estas circunstancias donde los conceptos de sujeto y de poder se tornan vitales para comenzar la búsqueda de una comprensión de esta nueva configuración social. La concepción de sujetos políticos que se convierten en actores sociales activos ante el desamparo institucional y, al mismo tiempo, las relaciones de poder que se establecen en el interior de estos movimientos, por una parte; y en relación con las demás instituciones y organismos sociales, por otra. Las relaciones de poder de los movimientos populares es producto de un conflicto concreto, como sostiene Barbero, "(...) de batallas que se libran en el campo económico y en el terreno de lo simbólico".

Al mismo tiempo, sería inapropiado sostener que ante esta problemática se movilizó la totalidad de la población; es imposible totalizar este tipo de fenómenos. Tal vez por miedo, por desconocimiento o por el hecho de sorprenderse ante grupos movilizados en las calles aparentemente contra una simple y salvadora propuesta laboral a muchos les parecía ilógico unirse; y ante el análisis de este grupo de vecinos autoconvocados cabe hablar de *fragmentos*.

En el movimiento de vecinos se ha notado una cierta desmovilización, luego de la consulta popular, parece que luego de semejante negativa allí expresada, la lucha quedaría, para muchos, en suspenso, y a la espera de la respuesta política en concordancia. Por otra parte, persistentes vecinos no decaen en su lucha, siguen trazando propuestas estratégicas desde las asambleas. En noviembre de 2003 viajaron tres delegados de los vecinos

hacia Buenos Aires para reunirse con otros vecinos con problemas similares. Es así que se conformó la Red Nacional de Comunidades afectadas por la minería, donde participan vecinos de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Río Negro y Chubut. Esta red exige prohibir de forma inmediata los métodos de explotación minera contaminantes, anular la ley 24.196 y sancionar una nueva legislación que incluya la consulta popular para la instalación de cualquier proyecto minero.

“Los movimientos no son fenómenos residuales del desarrollo o manifestaciones de descontento de las categorías marginales. No son sólo el producto de las crisis, los últimos efectos de una sociedad que muere. Por el contrario, son los signos de aquello que está naciendo” (Melucci, 1982: 20).

Luego de este largo peregrinar de vecinos autoconvocados, después de varias batallas ganadas, las fuerzas suelen flaquear, pero son conscientes de que deben continuar, y que el principal objetivo aún no está cumplido. Al mismo tiempo, para otros movimientos sociales argentinos son una referencia y un ejemplo de lucha y contrapoder social planteada a largo plazo. La red nacional ha sido útil para dialogar acerca de las luchas donde surgen “elementos comunes que están más allá de las tareas puramente extractivas —utilización de cianuro, contaminación de las aguas, destrucción de las montañas— pero que sin embargo parecen propias de la actividad minera: connivencia con el poder político, ocultamiento de la información, incumplimiento de las leyes, violencia contra opositores (...)” señala Hernán Scandizzo.

Para finalizar con este apartado, lo interesante para destacar es la manera como el sentido de la identidad local, en el caso Esquel ha sido revitalizado y su continuo crecimiento en términos de importancia como proceso social amplio para enfrentar problemas como el deterioro de la calidad de vida, la contaminación y la elección de ciertas formas de ganarse la vida en las actuales condiciones sociales y económicas. Al mismo tiempo que se reconoce: la madurez, el desarrollo, la auto-evaluación y autocrítica en varios de los miembros de los vecinos autoconvocados de Esquel cuando realizan observaciones sobre el accionar del movimiento.

CONCLUSIONES

Es innegable que Esquel no es la misma comunidad que hace diez años atrás, el fenómeno minero cambió, transformó y eliminó características idiosincrásicas en los esquelenses. La construcción colectiva y social que se produjo era impensada para una comunidad muchas veces tradicionalista y conservadora. A la pregunta ¿por qué fallo la estrategia de convencimiento de la minera? No se le encuentran respuestas fáciles ni simples. Es muy probable que haya que buscarlas y analizarlas a la luz de la misma hibridación cultural de la gente que se integra en el movimiento de vecinos autoconvocados. La hibridación y el mestizaje que el movimiento contiene son indudables, se evidencia en cada acción —marchas, carteles, etc.—; además esa misma hibridez del emisor lo muestra con un fuerte sentido de pertenencia, y de la otredad, manifestado en la solidaridad, la contención, los aprendizajes, sus construcciones assemblearias y la creatividad y originalidad de sus comunicaciones. En el interior del movimiento se revela en más de una oportunidad el entramado comunicativo que configuró este sector de la población. Este es uno de los más destacables ejemplos de democracia participativa, diversa y plural.

En el marco de resignificaciones se encuentran también los lugares físicos, por ejemplo, la plaza que comúnmente se la utilizaba para actos conmemorativos o fines recreativos y de esparcimiento; ahora es un escenario social de convocatoria popular, con todo lo que significa estar ubicado en frente del edificio municipal. Otro ejemplo es la esquina céntrica de 25 de Mayo y San Martín, paradigmática intersección de protesta, lucha y repudio hacia la minera, su anonimato y su silencio. Una significativa reconceptualización es respecto al concepto de “vecino”, tantas veces tratado aquí, es remarcado una y otra vez en cada entrevista y en cada asamblea; no se trata de una categorización por cercanía o proximidad al propio entorno físico, se trata de una autodefinición construida por estos actores que se vinculan afectivamente por una idea común, por una defensa común; es un concepto que alude a quienes están en esta lucha. El concepto se amplió a través del mismo accionar y sustentado con base en el afecto, la comprensión del otro y la sinergia experimentada.

Con este “reclutamiento” de orígenes y procedencias heterogéneas, con grados y tipos de compromiso variados, con propuestas ideológicas y experiencias dispares, se puede encontrar un núcleo de unidad, dada por la definición del opositor-enemigo y simbolizada en una consigna unificadora (No a la mina); la cual fue la consigna aglutinadora durante el periodo del auge del movimiento. Se trata de la construcción de espacios de participa-

ción social conformados en respuesta a la debilidad institucional apreciada, es la misma desorganización y reorganización de la experiencia social y de una nueva trama constituida por actores productores y constructores activos de una malla de articulaciones e intertextualidades, en busca de expresiones para establecer una voz, en este caso particular; regional de proyección nacional.

Desde la comunicación social, es destacable observar que bajo la comunicación oral, escrita y electrónica que estos grupos utilizan subyace el concepto de actor/es social/es que interactúan, nuevas formas de convivencia, de encuentro y de diferencias; pues su accionar consiste en un compromiso asumido con la participación en la toma de decisiones acerca de los destinos del lugar, respetando diferencias y reforzando semejanzas. Es importante reconocer a estos movimientos sociales como constructores de un contrapoder, como emisores colectivos capaces de elaborar y entrelazar estrategias comunicacionales diversas, y resultar entramados comunicativos originales, emergentes en varios aspectos.

carlosgustavoespinoza@hotmail.com

BIBLIOGRAFÍA

- Barbero, Jesús Martín (1987), "De los Medios a las Mediaciones", en *Comunicación, Cultura y Hegemonía*, Barcelona: Gustavo Gilli.
- Bourdieu, Pierre (1997), *Sobre la televisión*, Barcelona: Anagrama.
- García Canclini, Néstor (1995), "Culturas Híbridas", en *Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Institute Panos (1996), "The Lure of Gold –How Golden is the future?", Panos Media Briefing, núm.19.
- Melucci (1985), "Los nuevos movimientos sociales/1", en *Mujeres-rock nacional*, Elizabeth Jelin (comp.), Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Scandizzo, Hernán, "De cómo se dice no a la argentina minera", en *Revista SUDACAS*, núm 4, verano de 2003-2004, Trelew, p. 9.
- Safa, Patricia, "Globalización e Identidad Cultural". De las historias locales al estudio de la diversidad en las grandes ciudades: una propuesta metodológica.

LA LEY DEL VACÍO: REGULACIÓN Y CONTROL DEL “PODER DEL DESEMPLEO”*

Alejandro Soltonovich

Comprendida, en primer lugar, la actividad laboral, genéricamente, como la agregación de actividades tendientes a la conservación y reproducción de una estructura social, tanto en el aspecto de conservación biológica de los individuos que componen dicha estructura como en el de la reproducción de las relaciones sociales que configuran su régimen de funcionamiento, esto es, el modo de producción que presenta una sociedad en un momento histórico determinado. En segundo lugar, dada la importancia estratégica que tiene esta actividad se desprenden dos consecuencias importantes: a) que en las relaciones articuladas en la actividad laboral tenderán a aparecer los conflictos de mayor importancia respecto del mantenimiento de la estructura social, y b) que estos conflictos son los que requerirán de una mayor atención por parte de las regulaciones necesarias para la conservación del sistema.

En términos mecánicos, ya que el sistema social no puede mantenerse sin la actividad laboral en tanto agente de reproducción y que dicho agente conduce además a la aparición de conflictos, el sistema debe gastar una dosis considerable de energía en la producción y el mantenimiento de dispositivos —políticos, institucionales, ideológicos y psicológicos— capaces de mantener controladas las tendencias a la desintegración social derivadas de la existencia de esos conflictos.

En el ámbito de las sociedades complejas, dotadas de una amplia división social del trabajo, una estructura productiva muy dinámica y una marcada desigualdad en la distribución del trabajo, se incrementa considerablemente la carga dinámica sobre los dispositivos destinados a mantener regulados y, en la medida de lo posible, normalizados los conflictos sociales emergentes; de tal modo que se incrementan, por un lado, la cantidad

* En diálogo con un artículo de P. Lenguita.

y la complejidad de los componentes destinados a alcanzar esa regulación como las expresiones normativas necesarias para regular el sistema.

El derecho moderno, en tanto categoría de mediación social (Habermas, 2000), expresa esta complejidad como lo hacen también los actores sociales, individuales y colectivos, vinculados por la pretensión regulatoria y la actividad coactiva que, a través del poder del Estado, el sistema jurídico desarrolla para mantener los conflictos dentro de los márgenes de funcionamiento del sistema productivo, evitando su desintegración. Por supuesto, tal funcionalidad no implica que la regulación jurídica derive en una distribución equitativa de las tareas laborales ni mucho menos supone una distribución homogénea de la riqueza socialmente producida en este proceso. Así, la mayor proporción de injusticia social en las sociedades complejas se produce en torno a la actividad laboral, tanto en la esfera de su ejecución como en la esfera de la distribución de sus resultados, lo cual no implica la inexistencia o subordinación moral de otras formas de desigualdad e injusticia como, por ejemplo, el abuso de poder (sexual, político, generacional) o la marginación discriminatoria por cualquier causa.

Por fuerte que sea la pretensión de validez del derecho, en tanto dispositivo de regulación social, se encuentra vinculado a —y será promotor de— las injusticias preexistentes en la estructura social misma, de modo que sólo una transformación completa del sistema, capaz de alterar las relaciones sociales preexistentes al punto de desintegrarlas, sería capaz, a su vez, de coordinar el carácter funcional del derecho como mediación con las pretensiones morales de validez expresadas en sus formulaciones abstractas, superando este nivel para alcanzar el de las relaciones sociales concretas.

Pero las pretensiones de validez, vinculadas en las estructuras judiciales occidentales con tendencias ideológicas históricamente relacionadas con la igualdad en tanto principio abstracto, producen automáticamente una escisión importante entre las pretensiones de validez y las aplicaciones concretas del sistema legal; lo cual no implica, al mismo tiempo, que el sistema se encuentre completamente des-regulado en este sentido; pues el alcance desintegrador de los conflictos derivados de una desregulación completa volverían inviable al propio sistema social (Habermas, 2000). Así, aunque nunca se cumplen las condiciones que validarían las intenciones jurídicas expresadas a través de las leyes básicas de un Estado, comprendidas, por ejemplo, en los textos constitucionales, tampoco el sistema jurídico se abstiene totalmente de participar en la regulación de la actividad laboral en forma concreta, según las contingencias históricas en las que actúe. Se trata, eso sí, de una ruptura cabal con el modelo que contempla al derecho como un sistema que deriva lógicamente de una norma superior general

unas normas inferiores específicas que desarrollan el contenido de aquella, expresando un realismo jurídico extremo: es norma la pretensión jurídica que se hace valer en un momento determinado a través de los procedimientos establecidos para la producción normativa del Estado, en función de su capacidad de imposición e imputación normativa, con independencia relativa de las normas superiores de un presunto sistema creado en torno a modelos más propios de la teoría “pura” (o metateoría) del derecho y del Estado (Barranco Avilés, 2000).

Visto desde una perspectiva funcionalista, un sistema jurídico incapaz de interactuar con el régimen de producción, considerado ahora como una fuente permanente de conflictos debido a su posición estratégica en la estructura de la sociedad tanto como por el carácter básicamente conflictivo que adopta en el capitalismo —con independencia en este caso de la forma de Estado que se adopte para regularlo—, sería un lastre para toda la estructura social, un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas. Por otra parte, la parte de traba que ostenta —en la forma de derechos sociales, laborales, económicos o culturales— para la acción libre de los actores sociales que ocupan una posición dominante en la estructura capitalista, sólo significa que existe un reconocimiento funcional, desarrollado a través de la historia de los conflictos sociales, de que algunas limitaciones son necesarias para el mantenimiento del sistema de acumulación existente; mantenimiento que será siempre, de cualquier manera, provisional, obligando a un continuo rebalanceo de las normas de regulación en función del estado de la lucha de clases, tanto en el ámbito del enfrentamiento estructural como en el de las pugnas entabladas entre diferentes fracciones del capital e incluso de las clases subalternas. Se trata de un universo de posibilidades que quedan fuera del horizonte del positivismo jurídico en su vertiente menos realista, por cuanto permite el juego con variables y actores sociales que quedan fuera de un análisis abstracto del orden jurídico en función de modelos perfectos de funcionamiento sistémico, que suelen servir también como pantallas ideológicas para el juego de poderes que se dan dentro del Estado y en torno al Estado.

En esta permanente tensión, ajena pero colindante a la problemática de la teoría discursiva del derecho, debe comprenderse el carácter del derecho, en tanto conjunto de normas vigentes —según las cuales el Estado puede actuar o abstenerse de hacerlo—, como categoría de mediación social. No se trata de un conjunto de instituciones meramente estabilizador de expectativas —así como no es un mero reflejo de la estructura económica—, se trata también de un campo de lucha política en el que los intereses objetivos, mediados y transformados ideológicamente, pugnan por posicionarse

favorablemente en la configuración social resultante del conflicto permanente (Polantzas, 1964).

El grado de dislocación, de descoordinación, de abierta contradicción entre la expresión jurídica de máxima categoría, de donde se deriva la pretensión de validez de las normas inferiores y del sistema jurídico en general, con las prácticas jurídicas que actúan en la inmediatez de la fuerza coactiva estatal puede llegar a ser, de todas maneras, muy alto. Si una amplia gama de razones históricas explican la forma que adopta un conjunto de leyes básicas que configuran de manera general un estado; otra y muy distinta suele ser la práctica de las instituciones estatales, incluidas aquí las implicadas en la producción y aplicación de normas que configuran una realidad muy diferente de la anticipada por el texto constitucional (Guarnieri y Pederzoli, 1996). Según la dinámica de las relaciones sociales en el capitalismo, en dónde no sólo se alteran constantemente el estado de las luchas entre diferentes sectores sociales, sino que también es frecuente la aparición de nuevos actores y flamantes conflictos, la vigencia real de un sistema cerrado de producción de normas piramidal es poco realista: tramas paralelas de legislación, capaces de alterar rápidamente instituciones y relaciones sociales precisas son necesarias para atender al constante cambio del sistema en su conjunto; pues en caso contrario el riesgo de aparición de flagrantes y evidentes contradicciones sería muy alto, y el orden jurídico tendería igualmente al colapso y a la deslegitimación, lo cual acompañaría, paralelamente, un estado de crisis social ante la ruptura de los marcos regulatorios y el pasaje de una hegemonía jurídica a un constante ejercicio de la coacción.

En lo que respecta a la regulación de los derechos laborales, la Constitución argentina cuenta con un artículo, el 14bis que excede con mucho a la protección del trabajo que puede encontrarse en otras constituciones, incluyendo las de países democráticamente avanzados y con mayor tradición de permanencia institucional: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. En cuanto a los gremios, pieza clave de la estrategia industrialista, queda garantizado: concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga y la protección de los representantes sindicales.

No obstante, la presencia de este contenido material no ha sido un obstáculo serio para la aplicación legítima (es decir, “jurídicamente” legítima: sin alterar los marcos institucionales ni los procedimientos de producción normativa) de normas y regulaciones que han vaciado prácticamente de sentido a este artículo, pese a la existencia de una artículo garantista, el 28, que asegura que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”; lo cual los convierte expresamente en parte de ese núcleo de derechos de máxima resistencia formal que se conocen como derechos fundamentales, aunque existan autores que discrepen, por razones filosóficas y generales, de esta caracterización tan general (Prieto Sanchís, 1990). Pero esta posible alteración sólo puede verificarse, a su vez, a través de la existencia de jurisprudencia que declare inconstitucionales las reglamentaciones existentes, de modo que también así, gracias a la sumisión mostrada por la corte suprema de justicia, en lo que se conoció como la “mayoría automática” del menemismo, quedan protegidas las transformaciones regresivas de la política neoliberal.

Por otra parte, pese a su detallada defensa del trabajo, el artículo 14bis adolece de una grave falta: únicamente se ocupa de la defensa irrestricta de un tipo de trabajador, permitiendo por omisión el desarrollo de otras relaciones laborales que quedan automáticamente exentas de obligación legal alguna, respecto de las condiciones establecidas por el texto constitucional frente al Estado y frente a los empleadores. En efecto, al ser redactado y agregado al texto constitucional durante el auge del peronismo y su programa corporativo de defensa de la industria nacional sustitutiva de importaciones conjugada con un populismo signado por el sindicalismo vertical en el plano institucional, este artículo no previó alternativas a las relaciones laborales que implicaran situaciones lesivas para los trabajadores ni tampoco garantizó al trabajo como un derecho en sí mismo. Tratándose al parecer de un mero problema de interpretación, esta omisión sirvió, sin embargo, para que el Estado quedara constitucionalmente amparado al desarrollarse, durante la década de los noventa principalmente, el modelo neoliberal de relación laboral, disfrazado de “modernización”, que desvinculaba a los trabajadores contratados e informales de todos estos derechos, abrogándolos virtualmente para un amplio sector social, por no decir nada de la enorme masa de excluidos que fue formándose por la vía inmediata del desempleo creciente y que alcanzó con el movimiento piquetero una expresión política propia y novedosa, diferenciada tanto del modelo partidista clásico como de los esquemas sindicales tradicionales. El último periodo formalmente democrático argentino constituyó en este ámbito un continuo proceso de deterioro de la situación laboral: de la drástica

transferencia de recursos que supusieron los episodios hiperinflacionarios en 1989, a la confiscación de ahorros para la defensa de un debilitado sector bancario —la estrategia financiera conocida como “el corralito”—, pasando por el desorbitado crecimiento del ejército de desempleados y subempleados, y los efectos recesivos de los ajustes neoliberales y la “convertibilidad”, todos estos mecanismos —expresados en diversas políticas públicas— que supusieron rupturas en el sector sindical (división de la CGT y aparición de la CTA) y la aparición de los movimientos de desocupados, terminaron por vaciar de contenido a la protección constitucional del trabajo.

Aunque se trata formalmente de un vaciamiento menos drástico que el que supone una suspensión de la vigencia de la Constitución, como la que existiera entre 1976 y 1983 con el estado de sitio, se trata no obstante de un proceso continuado de profundas consecuencias estructurales, que ya no pueden ser revertidas con simples medidas normativas sino tan sólo con políticas de largo alcance que hasta el momento no han comenzado a desarrollarse, salvo en el plano insuficiente y provisional de una ayuda económica conciliatoria y efímera; pues el objetivo principal de esta ayuda es mantener contenida la movilización social a niveles tolerables por el sistema político, dado lo aprendido de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.

La imposición del modelo neoliberal condujo a que la capacidad regulatoria del sistema jurídico se descompusiera, dejando a la lucha en el espacio del mercado más que en la producción de normativa laboral, flexibilizando por los mecanismos más diversificados lo que la Constitución proponía defender como derechos fundamentales. Repasando el artículo 14bis, puede apreciarse que, en relación con las prácticas efectivas que se dieron en la economía real, ni una sola de sus prescripciones se mantuvo firme ante la agresiva demanda de los defensores del libre mercado, incluyendo la obediencia ante reclamos que procedían desde fuera del marco regulatorio nacional, soslayándose simplemente los contenidos constitucionales en cumplimiento de unos “compromisos”, adquiridos en forma más que dudosa, que superaban ampliamente los aspectos meramente económicos, pues sus efectos alcanzaron las expresiones más básicas de la vivencia cotidiana de la mayor parte de la población (Boaventura de Sousa, 1998).

Como consecuencia de estos desequilibrios sociales, que lentamente derivaron hacia una nueva configuración económica que conocía niveles de desocupación estructural y miseria completamente nuevos, la disconformidad social dispuso un cambio de orientación política, en ese giro a la centro-izquierda que se suponía representaba la elección de la Alianza

(conformada principalmente por fracciones de los partidos de masas tradicionales, lo cual en alguna medida expresa el impacto económico del modelo neoliberal sobre las clases trabajadoras y las clases medias), pero que no bastó para que este nuevo gobierno variara su actitud consecuente con los intereses de los más poderosos. Finalmente, la disconformidad se transformó en abierta protesta social, instalándose una movilización permanente que terminó por descomponer el sistema de poder político que pudo, no obstante, re-articularse en un proceso que supuso algunas concesiones a los sectores más movilizados de la sociedad, pero que continuó sin inaugurar un auténtico proceso de reestructuración social y política. De esta manera, una clase política des-legitimada consiguió, ante la falta de opciones reconducir el proceso político hacia un terreno en el que nuevamente se consiguió “estabilizar las expectativas”, articulándose una nueva y endeble regulación del sistema.

Sin embargo, la persistencia evidente de los conflictos estructurales, tanto en el ámbito de las relaciones laborales, casi completamente desprotegidas, como en el de la amplísima exclusión social, cuyo exponente más evidente es la persistencia de un índice muy elevado de desocupación, impide que la estabilización sea completa, perpetuándose el conflicto en la forma particular que se iniciara a mediados de la década pasada: el movimiento piquetero, cuya desconexión con el mercado laboral le impide ejercer, mediante el cese de actividades contemplado en el derecho a la huelga, la presión necesaria para sostener sus reivindicaciones, producidas por la inmediatez acuciante de la insatisfacción de las necesidades más elementales.

Al margen de una fundamentación moral de los derechos humanos que ostente como punto de partida la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos (De Lucas y Añón, 1990), la actividad de los movimientos de desocupados es sumamente interesante para destacar algunos problemas relevantes en relación con la situación de la normativa existente frente a estos problemas sociales, así como resulta profundamente esclarecedor el análisis de la actitud estatal frente a la situación planteada por esta actividad reivindicativa.

El movimiento piquetero, complejo y multifacético, destaca un aspecto fundamental de la lucha social: la emergencia de los desocupados como actores políticos, resistentes a la sencilla y contundente exclusión en la que el modelo económico los subsumía (Lenguita, 2002). Si bien su acción antecedió a la crisis terminal del modelo menemista en varios años, sus reclamos pasan a ocupar un primer plano cuando se conjugan con los de otros actores sociales, extendiendo la protesta más allá de los límites de una situación particular. Privados del derecho a la huelga, el corte de rutas se transforma

en su modo particular de estorbar el funcionamiento normal, dentro de la inestabilidad reinante, del capitalismo argentino, en un auténtico “hostigamiento de las comunicaciones” de su adversario: el modelo económico desarrollado durante más de diez años.

Parientes cercanos de los estallidos sociales que se extendieran por las provincias más pobres del territorio nacional, los piquetes representaron un giro en la protesta social y se alinearon con ellos las protestas, considerablemente menos fundamentales, de los demás sectores afectados por la crisis permanente: trabajadores, funcionarios estatales y clases medias también ejercieron su poder político —siempre ajeno al aparato estatal— a través de la manifestación continua. Finalmente, acercándose paulatinamente desde la periferia del país, el corte de ruta se estableció como modalidad en el centro neurálgico de la productividad nacional, golpeando de lleno en el centro de poder del Estado y obligándolo a reaccionar. Sin embargo, las expresiones de apoyo de los demás sectores involucrados en la lucha de los desocupados no se basaba en los mismos intereses, y de esta divergencia debe explicarse el posicionamiento posterior de los demás sectores sociales y del propio Estado nacional, al menos en el plano interno.

El reclamo de los desocupados es tan sencillo e inmediato a la comprensión que incluso es difícil de procesar en términos de derechos, ya que su posición social no está sujeta a la mediación jurídica, porque el trabajo es la mediación social básica, ante cuya ausencia es imposible mediar entre actores. De esta manera, y en términos de la teoría discursiva del derecho, el desempleo resulta ser una situación no jurídica, pues requiere un manejo eminentemente político, aunque sea reconducido a través de nueva legislación. Se trata de ciudadanos de derecho que no lo son de hecho, pues al estar excluidos del mercado laboral carecen de la principal vía de conexión que integra a una sociedad capitalista: el trabajo tomado a precio como mercancía en un mercado formalmente libre. Recordemos también el importante papel que en el capitalismo juega la presencia de masas de excluidos del mercado: la posibilidad de mantener bajos los salarios en función de la “fluidez” del servicio laboral, su abundancia en el mercado; y recordemos también la amenaza que implica una enorme desigualdad para un sistema formalmente igualitario. Por otra parte, a diferencia del keynesianismo, el neoliberalismo desprecia, en función de su tendencia a liberalizar mercados para aumentar la extracción de plusvalía, la calidad de consumidores de esa población; lo cual puede constituir un riesgo de agotamiento para el propio régimen de acumulación, debido a su acelerada tendencia al agotamiento de su fuente de ganancias.

Por otra parte, en cualquier sistema social que pueda concebirse, el bloqueo de la posibilidad de ganarse el sustento para una porción importante de la población debe conducir a un conflicto social a escala, saldado con la caída del régimen de regulación o con la extensión desmedida de la represión. La relación social que supone la exclusión laboral no se trata de una oposición entre quienes ejercen la dominación y quienes la padecen: se trata de un conflicto entre quienes viven dentro de una sociedad y quienes corren un riesgo cierto de muerte por estar excluidos de ella, mediante la desconexión de su sistema productivo. En paralelo con el Movimiento de los Sin Tierra del Brasil, los desocupados argentinos radicalizan sus posiciones no por estar guiados por una ideología política más o menos utópica, ni tan siquiera igualitaria, sino porque deben buscar imperiosamente los medios para subsistir. Esta es quizá la característica más impactante de sus reclamos, pues delatan una situación casi peor que la del esclavismo: ya no es un ser humano tratado como mercancía, no es, para el mercado, ni siquiera una mercancía. En esta circunstancia, vinculada con la sumisión del Estado a la economía política de sectores económicos no sólo extremadamente poderosos, sino también, en buena medida, ajenos al poder normativo del Estado, la protesta social será en cualquier caso radical y ¿qué derecho humano ampara al desocupado, al excluido del mercado?

Ciertamente, hablar de “derecho al trabajo” es en alguna medida un contrasentido, pues la imposibilidad de trabajar implica, para quienes no cuentan con asistencia alguna, la proximidad de la muerte; resultando que el derecho al trabajo no es sino una dimensión al derecho a vivir. No obstante, no faltan autores que desprecian el carácter fundamental del derecho al trabajo, precisamente porque, se argumenta, el Estado no es capaz de proporcionar empleo a toda la población que lo solicite pues esa es una tarea librada a las fuerzas del mercado: la incapacidad estatal provendría de una cierta situación de escasez. Por supuesto, esta lectura tiene sentido —aunque un sentido ultraliberal y miope— en el marco del imperio del capital sobre la política y no se encuentra tan distante de lo expresado en la propia Constitución argentina. En efecto, el artículo 14bis no es aplicable a cualquier configuración social, sino a una que contemple la protección del trabajo dentro de un marco general en el que éste es considerado todavía una mercancía. No casualmente el artículo 14 “original” retrata una definición singularmente liberal (Fioravanti, 1995) de la actividad laboral, protegiendo los derechos a: trabajar; ejercer toda industria lícita; navegar y comerciar; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; publicar las ideas por la prensa sin censura previa; usar y disponer de su propiedad; asociarse con fines útiles; profesar libremente el culto; enseñar y aprender.

Redactada sucesivamente en diferentes ambientes sociales —en definitiva: en distintos momentos del capitalismo argentino, signados por diversos marcos regulatorios para sus respectivos regímenes de acumulación— la Constitución argentina no establece un paradigma de neutralidad social para el desarrollo de las relaciones productivas, sino que defiende una estructura social impregnada de capitalismo pese a lo cual, en determinados momentos de crisis y cambio de este mismo sistema, se demuestra incapaz incluso de cumplir con las normas que ella misma pretende desarrollar con el fin de controlar y regular el sistema, manteniéndolo cohesionado.

El movimiento de los desocupados delata una situación en la que los antiguos pactos de han roto definitivamente, pero aun así no es suficiente para que el resto de los actores sociales afectados por la crisis se pongan definitivamente en disposición de radicalizar sus propias posiciones al punto de desplazar completamente los ejes del sistema político. Así, algunos sectores políticamente predominantes en las etapas precedentes consiguieron mantener sus posiciones lo suficiente como para no desaparecer como actores relevantes: el duhaldismo, el sindicalismo —incluso el más expresamente traidor a sus bases— y, sorprendentemente, el menemismo, no han cedido todos los espacios de poder que ocupaban, precisamente porque el desplazamiento ideológico no llegó a desencadenar una auténtica crisis orgánica, sino una dolorosa transición de un modelo de acumulación salvaje a una relativa estabilización social en ambiente sumamente degradado respecto de momentos anteriores del proceso democrático argentino.

Ante esta estabilización, ahora avalada, incluso, provisionalmente, por los organismos financieros internacionales —feroces acreedores del país y férreos defensores de políticas agresivas para la población—, la frágil recuperación de algunos marcos regulatorios permiten que los sectores menos castigados —aquellos que no han perdido toda conexión con el mercado laboral— depongan sus reclamos radicales a favor de una actitud más conservadora y expectante, e incluso terminen por oponerse a aquellos que durante la crisis política fueron los abanderados de la lucha popular y sus más convencidos ejecutores prácticos (Nun, 2003).

El Estado, finalmente, en tanto expresión política del conflicto precedente, pero cuya funcionalidad continúa estando ligada a la articulación del sistema, no tiene más remedio que enfrentarse al conflicto planteado, ya sea accediendo a las reivindicaciones planteadas, reprimiendo, controlando discursivamente el enfrentamiento o alternando su accionar hasta la resolución de la crisis. Luego de la re-legitimación del poder político que supuso, siquiera parcialmente, el acceso al control del Estado de la fórmula encabezada por el heterodoxo (o no tanto) Kirchner, debe posicionarse

frente al reclamo de los desocupados, y debe hacerlo, además, de acuerdo con los principios funcionales del estado de derecho, es decir, recurriendo a los mecanismos legitimados para la producción de una normativa y un desarrollo práctico de la misma, capaz de controlar este elemento de desequilibrio del sistema que supone la existencia de una movilización permanente.

Ahora bien, esta necesidad revela uno de los dispositivos más perversos de discriminación y acción política de los que dispone el estado de derecho más avanzado. Los piqueteros, y con ellos cualquier colectivo que quiera oponer una reivindicación, carecen de poder político dentro del aparato del Estado, más allá de alguna simpatía, y también carecen de un derecho a protestar sancionado como es el derecho a la huelga. Por lo tanto, el único medio del que disponen para ejercer su reclamo —pues las meras peticiones se ahogan en el mar de problemas administrativos y legales— es interferir en la vida pública, tomando para sí un espacio público que “no les pertenece”, en el sentido de que no les pertenece en forma exclusiva y, al ocupar una ruta, una avenida, una plaza, esta “invasión”, se interpreta, supone una vulneración de los derechos de otros ciudadanos; para lo cual puede invocarse el mismísimo artículo 14 de la Constitución, que garantiza el derecho a transitar libremente, por lo tanto, el derecho a peticionar a las autoridades (¡garantizado en el mismo párrafo de la Constitución!) queda acotado a los canales “pacíficos” de demanda: la vía judicial y la legislativa, todas ellas funcionales dentro del ámbito general del Estado, y, por lo tanto, vinculadas políticamente. Y cuando a alguien que protesta porque está en peligro su vida, ejercitando su derecho a peticionar, se le pide que proteste sin molestar a otros ciudadanos, que al fin y al cabo tienen también, se dice, derecho a su intimidad y su libre circulación, no se le está diciendo otra cosa que no sea mandarlo a morir a dónde nadie lo vea ser comido por los piojos.

La perversión consiste en que el Estado termina por imponer unos derechos vulnerados circunstancialmente, y en modo prácticamente insignificante, frente a una vulneración mucho más profunda, general y extendida, del mismo modo que elige entre el derecho de los acreedores a cobrar sus intereses por la deuda pública antes que la financiación de políticas públicas que garanticen la alimentación, la salud, la educación, la vivienda digna o la mera posibilidad de ganarse el sustento mediante la realización de una actividad productiva. Por supuesto, el miedo a las reacciones de los acreedores o la banca es incomparablemente superior al miedo que producen unos cuantos desarraigados que, en última instancia, siempre pueden ser lacrimógenamente gaseados, apaleados o fusilados.

Frente a estas decisiones del poder público, el resto de las instituciones del Estado permanecen inmutables, lo cual es consecuente, pues están atadas a la misma lógica perversa de regulación, que garantiza unos determinados niveles de acumulación para las clases dominantes mientras el desequilibrio político no amenace realmente a las propias instituciones estatales. Sin embargo, que la lógica sea perversa en el manejo de las normas y que el resultado sea manifiestamente injusto no significa que no pueda tener éxito en la implementación de un nuevo régimen de acumulación, quizá menos agresivo que el desarrollado por la depredación menemista, pero igualmente falto de equidad y, para peor, sustentado sobre una sociedad que reconoce la existencia de una enorme masa de pobres e indigentes, y que lentamente las acepta, siempre y cuando para las clases dominantes y sus subalternas, y a una parte de las clases trabajadoras amparadas por un sindicalismo cada vez más cerrado y ciego a la injusticia social, los marcos regulatorios mantengan una apariencia de orden y previsibilidad. El nuevo pacto de clases argentino, que termina por excluir de la política a los excluidos de la economía —que fueron sus aliados en el momento de crisis del sistema—, re-edita un fenómeno conocido en la era menemista, en donde el recuerdo del desorden causado por la hiperinflación permitió la imposición de políticas recesivas y socialmente degradantes, pero contenidas en un ambiente de estabilidad financiera e institucional, pese a las dosis extra-fuertes de corrupción política, sindical, judicial y legislativa, en tanto canales necesarios para la aplicación jurídicamente legítima (no impugnada por ningún órgano judicial superior) de un marco regulatorio de efectos sumamente negativos, y completamente contrarios a la realización de los principios, la protección de los derechos y la consecución de las garantías detalladas en la Constitución nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Barranco Avilés, María del Carmen (2000), *Teoría Jurídica de los Derechos Fundamentales*, Madrid: Dykinson.
- Boaventura De Sousa, Santos (1998), *La globalización del derecho*, Colombia: ILSA.
- De Lucas, J. y M. J., Añón (1990), "Necesidades, razones y derechos", en *Rev. Doxa*, núm. 7, Madrid, pp. 51-81.

- Fioravanti, Mauricio (1995), *Los Derechos Fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*, Madrid: Trotta, col. Estructuras y Procesos, serie: Derechos, 1996, Traducción M. Martínez Neira.
- Guarnieri, C. y P., Pederzoli (1996), *Los jueces y la política. Poder judicial y democracia*, Madrid: Taurus, 1999, traducción M. A. Ruiz de Azua.
- Habermas, Jurgen (2000), *Facticidad y validez*, Valladolid: Trotta, traducción M. Jiménez Redondo.
- Lenguita, Paula (2002), "El poder del desempleo. Reflexiones críticas sobre la relevancia política del movimiento piquetero", en VVAA, *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*, Buenos Aires: Asoc. Trabajo y Sociedad.
- Nun, José (2003), Entrevista en el diario *Página 12*, 9 de diciembre de 2003, sección "El País", realizada por Laura Vales, edición informática, www.Página12.com.ar
- Polanzas, Nicos (1964), *El examen marxista del estado y de derechos actuales y el problema de la "alternativa"*, en VVAA (1969), "Marx, el derecho y el estado", Barcelona: Tau, traducción J. R. Capella.
- Prieto Sanchís, L. (1990), *Estudios sobre Derechos Fundamentales*, Madrid: Debate. Madrid.

¿QUÉ ES LA POLÍTICA? ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DE LOS PROCESOS DE OCUPACIÓN DE FÁBRICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

María Inés Fernández Álvarez

INTRODUCCIÓN

La década de los noventa significó para la Argentina una agudización de los procesos de concentración económica y de desindustrialización, iniciados quince años antes, producto de la implementación políticas de corte neoliberal. Estos procesos profundizaron los niveles de desigualdad social, incrementaron las tasas de desocupación, pobreza e indigencia y, en consecuencia, produjeron una precarización de las condiciones de vida de los sectores subalternos.

Al mismo tiempo, esta década dio lugar a un crecimiento de la conflictividad social, cuyo punto más álgido se expresa, sin duda, en los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001. En este marco, nuestro país fue escenario de un proceso singular: la ocupación de espacios productivos en crisis y la consecuente puesta en funcionamiento de los mismos por parte de sus trabajadores.

Los procesos de “recuperación” de empresas, que se aceleraron y multiplicaron a partir del año 2001, adquiriendo, entonces, mayor visibilidad pública, engloban una diversidad amplia de experiencias cuyo denominador común es la decisión, por parte de los trabajadores, de continuar o reiniciar las actividades de una empresa. Esta continuidad tiene como objeto “conservar la fuente de trabajo” ante el cierre, quiebra o abandono de la misma por parte de sus propietarios (generalmente atravesadas por procesos de vaciamiento).

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, sobre el que se centra nuestro trabajo de investigación, las recuperaciones se multiplican principalmente durante el año 2002 alcanzando actualmente 28 casos (entre aquellos cuya

situación legal ha sido temporalmente “resuelta” —a través de una ley de expropiación y la posibilidad de reiniciar las actividades de la empresa— y aquellos cuya situación aún no ha sido definida).

Los análisis sobre los procesos de recuperación de empresas se orientan en torno a dos grandes ejes de discusión: el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo, y en este sentido son pensados como expresiones de lo que da en llamarse la “economía social” (Slutzky, Di Loreto, Rofman, 2003; Palomino, 2003; Arévalo y Calello, 2003) y la puesta en práctica de nuevas modalidades de acción colectiva (Favaro y Aizicson, 2003; Fajn, 2003). Sin entrar en una discusión sobre el carácter novedoso de estos procesos, que ha sido objeto de trabajos anteriores (Grimberg, Manzano, Fernández Álvarez, 2003; Fernández Álvarez, 2004), las reflexiones que nos proponemos a continuación se inscriben en este segundo eje, con la intención iniciar una reflexión sobre los sentidos que los trabajadores involucrados en estos procesos otorgan a la política.

Con este objetivo, retomamos algunos elementos que surgen de nuestro trabajo de campo, en el que se sigue el proceso de recuperación de una fábrica en particular de la ciudad de Buenos Aires, buscando comprender el modo en que estos trabajadores significan la política —entendida ésta como una dimensión de la vida cotidiana y no como un dominio diferenciado—. En este sentido, nos interesa entender la relación que esta modalidad tiene con la forma en que se significa el trabajo así como el vínculo que existe entre este modo de significar la política con su inserción en el amplio espectro de organizaciones consolidadas en torno a las recuperaciones de fábricas.

Las reflexiones que proponemos a continuación responden a algunas interrogantes que fueron apareciendo con base en nuestras observaciones y la relectura de nuestras entrevistas en torno a los sentidos que los trabajadores involucrados en este proceso daban a la política. Esta cuestión nos parece particularmente central, en el marco de un proceso de carácter político como es el de la recuperación de fábricas, una acción colectiva que se instala en el espacio público.

Estos sentidos hacían eco, en alguna medida, de una concepción que denominamos “hegemónica” de la política, la cual ubica a ésta en un espacio diferenciado de la vida cotidiana. Para esta concepción, la política refiere a los esfuerzos por el control del poder, por la influencia sobre la distribución del poder, para la cual quienes actúan en política, quienes hacen política, luchan por el control del poder, lucha que responde a la satisfacción de intereses (ya sea personales o partidarios).

Por ello resulta interesante iniciar una reflexión que nos permita poner en tensión el modo en que estos trabajadores significan la política, lo que dimos en llamar concepción hegemónica de la política y nuestra propia concepción, que como anticipamos, entiende a la política como relación de poder que se ejerce en la práctica cotidiana, esto es, no como una esfera autónoma sino como una dimensión de la vida.

Con este fin, en una primera instancia describiremos a grandes rasgos el proceso de recuperación de fábricas que permita contextualizar nuestra reflexión, adentrándonos en las organizaciones consolidadas en torno a las mismas; en un segundo momento describiremos sintéticamente el proceso de recuperación de la fábrica en la que centra nuestro análisis, para finalmente plantear algunas líneas de discusión sobre los sentidos que adopta la política en este caso.

ACERCA DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE EMPRESAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Las ocupaciones y recuperaciones de empresas, cuyo punto de convergencia es, indudablemente, la gestión de la producción por parte de los trabajadores como mecanismo de defensa de la fuente de trabajo, difieren tanto en lo que hace a la composición de quienes llevan adelante el proceso, como a las características de la empresa (tamaño, rama, situación financiera, número de trabajadores, etc.), así como la forma en que se desarrolla este proceso.

Sin embargo es posible establecer ciertos rasgos comunes tanto en lo que hace a las características de la empresa en el que se manifiesta el proceso de recuperación, como a la manera en se lleva adelante este último.

En cuanto a las características de las unidades productivas se trata, en la amplia mayoría de los casos, de empresas pequeñas o medianas, aunque es importante el número de casos que corresponde a empresas con más de 50 trabajadores (Facultad Abierta, 2003).¹¹⁶ Estas empresas, cuya producción está orientada principalmente al mercado interno, pertenecen a ramas como la metalúrgica, la alimenticia o la textil, entra las más destacadas.

¹¹⁶ Según el relevamiento realizado por el "Programa Facultad Abierta" (2003), de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 36% de los casos relevados corresponde a pequeñas empresas, 40% a empresas medianas, mientras que 23% está constituido por empresas que tienen más de 50 trabajadores.

Entre ellas, la primera constituye la actividad que agrupa mayor cantidad de casos, a lo que se suma un importante número de empresas de servicios en sectores variados como educación, salud, servicios informáticos, hotelería, entre otros. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la actividad gráfica ocupa el primer lugar, encontrándose aproximadamente ocho casos, ubicados principalmente en la zona sur de la ciudad.

Estas empresas se vieron fuertemente afectadas por el proceso de desindustrialización, profundizado a partir de la década de los noventa. Como resultado de la apertura económica impulsada desde inicios de esta década, a partir de la introducción de medidas de corte neoliberal, respondiendo a los condicionamientos de los organismos financieros internacionales, estas empresas se vieron enfrentadas a la competencia de productos importados, de menor costo, que afectaron sus ingresos. Asimismo, éstas se involucraron en procesos de endeudamiento importantes, en la amplia mayoría de los casos atravesadas por procesos de vaciamiento.

El mecanismo de recuperación de empresas se concentra principalmente en el Gran Buenos Aires, destacándose algunos aglomerados como el partido de San Martín, La Matanza, Avellaneda y Quilmes, y, en menor medida, la ciudad de Buenos Aires, en la que el proceso se multiplica de manera significativa en el año 2002. En el resto del país el alcance es más reducido en cuanto al número de casos, aunque se debe destacar que abarca la totalidad del país (en el que se destacan las provincias de Córdoba y Santa Fe que corresponden a las zonas más industrializadas del país junto con la provincia de Buenos Aires, y se desarrollan procesos que involucran grandes empresas como es el caso de Zanon).¹¹⁷

En lo que respecta al desarrollo del proceso de recuperación, es relevante la búsqueda de una solución legal que, hasta el momento, se caracteriza principalmente por la solicitud de una ley de expropiación. Las leyes sancionadas en la ciudad de Buenos Aires (al igual que en el resto de los casos) se otorgan únicamente de manera temporaria. Con el fin de obtener una ley de expropiación, los trabajadores se ven "obligados" a la necesidad de conformar una cooperativa, que resulta la figura legal legítima para que

¹¹⁷ El 64% de los casos se concentran en el GBA, 20% en la ciudad de Buenos Aires, mientras que 16% restante corresponde al interior del país (Programa Facultad Abierta, 2003). Este porcentaje es similar según otro relevamiento realizado con base en 87 casos, siendo el porcentaje correspondiente al interior del país cercano a 30%, del cual 16.1% se ubica en la provincia de Santa Fe (Fajn, 2003).

el Estado,¹¹⁸ una vez expropiada la unidad productiva, entregue la explotación de la misma a los trabajadores. A su vez, la expropiación exige que dicho bien sea considerado de "utilidad pública", garantizando la continuidad productiva. La consideración de "utilidad pública" de una empresa se sostiene en la situación económica crítica del país y, fundamentalmente, en los índices de desempleo. En este sentido, el proceso de recuperación descansa fundamentalmente sobre dos principios legitimadores: la utilidad pública, fundada en el desempleo, y la constitución de una cooperativa de trabajo.

Si bien en el caso de la ciudad de Buenos Aires estos procesos se desarrollan particularmente durante el año 2002 y, por lo tanto, aparecen fuertemente relacionados con la "crisis" económica y la creciente movilización social, que se desarrolla después del 19 y 20 de diciembre, es posible rastrear antecedentes en la década de los ochenta de ocupaciones de espacios productivos relacionados con el proceso hiperinflacionario y la quiebra de empresas, que dieron lugar a la conformación de cooperativas de trabajo.¹¹⁹ Estos procesos, sin embargo, se intensificaron a partir de mediados de los noventa adquiriendo nuevas características, en la conformación de cooperativas tales como CIAM (ex-Aurora, planta Avellaneda), impulsada por la sección UOM de Avellaneda, el Frigorífico Yaguané en La Matanza en el año 1996 y el Frigorífico San Lorenzo en 1997, que instaura un antecedente destacado en la conformación de Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).

LA CONSOLIDACIÓN DE DISTINTAS ORGANIZACIONES EN TORNO A LOS PROCESOS

Los procesos de recuperación de empresas han dado lugar a la consolidación de una serie de organizaciones, como es el caso del Movimiento

¹¹⁸ A partir de la modificación de la ley de Concursos y Quiebras de 2002 se otorga al síndico la posibilidad de permitir la continuidad productiva de la empresa hasta el momento del remate de los bienes a los trabajadores de la misma constituidos en cooperativa, si ellos así lo solicitan. De la misma manera, uno de los "requisitos" para la sanción de una ley de expropiación es la conformación de una cooperativa de trabajo, tal como lo observamos en los distintos procesos de negociación de las leyes.

¹¹⁹ Este es el caso de la creación de cooperativas de trabajo en la provincia de Buenos Aires a fines de la década de los 80 en torno a las que se constituye la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA) y de algunas empresas metalúrgicas de la zona de Quilmes que constituyen antecedentes desatados en la conformación del MNER.

Nacional de Empresas Recuperadas, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas y la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo Reconvertidas, entre otras o bien se han inscrito en organizaciones ya constituidas como es el caso de la Federación de Cooperativas de Trabajo.¹²⁰

En este sentido, una serie de fábricas o empresas se encuentran nucleadas en torno al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), constituido como tal en el año 2001, el cual centra su discurso en cuestiones que escapan a la protección del trabajo, en un sentido estricto, y que abarcan la defensa de la "Producción Nacional". Esto implica para el movimiento la defensa de un proyecto de país fundado en el desarrollo de la producción nacional, cuestionando de esta manera el modelo neoliberal implementado en las décadas pasadas. Para esa organización —cuyo lema es "ocupar, producir y resistir"— la recuperación se piensa como parte de un proceso mayor en el que "una fábrica recuperada se convierte en un espacio de resistencia". El "proceso de recuperación" se construye, entonces, como un nuevo espacio de lucha de la clase trabajadora que es necesario conquistar, como lo expresa el siguiente testimonio de uno de sus militantes: "con el auge del desempleo no se puede seguir luchando por los salarios y las condiciones trabajo solamente, hay que empezar a luchar por los puestos de trabajo". Esto implica "luchar por el empleo y la dignidad".

Asimismo, el MNER reclama al Estado la definición de una política pública orientada a favorecer la recuperación de fábricas, y la conformación de una cooperativa responde, en este marco, fundamentalmente a la "necesidad" de resolver un problema legal.

A comienzos del 2003 el MNER sufrió una fractura interna, de la que surgió el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), constituido más tarde como ONG. En este último, se construye un discurso que se centra esencialmente en la defensa del "derecho al trabajo", en el que el eje está puesto en la fuerza de las recuperaciones de las fuentes de trabajo frente al desempleo.

Para ambas organizaciones la reforma de la Ley de Quiebras, resulta uno de los objetivos fundamentales. Desde el MNER, esta demanda se acompaña con la solicitud de una ley de expropiación de unidades productivas, que

¹²⁰ Describimos a continuación a grandes el MNER, el MNFR, el FENCOOTER y la FECOOTRA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen algunos casos nucleados recientemente en torno a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que agrupa alrededor de 25 cooperativas, entre las que se incluyen algunas resultantes de procesos de recuperación así como algunos que no se alinean en ninguna de estas agrupaciones.

permita resolver de manera unificada la recuperación de cada empresa, *institucionalizando* el proceso, constituyendo los ejes de las reivindicaciones del movimiento.

Por otro lado, una serie de casos se nuclean en torno a la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (FENCOOTRA), la cual recupera una tradición ligada al cooperativismo y al mutualismo. Esta federación creada en el año 1988 con el objetivo de agrupar a las cooperativas de trabajo de la provincia de Buenos Aires, tiene actualmente alcance nacional. Para la federación el cooperativismo es una herramienta que permite *luchar contra la explotación a la que se ven sometidos los trabajadores* y en este sentido, como se afirma en la declaración de sus principios, boga por que

cada una de nuestras cooperativas asociadas constituyan no sólo un medio económico de subsistencia, sino que sean el espejo en donde cada trabajador pueda mirar cómo se va construyendo una empresa gestionada por los propios trabajadores, que vean cómo podemos ser dueños de nuestra propia fuente de trabajo y administrarla (...) es posible llevarla adelante sin patrones que nos exploten.¹²¹

Finalmente, la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo Reconvertidas (FENCOOTER) más cercana a organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), fundada en agosto de 2002. Esta federación tiene un alcance reducido en lo que respecta al número de fábricas que alberga, centrando su acción a partir del vínculo que establece con este organismo. Al interior del INAES se crea, a comienzos de 2003, una unidad destinada a atender las necesidades de las empresas que denominan "reconvertidas" (UEREC),¹²² cuyo rol se enfoca, hasta el momento, en cuestiones relacionadas con la conformación de las cooperativas, el asesoramiento, etc. El rol que deben cumplir las empresas recuperadas se define, principalmente, desde un lugar más bien "técnico", favoreciendo el *autoempleo* y tratando a cada experiencia como un caso particular.

¹²¹ Extraído del Documento "Declaración de principios de FENCOOTRA", publicado en la página web de la Federación (www.fecootra.org.ar).

¹²² Esta Unidad Ejecutora fue disuelta a comienzos de 2004.

Es importante considerar, por otra parte, que una serie de casos intentó impulsar una organización que articulaba su discurso en un fuerte cuestionamiento a la propiedad privada y al sistema capitalista, sobre la propuesta de "estatización con control obrero". Estos procesos tuvieron una importante presencia pública fundamentalmente a comienzos del año 2002, con la significativa participación de algunos partidos políticos de izquierda, distintas organizaciones de derechos humanos, y fueron vinculándose desde un inicio con distintas organizaciones "piqueteras". Esta propuesta, cuya estrategia se fundó en la confrontación y la masificación del conflicto, se planteó como propósito principal la constitución de un frente de unidad entre los distintos sectores que conforman la clase trabajadora: los ocupados y los desocupados.

EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE UNA FÁBRICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Como dijimos previamente, nuestro trabajo sigue el proceso de recuperación de una fábrica en particular que pertenece al sector textil y estaba compuesta, al momento de la recuperación, por más de 100 trabajadores, de los cuales, en un principio, 80 participaron del proceso iniciado a fines de 2001, y actualmente participan 60. Los empleados que componen la fábrica, principalmente mujeres (80%), tenían una antigüedad promedio de diez años en la empresa, y en casi todos los casos se trata de personas con una ocupación previa en el sector textil.

Esta fábrica, cuyo recorrido permite ubicarla dentro de las empresas nacionales surgidas y desarrolladas en la Argentina del periodo de sustitución de importaciones,¹²³ atraviesa a comienzos de la década del noventa una serie de cambios que incluye la incorporación de nuevas tecnologías, reduciendo de esta manera un importante número de puestos laborales, aunque las modificaciones se centraron, sobre todo, en la introducción de nuevas modalidades de gestión y contratación de la mano de obra. De esta manera, siguiendo el camino de la amplia mayoría de las empresas nacionales, los cambios que primaron fueron los referentes a las modificaciones en la organización de la producción y en las formas de contratación, con

¹²³ Una historia más detallada de la fábrica, del proceso de recuperación y un análisis de los cambios introducidos en la organización del trabajo fueron estudiados en un trabajo anterior publicado "Realidad Económica", 197, agosto 2003.

una tendencia a la precarización de las condiciones de trabajo, mediante mecanismos de flexibilización laboral, que permitieron reducir los costos de la mano de obra.

Se introdujeron entonces distintas modalidades de flexibilización como flexibilidad salarial o flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo (modificaciones en la forma de pago que comenzaron a realizarse en función de la producción y suspensiones sin remuneración durante los periodos de baja producción, entre otras medidas). A mediados de los años noventa se suspendieron los aportes de las cargas sociales y más tarde comenzaron los incumplimientos temporales en los pagos semanales que se hicieron permanentes durante el 2000 y desembocaron en diciembre de 2001 en la recuperación de la empresa, tras el abandono de los dueños. Un mes después los trabajadores decidieron volver a poner en funcionamiento las máquinas y reiniciar la producción. La gestión de la producción por parte de los trabajadores se mantuvo hasta abril de 2003 cuando éstos fueron desalojados por la policía.

A comienzos de 2002, tras una serie de negociaciones fracasadas en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores deciden reiniciar la producción y conjuntamente la demanda de expropiación de la fábrica.¹²⁴

En abril de 2003 los trabajadores son desalojados de la fábrica, hecho que desemboca días después en una fuerte represión policial tras el intento de volver a ingresar a la planta. Este desalojo inicia para los trabajadores una nueva etapa en la que se desarrollan una serie de medidas de protesta de las cuales la más significativa es un “acampe” durante seis meses frente a la fábrica. El “acampe”, que consiste en la instalación de una carpa de manera permanente frente al inmueble con el objetivo de “custodiar” la empresa para que no sea entregada a los patrones, durará ocho meses. Durante este lapso la estrategia de los obreros estará puesta principalmente en una importante presencia pública y en la masificación del conflicto, que trasciende a quienes están directamente involucrados. Con este propósito se realizan distintas actividades de protesta como cortes de ruta, “maquinazos” (frente a la fábrica y frente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires),

¹²⁴ Inicialmente la demanda es por la estatización de la planta, con control obrero de la producción lo que suponía que los trabajadores se convirtieran en empleados del Estado. Este proyecto es vetado en la legislatura porteña en octubre de 2002 y como consecuencia dicha demanda se transforma en expropiación definitiva de bienes muebles e inmuebles. Finalmente la ley —que será aprobada un año después— estipula la expropiación por dos años de la planta, marcas, patentes y maquinarias.

abrazos a edificios públicos, encadenamientos a la planta así como una semana de cultura y debate en la carpa. Al mismo tiempo, semanalmente se realiza una asamblea en la que participan distintas agrupaciones con las que se discute de manera conjunta las actividades por desarrollar.

Finalmente, en octubre de 2003 fue aprobada en la legislatura porteña una ley que expropia, de manera temporaria, los bienes muebles y definitivamente las maquinarias, marcas y patentes, reabriendo el camino al ingreso a la planta y al reinicio de la gestión de la producción por parte de los trabajadores.

¿QUÉ ES LA POLÍTICA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA FÁBRICA RECUPERADA?

Tal como analizamos en un trabajo anterior sobre los sentidos asociados a las recuperaciones de fábricas (Fernández Álvarez, 2004), observamos que éstos se agrupan en torno a dos grandes dimensiones: la primera vinculada a un sentido *unificador* del trabajo, en el que éste abarca la totalidad de la vida; y la segunda, en la que los trabajadores ya no refieren al trabajo en su sentido unificador sino que está vinculado a *condiciones laborales específicas* (buenas/malas condiciones de trabajo que remiten a buenas/malas condiciones de vida, y que se asocian a momentos de estabilidad laboral en el primer caso y precarización en el segundo). Nos interesa aquí retomar la primera dimensión, el trabajo en un sentido unificador en el que éste se define esencialmente como una actividad "digna" frente a otras formas de vida, que en oposición a ésta, que como veremos a continuación, son consideradas como "no dignas".

Esta primera dimensión hace referencia al empleo como *condición de vida*. Condición de vida que remite, principalmente a la *subsistencia*, focalizando en la *alimentación*. El trabajo es la actividad que permite la subsistencia, el único medio "digno" para garantizar el "pan de cada día". En términos de una de las trabajadoras:

El trabajo es todo, porque realmente sin el trabajo no te podés manejar, porque teniendo un trabajo tenés un sueldo y teniendo un sueldo podés pagar tus cuentas, podés mantenerte, alimentar a tus hijos, podés comer. Sin un trabajo no podés, con el trabajo lo hacés todo. Entonces, para mí lo principal es tener un trabajo, porque por lo menos podés. No estás bien pago pero por lo

menos te mantenés, alimentás a tu familia. Y no tenés que andar dando lástima (Julia, 30 años, 2 hijas, ex trabajadora de la fábrica, reincorporada por sus compañeros).

Esta definición del trabajo, como condición de vida, como único medio para garantizar la subsistencia, aparece, entonces, en contraposición “a otras formas de ganarse la vida” que no es producto del esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad. En este sentido el trabajo es aquella actividad que garantiza la “dignidad”, en contraposición a otras actividades como la delincuencia o la necesidad de “salir a pedir” o a otras situaciones como el desempleo. El siguiente testimonio enfatiza en esta serie de sentidos que oponen el empleo a otras actividades que son valoradas negativamente:

Trabajar es la responsabilidad que tiene uno, para con su familia o para con uno mismo. Si no trabajas no tenés plata y si no trabajas no podés alimentar a tus hijos, más que nada alimentarlos, que tenga para comer. Ser desocupado es feo, en mi caso yo cuando no tuve trabajo y mi marido no tenía trabajo yo salía a vender productos de X, que no ganás nada, pero yo con eso trataba de mantenerme y es como que si no tenés trabajo no tenés nada, porque te amargas y pensás que tus hijos no tienen ropa, no tienen para comer que es lo más importante, no tiene para comer y ¿qué haces vos?, y como que la culpable sos vos, vos y tu marido porque son los responsables de trabajar para darle algo a tus hijos. ¿No? Entonces como que hay veces que no encontrás y bueno. Yo te digo que no soy de quedarme quieta. Siempre hago algo y consigo o sea, algo de plata para comprar algo para comer. Yo te dije, empecé a tejer, cuando quedé embarazada de la nena, también hacía ropita y vendía la ropita. O sea para mí, el trabajo, todos los trabajos que sea dignamente son todos trabajos. (...) Trabajo digno es, por ejemplo, yo tejía en mi casa y vendía eso. Me refiero a no robar por ejemplo. Vos salís a robar ya no es un trabajo digno. Aunque muchos lo toman como trabajo, te digo, porque conozco allá por mi casa que gente que dice “ah! Trabaja” y vos sabés que (...) todos saben que roba. Y eso de que roba porque no consigue trabajo, no sé hasta qué punto, porque yo te digo que no voy a llegar a ese extremo pero yo vendí productos, hacía tapadita de dos tres productos y me sacaba un poco más, o tejía ropita, son cosas que vos te rebuscás. Son cosas sanas que vos te rebuscás pero

sabés que vos tenés que hacerlo por tus hijos y ahí así hasta que llegué acá porque después no pude hacer más nada. Lo que no me gustaba mucho es salir e ir a pedir, cuando teníamos que salir acá (Sandra, 35 años, 7 años de antigüedad en la fábrica).

Como se observa en el testimonio anterior, la dignidad, que aparece de manera constante en las narraciones como valor positivo, se identifica principalmente con el "esfuerzo", el "sacrificio" y la "responsabilidad", sentidos que se atribuyen al trabajo; en contraposición a actividades socialmente valoradas como "no dignas", como la vagancia o la delincuencia y entre las que también se incluyen, de manera diferente, el desempleo. El trabajo, como condición de vida, hace énfasis una asociación entre *trabajo digno/esfuerzo/responsabilidad* frente al *trabajo indigno/delincuencia/irresponsabilidad*. El "esfuerzo" del trabajo tiene como recompensa "la dignidad" de la persona.

Al mismo tiempo este "sacrificio" no se hace para satisfacer intereses personales, sino que está ligado, sobre todo, a la posibilidad de alimentar a los hijos, retomando el testimonio anterior "trabajar es la responsabilidad que tiene uno, para con su familia o para con uno mismo". En este sentido, es un sacrificio para los otros, una acción que se hace por otros.

El carácter *digno* del trabajo, actúa a nuestro entender como un eje estructurador de sentidos, desde el que se articula el colectivo, los trabajadores, que continúan identificándose como tales una vez que la relación laboral (obrero-patrón) se ha desdibujado.

Asimismo, la categoría de *dignidad* (conseguida a través del *esfuerzo* del trabajo) que actúa como eje desde el que se construye el proceso de identificación, como elemento constitutivo desde el que se define la alteridad, encuentra una serie de "otros", en relación con los que se define el trabajo. Este "nosotros trabajadores" abarca una multiplicidad de otros que incluye a "los que piden", los desocupados, los delincuentes, siendo la dignidad la categoría que actúa como elemento constitutivo en este proceso de construcción identitaria.

En consecuencia, al significar el trabajo, esto es, la actividad que los identifica, a partir de la categoría de dignidad, al tiempo que es desde esta categoría que este grupo se define como tal ("nosotros trabajadores"), la dignidad se convierte en elemento que no sólo define al trabajo sino que los define a sí mismos. Dignidad que se refuerza, por otra parte, en *la voluntad de la lucha* por la fuente de trabajo (y acá opera, además, un

proceso de diferenciación frente a los trabajadores que no fueron capaces de defenderla), como lo pone en evidencia el relato de esta trabajadora:

Porque las cosas que se consiguen hay que conseguirlas luchando. Porque gratuitamente hoy, por que vos sos fulano o sultano el gobierno no te las va a dar, entonces, esta lucha se la arrancamos nosotros al gobierno, de las pocas cosas que nos da se las arrancamos nosotros (Graciela, 54 años, 9 de antigüedad, miembro de la comisión interna creada a partir de la recuperación).

Ahora bien, así como la dignidad articula los sentidos asociados al trabajo y a los trabajadores, esta misma categoría, también opera, a nuestro entender, como un eje desde el que se articulan los sentidos asociados a la política, y en consecuencia a los políticos. Es decir, la dignidad no es simplemente una forma de significar al trabajo y a los trabajadores, sino que esta categoría resulta un nudo de significados desde el que estos trabajadores se identifican a sí mismos, en tanto tales y desde donde se determina la relación con los otros así como los modos de significarlos. En este sentido nos preguntamos, qué sentidos adquiere la política a partir de esta categoría articuladora en los procesos identitarios de este grupo.

Volvamos, con este fin, sobre las categorías que se articulan en torno a la dignidad, en relación con las cuales se significa el trabajo, fundamentalmente como una actividad digna, que a su vez los define como grupo: "nosotros trabajadores". Tal como fue expuesto en los párrafos anteriores, la dignidad se articula con una serie de sentidos que explican al trabajo como "responsabilidad", "esfuerzo", "sacrificio", "acción por el otro" (en contraposición a la satisfacción de intereses propios), "voluntad de lucha".

Veamos de qué modo operan estas categorías en relación con la política y a los políticos. Mientras que, para este colectivo, el trabajo se define a partir de la categoría de "dignidad" desde una relación positiva, la política lo hace desde una relación negativa, es decir, si la dignidad delimita al trabajo como una actividad que implica "sacrificio", "responsabilidad", "acción por el otro" y "voluntad de lucha", desde las que se define el "nosotros trabajadores", la política se puntualiza como una actividad de la que se hace necesario diferenciarse, como lo expresa esta trabajadora:

No estamos dispuestas a volver a nuestras casas sin la fuente de trabajo. No estamos dispuestas a volver a casa sin nada. Pedimos disculpas, por que no somos políticas. Pero nos han obligado a salir a pedir solidaridad y a organizarnos con distintas organizaciones de desocupados y ocupados a que sigamos peleando juntos. Estas mujeres no están dispuestas a volver a su casa sin nada. Estas mujeres han dado la pelea (...) Han tocado el pan de nuestros hijos y vamos a defender como leonas el puesto de trabajo y la comida de cada día de nuestros hijos (Conferencia de prensa frente a la fábrica, Julia, 35 años, 6 de antigüedad en la empresa).

En esta declaración, el "nosotros trabajadores" precisa una nueva alteridad "no somos políticas", oposición que actúa como legitimadora de esta forma de acción colectiva, desde la que se recupera esta definición del trabajo como condición de vida, como única manera de *asegurar una vida digna* para quienes no cuentan con otro medio que la venta de la fuerza de trabajo para garantizar su subsistencia, enfatizando el sacrificio del trabajador que debe "dejar su vida" en la fábrica.

Aparecen en esta concepción de la política, algunos rasgos de lo que denominamos inicialmente una concepción "hegemónica" de la misma, la cual ubica a ésta en un espacio diferenciado de la vida cotidiana, cuyo objeto es la apropiación del poder. Si pensamos la acción política, en un sentido más amplio, como una acción de carácter colectivo que irrumpe en el espacio público, en la que se incluyen los procesos de recuperación de fábricas, nos vemos en la obligación de interrogarnos sobre el por qué de esta concepción de la política

En este sentido, si bien nuestro propósito no es aquí encontrar respuestas a esta interrogante, consideramos que es necesario tener en cuenta el peso que tuvieron ciertos procesos históricos recientes en Argentina, respecto de esta concepción de la política, o mejor dicho, en la construcción del desprestigio de esta última. Tanto la acción violenta llevada adelante a través del terrorismo de Estado como la construcción de un discurso que impone la supremacía de lo económico sobre lo político, de la técnica sobre la decisión ideal, fueron, sin duda, factores determinantes de este proyecto.

COMENTARIOS FINALES

Los procesos de recuperación de fábricas que venían desarrollándose desde inicios de la década de los noventa adquieren una nueva dinámica desde fines de esta década y principios del nuevo milenio, acelerándose, multiplicándose e instalándose con fuerte presencia en la escena pública.

En el marco de estos procesos, el trabajo aparece, en primera medida, articulando el colectivo de trabajadores cuya acción está destinada principal, aunque no exclusivamente, a la defensa de la fuente de empleo —la fábrica o la empresa— y, por lo tanto, el análisis de los sentidos asociados al mismo se convierte en un elemento clave para la comprensión de las formas de acción colectiva adoptadas.

En el caso de la fábrica sobre la que centramos nuestro análisis, la dignidad se convierte en un nudo de significados desde el que se define el trabajo, asociada a otros sentidos, valorados positivamente, como de manera fundamental, el esfuerzo y el sacrificio, pero también a la capacidad de lucha. Estas nociones remiten a una definición del trabajo como condición de vida (digna), sobre la que los trabajadores hacen especial énfasis. A nuestro entender, esta especificación del trabajo constituye un elemento clave en la construcción de un discurso que legitima las acciones de protesta y las demandas por la fuente de empleo, tanto respecto de la permanencia en la fábrica (la ocupación) como de la sanción de la ley de expropiación que permita reiniciar, legítimamente, la producción (la recuperación).

Al mismo tiempo, la noción de dignidad constituye un elemento esencial a partir del proceso de identificación/diferenciación que opone trabajador a un abanico de “otros”, entre los que se encuentran los desocupados (en tanto que beneficiarios), los que salen a pedir, los delincuentes, y entre los que se incluyen también “los que hacen política”.

Esta categoría actúa, entonces, como un eje desde el que se estructura el proceso de construcción identitaria, es decir, la dignidad no es una manera de significar al trabajo y a los trabajadores, únicamente, sino que esta categoría resulta un nudo de significados desde el que estos trabajadores se identifican a sí mismos y desde el que se define la relación con los otros así como los modos de significarlos. En este contexto, los sentidos que se dan a la política deben ser entendidos en relación con el modo en que se significa, en primer lugar, el trabajo, estructurados ambas en torno a la categoría de dignidad. Asimismo, la forma en que se construyen los procesos identitarios tiñe los sentidos asociados tanto al trabajo como, de manera diferencial, a la política.

Esta cuestión nos reenvía a nuestro planteo inicial, la necesidad de pensar la política como una dimensión de la vida cotidiana atravesada por relaciones de poder y no, siguiendo lo que dimos en llamar concepción "hegemónica" de la política como una esfera separada de ésta, cuyo objetivo es la disputa por el control del poder, entendido en su sentido institucional.

BIBLIOGRAFÍA

- Arévalo, R. y T., Calello (2003), "Las Empresas Recuperadas en Argentina: algunas dimensiones para su análisis", en *Segundo Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad, Estado y Administración Pública, Reconstruyendo la estabilidad: transición, instituciones y gobernabilidad*, 27, 28 y 29 de noviembre, Córdoba.
- Basualdo, E. (2001), *Sistema Político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Fajn, G. (coord.) (2003), *Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad*, Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación.
- Favaro, O. y F., Aizicson (2003), "La resistencia obrera en Zanon, Neuquen", en *Realidad Económica*, núm. 197, julio-agosto, pp. 24-39.
- Fernández Álvarez, M. (2003), "Transformaciones en el mundo del trabajo y procesos de ocupación/recuperación de Fábricas", en *Realidad Económica*, núm. 197, julio-agosto, pp. 24-39.
- Fernández Álvarez, M. I. (2004), "Sentidos asociados al trabajo y procesos de construcción identitaria en torno a las ocupaciones y recuperaciones de fábricas de la Ciudad de Buenos Aires: un análisis a partir de un caso en particular", en Battistini, O. (comp.), *El trabajo en el espejo*, Buenos Aires: Prometeo, en prensa.
- García Allegrone, V., Fernández Álvarez, M.I.; Partenio, F.; "Ocupaciones fabriles: Un rastreo de las experiencias históricas", VI Congreso Nacional de Estudio del Trabajo: "Los trabajadores y el trabajo en la crisis".
- Grimberg, M. et al. (2003), "Modalidades de acción política, formación de actores y procesos de construcción identitaria: un enfoque antropológico en piqueteros y fábricas recuperadas", Ponencia al Congreso Internacional "América Latina: identidad, integración y globalización", Córdoba, Argentina.

- Magnani, E. (2003), *El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina*, Buenos Aires: Prometeo.
- Palomino, H. (coord.) (2003), "El movimiento de empresas recuperadas", en *Revista Sociedad*, 20-21, pp. 125-146.
- Programa Facultad Abierta (2003), *Informe de relevamiento entre Empresas Recuperadas*, Buenos Aires: Secretaría de Extensión, FFyL, UBA.
- Rofman, A. et al. (2003), *Experiencias autogestionarias en un marco de crisis económico-social inédita: las empresas recuperadas*, VI Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 13-16 de agosto, Buenos Aires.
- Vuotto, M. y M. C., Acosta (2002), "El caso de la cooperativa CIAM ¿Estrategia empresarial o estrategia asociativa?", Publicación del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Documento N37, abril-mayo.

LAS EMPRESAS RECUPERADAS: UNA EXPERIENCIA DE LA CLASE TRABAJADORA ARGENTINA

Julieta Galera, Carlos Martínez, Adrián Nordvind, Alejandro Pizzi, Andrés Ruggeri, Hugo Trincherero y Sebastián Valverde

Desde marzo de 2002, el *Programa Facultad Abierta* de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras viene desarrollando un trabajo de apoyo, asesoramiento, capacitación e investigación, sobre las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT), en especial con una de sus organizaciones, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Aquí adelantamos parte de una futura publicación donde se volcarán los resultados de esta experiencia.

BREVE CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO

De todos los fenómenos sociales y políticos que florecieron en la Argentina pos-19 y 20 de diciembre de 2001, el de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT de ahora en más) es uno de los más interesantes y que más han llamado la atención pública y de las organizaciones políticas. Sin embargo, para poder analizarlos hay que establecer ciertos criterios previos.

Este interés se relaciona con la idea de que el estallido contra el neoliberalismo, ocurrido en el país a fines de 2001, hizo surgir el protagonismo de los llamados "nuevos movimientos sociales", frente al fuerte deterioro de las viejas organizaciones y modelos políticos, culturales, sindicales, territoriales, etc. No es objetivo de este trabajo discutir esto último, pero sí puntualizar algo sobre lo primero. Esos "nuevos" movimientos son caracterizados, en general, como los de las asambleas populares, los piqueteros y las fábricas recuperadas. Un cuarto fenómeno novedoso, el trueque, decayó con el decantamiento de lo más agudo de la crisis económica. Su fácil cooptación por el sistema económico formal y la corrupción estructural lo desbancaron del "sitio de honor" de estos

nuevos movimientos. Los demás, atravesaron por distintas etapas a lo largo de 2002, de las cuales surgió con fuerza y consenso social el fenómeno de las ERT. Sin embargo, pensar que estos son los movimientos sociales exclusivos de este nuevo periodo es, prácticamente, asumir que todas las demás expresiones sociales y políticas han desaparecido y que éstos, por otra parte, no tienen casi conexión con los diversos procesos sociales anteriores.

Creemos, contrariamente a esto, que incluso las asambleas populares surgidas al calor de los hechos de aquel diciembre reconocen antecedentes en la anterior historia política del país, pero eso es mucho más notorio en los movimientos de desocupados y en las fábricas recuperadas. Ambos son expresiones de la lucha, de los trabajadores argentinos, diferentes de las tradicionales. Los desocupados son mayoritariamente excluidos recientes del mercado de trabajo, y sus movimientos se encuentran conducidos por antiguos militantes sindicales o de distintas organizaciones políticas.

Las empresas recuperadas, por su parte, significan más que nada la reacción de los trabajadores para evitar caer en esa situación de desocupación estructural, para la cual no ven salida (en sintonía también con las demandas piqueteras e incluso las asambleas barriales). Es parte de la inteligibilidad del proceso reconocer que la recuperación de empresas se dio al margen de las respuestas tradicionales del movimiento sindical que, más allá de las claudicaciones y traiciones de los gremios alineados con la burocracia sindical en todas sus variantes, no tuvieron otra respuesta al problema que la lucha salarial y por el pago de las indemnizaciones correspondientes. Puede incluso decirse que en muchos casos han sido cómplices del vaciamiento de las fábricas. Estas prácticas se demostraron a todas luces inconsistentes, durante toda la década de los noventa, con las demandas de los trabajadores contra el cierre masivo de empresas y las privatizaciones de las estatales; lo que colocó a la mayoría de los asalariados en la disyuntiva de luchar para reactivar su fuente de empleo o resignarse a la exclusión social con escasa posibilidad de retorno. Independientemente de esta actitud de la mayoría de las conducciones gremiales, es necesario reconocer que, en muchos casos, las experiencias gremiales previas de los principales referentes del Movimiento de Empresas Recuperadas fueron fundantes del tipo de lucha encarada y, sobre todo, en el aporte de experiencias organizativas que son parte de la memoria de la lucha sindical y popular argentina.

Si bien en muchos ámbitos políticos, periodísticos o académicos se usan distintas denominaciones para hablar del tema, nosotros optamos por

hablar de *empresas recuperadas*. Frente a fábricas ocupadas, fábricas tomadas o fábricas recuperadas, nos parece que el concepto de empresas recuperadas es mucho más amplio y pertinente que los anteriores. En primer lugar, porque hablar de fábricas ocupadas o tomadas refiere más a una etapa del proceso que, como ya dijimos, no es inclusivo de la totalidad de los casos y porque, además, hablan más de la concepción política del que lo usa que del proceso en sí. Fábrica ocupada o fábrica tomada no es incorrecto por naturaleza, sino incompleto en relación con el fenómeno (una empresa en producción autogestionaria es cualitativamente diferente a una fábrica tomada), o descriptivo de un momento de lucha que no refiere solamente a la problemática que analizamos, sino a la lucha gremial de los trabajadores en su conjunto. Fábrica recuperada, por otra parte, reduce la cuestión al ámbito industrial, fabril, y en la experiencia real hay trabajadores en empresas de todo tipo, esas empresas quiebran o son vaciadas de la misma forma que los establecimientos industriales, y, de hecho, se han recuperado empresas claramente no fabriles, como clínicas o colegios. En suma, no cuestionamos políticamente la elección de los distintos sectores sobre cómo llamar a las empresas recuperadas, pues eso escapa a nuestro propósito, sino conceptualmente, con el objetivo de poder dar cuenta de la complejidad del tema.

Por último, en cuanto a los criterios, el movimiento de las ERT vuelve a poner en el centro de la escena a los trabajadores en lucha en el seno de la producción, que les da un lugar en la pelea por el modelo económico en términos concretos, y que vuelve a situar la lucha social y política por el trabajo en el centro de las contradicciones de la sociedad, es decir, la que existe entre el trabajo y el capital. En ese sentido, es fundamental ver que las ERT no son un fenómeno totalmente asimilable a la llamada "economía social" o "economía solidaria". La economía social, además de estar impulsada desde los organismos financieros internacionales como un modo de paliar los efectos inevitables de las reformas neoliberales, es impulsada desde ONGs y a veces desde el propio Estado como muro de contención frente al estallido social, que en el caso argentino finalmente se dio. A la vez, terminan eternizando a los sectores más postergados de la sociedad en la dependencia de donativos y subsidios estatales o de ONGs que, a la larga, impiden la lucha por la vuelta a la estructura productiva formal de los trabajadores desocupados.

Las ERT, como vemos, trasvasan la noción de economía social, al incorporar la defensa de la vida a un proyecto de economía política alternativa, ya que pugnan por resituar a los trabajadores dentro del aparato

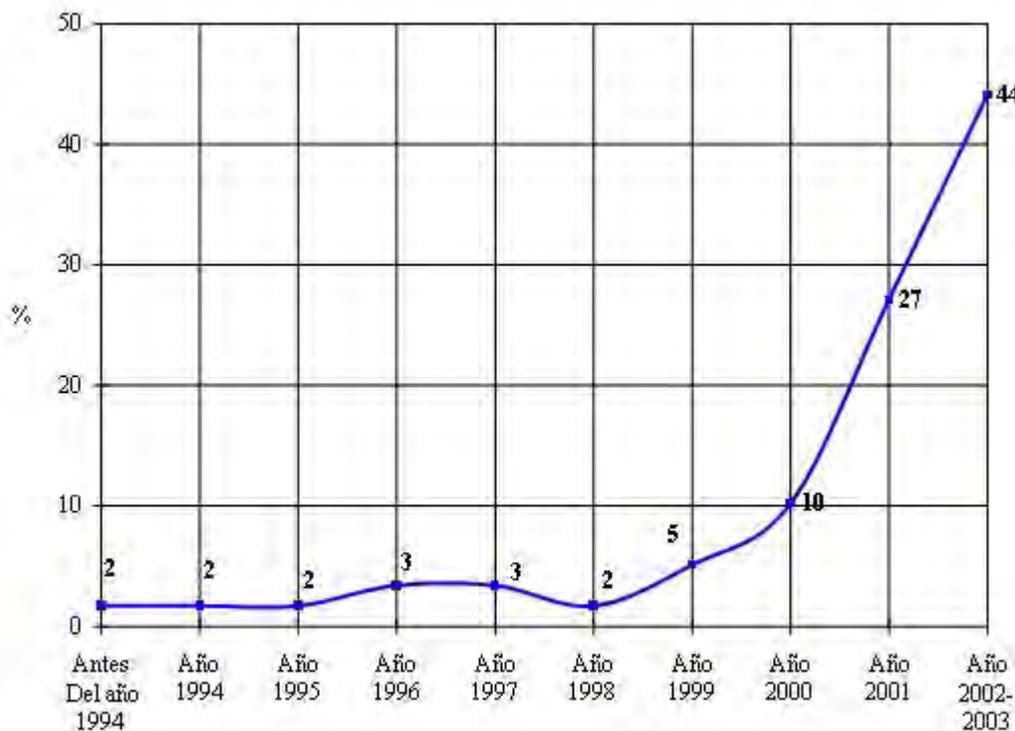
productivo, y lo hacen de una manera que también les permite discutir las relaciones sociales en las que participan en la disputa política y económica. Por más solidarias que sean las relaciones sociales al interior de una empresa, necesariamente deberán enfrentarse al problema de insertarse en relaciones de mercado que poco y nada tienen que ver con la economía solidaria. A su vez, la llamada economía social no es un fenómeno absolutamente descartable desde esta perspectiva. Antes que eso, son un campo de disputa donde las empresas recuperadas, con su cuestionamiento explícito o implícito a las relaciones de propiedad, tienen algo que decir. La relación entre las ERT y los sectores de la economía solidaria es una relación necesaria y con gran potencialidad política y económica a futuro. Sin embargo, en algunos casos es difícil hablar de algunas empresas recuperadas como economía solidaria si observamos, por ejemplo, el caso de una empresa metalúrgica que ocupa a más de cien trabajadores y que produce insumos para la producción de maquinaria pesada, por más solidarias que sean las relaciones internas de la empresa o con otros movimientos y sectores sociales. En definitiva, puede sostenerse, que el Movimiento de Empresas Recuperadas pone sobre el tapete, discutiéndolo críticamente, el fallido intento de separar la lucha social de la lucha política y de clases que el neoliberalismo ha intentado imponer como modelo.

BREVE HISTORIA DE LAS ERT

Las ERT no surgen, como dijimos, de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, sino que reconocen una genealogía más profunda. Aquellas jornadas, en todo caso, posibilitaron una mayor visibilidad del fenómeno y, al mismo tiempo, dieron lugar a la aceleración del proceso que permitió caracterizarlo como masivo.

En el gráfico adjunto se presenta el porcentaje de firmas que fueron recuperadas en cada año. Como es factible observar, si bien las primeras menciones datan de una década de antigüedad, se advierte una expansión a partir del año 1999 y un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años.

¿Cuándo comienza a funcionar como empresa recuperada por los trabajadores?



Fuente: FFyL, 2003.

Si hacemos énfasis en una de las cuestiones básicas de las ERT, es decir, los procesos de autogestión de la empresa por los trabajadores, podemos reconocer antecedentes históricos de profundas raíces, tanto en el movimiento obrero mundial como en el nacional, y también en las mejores expresiones del movimiento cooperativo. Autogestión significa para nosotros que los trabajadores dominan de manera democrática e igualitaria la totalidad de los procesos de la gestión empresarial. Es una dinámica compleja, que precisa de una conciencia de los trabajadores en torno a esta demanda, ya que ninguna ley o reglamento la asegura. Esta fórmula autogestiva puede estar absolutamente dissociada de las relaciones económicas, sociales y políticas exteriores a la empresa y en las cuales se inserta. Se puede producir bajo formas autogestivas radicalizadas y ser parte integrante y coherente del mercado capitalista. De hecho, los sectores de vanguardia de las nuevas formas productivas de muchas grandes empresas de los países desarrolla-

dos, incorporan un cierto margen de autogestión en sus procesos productivos, que le permiten extraer del trabajador mayores utilidades, sin alterar la esencia de la explotación. La autogestión de la producción por parte de los trabajadores, de modo tal que no se subordine a la dinámica del mercado capitalista, requiere necesariamente de una dimensión política que se construye colectivamente y, por lo tanto, supera los límites de la propia empresa.

Las ERT en la Argentina están asumiendo formas autogestionarias que tienen más que nada un componente de supervivencia e imposición por necesidad, donde la reflexión sobre el proceso y el cuestionamiento a la propiedad privada y las relaciones de explotación que ésta significa es, antes que nada, una consecuencia de la experiencia concreta, y con muchos matices que dependen de cada situación.

Las primeras experiencias de autogestión de este tipo, es decir, sobre empresas previamente existentes donde los trabajadores —que estaban bajo la relación salarial— tomaron en sus manos el control de la empresa, se dieron en el sur del Gran Buenos Aires. Estas empresas fueron motorizadas por un sindicato local, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Quilmes, desde la década de los ochenta. Hay algunos casos anteriores, algunos de los cuales han sobrevivido hasta hoy, pero en el marco de contextos socioeconómicos y políticos muy diferentes al actual, que provocó la quiebra masiva de empresas. En todo caso, es recién a partir de la segunda mitad de los noventa cuando esto comienza a darse en forma numéricamente importante y, lo que es clave, de manera sistemática.

Estas experiencias del sur del conurbano tienen una importancia no siempre reconocida, por haber marcado un camino en el modo que adquieren en general las ERT y haberlo hecho, dada su precocidad, en difícilísimas condiciones políticas y económicas. Estos casos han tenido una influencia fundamental en lo que posteriormente va a ser el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).

Durante la década de los noventa, la Argentina profundizó en forma extraordinariamente rápida el modelo neoliberal, cuyos inicios se remontan a la dictadura militar de los años setenta, afrontando un proceso de descabezamiento y destrucción de las organizaciones populares, de imposición de una hegemonía ideológica del individualismo y de fractura de los lazos solidarios en la sociedad, de privatización y enajenación masiva de los bienes del Estado hacia los grupos económicos concentrados y desnacionalizados, y la destrucción casi total del aparato industrial del país. Esto tuvo entre otras graves consecuencias el quiebre masivo de empresas de todo

tipo y tamaño, en especial PyMES, dejando a millones de trabajadores en la calle.

El deterioro social empezó a manifestarse en la segunda mitad de los años noventa, con los primeros cortes de ruta de los desocupados y las grandes movilizaciones de protesta que después se expresaron (sólo para sufrir una decepción aún mayor) en el triunfo electoral de la denominada "Alianza" (UCR-Frepaso). Algunas empresas empezaron a ser autogestionadas en condiciones muy duras en este periodo. Muchas desaparecieron, luego de ser fomentadas desde el propio Estado como parte de las políticas de contención social, que empezaron a instrumentarse. Estas llamadas "políticas sociales" recomendadas por los propios organismos financieros internacionales, comenzaron a aplicarse en la segunda mitad de los noventa, a partir de las primeras manifestaciones de malestar social encabezadas por las grandes movilizaciones que empezaron a jaquear el modelo, generando así una serie de mecanismos de contención que funcionaron como un intento de "barrer debajo de la alfombra" los problemas que ya no se podían esconder. También estos planes financiaron regímenes laborales precarios y enormes redes de clientelismo político que aseguraran la sujeción de los sectores más postergados del país.

Entre los más célebres figuran los subsidios a la desocupación conocidos como "Plan Trabajar", que se convirtieron después en el eje de los reclamos y la organización de los movimientos de desocupados. Menos conocido y menos masivo fue el llamado "Pago Único", que fomentó la creación de más de un centenar de empresas cooperativas autogestionarias mediante el pago, en una sola vez, de los subsidios por desempleo para que los trabajadores despedidos intentaran con este pequeño capital inicial y alguna ayuda del Ministerio de Trabajo la creación de su propia empresa social, incluyendo en algunos casos la reactivación de empresas fundidas. La gran mayoría de estas empresas no lograron sobrepasar el año de funcionamiento, en el caso de que pudieran empezar a trabajar, y son muy pocas las que sobreviven como pequeños microemprendimientos enmarcados en la llamada economía solidaria.

A partir de los años 1997-1998, surgieron con fuerza algunas ERT, como IMPA (Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas), una firma ubicada en la Capital Federal que consiguió volver a la producción mediante la autogestión y alguna innovación en el proceso productivo, lo cual le permitió afrontar los costos de la producción en una situación macroeconómica desfavorable. IMPA tuvo la particularidad de haber sido, ya en ese entonces, una cooperativa y haber logrado la continuidad legal de la empresa bajo la forma que ya tenía. Esta firma además dio el puntapié inicial de una de

las experiencias más interesantes entre las ERT, como es el buscar la solidaridad del barrio mediante el armado de un Centro Cultural y un Centro de salud en el edificio fabril. Por esta época también surgieron algunas ERT en el Gran Buenos Aires, así como el interior del país, especialmente en Santa Fé. Otro caso emblemático es el Frigorífico Yaguané, importante establecimiento que emplea cerca de 400 obreros en el partido de La Matanza, uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense.

La profundización de la crisis del modelo neoliberal aceleró el proceso de vaciamiento y quiebras fraudulentas durante el gobierno de De la Rúa. En los años 2000 y 2001 aparecieron cerca de 20 casos de ERT. El estallido de diciembre aceleró y multiplicó el proceso, ya que en ese mes se produjo la ocupación de varias fábricas, simultáneamente con la movilización inédita que vivía el país, como Brukman, Lavalán, etc. Para mediados del 2002, se contabilizaban cerca de 60 ERT, y el número continuó creciendo hasta rozar las 150 en junio de 2003 y, según los dirigentes del MNER, 170 en septiembre.¹²⁵

UNA TIPOLOGÍA DE LAS ERT

Según gran parte de la literatura existente sobre este fenómeno, en especial respecto a artículos periodísticos, la principal divisoria de aguas pasaría entre quienes optan por el modelo cooperativo y quienes lo hacen por el de la estatización bajo control obrero.

Más allá del debate político-ideológico, lo cierto es que hasta el momento sólo ha sido estatizada una empresa (la clínica Medrano), que no lo buscaba y que era, en cambio, una cooperativa, y una de las fábricas que encabezaba el reclamo de estatización, la textil Brukman, terminó convirtiéndose en cooperativa, es decir, siguiendo el camino de la mayoría. Todo el resto del amplio espectro de las ERT ha adoptado la forma cooperativa.

De acuerdo con quienes defienden la postura de la estatización, principalmente partidos, organizaciones e intelectuales de izquierda, quienes adoptan el modelo cooperativo no llegan al fondo de la cuestión, pues se acomodan al ordenamiento jurídico burgués y van en camino de dejar de ser proletarios, convirtiéndose en empresarios. Además, consideran otras

¹²⁵ Este número, de todos modos, está algo sobredimensionado, pues en él se incluyen experiencias autogestivas que no son propiamente ERT, sino cooperativas diversas, y otras, experiencias fracasadas.

cuestiones de índole más inmediata, como que se tendrían que hacer cargo de la deuda y la situación que llevó a la quiebra a la empresa, y que se ven envueltos en la lógica del capital, con el riesgo adicional de poder perder la fábrica si no tienen éxito en los primeros tiempos de gestión, al ser las expropiaciones hasta el momento temporarias (por dos años, en general). En cambio, la estatización solucionaría todos esos problemas, al hacerse cargo el Estado de la situación general del emprendimiento y solucionar el tema salarial, al transformarse los trabajadores en empleados del Estado, con lo cual, además, no perderían su condición de proletarios.¹²⁶ Esto podría ser así en el caso de un Estado que no estuviera en quiebra como el argentino, con una legislación acorde con el reclamo de control obrero (lo que no existe actualmente en ninguna de las escasas empresas estatales que subsisten) y con una política pública totalmente diferente y una conducción política dispuesta a asumir todos los riesgos que esto implica. Como es obvio, esa no constituye la situación del Estado argentino, y menos aún lo era en 2002, cuando se dio la mayor influencia de este reclamo. Además de la difícil justificación política (salvo para un Estado socialista) de que el Estado nacional estatice una fábrica, por ejemplo, de grisines.

En la práctica, y sin desconocer que las objeciones planteadas a la opción por las cooperativas de trabajo tienen parte de realidad, especialmente lo que resulta de la estrategia de la estatización con control obrero es la casi seguridad de la derrota política, pues ante la falta de respuesta de un Estado a la deriva el único resultado de llevar hasta las últimas consecuencias la reivindicación de la estatización es el mantenimiento indefinido del conflicto abierto, lo cual lleva claramente al desgaste y a la imposibilidad de consolidar los logros de la autogestión de los trabajadores. El hecho de no resolver la cuestión jurídica, bajo la forma que sea, hace que todo sea precario, y deja permanentemente abierta la posibilidad de la contraofensiva de los patrones. Por otra parte, mientras la empresa no es estatizada, si no adopta ninguna forma jurídica que le permita operar en el mercado se ve obligada a crear permanentemente mecanismos que la suplanten, lo cual es difícil en general, incluso para aquellas empresas que producen para el consumo directo de la población, e imposible para las que producen en el marco de cadenas de valor o para un segmento muy específico del mercado.

¹²⁶ Por supuesto, tanto énfasis en la negatividad de la pérdida de la condición proletaria sólo puede ser posible desde un marco ideológico que le asigna a esa condición de clase la condición de sujeto revolucionario por excelencia. Los trabajadores, por lo general, no quieren dejar de serlo, pero no por negarse a ascender en la escala social, sino por temor a descender en ella.

En ese sentido, el caso de Brukman es aleccionador. La estrategia de oposición total a la formación de la cooperativa para resolver estas cuestiones, poniendo esto en el centro por una cuestión de principios, llevó a los trabajadores de Brukman, a pesar de tener la fábrica ocupada y produciendo, a una derrota difícil de remontar, donde la reacción de la patronal logró aprovechar circunstancias políticas coyunturales favorables y expulsar a los trabajadores, en medio de una represión generalizada que fue, incluso, azuzada por algunos de los sectores políticos que tuvieron gran protagonismo en el proceso de esta fábrica. La reciente sanción por la legislatura porteña de la expropiación de la fábrica implicó por parte de los obreros y quienes los condujeron o influenciaron políticamente el tener que bajarse de aquellas posiciones de máxima, aceptar ser cooperativa (y por lo tanto reconocer que perdieron el tiempo durante un año) e inclusive hacerlo en forma poco favorable y aceptando condiciones por parte del gobierno de la ciudad. El resultado final de esa manera de conducir el conflicto parece haber sido también la pérdida de la influencia que gozaban dentro de los obreros de la fábrica algunas expresiones de la izquierda partidaria.

El otro caso de cierta importancia que defiende esta alternativa, la fábrica de cerámicas Zanón en Neuquén, si bien no se cooperativizó (aun cuando parece estar en vías de hacerlo), ha logrado regularizar su inserción en el mercado mediante el uso de la personería jurídica prestada por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

Todo el resto del amplio espectro de las ERT ha adoptado la forma cooperativa como método para evitar estos riesgos y mantener lo mejor posible las condiciones formales para la práctica de la autogestión, convirtiendo a la discusión con aquellas posiciones en una mera abstracción, una discusión libresca. Si bien durante el 2002 el debate existió y llegó a influenciar los comienzos de varias ERT, ya no constituye una discusión de importancia para los trabajadores.

Entre las ERT, las diferencias se dan más que nada en el curso del proceso, y tienen que ver con las condiciones del mismo antes que con diferencias ideológicas o de estrategia política. De este gran conjunto, podemos distinguir las siguientes variantes, a muy *grosso modo*:

- Los casos más frecuentes son las empresas quebradas fraudulentamente y vaciadas por sus dueños, con el fin de recrear la empresa en condiciones más favorables para el capitalista, con reducción de la cantidad y el salario de los trabajadores, precarización de las condiciones de trabajo y mejores condiciones para mantener un nivel extraordinario de ganan-

cias sin los costos a los que aún obliga la legislación laboral por pago de indemnizaciones, etc., o simplemente para pasarse con armas y bagajes a la especulación financiera. Este cuadro es el que generó situaciones de conflicto que, si en un principio tuvieron características gremiales, pasaron rápidamente a convertirse en el comienzo de la recuperación de la empresa por los trabajadores. Esto por lo general significó aguantar duras condiciones de lucha: ocupación de la planta, acampes en la puerta, desalojos policiales, etc., a lo largo de varios meses en los cuales los trabajadores y sus familias se veían reducidos a condiciones de miseria y tensión extremas. La extensión del fenómeno a partir de 2001 y, en especial, 2002, y la gran legitimación social alcanzada, logró de alguna manera simplificar los pasos y hacer más previsible los conflictos, especialmente a partir de la organización de las diferentes experiencias en agrupamientos que pronto dieron origen a organizaciones como el MNER. A partir de ahí, la formación de la cooperativa y el pedido de expropiación legislativa fueron los caminos que siguieron la mayoría de los procesos.

- Un segundo conjunto son aquellas empresas comprendidas en las características generales anteriores, pero con procesos menos traumáticos, sea por una rápida intervención de organismos del Estado a favor de los trabajadores, facilitando un acuerdo con los empresarios, los acreedores y los jueces, o por un acuerdo directo de los antiguos dueños con los trabajadores, o incluso, un abandono no conflictivo de la empresa por parte de éstos. En estos casos, suele ocurrir que el paso casi sin graves conflictos de una situación a otra facilita las condiciones para la reapertura de la empresa por los trabajadores, aunque eso no significa la resolución de todos los problemas. A su vez, es más probable que la empresa, aun en condición de recuperada, adopte o mantenga formas jerárquicas en su gestión.
- Una suerte de segunda ola de ERT tiene que ver con las ocupaciones derivadas de conflictos gremiales y resueltos con la formación de una empresa autogestionada como forma de resolución. Es decir, la ocupación y la formación de la ERT se da a partir de una situación de crisis de la empresa, probablemente de los primeros pasos del vaciamiento de la misma en el sentido apuntado para el primer grupo de este intento de tipología, pero sin llegar a la instancia de quiebra o concurso de acreedores. Con lo cual nos encontramos ante la situación de la formación de una empresa recuperada antes de que sea abandonada por sus patro-

nes, como resultado de una acción de sus trabajadores que prolonga un reclamo que hasta ese momento se presentaba como de índole gremial. La situación de la empresa, en estos casos (pocos de todas formas), no es en la práctica demasiado diferente de las otras, pero sin haber dado los pasos necesarios para consumar el abandono o la quiebra fraudulenta. Esta situación es un cuestionamiento aún más serio a la propiedad privada que los otros casos, y además brinda una herramienta de presión contundente a los reclamos sindicales en otras empresas.

- Otra situación es la de la ocupación de establecimientos abandonados por periodos prolongados, incluso años, por parte de ex empleados o simplemente grupos de desocupados que buscan la reapertura de la planta, sin una continuidad con el proceso de abandono de la misma. Esta es otra situación de gran potencialidad a futuro, teniendo en cuenta la enorme cantidad de fábricas desocupadas en todo el territorio nacional, y el gran potencial de creación de puestos de trabajo y de recuperación productiva de la puesta en funcionamiento de estas empresas. A su vez, en estos casos las dificultades para su reapertura, mientras no haya una clara política de apoyo por parte del Estado, son enormemente mayores que aquellos casos en los que, a pesar de todo, se da una continuidad laboral, incluso cuando el conflicto se prolongue durante meses.

El denominador común de todos estos tipos es el proceso de ocupación y de puesta en funcionamiento de la empresa por parte de los trabajadores, sea cual sea la modalidad del conflicto, el número de trabajadores afectados, el tipo y rubro de la empresa, las particularidades de la situación judicial y las resistencias por vencer. Y, por supuesto, la gestión del establecimiento por parte de los trabajadores, fuera cuales fuesen las características de esta gestión. A su vez, todas ellas cuentan a su favor con el consenso social existente, luego de la toma de conciencia por el conjunto de la población —a partir de diciembre de 2001— de las profundidades de la crisis, hacia cualquier acción que contribuya a evitar la desocupación, a crear fuentes de trabajo y a reactivar la producción, en desmedro del argumento de defensa de la propiedad privada y de los prejuicios ideológicos acerca de la división social del trabajo y las funciones en la economía de empresarios y trabajadores.

CARACTERIZACIÓN DE LAS ERT

Las ERT no se dan en forma absolutamente independiente unas de otras, sino que se muestran como fruto de situaciones similares y con una capacidad de transmisión de la experiencia que refleja ciertas semejanzas en las condiciones de su producción. En este hecho reside el que podamos hablar con propiedad de un movimiento con identidad propia más allá de sus diferencias y de sus particularidades.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Programa Facultad Abierta¹²⁷ (FFyL, 2003), las ERT se distribuyen geográficamente en sectores bien diferenciados: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y las provincias de Santa Fe y Córdoba. Hay casos aislados en otras regiones del país, como Jujuy, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza y Entre Ríos. La concentración se da también en los rubros, con preeminencia de las metalúrgicas, las metalmecánicas, las gráficas y las alimenticias. Otros rubros son minoritarios, y se reducen por lo general a una o dos empresas. Además de ello, son pocas las que producen directamente para el consumo, lo que hace que las posibilidades de su sostenimiento por medio de compras solidarias de la población o su inserción en redes de la llamada economía social, tales como microemprendimientos o pequeñas cooperativas rurales, sean realmente escasas.

Las ERT agrupan además una mayoría de empresas categorizadas como PyMES, según el número de trabajadores, con un promedio de más de 20 miembros. Sin embargo, la cantidad de trabajadores no es el único criterio posible para clasificar la importancia de una empresa, sino que también debemos considerar la capacidad de producción y la facturación, entre otros aspectos. Ambas son difíciles de calcular para las ERT, por ser empresas en recuperación, generalmente con una capacidad productiva instalada que supera con creces la producción efectiva en manos de los trabajadores e incluso la producción de los últimos tiempos como empresa tradicional, consideraciones que por supuesto se extienden a la facturación. Incluso el número de trabajadores lleva muchos veces a una subvaloración de la importancia de la empresa, pues es común que estas hayan perdido gran cantidad de asalariados en el transcurso de su crisis, y que una parte sustantiva de los mismos no resistan el proceso de lucha que implica la recu-

¹²⁷ Este relevamiento fue efectuado por el Programa Facultad Abierta, dependiente Secretaría de Extensión Universitaria (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se entrevistó a un total de 60 empresas recuperadas por los trabajadores, en los primeros meses del año 2003.

peración, lo cual da como resultado un número escaso de trabajadores en relación con la capacidad potencial de la ERT.

Por otra parte este mismo relevamiento, indica en mayo del 2003, que el grueso de las mismas corresponde al parque industrial de más de 30 años, y que, en relación con los actuales niveles de producción que registran las empresas, se advierte una situación heterogénea. En promedio, el nivel de producción no alcanzaría a la mitad de la capacidad instalada que poseen los establecimientos.

Consultados los trabajadores acerca de las causas de la baja producción, el principal problema que señalan es la dificultad para colocar la producción en el mercado (46%), seguido de la falta de capital de trabajo (44%). Estas dos variables remiten a la crisis generalizada de la economía que se desató en los últimos años.

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS ERT

Ya hemos dicho que es muy distinto caracterizar las ERT como expresiones de un nuevo movimiento social enmarcado en una ola de movimientos de nuevo cuño, basados en la horizontalidad, su ruptura con las viejas experiencias de lucha política y social, y su anticapitalismo; que analizarlas rastreando sus orígenes en las luchas de la clase trabajadora. En este caso es necesario examinar los fuertes lazos con ese pasado de trabajadores sindicalizados, sus experiencias y su vieja cultura política, pero recreándose en una nueva forma que rompe con esa tradición, más por necesidad que por elección. Y eso tiene que ver más que nada con concepciones acerca de la naturaleza de los procesos de cambio y la formación de la conciencia política, y con la identificación de ciertas porciones de la realidad política y social de la Argentina de los últimos años con algunas tendencias de análisis de la realidad.

En ese sentido, quienes creen haber encontrado en las ERT una nueva evidencia del fracaso de las concepciones políticas hegemónicas en la izquierda y los movimientos populares previos a la caída del Muro de Berlín, tendrían que reflexionar ante las evidencias de que las empresas recuperadas no son autogestivas por elección, sino que han sido empujadas a ello por la necesidad. A su vez, un simple repaso por las prácticas políticas que han llevado adelante en el breve lapso de su existencia, evidencia que el rechazo a la política (aun la más tradicional y burocrática), a las organizaciones tradicionales y verticales, y a los exponentes de los partidos políticos repudiados

en diciembre de 2001, no es el principal rasgo distintivo de los trabajadores de estas experiencias. Más bien al contrario, si hemos de juzgar por la participación de representantes de los partidos políticos en los actos de las ERT, este repudio a la política parece ser bastante menor del promedio del pueblo que produjo el 19 y 20 de diciembre, si eso es posible de ser medido. No son pocas las fábricas donde la horizontalidad de las decisiones es una mera formalidad, y en la mayoría los obreros han adoptado prácticas autogestionarias de manera forzada, impuesta por la dura realidad. En estos casos los liderazgos sindicales se han conservado sin disolverse en el proceso de precarización laboral o en medio del conflicto, y a merced de las vacilantes conductas de los sindicatos, quienes han logrado preservar su antigua influencia y ser una referencia organizacional. A su vez, las empresas recuperadas han tenido grandes dificultades en su organización como sector, habiéndose dividido en varios agrupamientos, algunos fuertemente enfrentados entre sí.

No son, entonces las ERT, un fenómeno fácilmente clasificable. Casi por las mismas razones, es difícil sostener la tesis de un proletariado de vanguardia avanzando hacia la toma del poder, quitándoles el control de los medios de producción a los capitalistas. La complejidad de la realidad social, económico y política de las empresas recuperadas por sus trabajadores (como de todos los procesos sociales, históricos y concretos) es difícil de ser atrapada en los rígidos moldes de las realidades preconcebidas, tanto la vieja y dogmática concepción marxista-leninista, como la nueva y aparentemente flexible y creativa visión "globalifóbica", al estilo de los autores Holloway, Negri y otros. No se trata de buscar las evidencias que "prueben" nuestra visión del mundo, sino de poder actuar sobre la realidad a partir de poder leer los procesos en su dimensión concreta, real y despojada de ingenuidades. No se trata esto de una digresión al pasar, sino de consideraciones acerca de la gran mayoría de las interpretaciones con que grupos políticos e inclusive investigadores han tomado el fenómeno de las ERT.

Analizando el proceso concreto, podemos decir que, las ERT, paulatinamente y a medida que fue aumentando su número, la importancia de sus componentes y su capacidad de movilización, fueron conformándose como un movimiento social con capacidad de organizarse como tal y de expresar posiciones políticas. No obstante, esto implicó como corolario casi inevitable, la aparición de distintos sectores políticos que se expresaron en su interior. Estos sectores y posiciones no se limitaron al debate de ideas y estrategias políticas referidas al sector, pues en gran parte intentaron trascenderlas y relacionar el crecimiento del movimiento con el crecimiento o la hegemonía de sus posiciones, tanto al interior de las ERT, como en

la forma de organización inter empresas y a la relación con el Estado y el sistema político del país.

Esto, que puede ser pensado negativamente, es lógico si tenemos en cuenta que las empresas recuperadas tienen relación con tradiciones de lucha de los trabajadores anteriores a su condición de ERT, y que las concepciones de la lucha sindical y de la lucha política imperantes en las distintas fracciones del movimiento se expresaron en las formas y los intentos de organización.

Ya habíamos señalado el papel pionero de la UOM de Quilmes en la conformación de una cantidad de ERT en el distrito, estrechamente ligadas a las prácticas y a la organización sindical. También que esa conducta por parte de organizaciones gremiales era una excepción de grado extraordinario, aunque reconociese antecedentes históricos en otras etapas y países. Sin embargo, es la década menemista la que termina por imponer la necesidad de la autogestión no sólo en empresas ocupadas por sus trabajadores ante la perspectiva de la desaparición de las mismas, sino en otros ámbitos caracterizados como de la economía social. Es así que las primeras aproximaciones a la idea de un movimiento de empresas recuperadas, que surgieron de las experiencias anteriores a diciembre de 2001, como IMPA, Unión y Fuerza y Yaguané, incluían entre sus componentes a otros tipos de empresas sociales, tales como microemprendimientos, cooperativas de productores rurales o autoconstrucción. El vertiginoso crecimiento del sector de las ERT hizo naufragar esa idea y dio a luz a las primeras reuniones que, encabezadas por IMPA y el frigorífico Yaguané, comenzaron a manejar la idea de la formación de un Movimiento de Empresas Recuperadas. Es allí, en esas reuniones que tuvieron lugar en los primeros meses de 2002, que se popularizó la definición de estos procesos como Empresas Recuperadas. En esos primeros tiempos se fue definiendo también la táctica empleada como modelo para la consolidación de las ERT, consistente en la conformación inmediata de la Cooperativa de Trabajo como forma de darles a los trabajadores entidad de sujeto jurídico capaz de gestionar las empresas, combinando esto con la ocupación de las plantas, la búsqueda de solidaridad no sólo de trabajadores de otras ERT, sino también de las por ese entonces pujantes asambleas barriales y otras expresiones de la solidaridad popular, la resistencia a los intentos de desalojo y el reclamo de soluciones al Estado nacional, provincial y municipal. El principal objetivo de estas medidas fue conseguir la expropiación de la empresa a favor de la cooperativa de trabajadores conformada para administrar la misma.

En oposición a esta estrategia, impulsada por lo que después sería el MNER, se propuso con gran fuerza propagandística la exigencia de estatización

con control obrero, que rechaza la integración de cooperativas y pone el acento en una lucha política, cuyo fin y cuyo medio son el mismo reclamo de estatización. En esta estrategia se agruparon Brukman, Zanón y algunas otras pequeñas empresas, aunque la mayoría de estas terminaron inclinandose, por decisión de sus trabajadores, por la opción de la cooperativa, como Chilavert, Grissinópolis y Panificación 5.

El sector de Brukman encabezó en la segunda mitad de 2002 un intento de organización nacional de "fábricas ocupadas y en lucha". Desde su misma definición priorizan una forma política que da más importancia a la radicalidad de las proclamas y posturas políticas, que a la factibilidad y consolidación de los procesos de autogestión de las empresas por sus trabajadores y a la organización de este sector como movimiento social, al mezclarlo con conflictos gremiales de otra naturaleza y poner en un plano de igualdad, tanto en las discusiones como en las decisiones, a los trabajadores de las fábricas, con los militantes de las organizaciones políticas, de las asambleas barriales y de los movimientos piqueteros. No se trata de relacionar unos con otros desde la especificidad de cada uno, sino de conformar con todos ellos una amalgama unificada a partir de plantear la discusión con aquellos que impulsan la opción cooperativa en un plano de diferencia estratégica. Los encuentros de este sector contaron con gran apoyo por parte de la militancia popular en efervescencia en aquellos momentos, y se realizaron dos encuentros con gran éxito, pero de a poco, junto con el impulso de la movilización de masas luego de diciembre de 2001, fueron cediendo en su empuje hasta desaparecer casi totalmente del escenario político, en especial a partir del desalojo de Brukman por la policía.

Zanón, el otro caso emblemático de esta postura, es diferente. Al contrario de Brukman, donde los trabajadores carecían de toda experiencia sindical, en Zanón se produjo un cambio fundamental en la conducción del sindicato de ceramistas de Neuquén, con el acceso a la dirigencia de Raúl Godoy, también militante del PTS (Partido de los Trabajadores por el Socialismo), pero encarnando una movilización importante de las bases de la fábrica. Los obreros de Zanón logran movilizar a la sociedad neuquina y de las ciudades del Alto Valle del Río Negro que la circundan, con la adhesión de otros gremios, de la Universidad del Comahue, de la militancia popular en general y de la opinión pública, en una zona que en los últimos años se ha caracterizado por un elevado nivel de protesta y conflictividad social. De ese modo han logrado resistir varios intentos de desalojo mientras consiguen, gracias al préstamo de la personería jurídica de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, dar salida al mercado a sus productos.

El 7 de septiembre de 2002 se produjo, coincidiendo con el 2º *Encuentro de fábricas ocupadas y en lucha* encabezado por Brukman y Zanón, el lanzamiento largamente demorado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).¹²⁸ En él, y pese a que algunas de las empresas que adherieron participaron también del otro encuentro, se nuclean la mayoría de las ERT que existían al momento. A diferencia del otro sector, en este encuentro participaron numerosos representantes del ámbito político (incluidos varios funcionarios y legisladores de los distintos niveles gubernamentales) y de las estructuras sindicales (como Francisco “el Barba” Gutiérrez de la UOM y Víctor De Gennaro de la Central de los Trabajadores Argentinos). El MNER se fracturó a principios del año 2003, cuando una parte importante de sus empresas conformó el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFRT) liderado por el abogado de estas empresas, Luis Caro.

En la actualidad (marzo de 2004), las más de 150 ERT existentes se encuentran reunidas en varias líneas orgánicas. Estos agrupamientos son los siguientes:

- MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas): es el movimiento madre, del cual se han desprendido dos de los restantes, y que levanta la consigna “Ocupar, Resistir, Producir”. Encabezado por la metalúrgica IMPA en Buenos Aires (de la cual proviene su presidente Eduardo Murúa) y con gran influencia en zonas del interior (de donde es su otro referente José Abelli), el MNER propone básicamente la cooperativización de los trabajadores y la lucha por medio de la ocupación de los establecimientos, el reclamo de expropiación, modificación de la ley de quiebras nacional para facilitar la posesión de las empresas quebradas por los trabajadores, y la necesidad de una política pública que beneficie al sector. El MNER es quizá el agrupamiento más grande, a pesar de la fractura del sector que conforma actualmente el MNFRT.
- MNFRT (Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores): es un desprendimiento del anterior, encabezado por el abogado Luis Caro. Sus planteos básicos pasan por definiciones legales sobre los pasos a seguir para la recuperación de las empresas.

¹²⁸ El mismo se realizó en la fábrica metalúrgica La Vaskonia de La Matanza.

- FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo): es la organización más antigua, y como su nombre lo indica, no pretende representar solamente a las ERT, sino a las cooperativas de trabajo en general. El énfasis está puesto en el cooperativismo, camino al que considera el único válido para la autogestión de una empresa por sus trabajadores.
- FENCOOTER (Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores de Empresas Reconvertidas): encabezada por el frigorífico Yaguané, participaron de los primeros intentos organizativos que culminaron en el MNER, pero se separaron por diferencias en lo que respecta a la relación con el Estado nacional. De hecho la FENCOOTER es parte del esquema creado por el organismo estatal encargado del cooperativismo, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social).

Otras ERT constituyen casos aislados que, o bien no forman parte de ninguno de los agrupamientos, o tienen encuadramientos que no son exclusivos del fenómeno. Entre estos podemos mencionar a diversos movimientos de desocupados como el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y centrales sindicales como la CTA. También la influencia de los partidos de izquierda se hace notar en algunas fábricas, como el es caso de Zanón, aunque esta relación prácticamente ha quedado reducida a esta experiencia.

Por último, hay varias ERT que no se reconocen en ninguno de los agrupamientos y cuya principal relación la poseen con el municipio u organizaciones sociales o territoriales.

CONCLUSIONES PROVISORIAS

El potencial de desarrollo del movimiento de las ERT parece estar lejos de llegar a su techo. Su presencia y expansión instala en la agenda política y económica del país la discusión sobre los límites estructurales de un modelo económico aún vigente y, al mismo tiempo, propuestas para recorrer un camino alternativo a dicho modelo. La debacle socioeconómica argentina ha afectado a muchas más empresas de las que se encuentran recuperadas, y a pesar de cierta mejoría de la economía, las condiciones macroeconómicas aun siguen dificultando el desarrollo normal de las empresas. Sin embargo, se nota una desaceleración en la segunda mitad de 2003 de las

ocupaciones y conflictos que dan lugar a la recuperación de empresas. Esto puede indicar que, por un lado, la capacidad de sostenimiento de las empresas ha mejorado, y por otro, que el mismo desarrollo de este proceso haya puesto un freno a la impunidad de las maniobras fraudulentas de los empresarios, ante el peligro cierto de la apropiación de la fábrica por los trabajadores.

En cuanto a la organización política de las ERT se observa una disparidad de procesos como de agrupamientos y concepciones políticas que hacen difícil poder ver estas experiencias autogestionarias, como un sector claramente diferenciado y con dinámica propia. No obstante, siguen siendo todavía mayores las cuestiones que las unen que las que los diferencian.

BIBLIOGRAFÍA

- Amico, F. (2002), "De los márgenes a toda la sociedad", en *Revista Enfoques Alternativos*, año 1, núm. 8, octubre, Buenos Aires, pp. 12-13.
- Azpiazu, D. (1998), *La concentración en la industria argentina a mediados de los 90*, Buenos Aires: Eudeba/FLACSO.
- Basualdo, E. (2001), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes/FLACSO/IDEP.
- Caputo, S. y L., Saavedra, (2003), "Las Empresas autogestionadas por los trabajadores. ¿Una nueva forma de organización económica y social?", en *Revista Observatorio Social*, núm. 11, Buenos Aires: Economía Social.
- Carpintero, E. y M., Hernández (comps.) (2002), "Produciendo realidad. Las empresas comunitarias", Buenos Aires: Topía Editorial, colección Fichas, en colaboración con La Maza.
- Fajn, G. (comp.) (2003), *Fábricas y Empresas Recuperadas. Protesta social, Autogestión y rupturas en la Subjetividad*, Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
- FFyL (2003), "Informe del relevamiento entre empresas recuperadas por los trabajadores", Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Godio, J. (2004), "La recuperación de empresas por los trabajadores en Argentina", en *Revista Pistas*, núm. 11, febrero, Instituto del Mundo del Trabajo.

- Lucita, E. (2002), "Ocupar, resistir, producir", en Revista *Cuadernos del Sur*, Argentina.
- Saavedra, L. (2003), "La dinámica del trabajo desde la perspectiva de las empresas recuperadas y auto-organizadas por los trabajadores", en *Laboratorio Informe de Coyuntura Laboral*, Buenos Aires.
- Stancanelli, P. (2002), "Apropiarse de la fuente de trabajo", en *Le Monde diplomatique*, año 4, núm. 38, agosto, Buenos Aires, pp. 8-9.
- Trincheró, H. (1998), *Antropología Económica: ficciones y producciones del hombre económico*, Buenos Aires: Eudeba.

MOVIMIENTO AGRARIO Y LUCHA SOCIAL. EL CASO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN SANTIAGO DEL ESTERO

Rubén Eduardo de Dios
Universidad Nacional de Santiago del Estero

INTRODUCCIÓN

Entre los nuevos movimientos sociales en La Argentina, uno de los más destacados en el área rural, tanto por su desarrollo organizativo interno, como por la imagen pública que se ha forjado, es el movimiento campesino surgido en la provincia de Santiago de Estero, que ya tiene más de 20 años de vida, desde sus inicios a principios de los años '80 con la recuperación de la institucionalidad democrática en el país.

En su trayectoria, este movimiento social fue ampliando su representación hasta alcanzar a más de 6 000 familias campesinas asociadas a las diversas organizaciones zonales de base que lo componen y que están diseminadas por la dilatada geografía provincial. Hacia fines de 1989, el movimiento adoptó una determinada estructura organizativa, conformada por representantes o delegados zonales que se integraron en una asociación de tercer grado conocida como MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero).

En este trabajo incluiremos algunos de los resultados de la investigación en curso que estamos realizando sobre este movimiento campesino. Nos referiremos específicamente a:

- Los orígenes o las principales condiciones que hicieron posible el surgimiento de este movimiento relacionadas especialmente con la Iglesia Católica como institución matriz predominante.

- Las limitaciones impuestas por un contexto político caracterizado por la permanencia de un régimen autoritario en la provincia.
- El proceso de construcción de un sujeto colectivo con identidad propia.
- El despliegue de un novedoso repertorio de acciones colectivas, tales como manifestaciones, marchas, peregrinaciones, acciones gremiales y jurídicas de defensa, que tuvieron como eje estructurante la lucha por la tierra.
- El cambio paulatino que se produjo en el marco referencial de la acción del movimiento, cuya comprensión resulta útil para analizar el lugar estratégico que tienen o podrían tener los reclamos por la tierra y los derechos campesinos en el debate público y en la cultura política más amplia de la sociedad global.
- La densidad y variedad de las articulaciones externas cultivadas por el movimiento, que le han permitido acumular cierto grado de “fuerza social”, y de esa manera, colocar el conflicto local por la tierra y por la identidad, en el escenario de la lucha política y social más general de la sociedad argentina.

La perspectiva teórica adoptada incluye, tanto marcos conceptuales desarrollados por autores de teorías contemporáneas de la acción colectiva y de los movimientos sociales (Tilly, Ch.; Tarrow, S.; Gamson, W.; Calhoun, C.; Mc Adam, D.), como algunos desarrollos teóricos incluidos en los paradigmas europeos sobre los nuevos movimientos sociales (Touraine, A.; Melucci, A.), y de aportes conceptuales desarrollados en Latinoamérica como los de la brasileña Maria da Glória Gohn.

Para la recolección de la información se apeló a informes, registros y documentos del propio movimiento, a crónicas periodísticas, a informes de diversas ONGs y asesores del movimiento, a trabajos de investigación realizados sobre aspectos particulares del movimiento, a registros estadísticos, y especialmente a entrevistas a dirigentes campesinos y a asesores del movimiento.

Una mención particular merece mi propia situación como observador participante y, en ocasiones, como actor comprometido en los diversos hechos o episodios que fueron conformando el repertorio de acciones colectivas del movimiento. Por lo mismo, queda descartada una postura inicial de neutralidad valorativa por mi parte, aunque también queda expresado un compromiso profesional por mantener los criterios de precisión en la observación y de objetividad en el análisis, tratando de que el compromiso

(aún vigente) con los intereses y demandas del movimiento no sean un obstáculo para aproximarnos críticamente a la comprensión de este hecho social.¹²⁹

LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO CAMPESINO

Las denominadas instituciones matrices son aquellas que tienen una gran influencia en el surgimiento o en el origen de los movimientos sociales, y que pueden conservar dicha influencia en su posterior evolución o desarrollo. Su importancia y el carácter de la relación que establecen con el movimiento es cambiante, y sólo explicable si se analizan los cambios que se producen en su propia dinámica institucional, en el contexto, y en el mismo movimiento.

En el caso del surgimiento de los nuevos movimientos sociales latinoamericanos agraristas o rurales, la Iglesia Católica tuvo un gran protagonismo actuando como institución matriz. Desde los años '50, influyó a través de la actuación de sus movimientos laicales, tales como el Movimiento Rural de Acción Católica en La Argentina o la Acción Católica Rural en Brasil, Chile y Uruguay, que se redefinieron posteriormente con el surgimiento de pastorales nacionales en alguno de estos países.

Es destacable la actuación de la Iglesia Católica en Brasil, que contribuyó a la organización de los trabajadores rurales desde mediados de los años setenta con la creación de la Comisión Pastoral de la Tierra (1975). Desde dicha Comisión se impulsó decididamente la formación de Comunidades Eclesiales de Base en el sector rural, donde sus miembros, a partir de lecturas bíblicas, podían reflexionar libremente sobre su realidad y su situación de explotación. A la vez se comenzaron a generar acciones de resistencia y lucha contra las injusticias y por los derechos de los trabajadores rurales. La Comisión Pastoral de la Tierra apoyó el encuentro y las reuniones de las diferentes experiencias de organización, resistencia y ocupación de tierras diseminadas por todo el país, y que confluyeron en 1984 en un encuentro nacional en la ciudad de Chapecó, para dar origen al entonces bautizado como Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

En la propia narrativa del Movimiento de los Sin Tierra en relación con el sentido que tuvieron estos primeros hechos y experiencias que dieron origen al movimiento, el apoyo de la Iglesia se valora como necesario,

¹²⁹ Vio Grossi, F. *et al.* (1988).

pero se preserva explícitamente el carácter no confesional y autónomo del movimiento. Posteriormente, además de la Iglesia Católica, también se reconocen como organizaciones de apoyo al MST al nuevo sindicalismo representado por la Central Única de Trabajadores CUT y al Partido de los Trabajadores PT.¹³⁰

En la Argentina, el Movimiento Rural de la Acción Católica, especialmente con sus integrantes más jóvenes, fue el principal impulsor de la conformación a principios de los años '70 de las denominadas "Ligas Agrarias" en la región del nordeste. En sus orígenes, el Movimiento Rural se proponía "mejorar la educación del campesinado para que pudiera acceder a una igualdad de oportunidades en relación a los latifundistas y monopolios", y "eliminar las injusticias mediante una acción concertada entre explotadores y explotados". La lucha por las reformas sociales que se percibían como necesarias, debía realizarse evitando las formas violentas de protesta o los enfrentamientos.¹³¹

La posterior evolución en el pensamiento y en las prácticas del Movimiento Rural tuvo relación con la renovación operada en el seno de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, del impacto de la Encíclica "Populorum Progressio" del Papa Pablo VI y de la influencia que tuvo la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín en 1968. También tuvo relación con la aceleración de los cambios en el escenario político y económico del momento y con la disposición de las Ligas Agrarias a expresar sus demandas y reivindicaciones con un nuevo repertorio de acciones de protesta, movilizaciones, marchas y huelgas, que el Movimiento Rural decidió acompañar, revisando de este modo su enfoque original.

En mayo de 1972 la Asamblea Plenaria de la Comisión Episcopal Argentina decidió retirarle al Movimiento Rural la pertenencia a la Acción Católica, como una forma clara de expresar su desacuerdo con la orientación que se estaba tomando. La falta de respaldo de la jerarquía eclesial supuso un campo de disputa sobre el significado o sentido que fueron adquiriendo los acontecimientos y sobre el rol que le cabía cumplir a la institución como tal. El apoyo inicial se correspondía con la imagen de una Iglesia actuando como mediadora entre las demandas sociales y el poder público, ejerciendo una tutela o control institucional, como manera de evitar la penetración de ideologías ajenas a la propia, y de regular la intensidad de los potenciales conflictos. Cuando se acrecentó la autonomía de la organización y

¹³⁰ *El Movimiento de los Sin Tierra en Brasil* (1999).

¹³¹ Ferrara, Francisco (1973).

se aceleraron las protestas encabezadas por las Ligas Agrarias, el apoyo se tradujo en la prescindencia y en algunos casos en un rechazo explícito. La desaparición de las Ligas Agrarias a mediados de los '70 como consecuencia de la represión ejercida por la dictadura militar, derivó en los años subsiguientes, en un largo repliegue de la jerarquía eclesial en materia de compromiso social con los pobres o postergados del campo.¹³²

Con la recuperación del sistema democrático de gobierno, desde principios de los '80, en algunas provincias del nordeste, como Misiones o Formosa, en forma paulatina se fueron reconstruyendo las antiguas organizaciones campesinas que reconocían como antecedente a las Ligas Agrarias, tales como el MAM (Movimiento Agrario Misionero) o el MAF (Movimiento Agrario Formoseño).

En la provincia de Santiago del Estero, a pesar de que los pequeños productores compartían una problemática similar a la registrada por sus pares en las provincias del nordeste, no se registraron antecedentes de una presencia significativa de las Ligas Agrarias en los años '70. Sólo hubo algunos esporádicos intentos de organización en el área de riego próxima a la ciudad de Fernández, y en la zona rural de secano próxima a la ciudad de Añatuya.¹³³

De todos modos, desde principios de los años '80 fueron surgiendo distintas experiencias de movilización campesina, respecto de las cuales, la Iglesia Católica cumplió un rol destacado y actuó como la principal institución matriz.

A su vez, esta impronta inicial, aunque en un rol subordinado, fue compartida por algunas ONGs de promoción y desarrollo rural de la "primera generación",¹³⁴ como INCUPO (Instituto de Cultura Popular), con sede central en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, y FUNDAPAZ (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz), con sede central en la ciudad de Buenos Aires. Estas ONGs habían elegido a la provincia de Santiago del Estero como un lugar apropiado para el despliegue de sus equipos técnicos y su actividad promocional. Se autorreferenciaban como de inspiración

¹³² Moyano y Pérez (1999).

¹³³ Tampoco se registraba la influencia de la Federación Agraria Argentina FAA, como la estructura gremial representativa de los pequeños y medianos productores a nivel nacional ni de los partidos políticos tradicionales de la provincia conformado básicamente por el justicialismo y el radicalismo.

¹³⁴ Cowan (2000).

cristiana, manteniendo estrechos vínculos con la jerarquía eclesial de la región.

Para ser más precisos, las experiencias iniciales de movilización campesina surgieron en el ámbito de la Diócesis de Añatuya,¹³⁵ con un Obispo que le imprimió un carácter decididamente preconiliar a su gestión, y que se atribuyó un rol de intermediación e interlocución entre las necesidades de sus fieles y los poderes públicos, asumiendo ser “la voz de los que no tienen voz”. Ya en el periodo de la dictadura de los años ‘70, había establecido una estrecha relación con la administración militar provincial, mediante la cual conseguía todo tipo de recursos para las poblaciones rurales más carenciadas de la Diócesis.

Desde el Obispado se tomó la iniciativa de poner en marcha en 1982 un proyecto de promoción propio, denominado “Proyecto del Salado”. Con el apoyo económico externo de Misereor¹³⁶ para la conformación de equipos de técnicos y promotores sociales, se desplegó durante la década de los ‘80 y parte de los ‘90, un intenso trabajo promocional, basado en un discurso asociativo. Los objetivos explícitos del Proyecto del Salado eran la “formación de organizaciones comunitarias, la capacitación de dirigentes y animadores, la promoción integral y principalmente lograr el asentamiento estable de la población, terminando con el éxodo de mano de obra hacia otras provincias”. En este marco, se fueron generando grupos de acción comunitaria, talleres de costura integrados por mujeres campesinas de las parroquias, y grupos productivos integrados por campesinos semiasalariados, vinculados al trabajo forestal y a la habilitación de tierras fiscales para lograr su asentamiento definitivo como productores agrícolas y ganaderos en pequeña escala. Los grupos se articularon primero en cada parroquia a través de delegados en comisiones zonales, y en 1989 se dieron una estructura de federación regional, denominada UPPSAN (Unión de Pequeños Productores del Salado Norte), que hacia 1991 representaba a 50 grupos con una cantidad de 500 familias asociadas.¹³⁷

¹³⁵ La provincia de Santiago del Estero está surcada por el río Salado, que la atraviesa en diagonal de norte a sur, y que opera hasta el presente como límite de las dos extensas Diócesis en que se estructura la presencia institucional de la Iglesia. Del río Salado hacia el este se encuentra la Diócesis de Añatuya, con sede episcopal en dicha ciudad; mientras que del río Salado hacia el oeste se ubica la otra Diócesis, con sede en la Ciudad Capital de Santiago.

¹³⁶ “Misereor” es una Agencia de Cooperación vinculada con la Iglesia Católica Alemana, que financia proyectos de desarrollo humano y promoción en países subdesarrollados.

¹³⁷ El proyecto del Salado incluía en los Departamentos Copo y Alberdi, en plena región chaqueña, a las parroquias de San José de Boquerón (13 grupos), Santos Lugares (15 grupos), La Candelaria (17 grupos), Nueva Esperanza (5 grupos). La parroquia de Monte

En 1994, en una de las parroquias, San José de Boquerón, se produjo un episodio que relataremos en detalle, porque por primera vez se puso en duda, desde la perspectiva de los campesinos, la funcionalidad de la mediación eclesial. En ese año, llegaron a la zona representantes de la Compañía Salteña de Carbón S. A., que contaban con el apoyo de la Intervención Federal,¹³⁸ y que se presentaban como propietarios o titulares de dominio de 14 000 ha, lo cual acreditaban con tres escrituras a nombre de dicha sociedad. Su propuesta era que a los pobladores ocupantes de esas tierras se les otorgaran 50 ha escrituradas a cada uno, con la pretensión de dar una supuesta estabilidad y solución definitiva al problema de la tenencia precaria; dejando libres las tierras restantes para la explotación forestal por parte de la Compañía. Estos empresarios venían acompañados por el cura párroco, que no sólo los presentó, sino que los apoyó decididamente bajo el supuesto de que iban a generar trabajo para los campesinos de la zona.

A pesar de que el sacerdote representaba el principio incuestionable de autoridad en la zona, algunos líderes de la organización campesina se atrevieron no sólo a manifestar sus dudas, sino también a iniciar una gestión por su cuenta para averiguar la autenticidad de la propuesta:

Nosotros conocíamos de toda la vida que esos terrenos eran fiscales. Por eso, si les recibíamos un papel estábamos reconociendo que eran de ellos. Queríamos saber de dónde venía la información de que ellos eran propietarios, a quién le compraron (...) hubo una discusión fuerte en la cual el padre Juan Carlos decía que yo no era amigo del progreso y por eso me oponía y que no me iba a perdonar que estaba poniendo en duda su palabra, que estaba hablando en contra de la Iglesia y que no me iba a perdonar nunca. Armamos una comisión y fuimos a Santiago (ciudad capital). Ahí descubrimos que el vendedor, Ramón Sosa, había fallecido en 1986 y el poder que autorizaba la venta de las propiedades estaba hecho y firmado después de su muerte. Logramos hablar con la viuda

Quemado, que estuvo incluida en la etapa inicial, ya se había retirado por ese entonces del Proyecto.

¹³⁸ La Intervención Federal sucedió en 1994 al gobierno provincial peronista luego de producido el episodio de rebelión popular conocido como "el santiagueño" en diciembre de 1993. El representante de la Compañía Salteña de Carbón SA, Carlos Correa, era cuñado del Ministro Ricardo Fellner, que posteriormente fuera elegido como gobernador de Jujuy.

que nos dijo que su esposo nunca había tenido propiedades en Boquerón. No contentos con eso fuimos al Registro Civil e hicimos una copia del acta de fallecimiento. Con todos esos elementos llamamos a reunión y los pusimos en evidencia (...) (con el tiempo) el cura me dijo que sabía que esos tipos eran truchos (J. C., dirigente campesino).

Con el descubrimiento del engaño se abrió un campo de disputa, antes inexistente, por el control del sentido y direccionalidad a seguir por el proceso de organización campesina. El discurso de la asociación y la autogestión predicado por el Proyecto del Salado había sido resignificado por los dirigentes campesinos, en oposición a la lógica de control social que le había impuesto hasta entonces la tutela eclesial. El valor compartido y sancionado por la sociedad local de respeto reverente por la autoridad eclesial había sido cuestionado y confrontado como nunca antes.

La disputa se profundizó en los años subsiguientes al interior de la organización, entre los dirigentes que preferían seguir bajo la protección de la Iglesia, y aquellos que acentuaban su cuestionamiento. Se hicieron más frecuentes los pedidos de información acerca del manejo económico de los proyectos y los bienes de la organización campesina. El cura párroco se reservaba para sí las decisiones sobre las cuestiones económicas de la organización, con la tolerancia de una parte de los dirigentes que preferían no confrontar, a pesar de ser conscientes de su derecho a ser informados.

El conflicto se agudizó en 1998, cuando la UPPSAN se dividió en dos grupos: el primero se mantuvo bajo la protección eclesial, al extremo de autodenominarse como UPPSAN Parroquial, y el segundo decidió conformar una nueva estructura organizativa denominada OCCAP (Organización Campesina de Copo, Alberdi y Pellegrini). A pesar de que el primer grupo se quedó con el uso de los bienes conseguidos hasta el momento (tractor, camión, sede, etc.), fue sufriendo posteriormente un decaimiento en su dinámica y un fuerte desgranamiento hasta reducirse a 50 asociados en el 2001; mientras que la OCCAP, a pesar de iniciarse con una situación de desventaja económica, fue creciendo hasta llegar a los 300 asociados para ese mismo año.

La matriz eclesial en los orígenes del movimiento campesino en Santiago del Estero también puede advertirse en otro proceso de lucha y organización, que tuvo como epicentro a la localidad de Los Jurés en la región del centroeste de la provincia. A principios de los años '80 se hizo cargo de la parroquia un joven sacerdote de la Orden de los Palotinos, que a poco

de asumir su trabajo pastoral, recibió la inquietud de los pobladores que se veían amenazados por órdenes de desalojo de las tierras ocupadas por generaciones. El sacerdote asumió decididamente un liderazgo que a la postre resultó fundacional del proceso de organización campesina en la zona.

Era un cura gaucho, no era como el resto (...) tuvimos conocimiento que ayudó a una familia desalojada y que la había hecho volver a su casa, bajando a los copetudos (...) nunca un sacerdote se había acercado a la gente del campo, tal es así que fue a dar misa al campo y antes no ocurría (...) sólo se celebraban bautismos, de vez en cuando (L. C. dirigente campesino).

También se aprovechó para hacer evangelización en esa época (...) se leía la Biblia, y el principal problema que teníamos era el de la tierra, y en la Biblia dice que la tierra es para el hombre y para el que la trabaja, es la ley de Dios" (H. M. dirigente campesino).

Asumiendo la perspectiva y las ideas de la teología de la liberación y con un sentido de rescate y revalorización de la religiosidad popular, el sacerdote rápidamente logró captar la confianza de los campesinos y diseñar una estrategia de construcción de poder desde la base social. Para ello contó con el apoyo de la ONG INCUPO, que aportó una metodología de promoción basada en la generación de espacios de encuentro, de intercambio y de capacitación con los campesinos, para lograr una defensa efectiva de sus posesiones. Además, obtuvo el respaldo del Obispado de Añatuya y de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente del Episcopado Nacional.

Entre otros gestos, el Vicecanciller de la Diócesis de Añatuya, mano derecha del Obispo, hizo explícito este respaldo en declaraciones periodísticas:

Ustedes pueden hacer un bien inmenso a muchos otros que se organicen como ustedes. Tienen todo el aval del Obispado porque la Iglesia que tiene un gran sentido de justicia, está para apoyar a los que, sin estar en contra de nadie, están organizados para defender los derechos que por ley les corresponden (El Liberal, 23 de julio de 1984).

Estas breves declaraciones denotan que el discurso de la asociación y de la defensa de los legítimos derechos de posesión, tenía límites precisos para el Obispado, en tanto se excluía la posibilidad de una confrontación de intereses que implicara entrar en disputa contra alguien. Precisamente, ése era el peligro del caso de Los Juríos, donde se estaba ante la pretensión de derecho sobre un mismo bien, la tierra y, por consiguiente, ante un potencial conflicto entre un incipiente actor colectivo campesino; y, por el otro lado, empresarios con grandes recursos económicos y fuertes vinculaciones con el poder político provincial.

En el área rural de influencia de la localidad de Los Juríos, hacia el centro este de la provincia y a cerca de 300 km de la ciudad Capital de Santiago del Estero, tres empresas latifundistas radicadas en Buenos Aires, pertenecientes al mismo grupo económico,¹³⁹ habían adquirido cerca de 130 000 ha de tierras, que a su vez estaban ocupadas por más de 500 familias campesinas, a la mayoría de las cuales les asistía el derecho de posesión veinteañal. Las empresas, que se negaban a negociar directamente con los pobladores, le hicieron una propuesta de donación de 7 500 ha al gobierno provincial, para que a su vez las entregara a los pobladores. El Obispado de Añatuya, con la colaboración de INCUPO, se ubicó como el principal mediador o negociador entre las empresas y los pobladores. Luego de múltiples gestiones, la negociación se estancó porque la pretensión de los pobladores excedía largamente las 7 500 ha ofrecidas, y porque se planteaba un reconocimiento de derecho y no una donación.

Hacia 1986, ante la intransigencia de las empresas y el gobierno provincial, el sacerdote, los dirigentes campesinos y una parte del equipo técnico local de INCUPO decidieron dar por concluidas las negociaciones y adoptaron una nueva estrategia de confrontación o protesta. La iniciativa más relevante fue la realización de una movilización en Los Juríos, episodio inédito que no registraba antecedentes en la región, y que marcó el principio de la ruptura y reacomodamiento de las alianzas establecidas hasta el momento.

Desde temprano, el 29 de octubre de 1986, confluyeron hacia Los Juríos, grupos de campesinos de los diferentes lotes o comunidades con sus carteles identificatorios, para ocupar el centro de la escena, la plaza del pueblo. En ese espacio público, habitualmente reservado para los actos oficiales,

¹³⁹ Las empresas eran Mimbres S.A., Salónica S.A. y Jungla S.A., con sede en Buenos Aires y cuya figura visibles en ese momento era el abogado Daniel Masoni. Por esa época se lo podía ver a Masoni con su familia en una foto de tapa de la revista católica *Esquiú*, en campaña contra la aprobación de la ley de divorcio vincular.

resonó por primera vez la palabra de protesta y el pedido de justicia de los dirigentes campesinos. En seguida, cerca de quinientos campesinos marcharon por el pueblo, recibiendo la adhesión de los comerciantes locales, vecinos de los barrios y grupos políticos locales. Con la llegada de la noche se produjo una vigilia donde, también por primera vez en el espacio público pueblerino, los campesinos celebraron un reza baile, mezcla de rogativa y de fiesta, donde se confundían las palabras en latín de los viejos rezadores, con la música y el baile folclórico tradicional. Esta especie de invasión de un espacio antes vedado a la presencia campesina no superó los límites de lo local, por lo que no alcanzó mayor repercusión en el conjunto de la sociedad santiagueña. Los medios masivos de comunicación provincial apenas registraron la crónica de los hechos.

Luego de este episodio, el Obispo decidió retirar su apoyo, ya que vio amenazada su posición hegemónica en la negociación, al abrirse un campo no previsto de disputa con la propia organización campesina y sus asesores por la conducción del proceso. Otro elemento de peso fue el temor a una radicalización de la protesta, a pesar de su carácter no violento. En ese momento, cualquier expresión de defensa gremial era percibida como potencialmente peligrosa para "la paz social" o como un sucedáneo de la "lucha de clases". Finalmente, otro factor de igual importancia fue la presunción de que se podría resquebrajar la comunidad de intereses existente entre el poder político provincial y el propio Obispado.

Una vez producida la ruptura, el Obispado no mantuvo una postura prescendente, sino que por el contrario, tomó iniciativas tendientes a la desmovilización y neutralización del incipiente proceso de organización. Una de estas medidas fue el traslado y la prohibición del ingreso a la Diócesis del sacerdote palotino. Otra fue el llamado de atención a la ONG INCUPO, que se vio obligada a optar entre la fidelidad a la autoridad eclesial o el acompañamiento al proceso de organización campesina. INCUPO optó institucionalmente por el primer temperamento, aún en contra de una parte de los técnicos locales que propiciaban lo contrario.

Nuevamente, la Iglesia institucional, como ocurrió a principios de los años '70 en relación con Las Ligas Agrarias, cuando percibió el fracaso de su gestión mediadora, y de su rol tutelar, prefirió adoptar una actitud beligerante frente a lo que aparecía como una maduración del movimiento campesino, en términos de capacidad de decisión autónoma. Esa actitud de confrontación, en el caso de la Diócesis de Añatuya, se mantuvo durante los años '90.

LA POLÍTICA COMO OBSTÁCULO

En la perspectiva teórica de un investigador de los movimientos sociales como Sydney Tarrow,¹⁴⁰ el concepto de oportunidad política es central para entender la posibilidad de que un movimiento social emerja y se sustente o consolide en el tiempo. Si bien no es el único elemento, pues también recurre a otros conceptos con capacidad de explicación, como son la construcción de redes externas e internas, los repertorios de acción colectiva y los marcos referenciales de la acción; es el que mejor expresaría las condiciones propicias o favorables para la emergencia de un movimiento social.

Para Tarrow los movimientos son menos producto de cierto nivel de movilización, y más producto de la vulnerabilidad política de los opositores o de la receptividad a las demandas que existe en un momento determinado en el sistema político y económico global. En consecuencia, los movimientos se formarían cuando los actores sociales, usualmente carentes o demandantes, encabezados por líderes, responden a los cambios traídos por las nuevas oportunidades políticas, consiguiendo aliados influyentes y revelando la vulnerabilidad de sus oponentes.

El principal generador de las nuevas oportunidades políticas sería el Estado a través de sus diversas instituciones y mediante la transferencia de recursos e incentivos materiales y simbólicos. También el Estado crearía nuevas oportunidades cuando se muestra receptivo a las demandas planteadas por los actores sociales. Este aspecto cobra singular importancia en sociedades tradicionales donde las demandas se orientan casi exclusivamente hacia la autoridad pública. En sentido contrario, el Estado limitaría las oportunidades políticas en la medida que ejerce control, o aún la represión sobre el sentido y las prácticas del movimiento social.

En el contexto nacional, la recuperación democrática de principios de los años '80, luego de un largo periodo de restricción de las libertades civiles y políticas, se constituyó en una condición de posibilidad del surgimiento del movimiento campesino en Santiago del Estero. Sin embargo, este reflujo democratizador, actuó como una oportunidad política lejana, ya que si bien generó un clima extendido de mayores libertades, no alcanzó para plantear cambios de fondo en la cultura política provincial.

¹⁴⁰ Tarrow, Sydney (1997).

La onnipresencia del veterano caudillo peronista Carlos Arturo Juárez, triunfador en las elecciones a gobernador de 1983, tiñó y aún sigue tiñendo la cultura política local. Bajo el respeto formal por las instituciones democráticas opera un sistema autocrático que limita o impide decididamente cualquier forma de expresión autónoma de la sociedad civil. Mediante el manejo discrecional de los recursos de la administración pública provincial, y la conformación de una red de espionaje, delación y persecución de los opositores, Juárez consolidó una hegemonía y una concentración del poder difícilmente igualables y que marcaría la evolución de la sociedad santiagueña en las décadas siguientes.

La actitud del gobierno de la provincia frente al incipiente movimiento campesino puede observarse claramente en el episodio ya mencionado de la movilización de 1986 en Los Jurés. Efectivamente, en esa oportunidad la demanda campesina intentó lograr alguna forma de intervención gubernamental tendiente a lograr un mayor equilibrio de fuerzas en la disputa con los terratenientes. Pero la apelación a la protesta como forma de reclamo, sumada al aún precario poder político negociador de la base campesina, fue interpretada por el régimen juarista como signos de un posible rebrote subversivo que había que desactivar. A partir de este episodio, la oposición de intereses con el poder político provincial, que antes aparecía como velada o morigerada por la mediación eclesial, se fue tornando más evidente para los propios dirigentes campesinos de la zona, tal como se expresa en el testimonio siguiente:

Creemos que el gobierno estaba a favor de las empresas (...) los funcionarios que vinieron a querer arreglar el problema hablaban como si fueran empleados de las empresas (...) en la movilización (de 1986) el gobierno mandó una cámara para filmar (...) incluso la policía actuaba a favor de las empresas y el gobierno lo sabía (...) sabemos que las empresas pusieron dinero para la campaña política de Juárez (O. C. dirigente campesino).

En consecuencia, el concepto de oportunidad política es claramente insuficiente para poder explicar y entender el surgimiento del movimiento campesino provincial. Antes por el contrario, cabría preguntarse cómo es posible que pudiera surgir este movimiento, a pesar de los obstáculos colocados y la represión ejercida por el poder político provincial.

Esta postura inflexible no dio muestras de debilitarse en los años subsiguientes. En un artículo periodístico de investigación, publicado en el año

2000 en el principal diario local, se menciona que el movimiento campesino era considerado por los servicios de inteligencia provinciales como un ejemplo de "organización subversiva", al punto que fue incluido como un caso por estudiar en el programa de formación de la Escuela Superior de Policía, al igual que otras organizaciones "por su connotación marxista, zurda o de protesta".¹⁴¹

En el plano nacional, la aparición hacia mediados de los años noventa de un conjunto de planes y programas orientados a la contención de la pobreza, y que en parte se focalizaron sobre el sector campesino o de pequeños productores minifundistas, podría considerarse como una oportunidad política, aunque claramente limitada al plano micro o local.

En general, estos planes y programas no pretendieron reproducir el tradicional vínculo de dominación clientelar, característico de las agencias provinciales de intervención; sino que se propusieron establecer un vínculo predominantemente asistencial respecto de los grupos campesinos. Definiremos el vínculo asistencial como una relación de intercambio desigual entre, por un lado, un agente externo que proporciona bienes y diversos servicios; y, por otro lado, ciertos sectores que son focalizados como beneficiarios. La relación de intercambio está regulada por un compromiso contractual, donde los beneficiarios deben corresponder los recursos económicos, la asistencia técnica o la capacitación recibida con ciertas obligaciones que están previamente establecidas y reglamentadas. Entre dichas obligaciones se incluyen, por lo general, aspectos referidos al manejo administrativo y rendición de los recursos transferidos, a la conformación de alguna forma asociativa como requisito necesario para poder recibir las prestaciones, y a la elección de representantes o intermediarios que serán los referentes del agente proveedor. El incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales o la interrupción del flujo de bienes y servicios (por las razones que fuera), por lo regular, deriva en la desintegración del vínculo, ya que no se ponen en juego lazos de lealtad personalizados. Los beneficiarios rara vez se sienten comprometidos o involucrados por algún imperativo moral con el agente proveedor. Desde la perspectiva del agente externo, la transferencia de bienes y servicios materiales es el propósito principal de la relación, y no un medio para lograr otros fines como pueden ser la circulación y apropiación de bienes simbólicos por parte de los beneficiarios. Por consiguiente, en el vínculo asistencial no se alientan o apoyan aquellas acciones de los grupos que pudieran estar orientadas

¹⁴¹ Periódico *El Liberal*, viernes 19 de mayo de 2000.

hacia el reclamo de sus derechos, y mucho menos cuando esas prácticas pueden derivar en conflictos que hagan peligrar la existencia misma del agente externo.

Algunas organizaciones zonales campesinas pudieron aprovechar la transferencia de créditos, subsidios, y servicios de asistencia técnica, que se operó desde el Estado nacional, para ampliar su base material de sustento. En cambio la transferencia de algún tipo de bien simbólico como puede ser la capacidad para la autogestión en los grupos, si bien estuvo entre los objetivos manifiestos de alguno de los programas, como es el caso del PSA (Programa Social Agropecuario), nunca alcanzó una dimensión significativa en términos de resultados obtenidos. La capacidad de autonomía y de autogestión lograda por diversos grupos y organizaciones campesinas para la defensa de sus derechos e intereses no se explica por la intervención y apoyo del PSA, sino por la existencia de otro tipo de procesos ligados a la construcción de su identidad como sujeto colectivo en el marco de un movimiento social.¹⁴²

En definitiva, dada la persistencia y consolidación del movimiento campesino en el tiempo, aún y a pesar de las condiciones políticas adversas, resulta necesario colocar nuestra mirada en otros factores que pudieran tener una mayor entidad explicativa. Como ya lo señalamos, entre estos factores se destaca la impronta de la Iglesia como institución matriz, y también, aunque en un rol subordinado, el asesoramiento y la promoción desplegada por las ONGs orientadas a la promoción y el desarrollo rural. En el plano interno, colocaremos ahora nuestra mirada en el proceso de construcción de una fuerte identidad campesina.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CAMPESINA

No basta comprobar que existen carencias o necesidades materiales o simbólicas para dar cuenta de la aparición de acciones colectivas tendientes a superarlas. La forma en que las personas perciben las carencias explica que éstas puedan convertirse o no en demandas sentidas, y que dadas ciertas condiciones, las demandas se puedan traducir, a su vez, en acciones reivindicativas.

Para el estudio y comprensión, tanto de los viejos como de los nuevos movimientos sociales, es necesario preguntarse por la constitución de la identi-

¹⁴² De Dios, R. y M., Gutiérrez (1999).

dad del sujeto social involucrado. En nuestro caso se trata de la pregunta por la identidad campesina.

Coincidimos con Craig Calhoun¹⁴³ en la crítica a aquellos enfoques que suponen que la identidad del sujeto colectivo existe con anterioridad a la lucha o que es la base de las acciones colectivas reivindicativas. “Por el contrario, la identidad es forjada en y por la lucha, incluyendo la participación en los movimientos sociales”. Por consiguiente, la identidad es construida de manera “relativamente estable en un continuo proceso de actividad social”. Dicho de otro modo, “lo que uno hace define lo que uno es, tanto para los otros como, especialmente para uno mismo”.

A su vez, esa construcción de identidad tiene momentos privilegiados. Son las circunstancias especiales en que los individuos van tomando opciones o decisiones que los comprometen, más allá de las prácticas cotidianas. La decisión de asumir riesgos y de involucrarse en acciones colectivas de lucha, protesta, reclamo o propuesta de alternativas, va gestando o reafirmando una determinada identidad como sujeto social.

En sintonía con este aporte teórico, y volviendo a la pregunta por la identidad campesina para la situación concreta e históricamente situada de Santiago del Estero, consideramos que dicha identidad no existía previamente al surgimiento del movimiento campesino y que, en cambio, se fue formando y moldeando en el mismo proceso de acción y de lucha colectiva iniciado a principios de los años '80.

Esta perspectiva es diferente a la adoptada por otros autores que también se preguntaron por las condiciones del surgimiento del movimiento campesino en Santiago del Estero, y que sostuvieron que ya existía una “identidad típicamente campesina”, o un “nosotros campesino”, definido por un conjunto de rasgos o características compartidas tales como el ser “santiagueños, migrantes, pobladores rurales, pero sobre todo excluidos”.¹⁴⁴ A nuestro modo de ver, estas características sólo sirven para definir una categoría analítica o un agregado estadístico de individuos, pero no para entender cómo se fue construyendo la identidad colectiva del sujeto campesino, que en Santiago del Estero nunca había mostrado un rostro reconocible.

No casualmente, las primeras acciones colectivas del movimiento estuvieron orientadas a crear y sostener espacios estables de encuentro entre los

¹⁴³ Calhoun Craig, *El problema de la identidad en la acción colectiva*, traducción de Javier Auyero.

¹⁴⁴ Alfaro, María Inés (1996).

propios pobladores rurales, ya que dichos espacios les habían sido vedados históricamente. En esos espacios se empezaron a reconocer como integrantes de un colectivo con intereses y características compartidas, comenzaron a construir solidaridades, y se colocaron en situación de alteridad respecto a “los no campesinos”:

Antes no nos decíamos campesinos, no hacía falta, por eso fue muy importante que nos fuéramos conociendo, porque hasta esa época dos comunidades vecinas no nos conocíamos, ahora nos conocemos en toda la zona de Los Jurés. Con las fiestas y reuniones íbamos viendo que todos teníamos los mismos problemas y empezábamos a conversar y ver la forma de juntarnos” (H. M. dirigente campesino).

El mutuo reconocimiento fue el punto de partida de una construcción de identidad que se fue moldeando paulatinamente, con el tiempo, y al calor de múltiples acciones colectivas. Sin embargo, a nuestro parecer, los momentos o circunstancias donde se puso en juego más decididamente la construcción de dicha identidad campesina fueron aquellos en que se vio amenazada la relación del campesino con su tierra, entendida no sólo como soporte económico productivo, sino y principalmente como espacio vital y cultural.

Un análisis de los cambios producidos en la estructura agraria santiagueña en las últimas décadas ayudan a comprender la creciente importancia que fue adquiriendo la disputa por la tierra. Desde los años '70 se puede observar un proceso de “modernización agraria” que impactó directamente sobre las posesiones campesinas. Hubo un avance o penetración capitalista protagonizado por un sector empresarial moderno, mayormente de origen extraprovincial, que contribuyó a la expansión de producciones agroexportables en las áreas de secano, tales como la soja, el sorgo, el maíz, el poroto, y también del algodón. Además tuvo un desarrollo importante la ganadería bovina tanto para cría, como para engorde con la incorporación de tecnología. Dicho proceso de modernización se hizo sobre la base de la expansión de la frontera agropecuaria, generando presiones muy concretas sobre los antiguos ocupantes de la tierra. Una de las principales consecuencias fue la proliferación de acciones de desalojo y de expulsión de los campesinos de las tierras que comenzaban a valorizarse, con el objeto de “liberarlas”, ya sea para su explotación bajo formas empresariales o para realizar diversos negocios de especulación inmobiliaria.

El problema generalizado, que aún persiste, es que los pobladores ocupantes de tierras privadas o de tierras fiscales, nunca pudieron acceder por sus propios medios al título perfecto. Es decir que, aún pudiendo acreditar su carácter de poseedores "con ánimo de dueño", no contaban con los títulos de propiedad. La legislación reconoce el derecho a la propiedad de la tierra cuando se ha ejercido una posesión pacífica y continua por más de veinte años. No obstante, a pesar de que el derecho asiste a los pobladores, usualmente no han contado con los medios económicos necesarios para hacerlo valer, y obtener así la escrituración de las tierras. La ley les obliga a realizar una costosa mensura para delimitar la posesión, que a su vez es el paso previo a la iniciación de un juicio de prescripción veinteañal, donde se debe recurrir necesariamente a un asesoramiento legal.

De esta manera, muchas empresas compraron tierras con los poseedores adentro, para luego iniciar acciones legales de desalojo. En la mayor parte de los casos, ante la falta de respuesta hacia los requerimientos judiciales, la caída de los plazos procesales, y la carencia absoluta de una defensa jurídica, los pobladores se veían sorprendidos de un día para el otro y expulsados de sus tierras legalmente, es decir, con una sentencia firme de desalojo en su contra. Pueden hojearse los diarios de la época y encontrar algunas crónicas más o menos extensas donde se relata la situación de familias enteras que deben abandonar sus ranchos con sus enseres básicos, obligados por la fuerza pública, después de haber perdido un juicio sin siquiera hubieran atinado a defenderse.

Una variante consistía en la realización de acuerdos o arreglos extrajudiciales, donde las empresas titulares de dominio ofrecían la entrega de escrituras de pequeñas parcelas, con la condición de que los pobladores se reubicaran y resignaran cualquier derecho adquirido sobre la tierra anteriormente ocupada. Para ello contaban con el asesoramiento de estudios jurídicos especializados y en la mayoría de los casos con la aprobación y el decidido apoyo de la dirigencia política local, que veía el avance de las empresas como una manera de atraer inversiones y promover un supuesto desarrollo o progreso para la región. La imposibilidad de articular una defensa jurídica eficaz hacía que este tipo de "arreglos" se concretaran con la firma de convenios de dudoso beneficio para los pobladores. De este modo las mayores superficies quedaban liberadas de pobladores y en condiciones de ser arrendadas, vendidas o explotadas directamente.

También se recurrió a medios ilegales, como el avance de hecho sobre las posesiones de los pobladores, colocando postes y alambres para impedir el paso de los pobladores por los caminos vecinales, o incluso para impedir su acceso a los ranchos o el paso de los animales para abastecerse de agua;

o se utilizaron prácticas aún más violentas como el avance de máquinas topadoras o de tractores arrasando recursos forestales, cultivos, y llegando a derribar viviendas e instalaciones de los pobladores.

Durante mucho tiempo, los desalojos, los “arreglos”, o los avances ilegales sobre las posesiones de los pobladores representaron un estado de crisis latente que no logró transformarse en un conflicto social manifiesto. En una apropiada caracterización, este proceso fue denominado como de “exclusión silenciosa” o “desalojos silenciosos”; ya que una de las partes involucradas en la disputa no reivindicaba su derecho al recurso en juego.¹⁴⁵

Con el surgimiento paulatino de la organización de los pobladores, los desalojos dejaron de ser una situación oculta, poniéndose en evidencia a través de un conjunto de acciones reivindicativas o repertorio de acciones colectivas de lucha y confrontación que, con el tiempo, resultaron un factor decisivo para moldear el movimiento campesino.

REPERTORIO DE ACCIÓN COLECTIVA Y LUCHA POR LA TIERRA

El repertorio de acción y de confrontación de un movimiento social es entendido como el conjunto de medios con los que dispone para realizar sus reclamos, que no se explica sólo en términos instrumentales de medios a fines, sino que principalmente debe entenderse como un aprendizaje cultural.

En el caso del movimiento campesino en Santiago del Estero, este repertorio no fue transmitido como una herencia del pasado, pues no hubo una tradición histórica de lucha reivindicativa o de manifestaciones campesinas en el espacio rural. En consecuencia, se fue conformando con prácticas y acciones colectivas innovadoras que incluyeron: movilizaciones masivas en pueblos del interior de la provincia o en ciudades como la capital de Santiago o la propia ciudad de Buenos Aires; diversas acciones de lucha y defensa gremial y jurídica frente a los intentos de desalojo o al avance compulsivo sobre las posesiones de los pobladores; manifestaciones vinculadas a las tradicionales prácticas de religiosidad popular como la masiva peregrinación anual al santuario del Señor de los Milagros del Mailín; prác-

¹⁴⁵ Alfaro, María Inés, *op. cit.*

ticas vinculadas al uso estratégico de los medios masivos de comunicación; nuevas formas de resistencia como las vigalias llevadas a cabo en los originales espacios simbólicos denominados “carpas negras campesinas”.¹⁴⁶

Como ya señalamos, la demanda por la tierra se constituyó desde los inicios del movimiento en el eje central de sus acciones reivindicativas, aunque con el tiempo también se fueron agregando reclamos referidos a aspectos tales como la falta de crédito y apoyo a la producción, la carencia de agua para riego, el deterioro de la rutas y caminos vecinales y provinciales, la falta de electrificación rural, y las carencias históricas de abandono en la atención a la salud y la educación en el medio rural.

La movilización por la tierra ocurrida en 1986 en el pueblo de Los Jurés, y que ya describimos en detalle anteriormente, tuvo singular importancia por su carácter inaugural y por haber transgredido los códigos habituales que regían la relación con el poder provincial constituido. En los años siguientes hubo otros episodios o acciones de protesta destacables. Tal es el caso de la movilización ocurrida el 4 de mayo de 1989, cuando varios ómnibus y camiones colmados de familias campesinas, también provenientes de Los Jurés, se estacionaron frente a la legislatura provincial, en pleno corazón de la ciudad capital de Santiago del Estero, trascendiendo de esta manera y por primera vez, el marco de lo local. En esa oportunidad el movimiento campesino contó con el apoyo de una entidad gremial de orden nacional como la Federación Agraria Argentina¹⁴⁷ y, al igual que tres años antes, se intentó nuevamente, aunque sin éxito, que el gobierno provincial intercediera en el conflicto que se mantenía con las empresas latifundistas radicadas en Buenos Aires.

Hacia fines de 1989, los diferentes grupos campesinos que se fueron articulando en organizaciones zonales en diversos puntos de la geografía provincial, decidieron darse una estructura organizativa de tercer grado, conformada por delegados de dichas organizaciones zonales. De esta manera se constituyó el MOCASE,¹⁴⁸ eligiendo el 4 de agosto de 1990, en

¹⁴⁶ La carpa consistía en una precaria construcción realizada con horcones y una cobertura de plástico negro.

¹⁴⁷ Estuvo presente en esta oportunidad Humberto Volando, líder histórico de la FAA.

¹⁴⁸ Las organizaciones zonales inicialmente integrantes del MOCASE fueron: La Unión de Pequeños Productores del Salado Norte UPPSAN, en los Departamentos Copo y Alberdi. La Comisión Central de Campesinos de Añatuya en el Departamento Taboada. La Comisión Central de Pequeños Productores “Ashpa Sumaj” (tierra linda) de Quimilí, en los Departamentos Mariano Moreno e Ibarra. La Comisión Central de Campesinos y la Cooperativa Agropecuaria “Unión Campesina” Ltda. de Los Jurés en los Departamentos Taboada e Ibarra. Las Comisiones Unidas de Pequeños Productores Agropecuarios del Departamento

Quimilí, su primera Comisión Directiva. En los años siguientes, el MOCASE tendrá una decisiva actuación en nuevos episodios de confrontación y en el diseño de una estrategia de lucha por la tierra, orientada a colocar el problema en el escenario nacional e internacional.

Destacamos algunos episodios, como la movilización realizada en Quimilí entre el 22 y 23 de julio de 1996, donde bajo el lema “no hay hombres sin tierra, ni tierra sin hombres”, que de alguna manera reprodujo, diez años más tarde, aquella primera movilización del pueblo de Los Jurés, aunque en un momento de mayor madurez del movimiento. El 8 de septiembre de 1998, el MOCASE participó de una movilización nacional realizada en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, convocada por la Federación Agraria Argentina y la Central de Trabajadores Argentinos, y que articulaba las demandas por la tierra, la vivienda, el hábitat y el desarrollo de diferentes sectores sociales del campo y la ciudad.¹⁴⁹

Hacia fines de 1998, más precisamente el 12 de octubre, se produjo un episodio en el paraje rural de La Simona, que marcaría un cambio en el marco referencial de las acciones colectivas del movimiento. En ese día se aproximaron topadoras de gran porte, sin orden judicial alguna, a los ranchos, los sembrados y el monte nativo de los antiguos ocupantes del paraje, con la pretensión de provocar un desalojo compulsivo. Para ejecutar esta maniobra contaban con el apoyo desembozado de la policía local y de civiles armados con escopetas. Las familias campesinas reaccionaron inmediatamente, invocando su derechos posesorios y poniéndole el cuerpo a las topadoras, apenas armados con palas y machetes. Superado este trance inicial, las topadoras tuvieron que detenerse y en los días siguientes las familias campesinas lograron armar una malla de apoyo y de contención gremial y jurídica frente a las agresiones. Con la misma celeridad con que las topadoras habían aparecido en sus vidas, se acercaron en su ayuda un conjunto de actores, destacando la presencia de los principales dirigentes

Figuroa CUPPAF. La Asociación de Pequeños Productores Agrícolas y Cabriteros APPAC, de los Departamentos Robles y San Martín. Los productores cabriteros de Garza en los Departamentos Avellaneda, San Martín y Sarmiento.

¹⁴⁹ Grupo de Estudios Rurales, Instituto Gino Germani UBA, “El encuentro por la tierra, la vivienda, el hábitat y el desarrollo. Una plaza, muchos países”, en *Realidad Económica*, núm. 160/161, noviembre de 1998 a febrero de 1999, Buenos Aires, IADE.

del MOCASE, de distintas ONGs de actuación en la Provincia, de la Pastoral Social de la Diócesis de Santiago, de la CTA, y de diferentes sectores de la cultura provincial. A su vez, los medios de comunicación nacionales, y en segunda instancia locales, se hicieron presentes con una rapidez que hubiera sido impensable años atrás. Precisamente una de las condiciones de éxito de este tipo de intentos de desalojo violentas e ilegales había sido su falta de visibilidad social, su carácter "silencioso", lo que garantizaba su impunidad.

Los pobladores de la Simona decidieron instalar la "carpa negra" en el mismo lugar del conflicto, constituyéndose en un espacio o lugar simbólico de resistencia y de vigilia permanente, en punto de encuentro para los apoyos solidarios, y en epicentro de las gestiones y negociaciones que se sucedieron en los meses siguientes.

Para tratar de comprender el sentido y el alcance de las acciones que se fueron llevando adelante en el seno del movimiento, apelaremos al concepto de marco referencial de las acciones colectivas, que también puede ser útil para analizar el lugar estratégico que han tenido estas acciones en la sociedad global, en la medida que pudieron adquirir "resonancia", es decir, que entraron en el debate público y en la cultura política más amplia de dicha sociedad global.

Para William Gamson,¹⁵⁰ los marcos referenciales de la acción colectiva contienen tres elementos vinculados entre sí. El primero se refiere a la indignación moral que conlleva una situación de injusticia, y que remite a un juicio de valor sobre lo que es equitativo o lo que corresponde en justicia. El segundo se refiere al proceso de concientización de que es posible cambiar las condiciones de vida a través de la acción colectiva y por lo tanto coloca a los individuos como agentes potenciales de su propia historia. El tercero, al cual ya hicimos referencia extensamente antes, supone el proceso de construcción de una identidad. Hasta el episodio de La Simona, en el discurso de los dirigentes del movimiento campesino, predominaba la apelación al derecho a la tierra, que se estaba conculcando en forma sistemática mediante diferentes maniobras legales o ilegales que provocaban la expulsión de los campesinos de sus tierras

No me gustan las injusticias que se están cometiendo con los campesinos. Creo que la gente que nace y crece en un lugar, ama

¹⁵⁰ Ibarra y Tejerían (2000).

esa tierra por naturaleza, y por eso tiene derechos, porque ha nacido allí, la trabaja y la cuida (M. Q. dirigente campesina).

Esta apelación al derecho conculcado logró articularse parcialmente con el marco referencial de la defensa de los derechos humanos, que en la sociedad nacional había tenido su mayor impulso en los años '80. A partir del episodio de La Simona, los dirigentes campesinos lograron percibir y luego introducir en su discurso la cuestión de la tierra en tanto problema ambiental, que afecta no sólo a los poseedores, sino a la sociedad en su conjunto. Este nuevo marco referencial se pone en sintonía o se articula con un discurso conservacionista de los recursos naturales que tendió a instalarse en los años '90 en la sociedad global. Además tuvo la virtud de colocar el conflicto por la tierra en un conflicto más amplio, entre la apropiación privada de los recursos naturales y ecosistemas (tierra, agua, biomasa) y la propiedad social de los mismos.¹⁵¹

Un poderoso aliado en esta tarea de colocar en el debate público la cuestión de la tierra como parte de un marco referencial más amplio, fueron los medios de comunicación. Especialmente las imágenes captadas por la televisión de las topadoras arrasando el bosque nativo y que fueron transmitidas en todo el país, lograron un amplio impacto y repercusión pública.

También hacia fines de los años '90, los principales dirigentes del movimiento comienzan a proponer la consigna de una reforma agraria como ideal o como objetivo de la lucha, donde no sólo se incluye la necesidad de resolver el problema de titulación de las tierras, sino que se agrega la noción de integralidad y de sustentabilidad.

"Es necesario reclamar una política de desarrollo rural que asegure la sostenibilidad económica, ecológica y social".¹⁵²

Finalmente, la demanda de una reforma agraria integral y sustentable no se plantea como demanda a un Estado benefactor que, por otra parte, ya no existe, sino como una propuesta de trabajo conjunto. Sin desconocer el papel directriz del Estado, el movimiento se percibe como sujeto activo en la definición y eventual aplicación de la política pública. Está presente la idea de un planeamiento estratégico que incluye la articulación entre los diversos sectores involucrados en la problemática. Esta perspectiva marca

¹⁵¹ Piñeiro, Diego (1995).

¹⁵² Conclusiones del Primer Congreso del MOCASE, Santiago del Estero, 25 y 26 de noviembre de 1999 (mimeo).

una diferencia sustancial con las clásicas propuestas de reforma agraria de los años '60.

CONSIDERACIONES FINALES

El movimiento campesino en Santiago del Estero comparte algunos de los rasgos o características distintivas del conjunto de nuevos movimientos sociales surgidos en las últimas décadas en nuestro país.

En sus inicios reconoce una fuerte impronta de la Iglesia Católica como institución matriz, tanto en el plano ideológico como en el despliegue de una metodología de intervención promotora del asociativismo y de la participación activa de los campesinos en la defensa de sus intereses y solución de sus problemas. El soporte metodológico fue proporcionado en los inicios por diversas ONGs estrechamente vinculadas a la Iglesia institucional.

El posterior proceso de maduración organizativa del movimiento agrario supuso el desprendimiento de la tutela eclesial, en una clara disputa por el control del sentido y orientación del movimiento. Este deseo de autonomía trajo no pocas situaciones de conflicto que se fueron saldando a favor de la continuidad del movimiento, primero en la zona de Los Juríes, luego en otras zonas como Quimilí o San José de Boquerón.

No obstante, siguió siendo importante en términos de alianza estratégica el acompañamiento de otros sectores que, aún manteniendo su opción religiosa, siguieron apoyando al movimiento sin pretensión de hegemonizar su orientación.¹⁵³

Otro factor a tener en cuenta, y que estuvo presente desde los inicios del movimiento, es el desfavorable contexto y cultura política locales. La clase política provincial, lejos de generar oportunidades para el despliegue del movimiento, intentó desactivarlo en forma sistemática, apelando a todo tipo de maniobras legales e ilegales.

Sólo puede caracterizarse como oportunidad política, la aparición a mediados de los años '90 de un conjunto de planes y programas sociales del Estado nacional, que se focalizaron sobre el sector rural empobrecido, y

¹⁵³ La otra Diócesis de Santiago, a partir de la asunción de Monseñor Gerardo Sueldo como Obispo en el año 1993, se convirtió, a través de la acción de la Pastoral Social, en una importante institución de apoyo del movimiento campesino sin la pretensión tutelar mencionada.

que operaron con una lógica asistencial antes que clientelar. Es decir, no pretendieron establecer una relación de dominación, sino simplemente de asistencia o provisión de bienes y servicios a cambio de ciertas obligaciones reguladas normativamente. Esta asistencia proveyó de un importante flujo de recursos que contribuyó al sostenimiento material de las bases del movimiento.

La paulatina construcción de un sujeto colectivo campesino, con una identidad propia, tiene a nuestro parecer, mayor valor explicativo para entender el proceso de expansión y persistencia posterior del movimiento. A su vez, donde se puso en juego más decididamente la construcción de dicha identidad ha sido (y sigue siendo) en las acciones de confrontación o lucha por la tierra, entendida como espacio vital y condición de existencia.

Desde una situación inicial de "desalojos silenciosos", el movimiento fue desplegando un repertorio de acciones colectivas innovadoras en la lucha por la tierra, que con resultados relativamente magros en términos de la resolución de los problemas, fueron en cambio moldeando y haciendo reconocible un sujeto campesino cada vez más consolidado y visible para la sociedad provincial y nacional.

Para concluir queremos colocar dos interrogantes sobre el futuro del movimiento.

Por un lado, el MOCASE, en tanto representa la estructura organizativa que mejor expresa al movimiento campesino, aunque no lo agota, está atravesando una crisis interna importante. Hacia fines del 2001 se ha dividido en dos sectores que expresan diferencias aún no suficientemente decantadas, y que por lo mismo no son objeto de análisis en nuestro trabajo. De todos modos esta división no puede dejar de verse como una debilidad, en tanto refleja a nuestro juicio no una crisis de crecimiento, sino una disputa ideológica y metodológica profunda.

Por otro lado, es probable que asistamos en un futuro cercano a la agudización de los conflictos por la tierra, ya que la expansión de la frontera agropecuaria, lejos de estabilizarse, se ha acelerado en los últimos tiempos de la mano de los cambios en el contexto, tanto en el mercado de tierras como en el mercado de productos agroexportables (en especial de la soja). En contrapartida, la capacidad de respuesta del movimiento deberá ampliarse y consolidarse, estableciendo las alianzas estratégicas necesarias para contener un avance que parece incontenible.

rubendedios@arnet.com.ar

BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro, María Inés (1996), *Conflicto social y acciones colectivas: el caso de los campesinos santiagueños*, Informe parcial de investigación, marzo, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
- Calhoun Craig, *El problema de la identidad en la acción colectiva*, traducción de Javier Auyero, (mimeo).
- Conclusiones del Primer Congreso del MOCASE, 25 y 26 de noviembre de 1999, Santiago del Estero (mimeo).
- Cowan Ros, C. (2000), "ONGs de desarrollo rural: estructura, dimensión y desafíos ante el nuevo siglo", en *Realidad Económica*, noviembre-diciembre, núm. 176, Buenos Aires.
- De Dios, R. y M., Gutiérrez (1999), "La participación y la construcción de actores en los programas focalizados del estado", ponencia presentada en el XXII Congreso XXII ALAS, Concepción.
- Documento de Puebla. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (1979), *La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina*, Buenos Aires.
- _____*El Movimiento de los Sin Tierra en Brasil*, mayo de 1999, MST, Instituto de Estudios y Formación CTA.
- Jordan, Fausto (compilador) (1989), *La economía campesina: crisis, reactivación y desarrollo*, San José de Costa Rica: IICA.
- Ferrara, Francisco (1973), *Qué son las ligas agrarias. Historia y documentos de las organizaciones campesinas del Nordeste argentino*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gohn, Maria da Glória (1997), *Teorias dos Movimentos Sociais*, Sao Paulo, Brasil: Ediciones Loyola.
- Grupo de Estudios Rurales, Instituto Gino Germani UBA, "El encuentro por la tierra, la vivienda, el hábitat y el desarrollo. Una plaza, muchos países", en *Realidad Económica*, núm. 60/161, noviembre de 1998 a febrero de 1999, Buenos Aires: IADE.

- Ibarra y Tejerían (comps.) (1998), "Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural", Madrid: Trotta, citado en Farinetti, Marina (2000), *Violencia y risa contra la política en el Santiagueñoazo. Indagación sobre el significado de una rebelión popular*, Apuntes de Investigación del CECYP, año IV, núm. 6, noviembre, Buenos Aires.
- Moyano Walker, M y L., Pérez Esquivel (1999), *La Iglesia Católica y los movimientos agraristas en el cono sur (1960-1970)*, Ponencia presentada en las Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 4 y 5 de noviembre, Buenos Aires.
- Piñeiro, Diego (1995), "Desafíos e incertidumbres para la sociología agraria en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo", en Piñeiro, D. (comp.), *Globalización, integración regional y consecuencias sociales sobre la agricultura*, Asociación de Universidades, Grupo Montevideo 5º aniversario, Montevideo.
- Sorj, Bernardo y Jhon, Wilkinson (1990), "De campesino a ciudadano: cambio tecnológico y transformación social en los países en desarrollo", en *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, junio, núm. 124, pp. 133-142, citado por Piñeiro, Diego et al.
- Tarrow, Sydney (1997), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza Universidad.
- Van Dam, Chris (1999), *La Tenencia de la Tierra en América Latina. El Estado del Arte de la Discusión en la Región*, Documento preparado para la Iniciativa Global Tierra, Territorios y Derechos de Acceso, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Oficina Regional para Sud América/SUR, agosto.
- Vio Grossi, F. et al. (1988), *Investigación participativa y praxis rural*, Santiago de Chile: CEAAL.

LOS PROGRAMAS DE EMPLEO A DESOCUPADOS COMO RESPUESTA A LA CRISIS POR LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES. EL CASO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA PETROLERA YPF EN CUTRAL-CÓ Y PLAZA HUINCUL ¹⁵⁴

Karina Crivelli

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se propone indagar acerca de la aplicación de los programas de empleo estatales como una respuesta para intentar paliar los efectos de la crisis generada por la privatización de las empresas estatales. El caso en que nos concentraremos es el de la privatización de la ex empresa petrolera estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul. El interés que ponemos en estos casos está relacionado con diversos aspectos que nos resultan fundamentales para obtener algunas preguntas y consideraciones que guiarán nuestro trabajo, y que intentaremos responder someramente en las conclusiones que emanarán del presente.

La primera motivación para desarrollar este trabajo fue la expresión palpable de una nueva forma de protesta (los cortes de ruta) que se dio en nuestro país y que adquirió relevancia nacional como pocas veces antes una protesta del interior del país había ocasionado. En este sentido cabe señalar que estas protestas realizadas en los años 1996 y 1997 en aquellas localidades de la provincia de Neuquén, en el sur de nuestro país, constituirán casos paradigmáticos que marcarán el inicio de esta nueva forma de protesta, la cual se irá moldeando con el tiempo y se extenderá como una "forma posible de reclamo" de los nuevos sectores sociales a los que

¹⁵⁴ El presente artículo está basado en un trabajo elaborado junto con la Lic. María Florencia Sourrouille para la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo del Centro de Estudios Avanzados de la UBA.

se identificará, de ahí en más, como “piqueteros” (Svampa y Pereyra, 2003; Pasquín y Remis, 2002; Favaro *et al.*, 1997, entre otros). Una de las preguntas que nos surgen a partir de estas manifestaciones tan masivas es tratar de identificar cuáles son las motivaciones de estas protestas y, en este último sentido, tendríamos que remontarnos a tratar de entender diversas características propias de la zona de la que intentamos dar cuenta y de los cambios productivos que vinieron de la mano de la implementación de un nuevo modelo económico y de acumulación que se dio en nuestro país.

Por lo tanto, en una primera instancia consideramos necesario indagar sobre el contexto macroeconómico que impone cambios; las características particulares de la zona que estaba dominada por la actividad que desarrollaba la empresa petrolera; la situación económico-social que precedió a la privatización de YPF; el impacto socioeconómico generado por el proceso de privatización; los efectos que generó la privatización en el mercado de trabajo y las respuestas que asumieron los gobiernos nacional y provincial frente a la irrupción en la escena pública de los nuevos actores sociales, denominados “piqueteros”.

Antes de comenzar a tratar el caso específico que nos atañe, consideramos necesario hacer referencia a los cambios que comenzaron a darse en nuestro país desde la instauración de la dictadura militar de 1976 que impuso un nuevo modelo de acumulación, el cual trajo las consecuencias que señalaremos enseguida.

ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA INSTAURACIÓN DEL ESTADO NEOLIBERAL EN ARGENTINA

Uno de los aspectos fundamentales del Estado de bienestar argentino fue poner el énfasis en el mercado interno y en el fuerte rol que adquirió el Estado para llevar a cabo las políticas económicas y sociales, las cuales tuvieron un carácter universalista que fue funcional al modelo económico sustentado en el periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Este “modelo de Estado” comienza su crisis con la instauración de la dictadura militar de 1976, momento en que comienza a cuestionarse la efectividad de las instituciones públicas (Basualdo, 2001; Battistini, 2002; Battistini, 1999). El proceso hiperinflacionario de 1989, que acelera la caída del gobierno de turno puede considerarse como el punto de plena manifestación de la crisis del Estado de bienestar argentino, a partir del cual

—entre otras cosas— se precipita la deslegitimación de las políticas sociales vigentes (Lo Vuolo, 1998; Barbeito y Lo Vuolo, 1995). Este proceso se vio sustentado a nivel internacional con las “recetas” formuladas por la ideología neoliberal, las cuales fueron impartidas por los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra en 1979 y de Reagan en Estados Unidos en 1980, y por los postulados emanados del Consenso de Washington. Es decir, los cambios que se dieron en la sociedad argentina a partir de la dictadura militar de 1976 y que se profundizaron en la década de los '90 (Danani y Lindenboim, 2003) deteriorando las relaciones sociales al interior de la misma, se dieron en el marco de un nuevo discurso ideológico que se presenta como hegemónico. Es en ese momento cuando se imponen los preceptos más puros del pensamiento neoliberal y a los que adhiere el gobierno en el poder. Una de las consignas más importantes de este pensamiento que postula el crecimiento económico autosostenido, es la construcción de un mercado puro mediante la lógica de la desregulación financiera; lo cual estaría garantizado por medidas de política económica que tendieran a destruir aquello que se interpusiera en la “lógica del mercado puro” (Bourdieu, 1998).

El gobierno de Menem que accede al poder a mediados de 1989, lo hace con un discurso y medidas propuestas de corte populista; ya en el poder, asume el discurso y pensamiento neoliberal (con todos sus preceptos) como propios y los profundiza conformando una coalición política con sectores que históricamente representaron el pensamiento conservador en el país (Barbeito y Lo Vuolo, 1995). Es así como la política que lleva adelante el gobierno se asienta sobre programas de ajuste macroeconómico y de dismantelamiento del sector público como una forma de paliar los efectos de la crisis fiscal, la caída del empleo y el deterioro de los ingresos. En este estado de cosas y frente a las características que presenta la realidad económico-social argentina es que se fundamenta la instalación de un modelo de apertura económica, en donde ya no es el Estado el promotor de las políticas, sino que es el sector privado el que asume el rol más dinámico en la economía (el mercado es quien optimiza los recursos y quien tiene un rol hegemónico en decisiones del sector público cada vez más reducido). En este sentido, los ejes centrales de las medidas de ajuste estructural que se proponen en el nivel local son: la privatización, la desregulación y la apertura externa; estas políticas buscan, fundamentalmente, la recuperación de la tasa de ganancia a través del abaratamiento de la fuerza de trabajo. Como se introdujera anteriormente, esta modalidad de ajuste se encuentra contenida conceptualmente en las medidas de política del Consenso de Washington y su implementación —según los efectos proclamados— ha

tendido en las primeras etapas, al control inflacionario, la expansión del comercio externo, el aumento de la productividad y el crecimiento económico. Pero este enfoque comienza a presentar limitaciones hacia mediados de la década de los '90, debido a los bajos niveles de inversión en las economías regionales, los escasos niveles de incorporación tecnológica y la poca generación de empleo productivo de calidad (Bustelo, 1998). Se puede decir que estas transformaciones que caracterizaron la etapa de "mayor esplendor" de la aplicación a ultranza de las "recetas" neoliberales, implicaron consecuencias a las que aún hoy es muy difícil dar respuestas positivas; dichas consecuencias se materializaron en la destrucción y expulsión del mercado de trabajo de gran parte de las fuerzas productivas, limitando a los trabajadores de la posibilidad de aspirar a sus derechos sociales y desmantelando las instituciones sociales creadas durante el estado de bienestar. La desintegración del sistema económico produjo grandes cambios en lo laboral y lo social; específicamente en el mercado de trabajo provocó un proceso de terciarización, la caída de la tasa de asalarización en la que debe señalarse una importante expulsión de empleados públicos debido a la privatización de empresas del Estado, el aumento del cuentapropismo, la informalidad laboral y la incorporación de fuerza de trabajo secundaria en búsqueda de ingreso complementario.

El achicamiento del mercado de trabajo formal, la pérdida de derechos y garantías de parte de los trabajadores y la crisis de la seguridad social, muestran el debilitamiento de los lazos de integración social de la sociedad y la vulnerabilidad a la que se enfrentan sus miembros. Es una sociedad caracterizada por la exclusión de los sectores más pobres, la decadencia de los beneficios del sistema de políticas sociales, el agravamiento de los problemas de desigualdad y marginalidad debido a la distribución regresiva del ingreso, la concentración del ingreso y la falta de capacitación de la fuerza de trabajo.

Como se señalara, la sociedad argentina ha sufrido un proceso de deterioro del mundo del trabajo, evidenciándose entre otras cosas en las altas tasas de desempleo. Para intentar paliar esta situación de crisis, el Estado neoliberal ha llevado a cabo reestructuraciones en la política social que acompañan las nuevas políticas que implementará el gobierno de Menem en materia económica siguiendo los dictados de los organismos internacionales de crédito. Es así como —siguiendo a Vilas— podemos decir que:

La política social del modelo neoliberal es encarada como un conjunto restrictivo de medidas para compensar los efectos

negativos del ajuste estructural sobre algunos segmentos de la población; ella responde a un enfoque transitorio, ya que al superar la etapa inicial, la reactivación y el saneamiento de la economía de mercado, generará nuevos equilibrios (Vilas, 1997).

Esta política social de una sociedad cada vez más fragmentada y en donde la crisis en el trabajo —el desempleo, el subempleo, la precarización laboral— conduce a una mayor individualización de los actores, hace cada vez más difícil que se reconozcan como sujetos colectivos. Teniendo en cuenta esto, cuando se habla de política social se piensa en asistencia focalizada hacia los más pobres y vulnerables. Siguiendo al mismo autor, podemos señalar que califica a la política social como cumpliendo básicamente una función bomberil, “se actúa en situaciones límites que pueden convertirse en focos de tensión política, las cuales tienden a generar mayor inestabilidad social, creando factores de inseguridad que afectan negativamente al flujo de fondos financieros externos, y cuestionan la gobernabilidad del modelo” (Vilas, 1997). Por lo tanto, podríamos decir que las políticas asistencialistas o compensatorias (también llamadas “de emergencia”) aparecen —más que nunca— ligadas a “controlar el orden social”. Como lo señala Sonia Draibe: “la política social tiende a ‘asistencializarse’”; “las políticas sociales quedaron reducidas a simples instrumentos para administrar la crisis de lo social” (Draibe, 1994); instrumentos éstos que, como alude Pierre Rosanvallon, no parecen adecuarse a las tensiones y contradicciones por las que atraviesa la sociedad actual, que está signada por situaciones de desempleo masivo y exclusión creciente que la afectan estructuralmente.

ACERCA DE LA PRIVATIZACIÓN DE YPF

ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA REGIONAL QUE LA PRECEDIERON

En consonancia con los cambios mencionados anteriormente, debemos referirnos en particular a las alteraciones que se producen en la dinámica industrial argentina desde fines de los años '70, y que se expresan en cambios que atañen —entre otros— a una considerable disminución del ritmo de la actividad productiva que se venía desarrollando hasta ese momento; lo cual afecta directamente al empleo en las localidades en que se desarrollaba la actividad industrial (Beccaria y Quintar, 1995). Llegados los años '90

y en el marco de las políticas de ajuste promovidas desde el Estado neoliberal se plantea —entre otras políticas— la privatización de los activos estatales, con el propósito de financiar al sector público y promover el equilibrio fiscal para lograr la estabilización macroeconómica (Beccaria y Quintar, 1995). En este contexto, una de las privatizaciones que se llevarán a cabo y la que nos interesa en el marco de este artículo, es la privatización de la petrolera estatal YPF. Cabe señalar que las medidas económicas implementadas a principios de la década de los '90, también implicaron la desregulación de los mercados y la apertura económica; frente a estas medidas, las empresas nacionales debieron realizar una reconversión tecnológica como una estrategia para seguir compitiendo en el mercado globalizado. Pero una de las consecuencias de dicha reconversión es la elevada expulsión de fuerza de trabajo asalariado; es decir, la privatización de las empresas del Estado también trajo aparejada la profundización del problema de desempleo. Cabe destacar que este proceso referido al caso de YPF (privatización de empresa estatal, reconversión tecnológica y expulsión de grandes contingentes de mano de obra asalariada) puede ser trasladado al resto de las empresas privatizadas sin dejar de observar sus características particulares.

Es así como se configura una nueva estructura productiva nacional desregulada, aperturista y privatizada, que provocará cambios y modificaciones a nivel económico y establecerá un nuevo escenario social, cultural y político. Este proceso —como intentaremos mostrar a lo largo de este recorrido— implicará un elevado costo social, dado que no incluye acciones anticipatorias del Estado que tiendan a atenuar los impactos negativos de la privatización de YPF; el Estado se retira de sus funciones tradicionales y “deja todo librado a los mecanismos del mercado” (Beccaria y Quintar, 1995). Cabe mencionar que una de las respuestas políticas desde el Estado nacional fue la modificación de leyes laborales que tendieron a la reducción de los costos laborales; por ejemplo, con la implementación de la Ley de Flexibilización Laboral se estableció —entre otras cosas— el nuevo régimen de contratación por tiempo determinado. La incapacidad de los gobiernos nacional y provincial para revertir la crisis socioeconómica y del empleo empeoró la situación de los trabajadores que se vieron afectados por las privatizaciones de empresas estatales, llevando a gran parte de la población hacia los límites de la pobreza, de la marginalidad y de la exclusión.

De acuerdo con lo expuesto en la entrevista realizada a un ex empleado de YPF (geólogo), es posible detectar el alcance que tuvo YPF en el proceso de desarrollo de Cutral-Có y Plaza Huinul; ya que no sólo generó un

gran impulso económico en la región, sino que también implicó el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Cabe destacar que a partir del establecimiento de YPF se desarrollaron emprendimientos de diversas características, abarcando diversas áreas como: recreación, salud, educación, vivienda, deportes, que si bien eran destinadas principalmente a los empleados de la empresa, también eran utilizadas por los pobladores de estas localidades, como es el caso del hospital, el cine y la escuela, entre otros.

Vos contá toda la gente que había ahí, y después había otros sectores que digamos hacen a la parte social, relaciones laborales, personal (...), obra social. La obra social se ocupaba de mantener todas las casas de YPF, de pintarlas, de repararlas, plomeros, electricistas, había talleres de carpintería, pero enormes que hacían todo lo que eran puertas o hacía muebles o reparaba todas esas cosas. Había sectores de parques y jardines, había sectores de toda la parte de medicina, también de medicina laboral, tenían hospitales propios. O sea que YPF no solamente se ocupaba del petróleo sino de a lo mejor construirte una casa, o construir tres casas, después mantenerlas, y todo lo que se te ocurría, lo que se te ocurra a vos, es así. De donde yo vivía, había un montón de edificios oficiales hasta que vos llegabas a una plazoleta donde había un cine —un cine que también era de YPF— porque en ese lugar no había una cancha de bochas que no la haya hecho YPF. El cine más grande de la Patagonia lo tenía YPF. El único club que tenía una pileta era YPF, tenía cancha de fútbol con césped en su tiempo, las únicas dos canchas de tenis que había las tenía YPF, en 50.000 habitantes. El gobierno no hizo absolutamente nada con la gente que vivía en el pueblo. La gente que estaba metida dentro YPF, dice hay que hacer algo para que nos divirtiéramos nosotros, para que los pibes tengan algo que hacer (claro) y no estén ahí amontonados, no había dónde ir. Un clima jodido, un clima hostil... que vos no podés estar afuera y los chicos no tenían a dónde ir si no iban a YPF. YPF tenía dos salones para jugar al básquet, al fútbol, practicar voley y los deportes que vos quisieras. Había un salón Municipal en Cutral-Có que se hizo después y era un sólo salón para todo Cutral-Có. ¿Dónde hacían deporte los chicos? Dentro de la escuela, en los salones de la escuela (geólogo, ex empleado de YPF).

Por otra parte, si bien la modalidad de contratación de YPF se basaba principalmente en la incorporación de mano de obra calificada desde Buenos Aires que luego era trasladada a las localidades del interior del país, también absorbía a parte de la población del lugar en donde ella se instalaba.

Se formaba una comunidad separada de las propias ciudades, ahí en general iba a vivir la gente que venía de afuera. YPF digamos la trasladaba o la tomaba en general en Buenos Aires y la mandaba al interior. Pero también se formaban asentamientos dentro de las ciudades propias de la provincia, de gente que venía de afuera a laburar en el petróleo pero que no ingresaba en Buenos Aires, sino que ingresaba en Huincul y a ellos no les daban casa. Con los años podían conseguir de acuerdo a su categoría una casa dentro del campamento y se salvaban de los alquileres y todo eso... y eso se tomaba como parte de pago. Eso un poco chocaba con la gente que estaba allá porque la gente no lo entendía, pero no había en el ambiente, en esos lugares, gente preparada para hacer ese trabajo. Trabajo de... digamos de dirección, profesionales, ingenieros, geólogos, y no había, ni médicos, eran todos tipos que venían de afuera. Por eso se formaban esas comunidades que chocaban un poco con la gente del lugar porque la gente decía por qué no nos dan esos lugares a nosotros y por qué tiene que ser gente de afuera. Pero esa gente, ese pueblo, no podía proveer del material que necesitaba la empresa (geólogo, ex empleado de YPF).

La gente que pertenecía a estas zonas desarrollaba otras actividades que también eran necesarias para el funcionamiento de la empresa y de la comunidad en general. Generalmente se desempeñaban en actividades de servicios vinculadas con la empresa (actividades subsidiarias a YPF) y también en áreas relacionadas con el desarrollo de la comunidad.

Generalmente ellos querían ingresar en perforación, terminación y esos servicios, o trabajaban en el hospital, enfermeras, gente de mantenimiento... Luego empezaron a ingresar técnicos porque con el tiempo fueron creando escuelas de técnicos en el lugar y fueron ingresando técnicos también (...) (geólogo, ex empleado de YPF).

Como surge de los párrafos anteriores, YPF se constituía en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul, como la principal generadora de empleos, los cuales tendrán que ver con áreas de producción que incluyen: excavación, extracción y demás procedimientos referidos específicamente a la explotación y comercialización del petróleo, y también con una amplia área de servicios que no estarían vinculados con el petróleo propiamente dicho; sin embargo, dada su gran envergadura, proporcionaron una importante fuente de trabajo local. En referencia a esto último, señalamos a la obra social, que según se menciona en la entrevista “la obra social se ocupaba de mantener todas las casas de YPF, de pintarlas, de repararlas: plomeros, electricistas, había talleres de carpintería... que hacían todo lo que era puertas y ventanas o hacían muebles o reparaban todas esas cosas”. Con lo cual el área de servicios de YPF era muy grande y cubría todas las necesidades de sus empleados, al mismo tiempo que se presentaba a sí misma como generadora de empleos. Los contratos de este tipo de servicios eran manejados por el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (S.U.P.E.) y de allí es posible deducir el alto costo que estos contratos ocasionaban.

O sea que había mucha gente que las empresas petroleras, en las grandes empresas petroleras, no las tiene. Las empresas petroleras tienen nada más que los sectores de producción, y de exploración, y de explotación. El resto los contrata si los necesita, entonces vos tenías un montón de servicios que en realidad no decían nada, no le hacían nada al petróleo. Y como manejaban todas estas cosas los gremios, el gremio SUPE manejaba todo esto, generalmente cobraba mucho más la gente que no tenía categoría, que la que tenía categoría y responsabilidad. Había un punto de la categoría que nadie quería pasar porque para arriba se le perdían las horas extras, se le perdían las guardias, tiempo en viaje... [...] Entonces había por ejemplo una compensación que se llamaba técnica: bonificación por eficiencia colectiva, eso en teoría nació para pagar si descubríamos petróleo o si hacíamos buenos números, o si ganábamos plata, pero lo cobraba todo el mundo (...) primero lo cobraban algunos, después lo cobraba todo el mundo y ganáramos o perdiéramos no importaba. Importaba mucho la cantidad de años que estuvieras vos de servicio, si vos tenías un año de servicio te daban el 60% del sueldo, si tenías 20 años de servicio te daban 5 sueldos entonces a fin de año todos comprábamos autos. Era... digamos, para mí ahora desde este punto de vista era una exageración ¿no es cierto? (geólogo, ex empleado de YPF).

En síntesis, podemos decir que YPF era el mayor generador de empleos y, como tal, también constituía un medio de cohesión social al interior de la comunidad; por medio del trabajo en la empresa, los trabajadores reproducían sus necesidades básicas y también construían su propia identidad. La privatización de YPF —a partir de 1991— implicó en un primer momento, la expulsión del mercado de trabajo de unos 4 500 operarios a los que se agrega un número no preciso de empleados cesantes de las empresas privadas ligadas a la actividad que se desarrollaba en YPF y que le ofrecían sus servicios. Si bien estas cifras resultan muy alarmantes, específicamente en los casos de Cutral-Có y Plaza Huinul, YPF compensó la pérdida de empleos con las respectivas indemnizaciones.

Éramos como 5.000; de los 5.000 quedamos 500. Pero le dieron plata a todos, todo el mundo es decir la situación fue algo así: empezaron con los retiros voluntarios. Ahí a quien se quería ir le daban sueldos libres de gastos y qué sé yo y en esa primera tanda en 1991, 1992, 1993 se fueron un montón de tipos que estaban ahí dando vueltas, estaban en la que si me dan guita me voy, viste me voy a hacer no sé qué... En general había un grupo que se iba y había una orden de dejar ir a cualquiera. Digamos, vos no tenías que tratar de retener a uno... se tienen que ir los que quieran... (geólogo, ex empleado de YPF).

IMPLICANCIAS GENERADAS POR LA PRIVATIZACIÓN A NIVEL SOCIOECONÓMICO Y DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA REGIÓN

Como se mencionara anteriormente, la empresa YPF adquirió gran relevancia en Cutral-Có y Plaza Huinul. Por estos motivos, los autores que han investigado acerca de este tema coinciden en remarcar el alto impacto socioeconómico generado en las localidades, debido a la privatización de la empresa (Svampa y Pereyra, 2003; Pasquín y Remis, 2002; Favaro y otros, 1997, entre otros).

Entre las consecuencias de la privatización y racionalización del personal de la empresa YPF, no sólo se puede identificar la pérdida de trabajo de sus empleados, sino también la influencia que tuvo en aquellos pobladores (comerciantes, subempleados y demás actividades) que indirectamente desarrollaban actividades económicas, las cuales dependían de los ingresos de los empleados de la empresa privatizada. Esta disminución de población ocupada tuvo un impacto negativo sobre el nivel de actividad de la región,

la cual estaba en función, en buena medida, de la demanda de los asalariados de la petrolera.

El problema principal era que la mayor parte de estos capitales de las indemnizaciones fueron invertidos en emprendimientos que no tuvieron resultados positivos o se fueron hacia otras provincias.

Bueno algunos formaron emprendimientos, seguían siendo de perforación. Los equipos... es muy importante ¿quién tomó los equipos de perforación? Los tomó el S.U.P.E., un negocio de los sindicalistas con el gobierno porque así el S.U.P.E. no hizo ningún tipo de despelote en absoluto. Echaron a todo el mundo y el S.U.P.E. no dijo nada, nunca dijo nada. ¿Por qué? Porque le daba de comer, entonces no dijo nada. Siguió trabajando la gente ahí... Se formaron todos los emprendimientos y aquellos que no quisieron, pusieron un quiosco. Bueno, vino la desregulación ésta y había 15 negocios en las 7 cuadras de la avenida; todo igual: quioscos, despensas, despensas, quioscos. Se fundieron todos, perdieron toda la guita. Los otros son los que se compraron un auto, esperando conseguir un laburo, no consiguieron nada, se comieron la guita, y seguro que los que hicieron mal las cosas son como el 50% (geólogo, ex empleado de YPF).

Todo esto ha provocado un deterioro en las condiciones de vida de estas personas y sus familias, lo cual —luego de pasados unos años de iniciada la privatización— se expresó y canalizó mediante una nueva forma de protesta, a través de los cortes de ruta llevados a cabo por los pobladores del lugar.

Como señaláramos anteriormente, durante varias décadas la vida económica y sociocultural de las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul dependió de YPF, y alrededor de la empresa se desarrollaron proveedores de bienes y servicios, comercios y profesionales. En ese sentido, podemos decir que los efectos de la privatización de la ex empresa estatal no sólo son sentidos por los trabajadores directamente afectados sino que se difundieron a toda la región. Entre las características más destacadas del mercado laboral de esta zona se pueden señalar un alto porcentaje de asalariados capacitados y con empleo estable y niveles de ingreso relativamente elevados comparados con otros empleados estatales. Como se mencionara anteriormente, la situación de bonanza empezó a cambiar hacia fines de los '70 y se agudizó a comienzos de los '80 cuando, en el marco de la política de

privatización de los activos estatales, YPF lleva a cabo la racionalización de sus planteles expulsando a gran parte de sus empleados, lo cual ha determinado la caída en los niveles de actividad de la región (entre los que se incluyen los despidos de sus subcontratistas) y el crecimiento de actividades informales.

Frente a estas carencias y efectos de la privatización, los hogares adoptaron distintas estrategias para mantener su reproducción: muchos recurrieron al establecimiento de actividades por cuenta propia y/o pequeñas unidades productivas; otros, recurrieron a modificaciones en la organización familiar mediante la incorporación de otros miembros del hogar al mercado de trabajo.

Lo que se pretende destacar es la ausencia de acciones del Estado que orientaran la transición y reconversión de la comunidad; pero no solamente al Estado nacional le atañe esta actitud, sino que el Estado provincial también actuó como corresponsable si tenemos en cuenta el apoyo otorgado al gobierno nacional para llevar a cabo las políticas de ajuste económico. Cabe destacar que tampoco ninguno de los otros sectores involucrados como los sindicatos y las asociaciones empresarias desarrollaron acciones tendientes a afrontar los efectos de la crisis. Las autoridades nacionales no previeron políticas que incentivaran ocupaciones alternativas estables compensando el impacto social de la privatización. Es así como se llega a los estallidos sociales que tuvieron lugar en los años 1996 y 1997; en dichos cortes de ruta se demandaba trabajo y la falta de proyectos de desarrollo de la región afectada por la privatización de YPF. Teniendo en cuenta estos acontecimientos, el Estado (nos referimos al nacional y al provincial) actuará focalizadamente frente a los momentos de crisis que plantean los cortes; nos quedará por analizar si esas políticas implementadas intentan o no encontrar una solución al problema.

LAS RESPUESTAS ESTATALES FRENTE A LA CRISIS

En este apartado quisiéramos referirnos —teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí—, a las respuestas dadas desde los gobiernos y, particularmente, desde el gobierno nacional en función de la implantación de programas de empleo transitorio como catalizadores de la crisis y haremos especial referencia al Programa Trabajar II y III. Por medio de dichos acontecimientos podemos tratar de dar una somera explicación de la aplicación de los programas en un contexto de crisis y, a la vez, podríamos analizar si los mismos significaron o no una solución para la región que se

vio castigada por un alto índice de desempleo y subempleo, debido —fundamentalmente— a la privatización de la petrolera YPF. Pensamos que la reconversión de esta empresa se puede considerar como un caso paradigmático de los problemas que puede acarrear la ausencia de acciones anticipatorias por parte del Estado, que permitan orientar la difícil etapa de transición; esta descripción nos servirá para entender cómo se llega a la necesidad de invocar la intervención de los programas de emergencia.

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LOS PROGRAMAS PROPUESTOS FRENTE AL CONFLICTO

Para tratar de señalar y en alguna medida explicar las políticas sociales a nuestro juicio asistencialistas y según la noción de Carlos Vilas de carácter bomberil, nos valdremos en forma preliminar de una serie de datos estadísticos que nos ayudarán a dar cuenta de esta situación.

Según los datos que pudimos obtener del Anuario Estadístico de 1997 de la provincia de Neuquén,¹⁵⁵ podemos señalar la existencia de algunos programas de asistencia a los cuales hacer referencia. Uno de los programas es brindado por el gobierno provincial, que es el Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional (Fo.C.A.O.) y los otros dos programas los otorga el gobierno nacional, con el fin de generar empleo transitorio a desocupados: son el Programa Trabajar y el Programa Servicios Comunitarios. El hecho de basarnos en estos datos es para intentar dar cuenta de lo señalado desde un principio en nuestro trabajo y, de esa forma, justificar lo que creemos que son medidas asistencialistas y transitorias —como son estos programas— que no llevan al desarrollo sustentable de la región, sino que intentan paliar una situación que en el momento de la crisis generaron los cortes de rutas; es decir, con ellos se intentan suavizar las relaciones entre los gobiernos provincial y nacional, y los pobladores. De todos modos, lo que queremos recalcar es que estas políticas no tienden a darle a los pobladores una nueva condición como ciudadano y un desarrollo que ayude a mejorar sus condiciones de vida en el largo plazo, sino que intentan poner un velo oscuro a una situación de crisis a la cual el modelo económico neoliberal no puede dar respuestas claras ni concretas.

¹⁵⁵ Anuario Estadístico 1997 de la provincia de Neuquén (INDEC).

Beneficiarios del Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional (Fo. C.A.O.) por mes, según departamento. Año 1996 (enero a junio)

Departamento	Enero		Febrero		Marzo	
		%		%		%
Aluminé	267	2,3	236	2,2	241	2,5
Añelo	132	1,2	93	0,9	92	0,9
Catan Lil	126	1,1	127	1,2	128	1,3
Collón Curá	55	0,5	55	0,5	54	0,5
Confluencia	8379	73,9	7499	71,2	6720	68,7
Chos Malal	97	0,9	87	0,8	86	0,9
Huiliches	194	1,7	160	1,5	155	1,6
Lacar	230	2,0	215	2,0	218	2,2
Loncopué	199	1,7	200	1,9	214	2,2
Los Lagos	127	1,1	127	1,2	127	1,3
Minas	43	0,4	90	0,8	106	1,1
Norquín	115	1,0	117	1,1	119	1,2
Pehu­enches	0	0,0	61	0,6	61	0,6
Picún Leufú	22	0,2	108	1,0	115	1,2
Picunches	72	0,6	72	0,7	63	0,6
Zapala	1287	11,3	1284	12,2	1277	13,1
Total	11345	100	10531	100	9776	100

Departamento	Abril		Mayo		Junio	
		%		%		%
Aluminé	240	2,5	241	2,5	241	2,7
Añelo	92	0,9	83	0,9	83	0,9
Catan Lil	126	1,3	124	1,3	123	1,4
Collón Curá	54	0,6	54	0,6	54	0,6
Confluencia	6625	68,5	6573	68,6	6250	69,1
Chos Malal	87	0,9	77	0,8	77	0,8
Huiliches	158	1,6	157	1,6	161	1,8
Lacar	210	2,2	203	2,1	201	2,2
Loncopué	205	2,1	223	2,3	223	2,5
Los Lagos	127	1,3	121	1,3	121	1,3
Minas	109	1,1	108	1,1	106	1,2
Norquín	119	1,2	118	1,2	120	1,3
Pehu­enches	59	0,6	55	0,6	53	0,6
Picún Leufú	114	1,2	104	1,1	114	1,3
Picunches	64	0,7	64	0,7	64	0,7
Zapala	1276	13,2	1276	13,3	1049	11,6
Total	9665	100	9581	100	9040	100

Nota: El Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional fue creado por Ley Provincial núm. 2128, el 11/08/95.

Fuente: Anuario Estadístico 1997 de la provincia de Neuquén (INDEC). Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Trabajo. Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional (Fo. C.A.O.).

Beneficiarios del Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional (Fo. C.A.O.) por mes, según departamento. Año 1996 (julio a diciembre)

Departamento	Julio		Agosto		Septiembre	
		%		%		%
Aluminé	241	2,6	251	2,7	250	2,8
Añelo	82	0,9	82	0,9	82	0,9
Catan Lil	123	1,3	123	1,3	123	1,4
Collón Curá	54	0,6	54	0,6	54	0,6
Confluencia	6363	69,5	6556	69,7	6018	68,0
Chos Malal	77	0,8	78	0,8	78	0,9
Huiliches	162	1,8	160	1,7	161	1,8
Lacar	194	2,1	195	2,1	193	2,2
Loncopué	219	2,4	245	2,6	231	2,6
Los Lagos	118	1,3	125	1,3	125	1,4
Minas	107	1,2	114	1,2	116	1,3
Norquín	121	1,3	119	1,3	119	1,3
Pehuénches	53	0,6	56	0,6	56	0,6
Picún Leufú	114	1,2	114	1,2	114	1,3
Picunches	64	0,7	64	0,7	64	0,7
Zapala	1063	11,6	1063	11,3	1060	12,0
Total	9155	100	9399	100	8844	100

Departamento	Octubre		Noviembre		Diciembre	
		%		%		%
Aluminé	248	2,8	246	2,8	239	2,8
Añelo	82	0,9	82	0,9	81	0,9
Catan Lil	123	1,4	123	1,4	123	1,4
Collón Curá	52	0,6	49	0,6	49	0,6
Confluencia	5957	67,8	5873	67,7	5862	67,7
Chos Malal	74	0,8	73	0,8	71	0,8
Huiliches	176	2,0	170	2,0	170	2,0
Lacar	192	2,2	192	2,2	190	2,2
Loncopué	229	2,6	228	2,6	226	2,6
Los Lagos	115	1,3	115	1,3	115	1,3
Minas	112	1,3	112	1,3	112	1,3
Norquín	126	1,4	123	1,4	124	1,4
Pehuénches	55	0,6	55	0,6	55	0,6
Picún Leufú	113	1,3	113	1,3	113	1,3
Picunches	64	0,7	64	0,7	64	0,7
Zapala	1062	12,1	1061	12,2	1062	12,3
Total	8780	100	8679	100	8656	100

Nota: El Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional fue creado por Ley Provincial núm. 2128, el 11/08/95.

Fuente: Anuario Estadístico 1997 de la provincia de Neuquén (INDEC). Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Trabajo. Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional (Fo. C.A.O.).

Según los datos que surgen del Anuario, podemos ver que para el departamento de Confluencia, que es donde se encuentran las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul, para el año 1996 dicho departamento es el que contiene los más altos porcentajes de beneficiarios del Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional (Fo.C.A.O.). Suponemos que estos porcentajes se relacionan con que en este distrito se concentra gran parte de la población de la provincia y gran parte de la actividad económica de la misma. De todas maneras es significativo observar el desarrollo de dicho porcentaje para el departamento de Confluencia, mes por mes, ya que los datos nos estarían indicando que en los meses posteriores a los acontecimientos de los cortes de ruta, se detecta un aumento —aunque no muy significativo— del porcentaje de beneficiarios, para luego de unos meses volver a disminuir; ésto nos estaría dando la pauta de una necesidad de calmar las situaciones de crisis valiéndose de una política asistencialista y transitoria como una forma de evitar una mayor inestabilidad social.

Beneficiarios del Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional por mes según departamento. Enero a agosto de 1997

Departamento	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		%		%		%		%
Aluminé	226	2,7	222	2,7	223	2,7	222	2,7
Añelo	79	0,9	80	1,0	81	1,0	81	1,0
Catan Lil	122	1,4	121	1,5	121	1,5	121	1,5
Collón Curá	36	0,4	35	0,4	33	0,4	33	0,4
Confluencia	5695	67,7	5593	67,4	5466	67,0	5490	67,1
Chos Malal	68	0,8	67	0,8	67	0,8	67	0,8
Huiliches	144	1,7	144	1,7	144	1,8	143	1,7
Lacar	190	2,3	189	2,3	188	2,3	185	2,3
Loncopué	227	2,7	219	2,6	220	2,7	223	2,7
Los Lagos	109	1,3	113	1,4	111	1,4	112	1,4
Minas	112	1,3	111	1,3	111	1,4	105	1,3
Ñorquín	118	1,4	117	1,4	117	1,4	117	1,4
Pehuenches	55	0,6	55	0,7	55	0,7	55	0,7
Picún Leufú	111	1,3	110	1,3	110	1,3	110	1,3
Picunches	64	0,8	64	0,8	64	0,8	63	0,8
Zapala	1053	12,5	1058	12,7	1050	12,9	1050	12,8
Total	8409	100	8298	100	8161	100	8177	100

Departamento	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
		%		%		%		%
Aluminé	229	2,8	227	2,8	229	2,8	229	2,7
Añelo	81	1,0	81	1,0	81	1,0	82	1,0
Catan Lil	121	1,5	122	1,5	122	1,5	122	1,4
Collón Curá	33	0,4	32	0,4	33	0,4	33	0,4
Confluencia	5489	67,0	5494	67,1	5518	67,1	5563	66,0
Chos Malal	67	0,8	67	0,8	82	1,0	133	1,6
Huiliches	138	1,7	138	1,7	138	1,7	138	1,6
Lacar	181	2,2	180	2,2	182	2,2	179	2,1
Loncopué	231	2,8	229	2,8	227	2,8	234	2,8
Los Lagos	112	1,4	110	1,3	110	1,3	114	1,3
Minas	121	1,5	115	1,4	114	1,4	153	1,8
Norquín	117	1,4	118	1,4	118	1,4	158	1,9
Pehuénches	55	0,7	55	0,7	50	0,6	55	0,6
Picún Leufú	110	1,3	109	1,3	109	1,3	124	1,5
Picunches	63	0,8	64	0,8	64	0,8	64	0,8
Zapala	1054	12,8	1044	12,8	1052	12,8	1049	12,4
Total	8202	100	8185	100	8229	100	8430	100

Nota: El Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional fue creado por Ley Provincial núm. 2128, el 11/08/95.

Fuente: Anuario Estadístico 1997 de la provincia de Neuquén (INDEC). Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Trabajo. Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional (Fo. C.A.O.).

Si seguimos el desarrollo de este Fondo a lo largo de 1997 hasta agosto de ese año, podemos decir que la tendencia se mantuvo hasta bajar en unos cuatro puntos en el mes de agosto. Estos datos nos estarían indicando la transitoriedad de las medidas y podríamos agregar —a nuestro juicio— que cuando en alguna medida el tema en discusión deja de tener sentido como zona prioritaria del momento —característica típica del modelo neoliberal—, entonces esa situación pierde entidad e importancia para el funcionamiento del mercado.

Cantidad de puestos por programa de empleo transitorio según departamento. Año 1996

Departamento	Programa de Empleo Transitorio			
	Programa Trabajar		Programa Servicios Comunitarios	
Aluminé	36	0,69%	61	3,63%
Añelo	156	3,00%	61	3,63%
Catan Lil	0	0,00%	12	0,71%
Collón Curá	97	1,87%	55	3,28%
Confluencia	2456	47,28%	771	45,92%
Chos Malal	303	5,83%	40	2,38%
Huiliches	275	5,29%	38	2,26%
Lacar	220	4,23%	45	2,68%
Loncopué	118	2,27%	51	3,04%
Los Lagos	114	2,19%	79	4,71%
Minas	381	7,33%	107	6,37%
Norquín	113	2,18%	0	0,00%
Pehuénches	128	2,46%	99	5,90%
Picún Leufú	199	3,83%	65	3,87%
Picunches	97	1,87%	60	3,57%
Zapala	502	9,66%	105	6,25%
Sin especificar	0	0,00%	30	1,79%
Total	5195	100%	1679	100%

Nota: Programas de empleo transitorio Trabajar y Servicios Comunitarios: su objetivo es brindar ocupación transitoria y desarrollar la infraestructura comunitaria o promover el desarrollo de servicios comunitarios.

Fuente: Anuario Estadístico 1997 de la provincia de Neuquén (INDEC). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral.

En cuanto a los programas de empleo transitorio propuestos desde el ámbito del gobierno nacional se puede mencionar la implementación del Plan Trabajar y de Servicios Comunitarios. En estos casos, podemos ver la injerencia y la necesidad de intervención del gobierno nacional para intentar paliar de alguna forma el conflicto; pero esta manera de subsanar la situación, vuelve a darse en el marco de soluciones transitorias y momentáneas que nada tienen que ver con el impulso del desarrollo o la generación de empleos o de nuevos emprendimientos. Con estos programas se brinda ocupación transitoria y se desarrolla la infraestructura comunitaria. A partir de los datos, podemos señalar que también el área de Confluencia es la más beneficiada con dichos programas, mostrándose diferencias tajantes en cuanto a los porcentajes que nos brindan los datos. Es así como podríamos pensar que estos programas se concentraron en la zona, debido a la urgencia que ameritaban los hechos y a una necesidad de encontrar

una salida rápida —aunque no sostenida— al “posible desorden”. Por este motivo, creemos que es muy acertada la apreciación de Carlos Vilas, al decir que las políticas sociales del modelo neoliberal, son políticas asistencialistas de tipo “bomberil”, como tratando de “salvar el momento”, como algo meramente transitorio y sin poder poner una mirada en el largo plazo.

SOBRE EL PROGRAMA TRABAJAR APLICADO EN LA ZONA

En este contexto, los Programas de Empleo Transitorio se constituyeron en una importante demanda social. Esto se cristalizó en el aumento de los cupos de la Ley Provincial 2128, la creación de un programa especial de empleo provincial, ambos con una ayuda económica de \$150, la ampliación de los cupos de los Programas de Empleo Transitorio Nacionales del MTSS (Trabajar II, Trabajar III y Servicios Comunitarios), con ayudas económicas de entre \$180 y \$200 por beneficiario.

DESCRIPCIÓN Y SUPUESTOS DE LOS PROGRAMAS

En este apartado pondremos atención en la descripción del Programa Trabajar II y III. Éstos fueron creados en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y expresan lo que se denomina “políticas activas de empleo”. Es un programa de creación de empleo directo y transitorio que se financia con recursos del Banco Mundial y del Fondo Nacional de Empleo.

Según lo enunciado en las publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,¹⁵⁶ dichos programas se orientan a atender las situaciones de emergencia ocupacional provocadas por los desajustes de los mercados de trabajo, que surgen como resultado de las transformaciones productivas en curso y brindan ocupación transitoria a trabajadores/as desocupados/as que no perciben prestaciones por desempleo ni participan de otros programas de empleo o capacitación laboral. Asimismo, se proponen contribuir a disminuir el impacto provocado por la caída de los ingresos que afectan a los sectores más vulnerables de la población, como consecuencia de la pérdida del empleo y operan a través del financiamiento de mano de obra para el

¹⁵⁶ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa Trabajar “Guía para realizar proyectos comunitarios”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa Trabajar II, Resolución MTySS N° 240/97 y Resolución SeyCL N° 202/97 y Anexos. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral, Programa Trabajar III, Manual Operativo, Resolución SeyCL N° 397/98.

desarrollo de actividades de interés comunitario, y la población objetivo son los trabajadores con mayores dificultades laborales y sociales.

Objetivos del programa

Entre los objetivos fundamentales de los Programas Trabajar se destacan: “brindar ocupación transitoria a trabajadores/as desocupados/as en condiciones de pobreza o situaciones de vulnerabilidad social; reducir el impacto de la caída del nivel de ingreso de los hogares por la pérdida de empleo y mejorar la empleabilidad de dichos trabajadores y trabajadoras”.¹⁵⁷ El objetivo que incorpora el Programa Trabajar III es “atender a situaciones de emergencia ocupacional provocadas por desajustes en los mercados de trabajo, como efecto de las transformaciones productivas en curso”.¹⁵⁸ Dicho programa constituye un instrumento de financiamiento de mano de obra para la realización de proyectos comunitarios que desarrollen obras de infraestructura social y económica orientadas a satisfacer necesidades socialmente relevantes de la población con menores recursos. Se promoverá también la participación de organizaciones de la sociedad civil regionales o locales, que según la letra de la ley se supone que “asegura un importante nivel de control social y aporta competencias para la definición de proyectos emergentes del diagnóstico de las necesidades sociales prioritarias”.¹⁵⁹

Beneficiarios directos del Programa Trabajar

La población objetivo de los programas está constituida por “los trabajadores/as desocupados/as de cualquier edad y posición en el hogar en situación de pobreza; es decir, pertenecientes a grupos de población con necesidades básicas insatisfechas, radicados en áreas urbanas o rurales, que registren baja calificación laboral y presenten serias dificultades para insertarse en el mercado formal de trabajo”.¹⁶⁰ Otro de los requisitos relevantes para obtener el beneficio es que “los beneficiarios/as no perciban prestaciones por desempleo ni participen en otros Programas de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.¹⁶¹

¹⁵⁷ *Idem.*

¹⁵⁸ *Idem.*

¹⁵⁹ *Idem.*

¹⁶⁰ *Idem.*

¹⁶¹ *Idem.*

Prestaciones para los/as beneficiarios/as

Las personas que participen del programa como beneficiarios/as recibirán las siguientes prestaciones:

- Ayuda económica no remunerativa mensual de \$160, \$180 o \$200, a cargo del programa
- Cobertura de accidentes de trabajo
- Cobertura de salud durante el plazo de ejecución de los proyectos

ASPECTOS RELEVANTES DEL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA TRABAJAR

Para comprobar si se cumplieron o no los objetivos de los Programas Trabajar en Cutral C6 y Plaza Huincul, utilizaremos datos del Resumen Ejecutivo núm. 2 del MTSS (Resultados del diagnóstico de base: características de la población beneficiaria de programas de empleo transitorios del MTSS).¹⁶² Este estudio de impacto toma como población objetivo a “los beneficiarios activos de Programas Trabajar y Servicios Comunitarios de la DNPEyC MTSS de los Municipios de Cutral C6 y Plaza Huincul entre septiembre y octubre de 1998”. Sobre esta población se realizó una encuesta en diciembre de 1998.

Teniendo en cuenta el Programa Trabajar III que se empezó a ejecutar en agosto de 1998, tendremos mayoritariamente como población objetivo a beneficiarios de programas ejecutados a partir del Programa Trabajar II.

Las cifras del Programa Trabajar llevado a cabo en las localidades de Cutral C6 y Plaza Huincul entre 1997 y 1998 son las siguientes:

Ejecución del Programa Trabajar en las localidades de Cutral-C6 y Plaza Huincul. Años 1997-1998

	1997	1998	%
Total de beneficiarios	2369	2353	99,32
Monto aprobado	2115000	1635540	77,33
Beneficiarios con ayudas económicas de \$180 (y no de \$200)	70	881	1258,57
Beneficiarios con 3 meses de duración	1018	1368	134,38
Beneficiarios con 4 meses de duración	223	616	276,23
Beneficiarios con 5 meses de duración	97	305	314,43
Beneficiarios con 6 meses de duración	1031	42	4,07
Beneficiarios con 7 meses de duración	0	22	

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Con los datos del cuadro precedente podemos ver que durante el año 1998 se ejecutaron programas sobre aproximadamente la misma cantidad de beneficiarios, pero el monto aprobado para ese año era bastante menor (constituía 77.33% del aprobado en 1997). Luego de los conflictos de 1996 y 1997, la proporción ejecutada desciende. Esto se debe a que, si bien el número de beneficiarios es similar, los montos de las ayudas disminuyen (en 1997 había sólo 70 beneficiarios con ayudas de \$180, el resto era de \$200; y en cambio en 1998 los beneficiarios con ayudas de \$180 eran 881), los beneficiarios con planes de seis meses de duración descienden abruptamente (de 1031 en 1997 a 42 en 1998) y se reparten entre las duraciones menores.

Por otra parte, si atendemos al informe de impacto antes citado, encontramos que la población beneficiaria resultó tener determinadas características, de las cuales resulta pertinente señalar:

- El 50% de la población se encuentra entre los 20 y 29 años, es decir, un gran predominio de los jóvenes en los programas.
- El 55% de la población está compuesta por mujeres, y 45% por varones, siendo una proporción alta la de las mujeres.
- Entre las edades menores (15 a 29 años), las mayores proporciones se encuentran entre los varones.
- Entre las edades adultas (30 a 49 años) las proporciones de mujeres son más elevadas que las de varones.
- Respecto a la posición en el hogar los no jefes son 52.3%, lo cual constituye un número elevado de no jefes.
- Entre los no jefes la mayor proporción se encuentra entre las mujeres.
- Casi la mitad de la población beneficiaria (47.3%) carece de una especialización y/o experiencia laboral anterior.
- El restante 52.7% que tiene calificación anterior, está compuesto solamente por 7.3% de profesionales o calificados, 41.3% de semi calificados y sólo 3.5% de no calificados.
- Los mayores porcentajes de experiencia y especialización laboral se encuentran entre los varones de edades adultas, jefes de hogar.

¹⁶² Director del Proyecto: Agustín Salvia.

- El 53.9% de los beneficiarios que al momento de la encuesta estaban ocupados en alguno de los Programas de Empleo del MTSS presentaba una antigüedad como beneficiario mayor a un año. El 26.8% tenía una antigüedad de entre 6 meses y un año, y 19.3% tenía hasta seis meses de antigüedad.
- De los beneficiarios que estuvieron ocupados en un Programa de Empleo Transitorio durante más de un año, las mayores proporciones se encuentran entre los que tienen un bajo nivel de instrucción, edad elevada y son jefes de hogar.
- Por último, atendiendo a la opinión expresada por los beneficiarios sobre la posibilidad de obtener un empleo a partir del contacto con el programa, 76.3% contestó que no mejoró, y respecto a la posibilidad de organizarse fuera del programa, 71.3% respondió que tampoco mejoró.

A partir de estos datos y teniendo en cuenta a los objetivos del programa, podemos hacer las siguientes observaciones:

En función de los objetivos del programa que consideramos principales:

- Atender a situaciones de emergencia ocupacional provocadas por desajustes en los mercados de trabajo, como efecto de las transformaciones productivas en curso.
- Dar trabajo a desocupados.
- Reducir el impacto de la caída del nivel de ingreso de los hogares por la pérdida de empleo.
- Mejorar la empleabilidad de dichos trabajadores y trabajadoras.

Podemos señalar que:

- Si en un principio creímos que la población objetivo iba a estar compuesta por la población que quedó desocupada debido a la privatización de YPF (dado que uno de los objetivos del programa es "atender las situaciones de emergencia ocupacional provocadas por los desajustes de los mercados de trabajo, que surgen como resultado de las transformaciones productivas en curso") vemos que no son los que recibieron mayoritariamente estos programas. Al analizar los resultados de la medición de impacto a través de las características demográficas de la población, encontramos que ésta tiene grandes proporciones de jóvenes y mujeres.
- Por otra parte, en relación con el punto anterior, teniendo en cuenta que el programa está dirigido a desocupados nos preguntamos si

realmente se le dieron estos programas a desocupados o si fueron beneficiados inactivos (segundos sostenes del hogar). Dada la alta proporción de jóvenes varones y mujeres adultas no jefes, pareciera que los programas fueron otorgados a personas del núcleo familiar que salieron a buscar trabajo por la pérdida del empleo del jefe de familia.

- Dado que la mitad de los beneficiarios no tienen experiencia laboral previa, nos preguntamos si éstos eran desocupados nuevos ingresantes al mercado laboral o si eran inactivos. Es decir, que habría dudas sobre si se respondió al objetivo de otorgarle estos programas a desocupados que quedaron fuera del mercado laboral, debido a las transformaciones productivas que estaban en curso o si en realidad se le otorgó a miembros del grupo familiar que salieron a buscar trabajo al momento de quedar sin empleo el jefe de hogar.
- Por otra parte, al tener la población beneficiaria en 50% una antigüedad de un año o más, vemos que el objetivo de mejorar las posibilidades de empleo de esta población no han sido cumplidos, ya que éstos dependen del programa para tener algún empleo. A su vez, esto se refuerza con la opinión de los entrevistados quienes en su mayoría dicen que “no les sirvió el programa para mejorar sus oportunidades de empleo”.
- A partir de las tipologías señaladas en los programas, vemos que las actividades están en concordancia con dichas tipologías, pero podríamos decir que éstas no tienden al desarrollo productivo de la región y tampoco a promover el empleo a largo plazo.
- Finalmente, estos programas parecen solamente “disminuir el impacto provocado por la caída de los ingresos que afectan a los sectores más vulnerables de la población”, en el sentido de dar una ayuda transitoria; pero sin lograr de esta manera ningún cambio de fondo en la situación de esta parte de la población.
- Teniendo en cuenta que la población a la que estaban dirigidos estos programas se caracterizaba, entre otras cosas, por tener bajos niveles de calificación, hallamos aquí un problema entre las pautas generales del programa a nivel nacional y las necesidades de la región. Según los requisitos del programa, los beneficiarios del mismo apuntaban a las víctimas de un proceso de reestructuración y a los que tuvieran baja calificación. En el caso de YPF los trabajadores despedidos son víctimas de un proceso de reestructuración, pero la mayoría son trabajadores calificados. Estas dos características que se plantean a

nivel de las pautas generales del programa tienen dificultades para aplicarse en la región (si es que se quieren enfocar como población objetivo a los despedidos), pues no cumplen con el requisito de la baja calificación. Ahora, si tomamos por víctimas no sólo a los trabajadores que quedaron desocupados por la reestructuración de YPF, sino también a todas las personas de la región vinculadas de manera indirecta a la empresa privatizada, a los jóvenes que hubiesen sido futuros trabajadores de la empresa —teniendo en cuenta a la misma como la principal empleadora de la región— no podríamos hablar en el sentido señalado anteriormente. De este modo quedaría como interrogante ¿quiénes son las víctimas del proceso de reestructuración?

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Como pudimos ver en el desarrollo del artículo, la privatización de YPF llevada a cabo puntualmente en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul, no afectó únicamente de manera sustancial al mercado de trabajo, sino que también —tal como lo hemos señalado— produjo cambios significativos en dichas comunidades, teniendo en cuenta las características que había asumido la empresa en ellas. Mediante su privatización, YPF redujo su personal y también tuvo injerencia en la reducción de planteles de empresas medianas y pequeñas que proveían insumos a la empresa. Los cambios introducidos en YPF (su reestructuración) tuvieron un fuerte impacto fundamentalmente, en los adultos (mayores de 45 años), generando altos índices de desempleo en la zona; es decir, no sólo se encuentran los desocupados directos de la empresa, sino también los que estaban vinculados a las empresas subsidiarias de YPF. Es así como debido a las características arrasadoras de la crisis generada por la privatización, los hogares adoptan diversas estrategias para mantener su reproducción: por un lado, apelan a actividades por cuenta propia y/o pequeñas unidades productivas (las cuales generalmente tienen que ver con la utilización de las indemnizaciones de YPF en actividades que en el largo plazo terminaron siendo infructuosas, dadas las características que fue adquiriendo el mercado local) y, por otro lado, la incorporación de otros miembros del hogar al mercado de trabajo (en este caso se entiende que, entre otras ocupaciones, muchos de los beneficiarios de los programas de empleo transitorio —según lo tratado en el apartado sobre “los aspectos relevantes del análisis de la aplicación del Programa Trabajar en la zona”— resultaran ser

jóvenes varones y mujeres adultas no jefes, que salieron a buscar trabajo debido a la pérdida del empleo del jefe de hogar).

Como se indicara al comienzo, en el marco de las políticas de corte neoliberal, la privatización de empresas públicas representó —en sus preceptos— un elemento fundamental para resolver problemas fiscales y reducir la deuda externa. Pero en el contexto de estas privatizaciones llevadas a cabo por el gobierno nacional con una celeridad inusitada, creemos relevante destacar el papel que adquirió el Estado; actor éste que no previó acciones que intentaran orientar la transición y reconversión de la comunidad (a la cual YPF le daba sentido e identidad propia) frente a los cambios que estaban en proceso. Y ante estas acciones (o in-acciones) de los distintos gobiernos, otros sectores representativos (sindicatos, asociaciones de empresarios) fueron incapaces de afrontar tal desafío. Las autoridades nacionales no arbitraron prácticamente ninguna acción tendiente a solucionar las consecuencias derivadas de la desocupación y subocupación, y tampoco se evidenciaron políticas que incentivaran ocupaciones alternativas estables compensando el impacto social de la reestructuración. Como hemos visto, solamente se implementaron algunos programas de empleo transitorio y programas provinciales, entre cuyas características salientes se pueden mencionar: su transitoriedad (su implementación en situaciones límites de tensión política o inestabilidad social; es decir, que intentan controlar el orden social); su aplicación fundamentalmente en jóvenes y mujeres (y no necesariamente en los afectados directos del proceso de privatización y reconversión de la empresa); su incapacidad para brindar capacitación con el fin de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios; su falta de asimilación a las características productivas propias de la región en cuestión, sin promover el desarrollo productivo y el empleo a largo plazo.

Por lo tanto, la privatización de YPF ha generado un impacto social muy alto dado que en torno a ella se estructuró la vida económica y social de la región; dicho proceso ha dislocado las características propias de la zona (el número de personas afectadas era muy elevado y la privatización fue realizada en muy poco tiempo). Según lo señalan Beccaria y Quintar:

Los procesos de reestructuración y privatización de unidades productivas producen una severa reducción de puestos de trabajo en un lapso demasiado corto como para permitir la absorción de esa población en otros emprendimientos productivos locales. Cuando ese proceso no es acompañado de medidas compensadoras, es esperable un crecimiento significativo de la desocupación y de

las ocupaciones precarias (subocupación horaria, trabajadores en negro, etc.) que no sólo afecta al mercado de trabajo local sino que también incrementa el número de personas que dejan de tener coberturas de salud y deben recurrir a los hospitales y centros asistenciales públicos.¹⁶³

Tal como se mencionara anteriormente, los ex empleados que han percibido las indemnizaciones destinaron parte de ellas a la instalación y/o adquisición de negocios; de los cuales la mayoría no tuvieron éxito y significaron la pérdida de capital. En ese contexto, no se dan únicamente altos índices de desempleo y subempleo, sino que también se produce una sobreoferta de comercios y servicios (como se hace referencia en la entrevista realizada al geólogo ex empleado de YPF), que, por lo general, terminaron fracasando ocasionando fuertes pérdidas económicas y desmoralización en la comunidad.

Estas consecuencias demuestran la falta de acción de los gobiernos para preparar anticipadamente a la población para enfrentar los efectos indirectos de la privatización de YPF, capacitándola para encarar nuevas actividades, proveyéndola de diversos tipos y niveles de información en materia de gestión productiva, técnica y comercial, ayudándola a identificar alternativas rentables y a reconvertir a los trabajadores, que durante años fueron asalariados, en pequeños empresarios.¹⁶⁴

La ausencia de las acciones estatales para resolver los efectos negativos de la privatización hace que sólo cuestiones fortuitas determinen el éxito o fracaso de los emprendimientos económicos. Frente a esto nos preguntamos si el Estado hubiera actuado anticipadamente: ¿cómo hubiera actuado para paliar tales efectos? y ¿la situación de crisis hubiera sido atenuada? Estas son preguntas que no podremos responder en el marco de este artículo y que podría significar realizar investigaciones que nos ayuden a echar luz al respecto. Por otro lado, debemos concluir —como ya se dijera— que la aplicación de los programas de empleo transitorio no sirvieron para revertir una situación que se expresaba como explosiva; estos programas

¹⁶³ Beccaria y Quintar (1995: 415).

¹⁶⁴ *Idem.*

atienden sólo a situaciones transitorias y no tienen en cuenta el brindar, en una zona devastada, soluciones que tiendan a la especificidad productiva del lugar. Parecería que para estos programas todas las situaciones y todas las personas fueran iguales; y, por otro lado, tampoco tienden a aprovechar los recursos con los que se cuenta. Es por todos los motivos expuestos que podemos entender la magnitud de la protesta llevada a cabo en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huinul.

Por último, quisiéramos hacer referencia a una pregunta que se hacía Aída Quintar en relación con las acciones colectivas que se daban en el interior del país, fundamentalmente hacia mediados de los noventa en el marco de la privatización de empresas estatales, sobre si “las diversas modalidades de acción colectiva son respuestas meramente reactivas a problemas coyunturales o si estos fenómenos podrían estar prefigurando nuevas formas de participación y representación que implicarían cambios profundos en la relación entre sociedad y política”.¹⁶⁵ A la distancia, podemos sostener —siguiendo a Svampa y Pereyra,¹⁶⁶ y a Pasquini y Remis—¹⁶⁷ que dichas acciones, que en un momento pudieron parecerse respuestas inmediatas a los problemas en que estaba imbuido el país y que fueron atendidas transitoriamente desde el Estado bajo la forma de programas de empleo transitorio, representan el puntapié inicial de un nuevo modo de acción colectiva que se fue configurando en aquellos momentos con características propias y que fue mutando hacia lo que hoy conocemos como el “movimiento piquetero”.

BIBLIOGRAFÍA

Barbeito, A. y R., *Lo Vuolo (1995)*, La modernización excluyente. Transformación económica y Estado de Bienestar en Argentina, Buenos Aires: UNICEF-CIEPP-Losada.

Basualdo, E. (2002), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes-FLACSO.

Basualdo, E. (2001), *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

¹⁶⁵ Ver Quintar, 1997.

¹⁶⁶ Svampa y Pereyra, 2003.

¹⁶⁷ Pasquini y Remis, 2002, pp. 3-37.

- Battistini, O. (2002), "La democracia constituida sobre la violencia", en Battistini, O. (coord.), *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*, Buenos Aires: Asociación Trabajo y Sociedad.
- Battistini, O. (1999), "Los sindicatos en Argentina: el peso de la cultura en el Estado", en Lozano, C. (comp.), *El trabajo y las políticas en la Argentina de fin de siglo*, Buenos Aires: Eudeba.
- Beccaria, L. y N., López (comp.) (1996), *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*, Buenos Aires: UNICEF-Losada.
- Beccaria, L. y A., Quintar (1995), "Reconversión productiva y mercado de trabajo. Reflexiones a partir de la experiencia de Somisa", en *Desarrollo Económico*, Revista de Ciencias Sociales, núm. 139, vol. 35, octubre-diciembre, Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (1998), "La esencia del neoliberalismo", en *Le Monde*, diciembre, París.
- Castel, R. (1997), *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Buenos Aires: Paidós.
- Danani, C. y J., Lindenboim (2003), "Trabajo, política y políticas sociales en los '90", en Lindenboim, J. y C., Danani (coords.), *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*, Buenos Aires: Biblos.
- Danani, C. (1996), "Algunas precisiones sobre la política social como campo de estudio y la nación de población-objeto", en Hintze, Susana (comp.), *Políticas sociales. Contribución al debate teórico-metodológico*, Buenos Aires: Colección CEA-CBC.
- Draibe, S. (1994), "Las políticas sociales y el neoliberalismo. Reflexiones a partir de las experiencias latinoamericanas", en *Revista Desarrollo Económico*, núm. 134, julio-sept., Buenos Aires, p.191.
- Favaro, O. et al. (1997), "La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales", en *Revista Realidad Económica*, núm. 148, mayo-junio, Buenos Aires, pp.13-27.
- Fitoussi, J. P. y P., Rosanvallon (1997), *La nueva era de las desigualdades*, Buenos Aires: Ediciones Manantial.
- Grassi, E. (2003), "Política, cultura y sociedad: la experiencia neoliberal en la Argentina", en Lindenboim, J. y C., Danani (coords.), *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*, Buenos Aires: Biblos.

- Grassi, E. (2000), "Procesos político-culturales en torno del trabajo. Acerca de la problematización de la cuestión social en la década del '90 y el sentido de las "soluciones" propuestas", en *Sociedad*, núm. 16, Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-UBA, pp. 49-80.
- Lo Vuolo, R. (1998), "El Estado de Bienestar como sistema de sociedad", en Lo Vuolo, R. y Barbeito, A., *La nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al neoconservador*, Buenos Aires: Ed. Miño y Dávila-CIEPP.
- Pasquini, L. y C., Remis (2002), "La lógica política del corte de ruta en la Argentina. Estrategias de lucha e identidad", *Revista Estudios del Trabajo*, núm. 24, julio-diciembre, Buenos Aires, pp. 3-37.
- Quintar, A. (1997), "Los excluidos como protagonistas políticos en la Argentina contemporánea", ponencia presentada en el Seminario-Taller "Ciudades y Regiones en la Argentina de los '90: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en el proceso de ajuste?", 4 y 5 de diciembre, Buenos Aires.
- Salama, P. y J., Valier (1996), *Neoliberalismo, pobreza y desigualdades en el Tercer Mundo*, Buenos Aires: Ed. Miño y Dávila-CIEPP.
- Svampa, M. y S., Pereyra (2003), *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires: Biblos.
- Vilas, C. (1997), "De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo", en *Revista Desarrollo Económico*, núm. 144, Buenos Aires.

EL CONFLICTO SOCIAL EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS CULTIVOS INDUSTRIALES EN LOS '90: EL CASO DE LA YERBA MATE EN MISIONES

Gabriela Gresores

(Programa de Investigaciones de Actores Sociales Agrarios.

CIEA-IIHES-UBA)

INTRODUCCIÓN

La orientación general de las políticas económicas en la década de los '90 aceleró y redefinió procesos de crisis de las economías regionales, sobre todo aquellas basadas en la monoproducción de cultivos industriales. Los conflictos estructurales se potenciaron con las consecuencias de las reformas menemistas. Dichas reformas lograron un consenso inusitado en los albores del plan, consenso apoyado básicamente en operaciones de tipo ideológico-político sólo entendibles a la luz de las consecuencias de la política dictatorial, la crisis de los '80 y los cataclismos del contexto internacional.¹⁶⁸

A despecho de las expectativas creadas, las reformas lograron ajustar hacia los eslabones más débiles de la cadena productiva con efectos seriamente lesivos para los intereses de las mayorías populares y tuvieron éxito en la transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados de la economía nacional y al capital extranjero. En el caso de la provincia de Misiones y de la cadena agroindustrial de yerba mate en particular, los trabajadores asalariados y los productores de materias primas —los sujetos sociales más afectados por estas medidas— adoptaron inicialmente diversas conductas adaptativas y de resistencia, que fueron rápidamente desarticuladas por el poder provincial.

Mirado desde el presente, podemos encontrar un punto de inflexión en el tipo de respuesta social a principios del año 2000, momento en que se

¹⁶⁸ Basualdo, 2001.

puede observar un cambio en el tipo e intensidad de los reclamos, aun cuando notoriamente este cambio pasó bastante inadvertido en aquel momento.

Fue en ese lapso que distintos sujetos involucrados en los eslabones primarios de la cadena yerbatera —encabezados los productores de hoja verde— lograron articular con otros sectores sociales sus múltiples demandas y desarrollaron un movimiento de lucha que culminó con el compromiso de otorgar un subsidio por parte del estado provincial. Pero el hecho fundamental —y que acompaña el cambio al que aludimos antes— es la demanda que realizan estos sectores y la promesa arrancada al gobierno, de crear el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Luego de diez años de “libre mercado”, la institución de un sucedáneo de las Juntas Reguladoras conmovió los cimientos del sistema. El INYM fijó un precio mínimo de 13.5 centavos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y de 50 centavos para la secada. Aún cuando esta decisión se vio luego desvirtuada por distintas maniobras avaladas por el gobierno nacional, en sí misma constituyó un duro golpe a un sistema que se propuso como el único posible y deseable, el de la desregulación más completa.

Las distintas interpretaciones en torno a este conflicto han planteado diferentes conclusiones con base en la caracterización de los actores sociales y políticos, y sus conductas. Entre los investigadores predomina una evaluación de los resultados de la lucha desplegada como un fracaso, a partir de la posibilidad de que la Ley Yerbatera tome un camino de vía muerta,¹⁶⁹ o que el INYM sea hegemonizado por los sectores monopólicos de la cadena, en particular los grandes molinos.¹⁷⁰ En ambas modulaciones, se mira con simpatía la lucha popular desplegada, pero se la entiende como condenada de antemano al fracaso.¹⁷¹ El movimiento habría agitado superficial-

¹⁶⁹ Castillo, 2002.

¹⁷⁰ Magan, 2002: 318.

¹⁷¹ Martins, 1993. Este autor plantea “que los distintos grupos políticos tienen una posición ambigua en relación a las luchas populares en el campo, a causa de esa ambigüedad las luchas de los trabajadores rurales son apoyadas moralmente y al mismo tiempo condenadas políticamente. Esta concepción es evolucionista, y por eso no puede reconocer la fuerza histórica de las luchas sociales en el campo”, p.110. En el caso de la yerba mate, al mismo tiempo que algún grupo político apoyó la lucha, otros la condenaron planteando que era una lucha de la burguesía agraria y otros intentaron utilizarla para enfrentar a distintas fracciones de las clases dominantes dentro del gobierno. Lo interesante es que la misma actitud de escepticismo en relación con el resultado del movimiento se observa en los análisis efectuados al poco tiempo de transcurridos los hechos.

mente las aguas para que luego volvieran a aquietarse en beneficio de los más poderosos.

Por el contrario, nuestra hipótesis es que en torno a este conflicto se unificaron actores nuevos y viejos y fundamentalmente nuevas y viejas formas de organización y lucha que fueron la clave para el triunfo.

En este sentido adoptamos un punto de vista teórico que pone el eje en la comprensión del cambio social, el movimiento y el conflicto que otorga direccionalidad al proceso estudiado. Este posicionamiento explícito inscribe al proceso en una historia dinámica en donde los saltos organizativos y el ajuste de los aspectos políticos tienen un valor equivalente al resultado provisorio de la acción colectiva.

En este trabajo presentamos los planteos iniciales de una investigación en curso, que se propone encontrar las claves de la redefinición de las pautas de movilización social en la provincia de Misiones, sobre una actividad principal: la cadena de la yerba mate. Para hacerlo, entendemos necesario articular una propuesta teórica que discrimine pero no escinda los factores objetivos de los subjetivos. Aquí expondremos algunos avances del soporte teórico en relación con una descripción más general de los hechos.

LOS ASPECTOS OBJETIVOS DEL CONFLICTO

LOS ESLABONES DE LA CADENA DE LA YERBA MATE

Todo conflicto social tiene un origen objetivo, una raíz que se hunde en las contradicciones que se tejen en la trama de relaciones económicas, pero también sociales; en las relaciones de producción, en su expresión en las relaciones de propiedad y las formas de explotación en general. La dinámica propia de esta trama está dada por la lucha entre los sujetos articulados por esa contradicción, pero a su vez, sobre la misma trama actúan poderosas fuerzas socio-políticas que van marcando el espesor del dibujo de la historia, con relieves más o menos acentuados, más o menos abruptos. Trama y dibujo constituyen la tela ni uno ni el otro.

Es notorio que las estructuras económico-sociales extrapampeanas sufrieron procesos históricos relativamente comunes entre sí y en su conjunto distintos de la economía central, aunque en ningún modo desligados de ella.

Para entender estos procesos tomamos prestados algunos planteamientos de Alejandro Rofman, quien propone identificar —a partir de un recorte analítico— circuitos (en realidad sub-circuitos) de acumulación regional articulados en torno de “un ámbito de reproducción y acumulación de capital nucleado alrededor de una actividad clave”.¹⁷² Esta actividad reúne a los agentes económicos que por su peso económico (dinamismo) pero eventualmente también político (manejo de resortes claves del Estado) están en condiciones de “imponer una serie de mecanismos que les permiten captar valor generado por otros agentes del circuito”. Las distintas actividades, en su condición de eslabones de una misma cadena guardan entre sí no sólo relaciones de asimetría, sino relaciones de dominación, que se sostiene por la misma configuración de la cadena.

Esta cadena sostiene entonces relaciones de dos tipos, sólo escindibles analíticamente: por una parte una relación política (dominación) y otra económica de transferencias de valor entre los diferentes agentes (relaciones de explotación directa e indirecta). Compartimos con Rofman el principio de que la ubicación de cada sujeto en la cadena —y, por ende, su capacidad de acaparar valor— determina una estructura que a su vez los define, así como el enunciado de este economista de que la configuración de esta estructura en cuanto a acumulación y distribución tienen un carácter histórico.

Planteamos entonces que los aspectos económicos definirían los límites del conflicto a lo largo de la cadena, pero que en su interior dicho conflicto adquiere una dinámica propia, y que, por lo tanto, tiene un precario grado de estabilidad. Esta estabilidad se logra a partir de las condiciones objetivas y subjetivas en un interjuego de imposiciones-aceptaciones, que aún en el seno de las tensiones, funcionan. En determinado momento otros ejes van a ocupar el lugar de motor central, cuando la correlación de fuerzas políticas replantea las reglas de distribución. Es en estos momentos en los cuales las condiciones del conflicto dejan de tener efectos estabilizadores y se disparan hacia momentos en los cuales se abren distintos futuros posibles.

¿Cómo se expresó este proceso en la historia reciente de los productores de yerba misioneros?

El circuito de la yerba mate está conformado por los siguientes sujetos:

¹⁷²Rofman, 1984. Es necesario aclarar que desde nuestra concepción, esta actividad clave no sólo articula las relaciones económicas, sino también las sociopolíticas.

a) Los cosecheros, obreros rurales, trabajadores temporarios que perciben un salario. La yerba mate se convirtió en los ´90 en la producción agrícola que absorbió mayor cantidad de mano de obra asalariada en la provincia de Misiones.

Resulta interesante observar que los cosecheros, a despecho de lo que podría suponerse, en general no son contratados por los productores sino por los secaderos (eslabón del que nos ocuparemos más adelante). Esta característica, así como el pago sobre el trabajo a destajo a la vez que liga la percepción del ingreso a la cantidad de yerba cosechada, obstaculiza la visualización directa de los antagonismos, vincula el salario al precio de la yerba y favorece la superexplotación de la fuerza de trabajo.¹⁷³

A partir de los años ´90, los grupos que cosechaban y secaban en pequeños secaderos (“barbacua”) fueron reemplazados por “cuadrillas de cosecha” que se mueven por toda la provincia.

b) Productores de la materia prima. Pequeños productores, en general propietarios de sus tierras en explotaciones menores a 20 hectáreas, aunque comúnmente tienen entre 5 y 10 hectáreas. La mayoría mantiene gran parte de las labores con fuerza de trabajo familiar, si bien requiere mano de obra suplementaria para la cosecha. Este sector —junto con los cosecheros— sostuvo sobre sus espaldas lo más pesado del ajuste regresivo de la cadena.

A pesar del sentido de concentración de la producción que signó los ´90, el bajo nivel de capitalización de estos sectores y su consecuente posibilidad de bajar costos a partir de ajustar la economía familiar, permitió que estos sujetos se mantuvieran en sus explotaciones, aún en condiciones de pauperización. El denominador común de las políticas de ajuste impidió la traslación hacia otras actividades.

c) Los secaderos es el lugar donde se procesa la hoja verde. Es uno de los sectores que sufrió el proceso de concentración más pronunciado. Notoriamente, este proceso de concentración se cumple en dos etapas: una que arranca en los años ´60 y se agudiza durante la crisis de finales de esa década. Posteriormente pega otro salto en los ´90, a partir del reemplazo de los secaderos tradicionales por otros de mayor porte y nueva tecnología.

¹⁷³ Rau, 2001.

d) La Industria molinera. Es el sector caracterizado por el más alto grado de concentración. Las tres empresas principales realizan 50% de las ventas y las diez primeras, 70%. Si tomamos en cuenta las exportaciones, las tres principales llevan a cabo casi la totalidad del negocio. La posibilidad de apropiarse de un volumen mayor de la riqueza generada por esta cadena produjo un signo inverso a la concentración. El número de establecimientos industriales se amplió hasta más que duplicar el número de molinos existentes en la década de los '70 (118 a nivel nacional, 98 de los cuales se encuentra en Misiones). Resulta relevante observar que el carácter oligopsonico que mantiene la industria a pesar del crecimiento del número de establecimientos.

e) La comercialización. De todos los eslabones éste es el que sufrió cambios más espectaculares. La concentración brusca y de un tenor nunca visto anteriormente en este segmento le permitió acaparar un poder de negociación que mucho tiene que ver con la caída a un quinto del precio que se pagaba la yerba "verde" al productor a inicios de la década de los 90. El eslabón comercializador se ubicó así en un lugar de privilegio a la hora de disputar con los demás la riqueza generada en el sector.

LA HISTORIA RECIENTE: DESREGULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INGRESOS

La consolidación de los mercados nacionales, a inicios del siglo XX, determinó en Misiones el pasaje de un estado de recolección de la yerba mate como materia prima al de cultivo agroindustrial. Al mismo tiempo, asistimos a una competencia de resultados variables entre el mercado brasileño y el argentino. Las distintas medidas proteccionistas de los gobiernos de Paraná y Santa Catarina (en el sur brasileño) incidieron en el crecimiento de las plantaciones en el territorio misionero, que terminó en una sobreoferta con la consiguiente caída de precios.¹⁷⁴

A diferencia de Brasil, que había tomado medidas arancelarias, la marginalidad del cultivo dentro del esquema productivo concentrado en la pampa húmeda, así como el resquemor que producía en ciertos sectores económicos las medidas proteccionistas derivaron, en 1935, en la creación de la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate (CRYM), a través de la ley 12.236, a tono con la política intervencionista derivada de la crisis de 1930. La CRYM consiguió un equilibrio entre producción

¹⁷⁴ Magan, 2002: 319.

y demanda, a la vez que constituyó un Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Este mercado establecía un precio sostén y concentraba la mayor parte de la yerba mate producida, suprimiendo así el oligopsonio.¹⁷⁵ El sistema doble funcionó con ciertos desajustes por los manejos deficientes, pero básicamente permitió la supervivencia productiva de gran parte de los pequeños productores, atenuando las consecuencias de la diferenciación social propia del desarrollo capitalista.

Es necesario señalar que la pervivencia de estos productores familiares de yerba mate era funcional a los eslabones dominantes de la cadena. Así, dada la precariedad de la tecnología aplicable al segmento primario del procesamiento de este cultivo durante la mayor parte del siglo XX, resultaba más conveniente asegurar una rentabilidad mínima a las explotaciones familiares, que podían absorber los avatares del mercado. Estos podían, a su vez, contar con el sostén de la política estatal para evitar que las crisis terminaran con la rentabilidad del circuito.

“En el funcionamiento de la CRYM se reflejaba el conflicto de intereses en el mercado de yerba mate, ya que en la misma participaban grupos con intereses encontrados: colonos productores, agroindustrias (molineros), exportadores, importadores, y, en menor medida, trabajadores agrícolas asalariados”.¹⁷⁶ Da la impresión de que no costó demasiado a los molineros (un grupo reducido, pero con gran capacidad de maniobra) hegemonizar la CRYM y resolver los conflictos a su favor. Esta orientación se puede verificar en la concentración del sector a partir de la eliminación de los molinos más chicos, y en la posibilidad de mantener un precio controlado, a pesar de la limitación artificial de la oferta. Los molinos tuvieron la posibilidad de importar, toda vez que los precios tendían a la alza.¹⁷⁷ A pesar de las limitaciones de la CRYM a la hora de proteger a los pequeños productores, su rol pudo apreciarse mejor una vez que fue extirpada de raíz, como la casi totalidad de las instituciones por las cuales el Estado ejercía una intervención en el aparato productivo.

En la década de los '80, el incremento de las tasas de interés reales se hizo incompatible con el tiempo necesario para el estacionamiento de la yerba mate, la cual requiere de doce meses en depósito para poder ser posteriormente molida. Se adoptó entonces una nueva tecnología de estacionamiento acelerado, que en forma artificial, concluía el proceso en uno o dos

¹⁷⁵ Rau, 2002: 126.

¹⁷⁶ Sacroisky, 2002.

¹⁷⁷ Magan, 2002: 322.

meses. Los costos de las cámaras de estacionamiento acelerado, así como el mayor precio financiero fueron transferidos al resto de la cadena. Dicho traslado se efectúa en principio con un aumento de precios al consumidor final, que llegan a un techo en 1988.¹⁷⁸

El viento libremercadista del gobierno de Menem disolvió la CRYM en 1991. Por ese entonces el precio de la hoja verde estaba en 22 centavos el kilogramo. La libertad de mercado significó para los 20 000 productores de yerba que el pequeño núcleo que representa la oligarquía molinero-terratiente descargara con toda la fuerza su poder, ahora sin mediaciones institucionales.

El precio de la materia prima cayó con un ritmo más lento a principios de la década, para acelerarse a partir de 1995 hasta los cuatro centavos en el año 2001. Dicha caída fue producto de una nueva crisis de sobreproducción en los '90 que derivó en gran parte de la autorización de efectuar nuevas plantaciones y replantes durante la década anterior, casi 24 000 hectáreas en el año 1980 (Decreto 210/80 del PEN), 20 000 adicionales en 1984 (Decreto 1458/84) y 27 000 en 1987 (Decreto 257/87).

La reversión en los hechos de la política de cupos de la CRYM puede ser entendida como parte de los favores con que el gobierno dictatorial primero, y el de Raúl Alfonsín más tarde, premiaban la "amistad" de ciertos grupos económicos. La operatoria del gobierno nacional fue bastante regular en este sentido. Más que leyes generales, instituida por decretos particulares, que podían no designar al beneficiario, pero le garantizaban a un determinado sector, una participación privilegiada en el negocio. En este caso, en plena crisis financiera, sólo los monopolios molinero-terratientes tuvieron recursos suficientes para invertir en la nueva tecnología de yerbatales implantados a alta densidad que incrementaron enormemente la producción. La "libre competencia" derivada de la eliminación de la CRYM hizo el resto.¹⁷⁹

"Paradójicamente", la sobreproducción sólo alteró exclusivamente los precios a los productores. El crecimiento de las plantaciones de yerba de los monopolios molineros no alcanza ni lejanamente para cubrir las necesidades del eslabón industrial, pero se utilizó para extorsionar a los productores e impulsar la tendencia a la baja en su retribución. Inversamente, el precio de la yerba mate elaborada acompañó la tendencia inflacionaria de

¹⁷⁸ Castillo, 2002.

¹⁷⁹ *Ibid.*

los '90, incrementando su precio al público, en los pesos equivalentes al dólar del uno a uno.

El resultado de este proceso es equivalente al verificable a lo largo de todo el país: un acentuado proceso de concentración monopólica en los molinos y en la comercialización (super e hipermercadismo). La contracara es la descapitalización y pauperización de los productores primarios y la desaparición de muchos secaderos.

Junto con ellos, el proletariado agrícola cosechero de yerba mate —más de 20 000 obreros que participan del mayor mercado de fuerza de trabajo de la población primaria provincial— ha sufrido un deterioro en sus condiciones de empleo.¹⁸⁰

LOS ASPECTOS SUBJETIVOS DEL CONFLICTO

LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

Históricamente fue el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), surgido al calor de las ligas agrarias, en los '70, el que nucleó a los pequeños productores. A diferencia de otros programas liguistas, el carácter de campesinos medios y pequeña burguesía y burguesía agraria de sus integrantes orientó el accionar político del grupo. Es así que sus principales reivindicaciones se dirigían a lograr una mejora de los precios de las materias primas y no mucho más, al igual que los restantes grupos que conformaron las ligas, con excepción de la Unión de ligas campesinas formoseñas que tenía un programa más radicalizado.¹⁸¹ No obstante el carácter reformista de este movimiento, en comparación con otros, el MAM fue salvajemente reprimido durante la dictadura militar.

Después de 1984, el MAM comenzó a reorganizarse en relación con la Federación Agraria y realizó algunas movilizaciones importantes hasta 1995. En ese año ingresó a la CTA. Estas movilizaciones chocaron contra la dureza de la política menemista y la organización reformuló sus estrategias permaneciendo al margen en lo esencial de los movimientos sociales que estallaron hacia finales de los '90 e inicios del presente siglo.

¹⁸⁰ Rau, 2001.

¹⁸¹ Ferrara, 1973.

Apoyándose en el financiamiento de ONG's europeas, como la COSPE italiana, desde el punto de vista programático, el MAM propuso la subdivisión de los latifundios, la regulación y planificación de la producción y la puesta en marcha de planes de producción alternativa, promoviendo la agroecología, entre otras medidas. Asimismo, defiende el derecho de los colonos a una jubilación, obra social, seguros y compensaciones ante el fracaso de las cosechas y precios mínimos y compensatorios no sólo para la yerba, sino también para el té, el tabaco y el tung. Considera que la diversificación de la producción es la única alternativa para subsistir, evitando así malvender sus tierras a grandes compañías que procuran extensiones para desarrollar la forestación.¹⁸²

En función de la reorientación del MAM, otras organizaciones toman el lugar de agente aglutinador, hacia fines de la década de los '90, cuando el precio de la yerba ha tocado niveles alarmantes. Sin embargo, Víctor Rau señala que "muchos de los conocimientos internalizados, que provienen directa o indirectamente de aquellas experiencias de lucha tantas veces organizadas y dirigidas por el MAM, se hicieron visibles en las prácticas actuales de los sujetos que participaron en las movilizaciones del 'Paro Verde'" (mayo de 2000). Rau encuentra que los sujetos sociales que protagonizaron la protesta del 2000 son equivalentes a quienes nutrían las filas del MAM a inicios de los '90: "(...) pequeños y medianos productores de cultivos industriales, sector constituido por un elevado número de colonos (...)". Estos productores se instituyen en sujeto político a partir de la oposición con "la industria compradora" y de la formulación de un objetivo que en este caso es "obtener, a partir de la concertación forzada, de la modificación de algunas disposiciones emanadas desde el organismo regulador o de la intervención directa del Poder Ejecutivo, un aumento en el precio de la materia prima".¹⁸³ Este hecho le permite a Rau confeccionar un "modelo" de las llamadas "huelgas del MAM, a modo de referencia para la protesta yerbatera reciente".¹⁸⁴

El modelo tendría tres componentes básicos:

- Los colonos interrumpían la cosecha y no entregaban materia prima a las industrias. Este boicot derivaría en la escasez de insumos y en el paro de la producción.

¹⁸² Sacroisky, Ariana (2002).

¹⁸³ Rau, 2002: 125.

¹⁸⁴ *Ibid.*

- La organización político-gremial dirigía a los colonos, que así organizados, instalaban piquetes en puntos estratégicos de las rutas, caminos y picadas, donde se interceptaban los caminos que intentaban transportar el producto hacia los molinos. La carga era retenida o volcada; a veces también incendiada, o inutilizada sobre el mismo vehículo rociándola con kerosene.
- Concentraciones y marchas de agricultores sobre la capital.

Rau señala que el legado principal del MAM fue “la disposición a presionar ‘extraeconómicamente’ a la industria para que fuera ‘concertada’ una elevación de la materia prima”.¹⁸⁵

Este acervo de tradición de combate se reformuló a partir del carácter de las movilizaciones agropecuarias de fines de la década de los ‘90. A esta altura podríamos afirmar que la conflictividad agraria que tuvo su epicentro en la pampa húmeda cuando promediaba el plan de convertibilidad puede compararse con las paradigmáticas luchas de principios del siglo XX, conocidas como “El Grito de Alcorta”, por la extensión y profundidad de la lucha.

Al mismo tiempo, la ineficacia de las organizaciones agropecuarias para encabezar los reclamos de los productores, envueltas en la crisis de representatividad que implicaban sus propios límites como la dureza del menemismo en el mantenimiento de su rumbo, encontró una respuesta en la constitución de movimientos sociales más perdurables como el de las Mujeres Agropecuarias en Lucha y el MoCaSE, así como nuevas coordinaciones a nivel nacional, que atravesaban a la tradicional Federación Agraria, como la Mesa Nacional de Productores Familiares y la Mesa Federal Agraria.¹⁸⁶

Estas nuevas organizaciones ubicaron como blanco principal de sus reclamos al gobierno nacional o provincial, y por lo tanto las movilizaciones hacia las sedes del poder político se hicieron cada vez más frecuentes.¹⁸⁷ En el caso de misiones, las movilizaciones sobre Posadas se vinculaban con las presiones sobre el Poder Ejecutivo provincial para que ejerza un rol mediador entre los distintos intereses fijando precio sostén, o posteriormente, con el ambicioso proyecto de reestablecer una regulación estrecha sobre la yerba mate.

¹⁸⁵ *Ibid.*, p. 125.

¹⁸⁶ Azcuy, 2000; Giarracca, 2001.

¹⁸⁷ Giarracca y Teubal, 1993.

El nuevo proyecto presentado, que tuvo como eje la formación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) pretendió superar, incluso, las condiciones que habían tenido los productores dentro de la CRYM. Estos movimientos demuestran así una capacidad de acumulación de experiencias positivas y negativas en la articulación de los nuevos reclamos.

Resulta interesante constatar la persistencia del conflicto a partir del mantenimiento de las condiciones objetivas que le dieron origen. La etapa que se conoció como el “paro verde”, de mayo de 2000, impulsado por organizaciones que hasta ese momento no habían tenido la importancia del MAM, como APAZUR y FEDECOOP, sostuvo un importante nivel de movilización.

A diferencia de los intentos realizados a lo largo de toda la década, el estado provincial no logró disolver la propuesta a partir de la consabida combinación de amenaza/represión-promesas/cooptación de los dirigentes.

ELEMENTOS PARA PENSAR EL CAMBIO EN EL CARÁCTER DEL CONFLICTO

El contexto de la crisis de representación política en la Argentina, que mencionamos más arriba, puede ser tomado como uno de los rasgos fundamentales de este periodo. Las organizaciones tradicionales —partidos políticos, asociaciones gremiales, etc.— expresan los cuestionamientos propios de una crisis orgánica en las clases dominantes, concentrados en la corrupción escandalosa de los funcionarios públicos. Pero estas mismas acusaciones no sólo erosionaron el poder de representación en cuanto a las clases dominantes, sino que por extensión lo extendieron a todos los sectores vinculados de alguna manera con el Estado (representaciones gremiales, partidos políticos).

En otro terreno, los balances abiertos en los sectores populares sobre su propio destino como tales, el éxito relativo de las inducciones sociales de la ideología neoliberal y la propia experiencia de movilización social y política durante los últimos treinta años, contribuyó también a la crisis de representación, sostenida por el hecho objetivo de la ineficacia evidenciada por los movimientos sociales de los ’90 para obtener respuestas siquiera tibiamente favorables.

Es así que sólo la aparición de “nuevos dirigentes”¹⁸⁸ y la conformación de una nueva forma de organización, los “autoconvocados”, imprime un dinamismo renovado a una situación de protesta empantanada.

¹⁸⁸ Rau, 2002: 139.

Ambas instancias organizativas se fueron dibujando en la propia dinámica de la lucha. Estos nuevos dirigentes se perfilaron a partir de liderar los reclamos en sus localidades y posteriormente integraron organizaciones nuevas o fortalecieron alguna preexistente, pero secundaria.

A su vez se implementaron formas que se habían generalizado para otro tipo de conflicto en el resto del país, como el corte de ruta. El movimiento reclama la creación del INYM y otorgamiento de créditos para las cooperativas. A pesar de la firmeza de la protesta el gobierno logra desactivarla, disolviendo las últimas convocatorias, que fueron levantadas.

La historia de los conflictos agrarios en Misiones mostraba que tradicionalmente el gobierno lograba disolver las medidas a partir de cooptar a los dirigentes. Todo indicaba que lo mismo sucedería con los reclamos de los Yerbateros. Sin embargo, distintos factores se coaligaron para dar otro destino a este conflicto:

- La persistencia de los factores objetivos: la contradicción entre los intereses de los productores yerbateros frente a los molinos y los comercializadores en el seno de la crisis de sobreproducción.
- La formación de un nuevo grupo de dirigentes yerbateros que sobrepasa las formas organizativas tradicionales, cooptadas históricamente por el poder político provincial, expresión directa de los grupos económicos concentrados de la zona.

Este nuevo grupo impulsó la formación de un movimiento social,¹⁸⁹ una organización coyuntural que posteriormente, deriva en formas más amplias y más permanentes de organización:

- Una alianza con sectores de pequeña burguesía urbana: la Coordinadora de Organizaciones Productivas, Sociales y Gremiales, una multisectorial que coaligó a 52 organizaciones.
- El APAM (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones) una nueva corporación de pequeños productores yerbateros. Esta corporación se articula con una nueva organización a nivel Nacional, la Mesa Federal Agraria. Una organización de pequeños y medianos productores que reúne a aquellos que cuestionan básicamente la acción de otras organizaciones, como la Federación Agraria Argentina

¹⁸⁹ Como Víctor Rau, entendemos al movimiento social como “una alianza social con un objetivo común que hace al interés de dicha alianza y define formas organizativas transitorias y coyunturales”, J. Roze, citado en Rau, *op. cit.*, p. 140.

- El cambio cualitativo en la situación nacional con posterioridad al “Argentinazo” de diciembre de 2001.

Esta situación retonificó el conjunto de las luchas provinciales, regionales y sectoriales. Si en toda región existe un sector que logra catalizar los conflictos de toda la comunidad, en Misiones es la Yerba Mate.

Durante el resto de 2000 y 2001, el conflicto se tramitó a partir de negociaciones con el gobierno provincial para que impulse la Ley Yerbatera y la creación del INYM. Todo parecía indicar que las iniciativas se perderían en los sinuosos pasillos del Poder Legislativo de la BANELCO y la Ley de Flexibilización Laboral.

En el farragoso tránsito de la aprobación de la Ley el APAM se puso en contacto con otras organizaciones de pequeños productores agropecuarios que se habían destacado por haber encabezado las acciones más radicalizadas durante las medidas de fuerza nacionales o en los conflictos locales a lo largo de la segunda mitad de la década de los '90 y de conjunto resolvieron conformar una organización transversal a Federación Agraria: la Mesa Federal Agraria.¹⁹⁰ La Constitución de esta Mesa, la orientación de sus dirigentes y sus posteriores resoluciones jugaron un rol importante a la hora de decidir las medidas de fuerza que se impulsarían en la Provincia de Misiones.

El clima de agitación social y los reclamos efectuados sobre el gobierno provincial y las negociaciones de éste con los representantes parlamentarios hicieron avanzar lentamente la ley del INYM. Daría la impresión de

¹⁹⁰ La Mesa Federal Agraria se constituyó en julio de 2001 integrada por los delegados de citricultores y tamberos de Entre Ríos, yerbateros de Misiones, fruticultores de Río Negro y Neuquén, algodóneros del Chaco, productores agropecuarios de Santa Fe, productores de Santiago del Estero, y por el Movimiento de Mujeres en Lucha y el Movimiento Chacareros Federados. Su fundación estuvo precedida por las importantes movilizaciones protagonizadas por varias de los movimientos presentes en su organización. En el momento de su constitución fijó sus objetivos en un programa para la reactivación de la pequeña y mediana producción agropecuaria. 1) Precio mínimo sostén en origen para todos los productos agropecuarios. 2) Condonación de deudas financieras e impositivas y estatización de las deudas con proveedores particulares y cooperativas de insumos agropecuarios. Suspensión de juicios, cese de remates y revisión de lo realizado. 3) Creación de un fondo anticrisis que permita hacer viables los dos puntos anteriores con una política agraria nacional (como ya se hizo cuando se asistió a la banca privada durante el efecto tequila y con el plan canje automotor). El fondo anticrisis estará formado por: -el no pago de la deuda externa -reducción y control del gasto político. 4) No privatización del Banco de la Nación Argentina, Anses y AFIP. 5) Rebaja al 50% del precio del gasoil. Acta fundacional de la Mesa Federal Agraria. Rosario 28 de julio de 2001.

que dadas las poderosas fuerzas a nivel provincial y nacional que se movían en su contra, el trámite de la ley estaba más orientado a una distracción del conflicto para enviarlo luego a la conocida vía muerta de los proyectos indeseables. Como ejemplo citamos una columna especial en el diario Clarín, en donde Roberto Montechiesi, gerente general de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona productora afirmaba que se trataba de “una ley a contramano”. ¿A contramano de qué? Esto es más conocido, a contramano de lo que había sido la política económico-social liberal. Nótese que en una fecha tan sugestiva —mirada desde la actualidad— como lo es diciembre de 2001, los empresarios insistían en adjudicar la crisis yerbatera a la cohabitación (sic) de “unidades productivas antieconómicas, con otras que sí lo son” y a tono con todo el discurso hegemónico, amenazaban a la población con la argumentación de que cualquier cambio de rumbo implicaría “la desaparición del empresariado nacional característico del sector industrial yerbatero, lo que pondrá en peligro los más de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.¹⁹¹

Sin embargo, la profunda conmoción desatada a los pocos días cerró el año 2001 con un vuelco en la situación nacional, que como un fuerte viento fue extendiéndose por las provincias.

Los yerbateros se incluyeron entonces dentro de la multitud de sectores que ocuparon el centro de la escena social. Más de un centenar de productores de Misiones acamparon en la Plaza Congreso hasta que en febrero de 2002 el senado aprobó la Ley Yerbatera (Ley 25.564) y dispuso la creación del INYM como un cuerpo colegiado integrado por doce directores con representación del gobierno nacional, el de Corrientes y el de Misiones; dos directores por la industria molinera; uno por los obreros rurales; dos por las cooperativas, uno por los secaderos y tres por los productores. Este directorio fijaría cada 6 meses el precio mínimo para la yerba verde y secada. Los recursos para garantizar este precio mínimo saldrían de un estampillado a los paquetes de yerba (Tasa de Inspección y Fiscalización fijada en 2.5 a 5 % del precio al consumidor). Asimismo el INYM tendría la función de tipificar y —de ser necesario— cupificar la producción de yerba.

El principal triunfo había sido imponer el precio mínimo sostén, reivindicación muy cara a los productores agropecuarios, en general, en un momento en que la convertibilidad generaba distorsiones de relevancia en los precios

¹⁹¹ Diario *Clarín*, Suplemento Rural 01/12/2001.

relativos. Pero como sabemos, no es lo mismo que se sancione una ley a que se ponga en práctica. Los meses pasaban y la ley no se reglamentaba.

Así, el APAM (Asociación de Productores Agrarios de Misiones) resolvió en una reunión Nacional de la Mesa Federal Agraria, reunida en la ciudad misionera de Oberá, el 16 de marzo, convocar a un nuevo plan de lucha para que se reglamente inmediatamente la ley y exigir un precio mínimo de 16 centavos el kilo.¹⁹² Sin embargo este plan de lucha tardó en ser consensuado con el resto de las organizaciones y recién el 10 de mayo comenzaron los cortes intermitentes en las rutas nacionales 14 y 12. Ese mismo día se conformó la "multisectorial" de Eldorado, que emitió un comunicado titulado "Eldorado de pie por el trabajo, la producción, la salud y la educación. Contra el hambre y la discriminación". Entre un conjunto muy heterogéneo de reclamos se encontraba el de "precios justos para la producción yerbatera".¹⁹³

Una semana más tarde, el ejemplo se continuó en el impulso de una Coordinadora de la Provincia de Misiones, a partir de la confrontación con el Gobierno provincial y Nacional, con ese fin se reunieron 300 dirigentes en la ciudad de Jardín de América.

Esta multisectorial fue adquiriendo ciertos rasgos distintivos de los movimientos sociales que se estructuran en el momento: a) el criterio de unidad es territorial; b) nuclea a sectores sociales muy heterogéneos, son alianzas policlasistas lideradas e integradas mayoritariamente por sectores de pequeña burguesía urbana y rural; c) la condición organizativa de sus integrantes es muy variable, desde los representantes locales de organizaciones nacionales, hasta quienes actúan casi a título personal pero que intentan ir armando algún tipo de agrupamiento ("docentes", "médicos", etc.); d) no se advierte la presencia abierta de partidos políticos, que actúan mediante otro tipo de organizaciones; e) se evidencia un gran esfuerzo por integrar en el diagnóstico y las soluciones los reclamos de los diversos sectores, en la

¹⁹² Comunicado de Prensa de la Mesa Federal Agraria, 25/7/2002.

¹⁹³ Declaración de la Multisectorial de Eldorado. 10/5/2002. Firmantes. Federación de Comisiones Vecinales, el frente Nacional de Lucha contra la Pobreza (FRENAPO), Asociación de Trabajadores del Estado; Central de Trabajadores Argentinos, Unión Personal Civil de la Nación, Trabajadores municipales y de salud, Cooperativa agrícola Eldorado, Centro de empleados de Comercio, Cámara de comercio e industria de Eldorado, Docentes, Cáritas-Pastoral Diócesis de Iguazú, Colegio de Ingenieros forestales, Red de agricultura orgánica de Misiones, Pastoral social, Asociación de Madereros y Afines del Alto Paraná, Productores Agropecuarios Autoconvocados del Alto Paraná, Club del Trueque Nodo Eldorado, Profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado.

comprensión de que a pesar de la extrema diversidad de reivindicaciones, el origen de las mismas era la política neoliberal, la entrega del patrimonio nacional, etc. A los reclamos sectoriales se une, en este caso, el rechazo a la construcción de la represa de Corpus. Es decir, se utiliza la misma organización y un único petitorio para dar cuenta del conjunto de necesidades de la localidad.

En el mismo momento, el gobernador, Carlos Rovira, declaró el consabido: "Seguiremos escuchando a todos los sectores, pero será por separado porque de la otra manera es imposible"¹⁹⁴ Pero justamente, el sentido de la conformación de la Coordinadora era neutralizar la repetida experiencia de la cooptación de los dirigentes: "Ninguna entidad se va a cortar sola para aceptar reuniones con el Gobernador (...)".¹⁹⁵ Así podemos advertir cómo para los participantes, el hecho de minimizar las posibilidades de fracturas internas a la organización resultaba casi tan importante como los propios avances de la misma.

La Coordinadora de las Organizaciones Productivas de la Provincia convocó a un plan de lucha. El diario señala que "anunciaron que apelarán una vez más al 'tractorazo' —que se convirtió en símbolo de la protesta agraria de junio pasado— para desembarcar en Posadas el próximo 29 de mayo (...)".¹⁹⁶ Nótese que la fecha elegida para la medida de fuerza coincidía con el aniversario del "Cordobazo"¹⁹⁷ y con una jornada de lucha establecida por la confluencia de la Central de Trabajadores Argentino, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Agraria Argentina y la Mesa Federal Agraria. La medida incluía la instalación de una carpa en la plaza central de Posadas, frente a la casa de Gobierno y la decisión de mantenerla hasta que el gobernador "escuche nuestros pedidos".¹⁹⁸

En contraste con este clima de agitación, tal como señalamos anteriormente, la estrategia del MAM corría por un carril tan distante que no tuvo casi contacto con los hechos relatados. En el mismo momento estaba realizando la Fiesta Provincial de las Ferias Francas en la ciudad de Apóstoles. En la inauguración, el día 12 de mayo, estuvo presente el presidente de

¹⁹⁴ Diario *El Territorio* 18/5/2002.

¹⁹⁵ Declaraciones de Raúl Aguilar, presidente de la Asociación de Madereros, Aserradores y Afines del Alto Paraná. Diario *El Territorio* 18/5/2002.

¹⁹⁶ Diario *El Territorio* 19/5/2002.

¹⁹⁷ La "pueblada" más emblemática de la Argentina, el levantamiento de los estudiantes, obreros y sectores populares de la ciudad de Córdoba el 29 de mayo de 1969.

¹⁹⁸ Diario *El Territorio* 19/5/2002.

la Federación Agraria. Ninguno de los dos organismos participaron de las medidas de fuerza, aunque sí lo hicieron delegaciones de la CTA (a la cual estaba adherido el MAM) y productores afiliados a la Federación Agraria.

A partir de la jornada del 29 de mayo los productores acamparon en la plaza de Posadas y la ocuparon durante 51 días. Esta medida fue acompañada por cortes de rutas, piquetes y actos de sabotaje en las diferentes localidades. En todos los casos el gobierno provincial respondió con represión policial y detenciones, y en todos los casos las detenciones produjeron un aumento en la movilización hasta la liberación de los encarcelados.

A diferencia de lo ocurrido con las protestas anteriores, la lucha se sostuvo con una doble dinámica: por una parte, las carpas en la plaza de Posadas, por otra, la convocatoria a marchas periódicas que movilizaron al conjunto de los sectores que integraban la multisectorial. Así, a partir de una importante marcha el día 14 de junio, el gobierno provincial se ve obligado a convocar a la coordinadora para negociar.

La negativa a conceder las demandas hicieron que las negociaciones fracasaran una y otra vez. Entre tanto el gobierno provincial comenzó a su vez a presionar a las autoridades nacionales para que intervengan. El fracaso de las negociaciones puede entenderse como parte de una dinámica en donde los sectores concentrados de la economía provincial intentaron apaciguar a las fuerzas sociales con base en las estrategias conocidas como la cooptación y la represión, mientras que las fuerzas populares encontraron nuevas formas de resistencia en la acción colectiva de la coordinadora que actuó como un controlador de las acciones individuales de los dirigentes.¹⁹⁹

El gobierno provincial intentó descomprimir la situación derivándola al débil e inestable gobierno nacional, en ese momento bajo el interinato de Eduardo Duhalde, luego de apoyar el reclamo de la reglamentación del INYM y el pago de una deuda de cinco millones de pesos de un subsidio para la yerba.²⁰⁰ Así, una parte del conflicto se trasladó a la Secretaría de Agricultura de la Nación (SAGPYA), la cual convocó a una mesa de concertación.²⁰¹

La intransigencia de los sectores más concentrados de la industria molinera hacía fracasar una y otra vez las negociaciones, al tiempo que los productores mantenían la ocupación de la plaza. El pico de tensión se vivió el 12 de

¹⁹⁹ Esto puede observarse con claridad en los relatos detallados de las medidas de fuerza que aparecen en los periódicos locales a lo largo de toda la lucha.

²⁰⁰ Diario *El Territorio*, 14/6/2002.

²⁰¹ Diario *Misiones On Line*, 14/6/2002.

julio, cuando la coordinadora decidió cercar la casa de gobierno mientras sesionaba el gabinete. Esta medida aceleró el desenlace y hacia el final del día llegó la noticia de que se había logrado la última firma que reglamentaba el INYM, la de Duhalde. El día 19 de julio se levantó la ocupación de la plaza.

Bajo el impulso de la lucha yerbatera que ocupó la plaza de Posadas durante 51 días, la Coordinadora produjo una movilización que puede ser incluida prácticamente dentro del concepto de "pueblada". La "pueblada" de fines de los '90 se identifica con "un patrón de movilización y lucha con raíces en la historia y en la estructura social argentina. Ponen en crisis dirigencias y prácticas políticas tradicionales, y perfilan la búsqueda de nuevos caminos de participación y protagonismo en pos de cambios profundos del esquema económico, social y político vigente."²⁰²

El conflicto impulsó la crisis institucional provincial hasta provocar prácticamente la renuncia del gobernador.²⁰³ Sólo el traslado de las negociaciones al gobierno nacional y la conformación de una mesa de concertación en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, permitió descomprimir la situación provincial. Se verifica también en este conflicto a escala provincial, el pasaje a una etapa de ofensiva popular, capaz de arrancar reivindicaciones a los gobiernos provinciales y nacionales muy por encima de sus posibilidades durante la década de los '90.

A MODO DE CIERRE Y APERTURA

En relación con las hipótesis expuestas anteriormente, queremos poner a consideración la idea de que en el caso de Misiones (y sería muy interesante estudiarlo en otras provincias) se verifica una coincidencia de la actividad principal (la que organiza el subsistema económico regional) con aquella que, en su conflicto, es capaz de interpelar a un arco muy amplio de la población y eventualmente generar una situación de movilización social con formas organizativas más o menos permanentes.

²⁰² Laufer y Spiguel, 2002: 54.

²⁰³ Diario *El Territorio* 18-6-2002. "Voy a terminar mi mandato le guste o no a mis opositores" declaró Carlos Rovira cuando la cúpula del PJ tuvo que salir a respaldar la gestión. Mientras tanto, el ex gobernador radical Ricardo Barrios Arrechea declaró que Rovira "está haciendo méritos para un juicio político".

Así podemos afirmar, siguiendo a Rofman, que la Yerba Mate articula las principales relaciones económicas en la región (que en este caso, por su configuración, abarca principalmente la provincia de Misiones), pero además advertimos que cumple funciones de estructuración sociopolítica. Esto quiere decir que cuando este segmento se mantiene estable, las relaciones sociopolíticas tienden a cristalizarse, en cambio, cuando el conflicto se agudiza, se abren las condiciones de movilización de amplios sectores de la sociedad de la región, directa o muy indirectamente ligadas a ella.

Desde el punto de vista político, encontramos que la apreciación del triunfo de las medidas de Cavallo, hacia el año 1993, desarticuló las estrategias de núcleos políticos reformistas (como la CTA), los cuales pasaron de actitudes confrontativas a políticas "alternativistas". Este pasaje se evidencia en el cambio de estrategia del MAM, más volcado a resolver formas y circuitos alternativos de producción y comercialización.

El corrimiento de las organizaciones tradicionales, junto con el surgimiento de nuevos líderes locales, replantearon la experiencia de luchas anteriores.

Sin embargo, la experiencia social se acumuló de manera singular. Sobre la base de la tradición de las formas organizativas del MAM y su recuperación a partir de las nuevas experiencias de los '90, el desarrollo del conflicto social adoptó inicialmente la forma habitual. La emergencia de un grupo de dirigentes que no debían cargar con un balance cuestionado, y la consolidación de este grupo en una asociación gremial como la APAM, renovó la potencialidad de construir una identidad colectiva en lugar de las ya desgastadas por la combinación de fracasos, traiciones y abandonos.

A su vez, la posibilidad de esta gremial de liderar nuevas organizaciones, a la manera de frente intersectorial, necesariamente con una proyección coyuntural, como los "autoconvocados", primero, o la "multisectorial" después, determinó una nueva trayectoria del conflicto.

Por su parte, estas organizaciones demostraron esgrimir la posibilidad y la voluntad, sostenida por sus dirigentes, de adaptar sus acciones para contestar a la dureza del gobierno frente a los reclamos, típico de las confrontaciones de los '90.

Entendemos que estas formas de organización y lucha son la clave por indagar para comprender los factores que permitieron sostener y encaminarse hacia el objetivo de la demanda. Ciertamente, una vez obtenido el reclamo, estos actores que actuaron como antagonistas, procuran generar una nueva situación mediante diferentes mecanismos de represión y cooperación.

BIBLIOGRAFÍA

- Azcuy Ameghino, Eduardo (2000), "Las reformas económicas neoliberales y el sector agropecuario pampeano, 1991-1999", en *Revista Ciclos en la historia, la economía y la sociedad*, núm. 20, 2do. semestre.
- Basualdo, Eduardo (2001), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Quilmes: Univ. Nacional de Quilmes, Flacso, IDEP.
- Castillo, Pedro (2002), *Regulación de las Economías Regionales: el caso de la Yerba Mate*, mimeo.
- Ferrara, Francisco (1973), *Qué son las ligas agrarias*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Giarracca, Norma y Miguel, Teubal (1993), "El día que la Plaza de Mayo se vistió de campo", en *Realidad económica*, núm. 118.
- Giarracca, Norma (comp.) (2001), *La protesta social en la Argentina*, Madrid/Buenos Aires: Alianza.
- Laufer, Ruben y Claudio, Spiguel (2002), "Las puebladas argentinas: tradición histórica y formas actuales", en *Revista La Marea*, Buenos Aires.
- Magan, María Victoria (2002), "Dos crisis Yerbateras. Similitudes y diferencias en las circunstancias que llevaron a la creación de la CRYM (1935) y el INIM (2002)", IX Encuentro de Cátedras de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas, Mar del Plata: Ediciones Suárez.
- Martins, José de Souza (1993), *A chegada do estranho*, San Pablo: HUCITEC.
- Rau, Víctor (2001), "Dimensiones del deterioro en las condiciones de venta de fuerza de trabajo en un mercado laboral agrario en transformación", II Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios, Buenos Aires: PIEA.
- Rau, Víctor (2002), "Yerba mate: 'el paro verde'", en *Realidad Económica*, núm. 185, enero-febrero.
- Rofman, Alejandro (1984), "Notas sobre Subsistemas Espaciales y Circuito de Acumulación Regional", en *Revista Interamericana de Planificación*, núm. 70, vol. XVIII, México: Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP).
- Sacroisky, Ariana (2002), *Producción de Yerba Mate en Misiones: Organización, conformación de clases y conflicto social*, mimeo.

LA ARTICULACIÓN ENTRE AGRUPACIONES INDÍGENAS DEL PUEBLO MAPUCHE Y MOVIMIENTOS CAMPESINOS

Sebastián Valverde
Universidad de Buenos Aires

Resumen: El presente trabajo tiene por objeto analizar, desde la óptica de la antropología social, la articulación que se da entre agrupaciones indígenas pertenecientes al pueblo indígena mapuche y diversos movimientos sociales rurales.

Las diferentes organizaciones indígenas mapuches surgidas en los últimos años han desarrollado una multiplicidad de manifestaciones en términos de identidades y formas de lucha instrumentadas. Algunos grupos han puesto el énfasis en su especificidad étnica, focalizándose en la particularidad cultural. Sin embargo, otros agrupamientos, sin renegar de su particularidad étnica, han desarrollado un perfil "campesinista", realizando alianzas político-sociales con sectores no indígenas en coordinadoras o federaciones multiétnicas, cuyas reivindicaciones tienen como eje central las problemáticas propias de los movimientos campesinos. Este material tiene como propósito abordar este tipo de organizaciones con base en diversos ejes: a) Por un lado las formas organizativas que hacen factible estas alianzas pluriétnicas; b) las reivindicaciones que actúan como factores aglutinantes; c) el reconocimiento como pueblos indígenas y la manera en que se construye y reproduce la identidad étnica en el marco de estas organizaciones más amplias.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha dado en las sociedades latinoamericanas una revitalización de la llamada "problemática étnica". A partir de los años '80 adquirieron una creciente importancia nuevos movimientos indígenas que reelaboraron sus identidades étnicas en novedosos proyectos políticos. Si

bien los casos más renombrados fueron México, Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Brasil, nuestro país no ha sido ajeno a este proceso.

Esta mayor preocupación por la temática ha trascendido el marco de las ciencias sociales, en especial de la antropología, para pasar a ser interés de gran parte de sectores políticos y sociales. Las causas de este fenómeno deben buscarse en los complejos procesos de transformación que ha venido experimentando el movimiento indígena, en el marco de las sociedades de la región. Es indudable que las reivindicaciones indígenas tienen una profunda continuidad histórica; basta recordar las diferentes rebeliones contra el orden colonial a lo largo de más de cuatro siglos. Pero el cambio registrado no es tanto el incremento cuantitativo de las luchas indígenas sino sus nuevas modalidades. En efecto, las organizaciones etnopolíticas más recientes trascienden los habituales marcos de referencia que caracterizan a los pueblos originarios, ya que sus reclamos buscan una articulación con procesos políticos que van más allá de los ámbitos comunal y regional que tradicionalmente definieron los límites de sus respectivas unidades "étnicas" (Díaz Polanco, 1991: 112). El ejemplo más representativo es, quizás, el proceso que se ha dado en México con la rebelión zapatista del año 1994.

Si bien en la Argentina este fenómeno tiene una trascendencia pública menos significativa debido a la menor importancia numérica que tienen los pueblos originarios en comparación con otros de América Latina,²⁰⁴ también en nuestro país se han desarrollado, en los últimos años, una cantidad relevante de movimientos con características similares a las que apuntábamos anteriormente, al tiempo que se ha instalado en la agenda pública la preocupación por la problemática indígena. Evidencia de estos "nuevos tiempos" son, por ejemplo, las modificaciones implementadas en las legislaciones referentes a la cuestión en distintos niveles gubernamentales (local, provincial y nacional).

Una de las características que adoptan las recientes expresiones étnicas es la adopción de diversas formas de lucha "multiétnicas". Este trabajo aborda el caso de una agrupación indígena del pueblo mapuche que se articula con otros sectores campesinos en organizaciones "multiétnicas"

²⁰⁴ La Argentina es uno de los países de América Latina que exhibe una menor cantidad de indígenas: 1% o 2% del total del país, contrastando con países en los cuales su población originaria es la mayor parte de la conformación nacional, como es el caso de Bolivia (71% de población indígena), Guatemala (66%) o bien diversos casos en los que no llegan a la mitad, pero representan una proporción muy significativa como es el caso de Perú (47%) o Ecuador (43%). Incluso nuestro país difiere en este aspecto de Chile, donde la población indígena representa cerca del 8% del total (Iturralde, 1995: 119).

más amplias. Esta estrategia de lucha política constituye, indudablemente, una modalidad que ha favorecido fuertemente la visibilidad de estos pueblos y sus reclamos.

El grupo étnico mapuche ("gente de la tierra") tiene su hábitat original en regiones localizadas al sur del territorio argentino (Puel Mapu, Tierra del Este) y chileno (Gulu Mapu, Tierra del Oeste). En nuestro país los asentamientos mapuches se localizan en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut y Neuquén. Diversas estimaciones, entre la que se encuentra la efectuada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), calculan en aproximadamente 90 000 la cantidad de habitantes pertenecientes a este pueblo, siendo uno de los grupos indígenas más numerosos, el segundo en importancia de acuerdo con esta misma fuente, luego del Kolla (170 000), seguido por el Wichí (80 000) y el Toba (60 000) (en Balazote y Radovich, 1992:11).

Sin embargo, más allá de su incidencia en términos "cuantitativos", es muy destacada la presencia mapuche en términos organizativos y reivindicativos. Como señala Vázquez (2000: 138-139), probablemente este pueblo originario es el que mejor se ha organizado y desarrollado sus luchas étnicas-reivindicativas en la Argentina. Tanto en Chile como en nuestro país han surgido diversas organizaciones etnopolíticas basadas en diferentes reclamos, como la búsqueda de la recuperación de las tierras confiscadas por los Estados nacionales. Entre estas organizaciones se destacan la Confederación Mapuche Neuquina, así como los Centros Mapuches de diversas localidades de Río Negro, y el Consejo Asesor Indígena de dicha provincia, al cual nos referiremos en este trabajo.

También como resultado de las grandes obras de infraestructura efectuadas en la región se han producido múltiples conflictos con el pueblo mapuche, vinculados con procesos de relocalización y contaminación de sus tierras. Entre los mismos cabe destacar los diferentes litigios relacionados con los procesos de desplazamientos forzados como los que hubo en Pilquineyu del Limay, motivados por la construcción de la represa de Piedra del Águila, las inundaciones provocadas por el desborde de las aguas del Río Quinto que anegaron tierras cultivadas por este pueblo, o el envenenamiento de las aguas de la Reserva de Painemil, con las nefastas secuelas de mortandad del ganado. Tal envenenamiento se produjo a causa de las perforaciones llevadas a cabo por Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El turismo también ha enajenado tierras a los mapuches. Por ejemplo, en el lago Aluminé se ha creado una villa turística a expensas de las tierras de la reserva Puel (Balazote y Radovich, 1992: 184-185).

Al igual que lo registrado para el conjunto de los movimientos indígenas latinoamericanos, las agrupaciones mapuches de la región Norpatagónica se han posicionado como sujetos sociales capaces de cuestionar políticas estatales que, tanto en el orden nacional como provincial, siempre han oscilado entre la integración / asimilación de los pueblos originarios a la sociedad "oficial", y el aislamiento sociocultural. Así, muchos de los movimientos etnopolíticos que surgieron en los últimos años, han sabido salir del aislamiento a través de novedosas maneras de lucha como las abordadas en esta investigación.

Es relevante destacar que una de las características de las organizaciones etnopolíticas mapuches es que construyen un tipo particular de identidad cultural, la cual resulta sumamente funcional para viabilizar acciones pragmáticas mediante una estrecha relación entre aspectos económicos y simbólicos, convirtiéndose de esta forma la cultura en un instrumento de reclamo. El discurso de las organizaciones pone énfasis en la diferente cosmovisión de los mapuches frente a las construcciones simbólicas del blanco (*Winca*). La concepción de autonomía no sólo implica exigir el reconocimiento de la diversidad cultural por parte del Estado, sino que a partir de la misma los pueblos tengan autoridad y control sobre el territorio originario (*Wall Mapu*) (Balazote y Radovich, 2000: 259-264).

El grupo abordado en el presente trabajo es el Consejo Asesor Indígena (CAI) de la Provincia de Río Negro, integrado por pobladores rurales y reconocido legalmente como el organismo representativo de los pueblos indígenas de este estado provincial. Esta organización participa con otros movimientos campesinos, independientemente de su adscripción étnica, en distintas uniones duraderas, en el ámbito nacional y en especial en el latinoamericano, como es el caso de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo).

El material aquí expuesto constituye un análisis de la dinámica de esta organización que desarrolla como modo de lucha la convergencia con diversos sectores campesinos en uniones de carácter "multiétnico", las cuales no tienen a la adscripción étnica como el eje aglutinador de estos grupos más amplios, sino la alianza de "clase" en torno a reivindicaciones que pueden caracterizarse como de tipo "campesinistas". En el presente trabajo se problematizará sobre los siguientes ejes: *a)* as formas organizativas que hacen factible resolver la tensión, dentro de estas alianzas pluriétnicas, entre la necesidad de preservar la autonomía e identidad de cada grupo, y a la vez mantener la unidad del conjunto más amplio; *b)* las reivindicaciones que actúan como factores aglutinantes; *c)* el reconocimiento como pueblos

indígenas y la manera en que se construye y reproduce la identidad étnica en el marco de estas organizaciones campesinas multiétnicas.

EL ESCENARIO FAVORABLE PARA LAS LUCHAS MULTIÉTNICAS

Para comprender la totalidad de este fenómeno, es necesario dar cuenta de las diferentes transformaciones sociales que permiten explicar el surgimiento de formas de expresión que convergen con los pueblos originarios, y que son permeables a sus reivindicaciones, no sólo económicas sino también en términos culturales.

En los últimos años ha ocurrido una serie de cambios en diversos ámbitos (políticos, económicos, sociales, culturales) tanto en nuestro país como en el mundo. Una de las transformaciones registradas es que a partir de la crisis del "Estado de bienestar" que garantizaba beneficios sociales al conjunto de la sociedad, perdieron importancia las formas de expresión que caracterizaron a la etapa de auge del mismo, y que tenían como referencia al Estado o a una determinada clase social. Al adquirir en la nueva etapa mayor importancia las relaciones sociales de reproducción en comparación con las de producción (ya que el tiempo vital y el tiempo productivo se confunden cada vez más), estas últimas dejan de ser diferenciadas como campo privilegiado de dominación social y, por lo tanto, no hay una pre-constitución estructural de los grupos y movimientos de emancipación por la posición que ocupan en la escala social. Esto hace que la estructuración de clase no tenga una posición privilegiada en los procesos sociales de emancipación sino es "una más" (Souza Santos, 1998: 315-316). Por esto es que las nuevas formas de expresión se constituyen sobre una diversidad de identidades e identifican escenarios de opresión que trascienden las relaciones de producción. También esto explica la mayor heterogeneidad en términos de identidades de los diferentes sectores sociales, así como la mayor aceptación positiva de la "diversidad". Es importante destacar que si bien el foco central de estos movimientos no está puesto, o no se refiere predominantemente a la producción, la problemática socioeconómica en los mismos es bien definida. De hecho, es muy difícil encontrar casos de movimientos sociales conducidos o expresados por movimientos empresariales o "burgueses" (Vilas, 1996: 13-22).

Es en este contexto que debe entenderse el surgimiento de nuevas organizaciones basadas en identidades "novedosas" en relación con las que predominaron en buena parte del siglo XX. Dichas formas de expresión que han surgido son los llamados movimientos sociales, que en el caso de

Europa son básicamente los movimientos ecológicos, feministas, pacifistas, antirracistas, de consumidores, etc. En el caso de América Latina se refieren mayoritariamente a demandas sobre las necesidades básicas, tales como la tierra, la vivienda, el trabajo, etc. (Souza Santos, 1998: 303-324). Entre los mismos cabe destacar a los diversos movimientos campesinos que también se desarrollan en América Latina en articulación con los movimientos indígenas.

EL CONSEJO ASESOR INDÍGENA

Con el objetivo de comprender las características del Consejo Asesor Indígena (CAI), es necesario mencionar los principales acontecimientos que marcaron el origen de esta organización y que permiten explicar su funcionamiento actual. Esta organización representativa de la población mapuche en la provincia de Río Negro posee una concepción identitaria, donde la variable étnica está presente, pero dentro de su estrategia de lucha se encuentra la articulación con el conjunto de los sectores campesinos, independientemente de que se reconozcan indígenas o no.

Un breve recorrido por la historia de este grupo debe necesariamente remontarse al año 1983, cuando el retorno de la democracia permitió el restablecimiento de las organizaciones populares acalladas y perseguidas durante la dictadura militar. En los primeros meses del gobierno constitucional se produjo una gran nevada en la meseta rionegrina, mayormente poblada por pequeños productores de ovinos, base social de lo que más tarde sería el CAI. Este acontecimiento climático afectó a gran parte de los habitantes de la zona, quienes perdieron muchos de sus animales y cultivos. Para contrarrestar los efectos de la nevada, la Iglesia Católica lanzó la campaña "una oveja para mi hermano", con el fin de recomponer el *stock* ganadero de los sectores más perjudicados. Simultáneamente, el Obispado de Río Negro puso en marcha un proyecto de promoción social para trabajar sobre las necesidades de los pobladores rurales.

Fue a partir del apoyo de la Iglesia a través de este proyecto, junto con el accionar de dirigentes mapuches y el apoyo del gobierno provincial, que surgió el CAI, el que quedó oficialmente constituido en Ingeniero Jacobaci el 19 de abril de 1985. El nombre de Consejo Asesor se debe a que en su origen estuvo integrado por los diferentes sectores como los promotores y técnicos que asesoraban al gobierno provincial sobre la problemática del sector.

Desde el momento de su surgimiento, el CAI se consolidó mediante lazos organizativos con cooperativas, juntas vecinales y centros mapuches de la provincia. Por aquel entonces, la actividad principal del CAI fue el impulso a las organizaciones cooperativas que hoy son el pulmón del Consejo (Menni, 1996: 88). En suma, el CAI nació por la convergencia de los diferentes sectores mapuches con los promotores apoyados por el obispado y reconocidos por el gobierno, como “el auténtico órgano representativo de la población indígena rionegrina”.

A pesar de haber sido implementado por un decreto gubernamental, este grupo se fue fortaleciendo como organización social independiente. Sin embargo, el gobierno intentó mostrarlo en cierta relación de subordinación (Menni, 1996: 87-88). La participación de las comunidades indígenas desbordó los límites propuestos por el gobierno, lo que las llevó a enfrentarse con el mismo y a apropiarse finalmente de la organización —convertida en una asociación civil sin fines de lucro—. Esta historia particular en cuanto a su génesis y desarrollo hizo que el CAI se caracterizara por ser una agrupación con rasgos muy particulares que la diferencian de la mayor parte de las de este tipo (Gutiérrez, 2001: 289-290).

El CAI enfatiza su accionar en el plano productivo, apoyando la organización de pequeños productores en cooperativas. Una expresión de un miembro muestra la importancia asignada a este aspecto y permite comprender posteriormente la relación con otros movimientos campesinos: “Nuestra organización privilegia la recuperación de tierras, la lucha por mantenernos en el lugar que tenemos”.²⁰⁵ Estos objetivos se vinculan con la construcción identitaria que si bien reivindica la etnicidad mapuche como forma de movilización política, propone la concreción de alianzas con otros sectores sociales que comparten la situación de subalternidad con la población indígena, afirmando que “ser mapuche es reivindicarse para poder salir juntos con toda la sociedad” (Radovich, 1992: 60). O bien que:

El problema de la tierra no es sólo de un sector. No hay lugar para un enfrentamiento entre lo indígena y lo no indígena. Cuando uno ve los trabajadores de la fruta, va a encontrar a indígenas y no indígenas. Lo indígena no es un motivo de división, nosotros no creemos que sea un planteo correcto (Sánchez, 1996: 90).

²⁰⁵ “Soy Mapuche y no importa lo que digan”, en www.argentina.indymedia.org/news/2003/08/124485.php

También se observa en los diferentes reclamos llevados a cabo, una búsqueda de solidaridad con sectores no indígenas:

De nuestra parte seguirán encontrándose con la resistencia, junto al resto del pueblo que sufre y lucha por un futuro distinto, con justicia, en donde se reconozca la diversidad cultural.²⁰⁶

Hoy los mapuche no estamos solos ya que sufrimos y resistimos junto al pueblo trabajador que enfrenta día a día este sistema capitalista y sus políticas de destrucción social, que generan la desocupación, el hambre y la muerte.²⁰⁷

Esta concepción del CAI de búsqueda de solidaridad con los diferentes sectores sociales, en especial campesinos sin renegar por ello de las reivindicaciones étnicas, puede caracterizarse como "clasista" o de tipo "campesinista". Se diferencia así, de planteos "eticistas" que basan su accionar en el reconocimiento de la especificidad étnica, como es el caso de la Confederación Mapuche Neuquina y los Centros Mapuches de Río Negro. Las agrupaciones que corresponden al primer conjunto se traducen en el establecimiento de alianzas con sectores sociales no indígenas tendientes a efectuar reivindicaciones culturales y socioeconómicas comunes (Sánchez, 1996: 39; Vázquez, 2000: 139). De hecho estas tendencias dentro de los movimientos indígenas no son exclusivas del pueblo mapuche, sino que están presentes a nivel continental (Sánchez, 1999: 85).

Las diferencias mencionadas tienen relación con la forma en que se ha dado el proceso de desarrollo de cada organización. Mientras el CAI, como hemos destacado, surgió a partir del trabajo de pequeños productores rurales, organizaciones como los centros mapuches nacieron a partir de los hijos de migrantes de origen mapuche, quienes reivindicaron en la ciudad su propia cultura y por esto desarrollaron organizaciones basadas más en la necesidad de defender su especificidad étnica.

Cabe destacar, que al contrastar a los Centros Mapuches con el CAI, estos últimos destacan el mayor perfil "cultural" de los primeros:

²⁰⁶ "PUELMAPU: Comunicado del CAI", julio 2003, en <http://argentina.indymedia.org/news/2003/06/117991.php>

²⁰⁷ *Idem.*

(...) ellos ponen mucho más énfasis en los aspectos culturales, en cambio, nosotros somos mucho más políticos. Es como que se ocupan de la parte más cultural, de divulgar el tema de la lengua, y no tanto como nosotros el aspecto político (Integrante del CAI).

“Lo cultural” puede ser entendido como un fuerte peso de la reivindicación étnica en el caso de los centros mapuches, mientras que lo político puede entenderse como la reivindicación “clasista” que desarrolla el CAI.

Otro dirigente señala también estas diferencias con los centros mapuches, ya que indica que:

(...) el CAI está más centrado en el tema de la tierra, en las cooperativas de producción, más relacionado con lo rural. En cambio, el Centro Mapuche si se quiere es más urbano, más culturalista, está más preocupado en el hecho de transmitir la lengua (Integrante del CAI).

El siguiente acontecimiento nos sirve de ejemplo para ilustrar esta concepción “clasista” del CAI. En el mes de mayo de 1992 se reunieron por primera vez en territorio argentino, diferentes grupos políticos mapuche de ambos sectores de la cordillera de los Andes (Argentina y Chile), con el fin de plasmar la proclama “Ante los 500 años de opresión: Justicia, territorio y autonomía para el pueblo nacional Mapuche Pu Mapuche Wixalein (“los mapuches estamos de pie”). En este encuentro participaron Nehuen Mapu, el Centro Mapuche de Bariloche, la Confederación Mapuche de Neuquén y representantes y líderes de agrupaciones establecidas en el medio rural. El CAI de Río Negro no acudió a este evento y fundamentó su actitud en su desacuerdo con el énfasis puesto por dichas organizaciones en la etnicidad mapuche por sobre el conjunto de los sectores sociales que también se encuentran en situación de marginalidad (Radovich, 1992: 60).

El CAI desarrolla como estrategia la vinculación con diversos movimientos sociales rurales, a través de la participación en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Forman parte de esta coordinadora de la Argentina, entre otros, la Unión de Campesinos Poriajhú (Provincia de Chaco) y el Movimiento Agrario de la Región Pampeana (MARP), y en el plano internacional diversas organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST).

La CLOC nuclea a diferentes movimientos campesinos y está compuesta por organizaciones nacionales o regionales, representativas de las más variadas categorías de trabajadores rurales de Latinoamérica (sin tierra, asalariados, pequeños productores, mujeres, indígenas, afectados por represas, forestales, etc.).²⁰⁸ En el congreso efectuado por la coordinadora en agosto del año 2001 en México, se reunieron 320 delegados, procedentes de 18 países y pertenecientes a 37 organizaciones miembros.²⁰⁹

Otra de las organizaciones relacionadas con el CAI es la COCITRA (Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Indígenas y de Trabajadores Rurales de Argentina). La misma está integrada por las diferentes organizaciones de la Argentina que en el ámbito internacional conforman la CLOC.

Es necesario aclarar que la relevancia de esta coordinadora local se da a partir de la unión internacional, actuando de alguna manera COCITRA como la sección de Argentina de la primera. Esto es esperable dado que al darse en América Latina fuertes luchas con destacados movimientos como es el caso del MST de Brasil, esto lleva a tomar al ámbito latinoamericano y no el local, como el marco de referencia de los movimientos campesinos de Argentina.

También las diversas redes internacionales contribuyen a generar intercambios entre las experiencias de diferentes organizaciones del continente. La siguiente declaración demuestra el impacto que generan en los grupos locales los movimientos campesinos de América Latina:

Ante este conjunto de políticas de muerte han salido al frente las organizaciones del campo, pasando a convertirse en los puntales de la resistencia al neoliberalismo en Latinoamérica. Del México de la insurgencia zapatista, pasando por los levantamientos indígenas y campesinos de Ecuador, a las luchas por la tierra en Brasil, Paraguay, Centroamérica... prácticamente no hay espacio geográfico del continente que no haya sido escenario de luchas protagonizadas por organizaciones del campo, entre las que destacan las integrantes de la C.L.O.C.²¹⁰

²⁰⁸ “[Síntesis de las mesas de trabajo](http://www.movimientos.org/cloc/Mesa3), II Congreso C.L.O.C. (Noviembre 1997)”, en www.movimientos.org/cloc/Mesa3

²⁰⁹ “Declaración Final del III Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo”, en www.movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=862

²¹⁰ “Declaración de Brasilia”, II Congreso C.L.O.C. (Noviembre 1997), en www.movimientos.org/cloc/docs_cloc_2con.php3?id=1

La CLOC integra, a su vez a nivel mundial, la organización Vía Campesina, movimiento “que aglutina a campesinos sin tierra, pequeños y medianos productores, trabajadores agrícolas, Mujeres Rurales y Pueblos Indígenas, que luchamos contra la Globalización de la Economía y el Hambre en el Mundo y consecuentemente contra el Modelo Neo – Liberal”.²¹¹

Una condición necesaria para la concreción de convergencias entre estos grupos es que estén presentes en las distintas organizaciones, la estrategia de efectuar dichas alianzas. Los siguientes pasajes permiten visualizar cómo dentro de las concepciones de estas redes se observa la búsqueda de unión con otros sectores populares:

El III Congreso de la C.L.O.C. se pronuncia por impulsar un proyecto alternativo con participación activa de todas las organizaciones sociales del medio rural y urbano, en las que se incluyan la gran diversidad de actores que ha resistido al neoliberalismo y que desde diferentes trincheras han construido propuestas encaminadas a fortalecer el desarrollo sustentable.²¹²

Además surge como objetivo la necesidad de ir articulando las luchas con sectores urbanos como trabajadores. En torno a esto es muy gráfica la expresión de un dirigente del poderoso movimiento de los sin tierra de Brasil: “En el M.S.T. decimos que ganamos las batallas del campo, pero la guerra se gana en la ciudad”.

LA ARTICULACIÓN MULTIÉTNICA COMO ESTRATEGIA POLÍTICA

El principal beneficio que reporta a las organizaciones indígenas el participar en uniones más amplias es poder romper con la dicotomía (aislamiento *versus* pérdida de la identidad como pueblos), ya que les permite relacionarse con otros sectores sociales que aceptan su identidad específica:

²¹¹ “Vía Campesina”, en www.movimientos.org/cloc/viacampesina.phtml

²¹² “Declaración Final del III Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo”, en www.movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=862

Para el Consejo Asesor Indígena de Argentina es de suma importancia tener contacto con organizaciones indígenas y campesinas de otros países, porque esto le permite enriquecerse con nuevas experiencias e incidir en el plano interno con propuestas [y] compartir legislaciones, experiencias organizativas y formas de resistencia exitosas.²¹³

Las políticas instrumentadas por los Estados nacionales frente a los pueblos indígenas buscaron permanentemente que las comunidades étnicas se mantuvieran aisladas y distanciadas de los procesos nacionales, ya que de esta manera se mantendrían como los únicos interlocutores válidos (Díaz Polanco, 1991: 117-118). Uno de los méritos de las organizaciones etnopolíticas surgidas en los últimos años en la región lo constituye el hecho de haber logrado posicionarse como sujetos sociales, rompiendo el dilema que las políticas indigenistas les imponían; esto es, la “integración” en la sociedad oficial a costa de perder su especificidad cultural, o bien mantenerse en el aislamiento. Estas estrategias de integración que implican el establecimiento de relaciones de tipo “horizontales” con otros sectores populares, con presencia nacional e incluso internacional, deben ser vistas a la luz de la necesidad de los pueblos originarios de —por un lado— preservar la autonomía respecto del Estado, los partidos políticos, la Iglesia, las ONGs, etc., y a la vez tener relación permanente con diversos sectores sociales que comparten desde diferentes identidades la situación de “excluidos”.

Un elemento por destacar es que estos movimientos, así como las diversas organizaciones que la integran, se caracterizan por ser relativamente homogéneos en lo ideológico. Por ejemplo, los requisitos que fija la CLOC para formar parte de esta coordinadora son “ser organizaciones que hacen lucha de masas; de clase; antiimperialista; antineoliberales; autónomas frente al Estado, Iglesias, ONGs, partidos políticos, organismos internacionales; solidarias con las luchas populares y de liberación y en defensa de la revolución cubana”.²¹⁴

Esto demuestra que la articulación pluriétnica posee otro elemento concomitante de tipo ideológico que no puede dejar de mencionarse. La dife-

²¹³ Comunicado del CAI: “Argentina: La importancia de la acción internacional”, en www.movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=648

²¹⁴ “Síntesis de las mesas de trabajo, II Congreso C.L.O.C. (Noviembre 1997)”, en www.movimientos.org/cloc/Mesa3

renciación que puede establecerse entre “indígenas” y “no indígenas”, si bien es relevante a los efectos de visualizar las diferenciaciones construidas sobre la base de referentes étnicos, no son las únicas, y otras como es el caso de las políticas-ideológicas, pueden cortar transversalmente a las primeras, y a la vez tener una importancia destacada.

LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE HACEN FACTIBLE ESTAS ALIANZAS PLURIÉTNICAS

Para que las organizaciones sociales de los pueblos indígenas integren una unión con sectores no indígenas es necesario que dicha unión sea compatible con sus principios fundamentales, precisamente por el alto valor otorgado por los mismos a la autonomía. Por lo tanto, existe una situación de tensión entre el hecho de formar una unión más amplia donde convergen diferentes sectores y la necesidad de preservar la autonomía de cada grupo. Las formas de organización adoptadas por estas articulaciones deben resolver esta dicotomía.

Si observamos la forma de organización que adopta el CAI encontramos que se divide en cuatro zonas de la provincia. Entre las mismas se encuentran la Andina (Ñorquinco, El Bolsón, Río Chico, Cuesta del Ternero, Fita-miche, Arroyo las Minas), la zona Sur (Ingeniero Jacobaci, Maquinchao y Valcheta), Bariloche (Bariloche, Comayo, Pilcaniyeu, Villa Llanquin) y por último la zona atlántica (Viedma). La máxima instancia es la Asamblea General anual que reúne al conjunto de las regiones de la provincia.²¹⁵

Esta forma de estructuración zonal posibilita una mayor autonomía, ya que cada zona puede llevar a cabo una política diferenciada de las demás, sin necesidad de reportar ante la conducción provincial. Al mismo tiempo, esto permite mantener más cerca de la conducción de cada zona a sus bases, es decir, de los productores mismos. De hecho, la conducción general del CAI está compuesta por cuatro miembros, uno por cada zona. Esto implica que la dirección provincial actúa como “coordinadora” de las diferentes zonas, más que como una cabeza en sí misma, y lo que más relevancia tendría es la conducción zonal. Por otra parte, y quizá lo más importante de todo, cada zona tiene completa autonomía para establecer estrategias específicas de vinculación con distintos sectores.

²¹⁵ Publicación del CAI.

La CLOC posee esta misma estructura de “coordinadora”, ya que es a partir de coordinaciones nacionales que se articulan regionalmente, bajo la siguiente modalidad: Región Norte, Región Caribe, Región Centroamérica, Región Andina y Región Cono Sur. La máxima instancia de decisión de la CLOC es el Congreso que se realiza al menos una vez cada tres años garantizando la rotación del lugar de realización. También se constituye una Comisión Coordinadora que estará integrada por dos representantes de cada región, dos de la Articulación de Mujeres y dos de la articulación de jóvenes del campo.²¹⁶

EL TERRITORIO COMO FACTOR AGLUTINANTE

Una de las demandas centrales de los movimientos indígenas que han surgido en América Latina es la del territorio. Este reclamo permite articular a los pueblos indígenas con los restantes sectores en los casos en los que conforman uniones más amplias. Consuelo Sánchez (1999: 84) destaca que una de las características distintivas que presentan las organizaciones etnopolíticas surgidas en América Latina en los últimos años es “la articulación de la lucha por la tierra con la lucha por el respeto a la identidad étnica”.

Resulta casi innecesario describir la importancia que posee para los mapuche este aspecto, basta recordar que el propio nombre con el que se identifican significa “Gente de la Tierra”. La concepción del territorio para los pueblos originarios va más allá del carácter económico como factor de producción, ya que es una dinámica que engloba a la totalidad de la existencia físico-cultural-ideológica que requiere un espacio territorial, el cual debe ser administrado por la organización política-social autónoma de los pueblos originarios. El territorio es el espacio en que se materializa la propia cultura. Por esto el concepto de “Tierra” implica la porción dentro de ese espacio que puede ser apropiada por un individuo. Los derechos en un caso y en otro son muy distintos, ya que mientras sobre el territorio ejercen sus derechos los pueblos, sobre la tierra lo hacen las personas de modo individual. Por esto es que los conflictos que involucran al territorio son, en el caso de los pueblos indígenas, mucho más graves que cuando se trata de otros sujetos sociales. Dada la importancia que posee el territorio en la cosmovisión mapuche, no es factible desarrollar la propia cultura sin el

²¹⁶ “Síntesis de las mesas de trabajo, II Congreso C.L.O.C. (Noviembre 1997)”, en www.movimientos.org/cloc/Mesa3

territorio, lo que hace que la recuperación del mismo sea un paso fundamental en la reconstrucción de la cultura ancestral (Confederación Mapuce Neuquina – Newén Mapu, 1995).

Deseamos destacar en este caso específico de articulación en agrupamientos “multiétnicos”, que el territorio puede constituir para grupos diferentes el eje aglutinador de las demandas, pues dentro de la autonomía que tiene cada uno también lo es el significado asignado al concepto de “tierra” o “territorio”. Es decir, todos luchan en el marco del grupo más amplio por esta demanda, pero cada uno le da un concepto diferente que, a su vez, no se contrapone con el de los otros grupos. Estas diferencias que puede otorgar cada agrupamiento, pero con un acuerdo general en la reivindicación territorial, permiten que dicha reivindicación sea la movilizadora, ya que cada grupo preserva su significado sin entrar en contradicción con las demás y todos pueden luchar por esta demanda común.

Por otra parte, un elemento que no puede dejar de considerarse es que las organizaciones no indígenas que tienen relación con las mismas, tienden en algunos casos a manejar un concepto de tierra que, sin embargo, adopta características de “territorio” al ir más allá del elemento material y poder actuar además como espacio generador y reproductor de la identidad del grupo y, por lo tanto, como cohesionador de la organización. Esta dinámica que se da en sectores sociales no indígenas que podría denominarse de “territorialización” (en contraposición al de “tierra”) facilita las convergencias con los pueblos originarios, al tener mayores aspectos en común con los mismos. Seguramente, el contacto entre organizaciones diversas, incluso en términos de adscripción étnica, es un factor que ha contribuido a este proceso. En el siguiente documento de la CLOC puede observarse cómo la demanda de tierra va más allá del aspecto material, e implica un espacio de desarrollo con múltiples dimensiones:

La reforma agraria es una solución que no se reduce a la distribución de la tierra sino que abarca los aspectos económicos, políticos y sociales y por tanto constituye una premisa básica para asegurar un desarrollo sustentable, que preserve el medio ambiente, proteja la biodiversidad y los conocimientos tradicionales; condiciones indispensables para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos.²¹⁷

²¹⁷ “Declaración de Brasilia”, II Congreso C.L.O.C. (Noviembre 1997), en www.movimientos.org/cloc/docs_cloc_2con.php3?id=1

Al mismo tiempo, a los diversos sectores campesinos les otorga ventajas el hecho de “culturizar” al territorio, para lograr mayor legitimación a sus reclamos sobre el mismo.

EL RECONOCIMIENTO COMO PUEBLOS EN EL MARCO DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Una interrogante que naturalmente surge es de qué forma se articula la identidad como pueblos en el marco de una organización más amplia. Contrariamente a lo que puede preverse, estas convergencias no generan una pérdida de la identidad, sino que, por el contrario, la fortalecen. Esto se puede explicar por diversas razones que a continuación vamos a enumerar.

En primer lugar, es necesario destacar que lo que hace posible el mantenimiento de una determinada identidad es la interacción permanente y no el aislamiento. Como indica Díaz Polanco (1991:117) este proceso que se da en los movimientos indígenas de América Latina de creciente vinculación con sectores no indígenas “(...) no está implicando un debilitamiento de la cohesión étnica ni una renuncia concomitante por parte de los grupos a sus reivindicaciones propias (...)”. Siguiendo a este autor, “lo que refuerza aquel aislamiento impuesto por la hegemonía estatal no es la ‘identidad propia’, sino la marginalidad política a todas luces favorable para la dominación y la manipulación indigenista”.

Como segundo aspecto, no puede dejar de considerarse como factor la creciente aceptación en la sociedad de la diversidad en general, sea de género, política, étnica, etc. Desde ya, esto también sucede en las diversas organizaciones sociales con las que interactúan los grupos indígenas, las cuales también se basan en alguna identidad que las define como tales y, por lo tanto, son más receptivas al reconocimiento positivo del “otro”. La multiplicidad de identidades que definen a las nuevas formas de expresión hace que cada vez se den uniones a partir de identidades diferenciadas y que pueden coincidir en una serie de reivindicaciones comunes. Esta tendencia se sintetiza en el eslogan de muchos de estos movimientos de “unidad en la diversidad”.

Un tercer elemento es que dada la creciente importancia de la cuestión étnica, amplios sectores sociales toman como propias las banderas de luchas de los pueblos indígenas; lo que facilita el acercamiento para ambas partes. Además, a diversas organizaciones populares les resulta favorable “exhibir” un perfil de respeto por la diversidad étnica. Las siguientes decla-

raciones de los grupos campesinos no indígenas vinculados con el CAI son una muestra clara de ello: "Mantendremos con firmeza nuestra lucha por el respeto a la identidad cultural, a la autodeterminación y al territorio de los pueblos indios; buscaremos en todo momento la unidad de los indígenas y campesinos".²¹⁸

Por último, es indispensable destacar que la interacción de los pueblos indígenas en organizaciones más amplias de carácter "multiétnico", que apoyan sus demandas y coinciden en diversos reclamos, permiten el desarrollo de una identidad étnica diferenciada en un contexto más favorable que el conjunto de la sociedad. Es decir, al ser receptivas las coordinadoras a las demandas de los pueblos originarios expresan su propia identidad en un contexto favorable para el desarrollo de la misma. El fortalecimiento de esta identidad "hacia adentro" de la organización multiétnica refuerza la posición de estos grupos en relación con otros sectores sociales "externos" a la misma, tales como gobiernos, iglesias, partidos políticos, ONGs, etc. Se establece, por lo tanto, un juego de una doble diferenciación: una más cercana a los pueblos indígenas dentro del grupo que integran con otras organizaciones, y otra hacia afuera, más distante.

CONSIDERACIONES FINALES

El intercambio y enriquecimiento a partir de experiencias conjuntas con diversos movimientos sociales rurales efectuado por organizaciones mapuche, son una muestra de la manera en que han accedido a ocupar espacios que décadas atrás eran impensables. Estas integraciones sólo son posibles de explicar debido a las concepciones de las organizaciones con las cuales convergen los pueblos indígenas, que son cada vez más permeables a la articulación con sectores de diferentes identidades a partir de puntos centrales en común tales como posiciones ideológicas, lucha por la tierra, etc. Los preceptos de "unidad en la diversidad" que manifiestan estas organizaciones, y, por lo tanto, también las estructuras organizativas acordes con este principio les permiten a cada grupo mantener su especificidad y articular diferentes identidades dentro una red más amplia, sin que esto implique la pérdida del propio perfil.

²¹⁸ "Declaración Final", I Congreso C.L.O.C. (Febrero 1994), en www.movimientos.org/cloc/docs_cloc_1con.php3?id=4

Otro elemento cuya importancia no se puede menospreciar es la trascendencia de los diferentes movimientos campesinos que han desarrollado diversas protestas, integrándose a múltiples redes internacionales. Las vinculaciones con amplios sectores sociales les permiten a estos grupos contar con numerosas muestras de solidaridad, y articularse con procesos mayores sin perder por ello su especificidad. Al participar de estas uniones, los pueblos indígenas se ven beneficiados por el intercambio.

Si analizamos las perspectivas a futuro de este proceso de integración de los pueblos indígenas en procesos de lucha mayores, es esperable una continuidad, incluso una acentuación en esta tendencia; ya que se mantendrán y profundizarán las condiciones que posibilitaron la apertura de los pueblos indígenas a un mayor vínculo respecto al resto de la sociedad (Iturralde, 1995: 112-113). En lo que respecta al desarrollo de las organizaciones, en la medida en estas uniones resulten exitosas incentivará a nuevas experiencias de acercamiento. Paralelamente, los procesos de transformación socioeconómica generan, en muchos casos, situaciones de conflicto que se expresan tanto en un mayor nivel de movilización étnica como en acciones de solidaridad y luchas conjuntas entre los pueblos originarios y amplios sectores sociales.

svalverde@filo.uba.ar

Sebastián Valverde. Docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA

- Balazote, A. y J. C., Radovich (2000), "Mapuches de Neuquén: conflictos en el orden económico y simbólico", en varios autores, *El resignificado del desarrollo*, Buenos Aires: UNIDA, pp. 255-271.
- Balazote, A. y J. C., Radovich (1992), *La problemática indígena*, Buenos Aires: CEAL.
- CONFEDERACIÓN MAPUCE NEUQUINA – NEWÉN MAPU (1995), *Primer Seminario regional El Derecho Internacional y los pueblos Originarios Wall Mapuce Territorio y Recursos Naturales*, 29-30 de septiembre, y 01-02 de octubre, Neuquén: Universidad Nacional del Comahue, pp. 11-16.
- Díaz Polanco, H. (1991), *Autonomía Regional. La autodeterminación de los pueblos indios*, México: Siglo XXI.

- Gutiérrez, P. (2001), "La lucha por la tierra en Río Negro: El Consejo Asesor Indígena", en Giarracca, N. y colaboradores, *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires: Alianza, pp. 289-310.
- Iturralde, D. (1995), "Naciones Indígenas y Estados Nacionales en América Latina hacia el año 2000", en Díaz Polanco, H. (comp.), *Etnia y Nación en América Latina*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 105-138.
- Menni, A. M. (1996), "El Consejo Asesor Indígena de Río Negro", en *Proyecto Especial de Investigación y Extensión U.N.C. y A.P.D.H. "Defensa y reivindicación de Tierras Indígenas" Informe Final*, Neuquén: U.N.C. – A.P.D.H., pp. 87-91.
- Radovich, J. C. (1992), "Política Indígena y Movimientos Étnicos: el caso Mapuche", en *Cuadernos de Antropología*, vol. 4, Universidad Nacional de Luján, pp. 47-65.
- Sánchez, C. (1999), *Los pueblos Indígenas: del indigenismo a la autonomía*, México: Siglo XXI.
- Sánchez, F. (1996), "El contexto internacional e Interamericano", en *Proyecto Especial de Investigación y Extensión U.N.C. y A.P.D.H. "Defensa y reivindicación de Tierras Indígenas" Informe Final*, Neuquén: U.N.C. – A.P.D.H., pp. 28-42.
- Souza Santos, B. (1998), *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad*, Bogotá: Cortez Editora.
- Vázquez, H. (2000), *Procesos identitarios y Exclusión Sociocultural. La cuestión indígena en la Argentina*, Buenos Aires: Biblos.
- Vázquez, H. (2002), "Procesos identitarios, 'minorías' étnicas y etnicidad - Los mapuches de la República Argentina", en *Revue Électronique de Civilisation Contemporaine - EUROPE / AMÉRIQUES*, septiembre, <http://www.univ-brest.fr/amnis>
- Vilas, C. (1996), "Actores, Sujetos, Movimientos: ¿dónde quedaron las clases?", en *Cuadernos del CENDES*, año 13, núm. 32, segunda época, Caracas, pp. 11-34.

LOS AUTORES

Paula Abal Medina: Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, desarrolla tareas como becaria interna doctoral en el CONICET y es miembro del área de Identidad y Representación del CEIL-PIETTE. También se desempeña como docente en la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: pabal@ceil-piette.gov.ar

Clara Bressano: Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad de Buenos Aires) y se desempeña como docente en la materia Sociología Política en la Carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en el Ciclo Básico Común de la misma universidad. Colabora en la catalogación e investigación de documentos sobre Movimientos Sociales en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (Ce.D.In.C.I.). Correo electrónico: cbressano@hotmail.com

Karina Crivelli: Licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires y actualmente desempeña tareas como investigadora adjunta en el área de Identidad y Representación del CEIL-PIETTE. Es docente de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Correo electrónico: karinacrivelli@ciudad.com.ar

Cecilia Cross: Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como becaria Doctoral en el CONICET y es miembro del área de Identidad y Representación del CEIL-PIETTE. Es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: ccross@ceil-piette.gov.ar

Maria Inés Fernández Álvarez: Licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Magister en Estudios del Desarrollo (IUED, Ginebra), Doctoranda en cotutela UBA-EHESS. Actualmente, se desem-

peña como becaria doctoral del Conicet y es miembro de Área de Identidad y Representación del CEIL-PIETTE y del Programa de Antropología y Salud, ICA, FFyL, UBA. Docente de la materia "Antropología Sistemática I" de la Carrera de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA. Correo electrónico: mifal@filo.uba.ar

Mariana Galvani: Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires) Se desempeña como docente del Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva, y participa del seminario y es coayudante de la materia Teoría y Práctica de la Comunicación I, en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en el Departamento de Estadística y Procesamiento de Datos de la consultora OPSM. Correo electrónico: mariana_galvani@redesdelsur.com

Débora Gorbán: Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como becaria doctoral del CONICET miembro del área de Identidad y Representación del CEIL-PIETTE. Es docente de grado en la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: dgorban@ceil-piette.gov.ar

Sebastián Guevara: Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de Buenos Aires) y se desempeña como docente en la materia Formación Económica de la Sociedad Argentina y su Crisis en la Carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en el Ciclo Básico Común de la misma universidad. Colabora en el Centro para la Investigación como Crítica Práctica (CICP). Correo electrónico: sebgva@yahoo.com

Paula Lenguita: Socióloga, Magíster en Investigación Social y actualmente se encuentra cursando sus estudios en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es becaria postdoctoral del CONICET y miembro del área de investigación sobre Identidad y Representación del CEIL-PIETTE. Además es docente de grado (UBA) y postgrado de CLACSO. Correo electrónico: plenguita@ceil-piette.gov.ar

Robinson Salazar Pérez: Sociólogo, doctor en Ciencia Política y Antropología, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, director de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz, autor de 60 artículos dictaminados, 2 libros de su autoría y 7 coordinados, asesor de organismos internacionales y de programas de posgrado de América Latina. Correo electrónico: robinsson@mzt.megared.net.mx

Juan Montes Cató: Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y magíster del Centro de Estudios Avanzados dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Doctorando de la Universidad de Buenos Aires. Becario Postdoctoral Interno en el CONICET. Miembro del área de Identidad y Representación del CEIL-PIETTE. Docente de grado de la Universidad de Buenos Aires y de postgrado de CLACSO. Correo electrónico: montescato@com4.com.ar

Alejandro Soltonovich: Sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y ha obtenido también en dicha universidad el título de Profesor de Sociología. Además es diplomado en estudios avanzados en el área de filosofía del Derechos Fundamentales, del curso de doctorado en derechos fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente coordina un seminario-taller de introducción a la Teoría Crítica en el Instituto de derechos humanos "Bartolomé de las Casas" y es director de las ediciones libres Haalel. Correo electrónico: haalel@yahoo.com

Ariel Wilkis: Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y está cursando sus estudios en la Maestría de Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Becario Doctoral Interno en el CEIL PIETTE. Miembro del área de Identidad y Representación del CEIL-PIETTE. Docente de grado de la Universidad de Buenos Aires y de postgrado de CLACSO. Correo electrónico: arielwilkis@sinectis.com.ar

Sebastián Valverde: Licenciado en Antropología social. Docente de la materia Antropología Sistemática II en la carrera de Cs. Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA). E-mail: svalverde@filo.uba.ar

Gabriela Gresores: Historiadora. Docente e investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Docente de Historia Social General en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. E-mail: gresores@arnet.com.ar

Carlos Gustavo Espinoza: Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. E-mail: carlosgustavoespinoza@hotmail.com

Rubén Eduardo de Dios: Licenciado en Sociología (Universidad Católica Argentina). Docente e investigador en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Educador popular e investigador social en ONGs y movimientos sociales. E-mail: rubendedios@arnet.com.ar

Guido P. Galafassi: Especialista en Cooperación y Desarrollo (Universidad de Barcelona), Doctor en Antropología (UBA). Docente e investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes. Director Revista Theomai (www.revista-theomai.unq.edu.ar). E-mail: ggalafassi@unq.edu.ar

Julieta Galera: Licenciada en Cs. de la Comunicación de la Universidad de Morón. Investigadora de UREL (Red de Universidades Latinoamericanas) sede Argentina.

Adrián Nordvind: Antropólogo. Coordinador del Programa Facultad Abierta de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Carlos Martínez: Antropólogo. Coordinador del Área de Empresas Recuperadas del programa Facultad Abierta de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Alejandro Pizzi: Sociólogo. Miembro del equipo de investigación del Programa Facultad Abierta de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Andrés Ruggeri: Antropólogo. Prosecretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Héctor Hugo Trincherro: Antropólogo. Profesor Titular de la materia Antropología Económica de la Facultad de Filosofía y Letras - UBA. Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras - UBA.

Otros títulos de la colección Insumisos Latinoamericanos

América Latina: Integración, democracia y desarrollo. Retos para el siglo XXI, Ignacio Medina

La educación superior en América Latina. Globalización, exclusión y pobreza, Laura Mota Díaz y José Luis Cisneros

Redes e imaginario del exilio en México y América Latina: 1934-1940, Ricardo Melgar Bao

Venezuela: Horizonte democrático en el siglo XXI, Eduardo Sandoval Forero, Robinson Salazar Pérez y Alexis Romero Salazar

Democracias en riesgo en América Latina, Robinson Salazar Pérez, Eduardo Sandoval Forero y Dorangélica de la Rocha Almazán

El sindicalismo mexicano en la transición al siglo XXI, Ignacio Medina

América Latina: conflicto, violencia y paz en el siglo XXI, Robinson Salazar Pérez

Lectura crítica del Plan Puebla Panamá, Robinson Salazar Pérez

Comportamiento de la sociedad civil latinoamericana, Robinson Salazar Pérez

Sujetos y alternativas contrahegemónicas en el espacio andino amazónico, Jorge Lora Cam y Robinson Salazar Pérez

Los valores y sus desafíos actuales, José Ramón Fabelo Corzo

Editorial LibrosEnRed

LibrosEnRed es la Editorial Digital más completa en idioma español. Desde junio de 2000 trabajamos en la edición y venta de libros digitales e impresos bajo demanda.

Nuestra misión es facilitar a todos los autores la **edición** de sus obras y ofrecer a los lectores acceso rápido y económico a libros de todo tipo.

Editamos novelas, cuentos, poesías, tesis, investigaciones, manuales, monografías y toda variedad de contenidos. Brindamos la posibilidad de **comercializar** las obras desde Internet para millones de potenciales lectores. De este modo, intentamos fortalecer la difusión de los autores que escriben en español.

Nuestro sistema de atribución de regalías permite que los autores **obtengan una ganancia 300% o 400% mayor** a la que reciben en el circuito tradicional.

Ingrese a www.librosenred.com y conozca nuestro catálogo, compuesto por cientos de títulos clásicos y de autores contemporáneos.